CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1993

DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
PRESIDENTE

LICDO. RODRIGO MOLINA A. LICDO. RAÚL TRUJILLO MIRANDA

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
PRESIDENTA

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
PRESIDENTE

DRA. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DR. ARTURO HOYOS

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

ÍNDICE

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. RAMÓN MALCA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ MENAGED AZRAK REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD IMPERIO CALIDONIA, S. A. Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTOS. MAGISTRADO PONENTE: Dr. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, cinco (5) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993). 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ELIADES TRUJILLO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA ROXANA DEL CARMEN VARELA DE MIRO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD VARIOUS MAINTENANCE, S. A. EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N°59-DGT-93, DEL 30 DE AGOSTO DE 1993, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 2

INCIDENTE DE DESACATO INTERPUESTO POR EL LICDO. RODRIGO ANGUIZOLA SAGEL DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y EN CONTRA DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 6

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LUIS ALBERTO MORENO EN CONTRA DEL JUEZ OCTAVO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 7

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. COSME IDRYS MORENO G., EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA ZULIMA DE BROWN Y EN CONTRA DEL GERENTE GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 8

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO EN REPRESENTACIÓN DEL DR. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 9

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR SANTIAGO MONTILLA EN CONTRA DEL JUEZ SEGUNDO SUPLENTE DEL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA, APELACIÓN. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 10

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. JAIME J. JOVANÉ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ERNESTO ENRIQUE CÓRDOBA LÓPEZ Y EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 10

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR PEDRO VEGA TORRES Y EN CONTRA DEL JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 11

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS RAMOS, CHUE & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR EUGENE C. MCGRATH, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MCGRATHCO, INC., Y EN CONTRA DE LAS ORDENES DE NO HACER DICTADAS POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 12

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ANÍBAL HERRERA PEÑA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JUAN PAULINO RODRÍGUEZ BEITÍA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°12 DE 29 DE JUNIO DE 1993, DICTADA POR EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 14

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ROBERTO ENRIQUE FUENTES EN CONTRA DEL JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 14

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ DE LA CRUZ BERNAL EN CONTRA DEL JUEZ SÉPTIMO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, (APELACIÓN). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 16

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO FIDEL VÁSQUEZ CEBALLO EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 18

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LCDA. ELSIE ALVAREZ A. EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA NIDIA PIMENTEL CERRUD Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, DR. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 18

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR KREPORT INVESTMENTS, INC. Y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A. EN CONTRA DEL JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 20

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS BERRÍOS Y BERRÍOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES MANUEL ALVAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MAYORISTA DE AZUERO, S. A. Y AURELIO DOPESO CARREIRO, REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES SUPERMERCADO LA GARANTÍA, S. A.; GONZÁLEZ FOYO, S. A. Y SUPER COMERCIAL LA GARANTÍA, S. A. Y EN CONTRA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN LAS TABLAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 20

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LICENCIADA NORIS CASTILLO DE MEDINA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SERGIO ULLOA SING EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) 23

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ, DIRECTOR DISTRITAL DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE OFICIO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA JUDITH ELVIRA FAJARDO VEGA Y EN CONTRA DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 356 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1992, PROFERIDO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 23

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ERNESTO RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA LICENCIADA AIDELENA PEREIRA Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER A TRAVÉS DEL ACUERDO NO.93-24 DE 13 DE AGOSTO DE 1993 Y EN CONSECUENCIA EL ACUERDO CONFIRMATORIO NO. 93-28 DEL 23 DE AGOSTO DE 1993, DICTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. 24

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LIC. VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO EN REPRESENTACIÓN DEL DR. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA, CONTRA EL CONTRALOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. 28

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ GUERRA EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA LOURDES MARÍA TAMAYO Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ACADÉMICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 36

RECURSO DE HABEAS CORPUS 36

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA ELICIA CÓRDOBA DE VALENCIA EN CONTRA DE LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 36

HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO BERBEY CONTRA LA FISCAL TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 37

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR CESAR SAUCEDO EN CONTRA DE LA FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CON SEDE EN LAS TABLAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 38

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA IRIS ROSAS DE BETHANCOURT Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ Y SEIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 39

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO SALAZAR Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 40

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL VILLA GONZÁLEZ Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA. PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 40

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA PARRA CHAVERRA Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 41

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA MÉLIDA MENDOZA EN CONTRA DE LA FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN LAS TABLAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ Y NUEVE (19) NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 42

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS PÉREZ ALMENGOR EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: Dr. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 43

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO MUÑOZ BEDOYA EN CONTRA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 43

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ISAAC RODRÍGUEZ MARTÍNEZ EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 44

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JORGE SANIDAS A. A FAVOR DE CARLOS CEPEDA AREVALO EN CONTRA DE LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 45

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR CESAR ANTONIO LORENZO CASTRO Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) 46

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR NIVALDO MADRIÑÁN APONTE CONTRA LA FISCAL SÉPTIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 47

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR PEDRO ANTONIO EMANUELE AVILA EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 50

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARIEL JAÉN EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 51

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JULIO CESAR RIVAS MURILLO EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 51

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JESÚS ANTONIO BRIONES Y EN CONTRA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 53

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR MARCO ANTONIO BRIONES SÁNCHEZ Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA P.T.J. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 54

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER ALBERTO MEJÍA BOSQUEZ EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 54

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 55

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUNDO SUPLENTE ENCARGADO, DOCTOR BOLÍVAR DÁVALOS MONCALLO DENTRO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MUEBLE ADUNCA V., EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JAIME PADILLA BELIZ. PANAMÁ,CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 55

MANUEL BELOI GARCÍA ALMENGOR SOLICITA LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 7° DE LA LEY 1 DE 1985. REPARTIDO EL 31 DE JULIO DE 1990.

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 56

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA DRA. CELMA MONCADA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO EL 14 DE FEBRERO DE 1991 (PROCESO LABORAL: DAMARIS CAMBRA DE VALLESTER CONTRA SOCIEDAD ROGA, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 56

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. MARCO ANTONIO HERRERA MOW, EN CONTRA DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL NUMERAL 2 DEL ART. 202 DEL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO JUDICIAL Y DEL TERMINO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTENIDO EN EL PÁRRAFO TERCERO, NUMERO 2 DE LA MISMA EXCERTA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 57

LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ CONSULTA ANTE EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICDO. VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO EN REPRESENTACIÓN DEL DR. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ EN CONTRA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 61

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DESARROLLO DE CERMEÑO S. A. PARA QUE SE DECLARE QUE SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS 4 Y 7 DEL DECRETO N° 17 DE 3 DE ABRIL DE 1974 EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 62

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL E. COLLINS NÚÑEZ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ENRIQUE JIMÉNEZ Y EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NO.31 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1992, DICTADA POR LA GOBERNACIÓN DE VERAGUAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 64

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA MINISTRA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, LICENCIADA DELIA CÁRDENAS CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO N°6 DE DE ABRIL DE 1981 POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO NUMERO 15 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1978, Y SE APRUEBA UN NUEVO REGLAMENTO DE PERSONAL PARA EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 65

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA FAUSTINA S. A., EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 4° Y 6° DEL DECRETO N° 80 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1975. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) 67

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS VILLAMONTE EN CONTRA DEL ARTÍCULO 893 DEL CÓDIGO DE TRABAJO,(PROCESO LABORAL: AGAPITA DE LAÍNO -VS- COMPAÑÍA GOLY, S. A.) MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 68

TRIBUNAL DE INSTANCIA 69

APELACIÓN DEL AUTO DE 8 DE OCTUBRE DE 1993 EN EL NEGOCIO DE QUEJA PRESENTADA POR EL SEÑOR ROLANDO ELÍAS GONZÁLEZ EN REPRES. DE SOCIEDADES CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES S.A Y KREPORT INVESTMENTS INC., CONTRA EL LCDO. RICARDO NAVARRO JURADO, MGDO. DEL PRIMER TRIB. SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DTTO. JUD. PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 69

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 71

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 72

BANCO GENERAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SILVIA RAQUEL SCHAW U. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. 72

EDUARDO AROSEMENA Y CARLOS CHAVARRÍA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA (ACCIÓN DE SECUESTRO) QUE LES SIGUE VARELA HERMANOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DOS (2) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 76

ROBERTO ROJAS Y OTROS, RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BANCO SURAMERICANO DE DESARROLLO, S. A. (BANCOSUR). MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 78

ROGELIO CARPINTERO GARCÍA, RAMIRO CARPINTERO JIMÉNEZ Y ELIGIO CARPINTERO JIMÉNEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN POR DESPOJO QUE LE SIGUEN A NORBERTO CARPINTERO CASTRELLÓN, VICENCIO CARPINTERO CASTRELLÓN, DEMETRIO CARPINTERO CASTRELLÓN Y PEDRO CARPINTERO CASTRELLÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 79

VÍCTOR AGUILAR RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COOPERATIVA DE VIVIENDA DE NUEVO CHORRILLO, R. L. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, ONCE(11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 80

SOLEDAD JIMÉNEZ DE CAMPOS, ABELARDO JIMÉNEZ ESCOBAR, BALBINA JIMÉNEZ DE HERRERA Y FERNANDO JIMÉNEZ ESCOBAR RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO DE NULIDAD QUE LE SIGUEN A ARTURO JIMÉNEZ ESCOBAR Y CAJA DE AHORROS. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 81

JOSÉ GÁLVEZ LÓPEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (SECUESTRO) QUE LE SIGUE A SOFÍA V. DE CHONG, CESAR ROBLES Y GILMA ROBLES DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 82

JULIETA MARTÍNEZ MURILLO RECURRE EN CASACIÓN EN LA TERCERÍA EXCLUYENTE QUE PROPONE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR ELECTRÓNICA ADAMS, S. A. CONTRA JULIO BLANCO. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 82

BIENES Y EMPRESAS ESTRIPEAUT,S. A. Y FÉLIX ESTRIPEAUT NAVARRO RECURREN EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL PRESENTADA EN EL PROCESO EJECUTIVO QUE LES SIGUE BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 83

MIDLAND INVESTMENTS, S. A. Y ALMACARGA, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE ALMACARGA, S. A. LE SIGUE A MIDLAND INVESTMENTS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 83

CRISTINO ANTONIO BRAVO RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINO QUE LE SIGUE MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 84

OTILIA CALDERÓN LUNA, ENRIQUE CALDERÓN LUNA, JOSEFA CALDERÓN DE RUIZ, ADOLFO BENALCAZAR CALDERÓN, ANA MARÍA CALDERÓN DE MONTERREY Y MODESTO CALDERÓN LÓPEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUEN A MANUEL CALDERÓN BERNAL. MAGISTRADO PONENTE: Dr. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 86

MIRÓ Y APARICIO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL ORDINARIO QUE LE SIGUE GABRIEL ALEXIS APARICIO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 90

CASACIÓN EN DIVORCIO 91

VIRGILIO ORLANDO GUARDIA E. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A TERESA LUCIA TORCHIA VELARDO. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 91

THIRSA BEATRIZ GONZÁLEZ DE PITTI, RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A ALEJANDRO PITTI GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 94

ISABEL FLORES BARBA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE A EDUARDO FLORES BARBA, PEDRO FLORES Y ZOILA FLORES BARBA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 95

PATRICIA LUCIA FLYNN WALKER RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A ENRIQUE OCAMPO SIMONIN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 95

MODESTO JUSTAVINO CANDANEDO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO PROPUESTO CONJUNTAMENTE CON MARÍA DEL C. MORENO. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 96

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 98

AUTO CONSULTADO 99

SUMARIO SEGUIDO A BOLÍVAR ENRIQUE NIETO HERNÁNDEZ, GILBERTO ANTONIO QUIROZ Y AZAEL RIVAS MORALES POR HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALEXANDER PITTY CHANDLER. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 99

SUMARIO EN AVERIGUACIÓN DE EL O LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RICARDO ALBERTO COGLEY MOJICA Y GABRIEL SERRANO GARCÍA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 100

SUMARIAS SEGUIDAS A BRÍGIDO MIRANDA JURADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JOSÉ ANTONIO JAÉN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 101

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 102

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A ERIDES ALBERTO BARRIOS CEDEÑO (A) "ENANO", JORGE EMILIO BARAHONA BATISTA Y ABDUL BATISTA HUERTAS, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (DROGAS). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 102

SOLICITUD FORMULADA POR EL LICENCIADO CARLOS E. CARRILLO GOMILA DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA FELIPE CAMARGO AMAYA SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE CARLOS FERNANDO ALFARO HART, EN EL SENTIDO DE QUE SE LE PERMITA ESTAR PRESENTE EN LA AUDIENCIA DE CASACIÓN A CELEBRARSE EL 1° DE DICIEMBRE DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 103

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A RICARDO RAÚL GUERRA POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL EN PERJUICIO DE ALBA ATENCIO GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 103

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA TAUFID ROBLEDO CASTRO, SINDICADO POR EL DELITO DE TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 104

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A GILDA VILLARREAL CASTILLO, POR DELITO DE HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS EN PERJUICIO DE NODIER MIRANDA, OLGA ELVIRA CRUZ DE MIRANDA, ANA ELVIRA HEART CRUZ, ANÍBAL MIRANDA CRUZ Y ALVARO VISUETTE (LESIONADO). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 105

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A EDUARDO ENRIQUE SOUSA LENNOX, SINDICADO POR EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA EN PERJUICIO DE EDIXA DEL CARMEN PÉREZ DE SOUSA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 105

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR EL LIC. CARLOS A. BONILLA, APODERADOS JUDICIAL DE DENYES MARíA GARCÍA CEDEÑO, EDGAR LÓPEZ ESPINOSA, JOSÉ PIQUERAS Y AGRIPINA CERCEÑO, POR EL DELITO GENÉRICO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN PERJUICIO DE ISAAC MORENO LEZCANO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 106

INCIDENTE DE CONTROVERSIA 106

INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO POR LA FIRMA GUERRA & GUERRA A FAVOR DE LA LCDA. ANA CRISTINA DE LEÓN, FISCAL SEGUNDA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, EN CONTRA DE LA FISCALÍA SEGUNDA SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 107

QUEJA 110

QUEJA PRESENTADA CONTRA RICARDO NAVARRO JURADO, MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 110

RECURSO DE HECHO 111

RECURSO DE HECHO PRESENTADO POR EUGENIO NELSON MAGALLÓN, DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE POR LA DESAPARICIÓN DE HÉCTOR GALLEGO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 111

SENTENCIA APELADA 112

JUICIO SEGUIDO A EDUARDO MONTEZA ATENCIO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RIGOBERTO JARAMILLO REYNA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 112

JUICIO SEGUIDO CONTRA CEFERINO BARBA RODRÍGUEZ Y BENIGNO ANTONIO UREÑA BARBA, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y ROBO EN PERJUICIO DE TOMAS ADÁN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. REPARTIDO EL 2 DE JULIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, 11 DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 114

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 116

SOLICITUD DE FIANZA: APELACIÓN EN LA FIANZA DE EXCARCELACIÓN SOLICITADA POR EL LIC. LUIS CARLOS AROSEMENA A FAVOR DE FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA, SINDICADO DE DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ERICK ROLANDO GARCÍA BARSALLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 116

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL 117

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL PARA LA LIBERACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO SEGUIDO A ORLANDO ANTONIO GARCÍA UGARTE POR PRESUNTA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 117

INCIDENTE DE TERCERÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL, EN EL SUMARIO SEGUIDO A RAFAEL ÁNGEL VEGA BLANCO, GUSTAVO LEÓN MEDINA CASTILLO Y BLADIMIR ISAAC MORENO BATISTA, POR SUPUESTA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE. FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 118

SOLICITUD DE DESAPREHENSIÓN PRESENTADA POR EL LICENCIADO JOAQUÍN ROGER PÉREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE EUGENIO CEDEÑO RIVERA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ESTE POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA (DROGAS). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 119

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL INTERPUESTA A FAVOR DE LA SOCIEDAD INTERSPACE CLEARANCE, INC. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 120

INCIDENTE PARA EL LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN DENTRO DEL SUMARIO SEGUIDO A PROSPERO MARGFOY MARGFOY Y ELIZARDE ALFONSO VIRUET RENTERÍA, POR PRESUNTA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 121

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL INTERPUESTA DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA ALBERTO ANTONIO VARGAS WARD, JOSÉ UBALDINO CERVANTES VEGA, EDWIN GESTEÉ CERVANTES CUBILLA, JAIRO HERNÁN PAZA GUERRERO Y JARIO ALFONSO GÓMEZ ARMEILLA, SINDICADOS POR EL DELITO DE TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) 122

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL, INTERPUESTA DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA OMAR GONZÁLEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 124

TRIBUNAL DE INSTANCIA 124

DECLINATORIA DE COMPETENCIA. QUERELLA PRESENTADA CONTRA EL LICENCIADO RODRIGO HERNÁN AROSEMENA, DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, POR DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA, QUERELLA FORMULADA POR EL LEGISLADOR MIGUEL BUSH RÍOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 124

JUICIO SEGUIDO CONTRA MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Y REGINO GRAJALES GONZÁLEZ, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y ROBO EN PERJUICIO DE LIBERATO CERRUD CEDEÑO Y AMINTA ESPINO DE DELGADO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) 125

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 127

CONSULTA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 128

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN, PROMOVIDA POR EL LICENCIADO FRANCISCO VÁSQUEZ QUINTERO, EN REPRESENTACIÓN DEL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA VALIDEZ LEGAL DE CIERTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE

AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 128

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN, INTERPUESTA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL ALCANCE Y LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LAS CIRCULARES NO. 001-92-SIT Y NO. 002-92-SIT DE 13 DE ENERO DE 1992, EMITIDAS POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y LA NOTA NO. 3703-LEG DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1991, EMITIDA POR EL SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 131

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 132

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. NELSON ROVETTO, EN REPRESENTACIÓN DE EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.8 DE 9 DE OCTUBRE DE 1992, EMITIDA POR LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 133

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PEDRESCHI Y PEDRESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE TELESISTEMAS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.40 DE 3 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 134

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DANIEL RAMÍREZ LASSO, EN REPRESENTACIÓN DE EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. DG-45 DE 15 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 135

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ANTONIO RUIZ GARRIDO Y OTRO, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS III Y IV DEL DECRETO EJECUTIVO No.18 DE 19 DE MARZO DE 1976, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 135

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA DUDLEY Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MORENO AROSEMENA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 1 DE 5 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL CONSEJO TÉCNICO DE SALUD Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 136

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SANJUR, PRIMOLA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE RESERMA, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES NO.4686-93-SUB-DG DE 14 DE MAYO DE 1993, EXPEDIDA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y LA RESOLUCIÓN NO.7943-93 JD DE 13 DE MAYO DE 1993, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 137

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO Y VISUETTI EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ALBERTO VALLARINO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL RESUELTO NO.198 DE 28 DE MAYO DE 1991, DICTADO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 137

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO J. FÁBREGA III, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PANAVISIÓN DEL ISTMO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.94 DE 26 DE FEBRERO DE 1988, DICTADO POR EL MINISTRO ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 138

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. CELIA JEAN-FRANCOIS DE MÚÑOZ, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.210 DE 4 DE AGOSTO DE 1993 Y EL MEMORÁNDUM DAYF-DP-NO.292 DE 6 DE AGOSTO DE 1993, AMBOS DICTADOS POR EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO

MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 139

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN & MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE "TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., (TECNASA), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN No.370 DE 21 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GABINETE, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 140

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ANA LORENA BRENES, EN REPRESENTACIÓN DE FLORY DAISY PINCAY MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 4-93 V DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1993, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 140

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE ENRIQUE CARRERA CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ODILIO SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3511-91-D.G. DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1991, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 141

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MIREYA URIBE PRADA, EN REPRESENTACIÓN DE ROSA JURADO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 22-92 DE 2 DE DICIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA NO. 4, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 142

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE TROYANO Y VISUETTI, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO A. BOYD ARIAS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 142

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ANÍBAL HERRERA PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN PAULINO RODRÍGUEZ BEITÍA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.12 DE 29 DE JUNIO DE 1993, EMITIDA POR EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 143

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANTONIO GONZÁLEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 581 DE 1 DE JUNIO DE 1993, EMITIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 144

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS J. GEORGE, EN REPRESENTACIÓN DE NILDA ELENA ABREGO DE GALAGARZA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 51 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 145

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA KENIA JAÉN RIVERA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSEFINA MARÍN HERNÁNDEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. ALP-022-RA DE 10 DE MAYO DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 146

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ANÍBAL TEJEIRA ARAÚZ, EN REPRESENTACIÓN DE CELMIRA MALEK DE PARADA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE GERENCIA GENERAL NO.93(32010-1830)16 DE 10 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDO POR EL SUBGERENTE GENERAL DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 147

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE PAULINO VILLARREAL, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN PERSONAL NO. 00002 DE 4 DE

ENERO DE 1991, EXPEDIDO POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 147

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBERTO E. SIERRA, EN REPRESENTACIÓN DE EDGAR URRIOLA ESPINO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.3108 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1992, EL RESUELTO NO.3276 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1992, LA RESOLUCIÓN NO.3 DE 15 DE FEBRERO DE 1993, Y LA RESOLUCIÓN NO.2 DE 25 DE MARZO DE 1993, EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 149

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA, NORIEGA Y CONTRERAS EN REPRESENTACIÓN DE JEAN VUARNET, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN No. 47 DE 18 DE MARZO DE 1991, DICTADA POR EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 151

INCIDENTE DE NULIDAD POR ILEGITIMIDAD DE LA PERSONERÍA DE LA PARTE DEMANDANTE, INTERPUESTO POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GIGANTE, S. A., DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, PROMOVIDA POR COTTER & COMPANY, MEDIANTE APODERADO JUDICIAL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 261 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1990, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 151

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OMAR AUGUSTO RODRÍGUEZ GALLARDO, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO HUGHES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR LA COORDINADORA GENERAL DE ÁREAS REVERTIDAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 152

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SANTIAGO SANFORD, EN REPRESENTACIÓN DE GREGORIO APARICIO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.13 DE 15 DE ENERO DE 1992, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 153

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARCENIO GARCÍA VALDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NIXON GUERRA Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL MEMORANDO DP-DOPA-8084 DE 4 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PERSONAL A.I. DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 156

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RENÉ MOUTRAN A., EN REPRESENTACIÓN DE INGENIERÍA, DESARROLLO Y ELECTRICIDAD, S. A. (INDELSA), PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.D.G.295-93 DE 9 DE MARZO DE 1993, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES.MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 157

SOLICITUD DE DECLARATORIA DE DESACATO, INTERPUESTA POR EL LCDO. JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE LILLIAN HILL DE VELÁSQUEZ, CONTRA EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, POR INCUMPLIR LA ORDEN IMPARTIDA POR LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN FALLO DE 4 DE AGOSTO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 159

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARISTIDES FIGUEROA EN REPRESENTACIÓN DE SIMÓN WIERZBICKI, CLAUDINA VÁSQUEZ DE MARTÍNEZ Y DIANA GABRIELA BOYD DE MORGAN, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN NO. 286 DE 28 DE DICIEMBRE DE 1987, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 160

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR SUCRE Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE GILBERTO SUCRE CAMARANO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA NO.

5034-LEG DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 161

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD 162

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA Y RIVERA, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLON, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.03-91 DE 29 DE JULIO DE 1991, EXPEDIDA POR LA JUNTA DE LA ZONA LIBRE DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO MOLINO MALA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 162

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA GÓMEZ, GIRALDO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE KAROLCO CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.02/JD-92 DE 30 DE ABRIL DE 1992, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE ASEO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 164

SOLICITUD, INCOADA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A., PARA QUE SE INTIME A LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS, A ACATAR LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN CALENDADA 16 DE ABRIL DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 165

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDRULFO ESPINALES EN REPRESENTACIÓN DE ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO NÚMERO 6 DE 4 DE ABRIL DE 1991, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ GRANDE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 166

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAÚL J. OSSA, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.28 DE 27 DE ABRIL DE 1993, DICTADA POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 167

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUILLERMO BENÍTEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SABAS ROSALES DOGIRAMA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACTA NO. 5 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1974, DONDE SE AUTORIZA LA REVÁLIDA DE 21 DE DICIEMBRE DE 1978 Y EL ACUERDO NO. 5 DE 19 DE ENERO DE 1979, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 168

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS IVÁN ZÚÑIGA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 308 DE 2 DE JUNIO DE 1993, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE SALUD. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 169

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUILLERMO A. DE LEÓN LEE, EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES NO. 62-91 DE 20 DE JUNIO DE 1991, LA NO. 72-93 DE 1o. DE ABRIL DE 1993, LA NO. 142-93 DE 28 DE MAYO DE 1993 Y LA NO. 167-93 DE 24 DE JUNIO DE 1993, EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICAS Y ELECTRIFICACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 169

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LIC. JOEL C. LUQUE F., EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ACUICULTORES (ASPAC), PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO NO.2DO. CÓDIGO 1.1.2.6.99, DEL ACUERDO NO.8 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1992, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAME, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 170

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA XIOMARA RÍOS DE VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE ALCIBIADES GONZÁLEZ (ALCALDE DEL DISTRITO DE COLON), PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO No. 101-40-17 DE 4 DE JUNIO DE 1992, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE COLON. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 172

PROCESO CONTENCIOSO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 173

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS (RESIDENCIA Y PROPIEDAD) INTERPUESTO POR EL LICENCIADO IVÁN TEJEIRA QUIROZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS QUINTERO POVEDA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DM-1106 DE 25 DE MAYO DE 1992, EMITIDA POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 173

JURISDICCIÓN COACTIVA 174

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDA RODRÍGUEZ H., EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO, QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (CASA MATRIZ), SIGUE A CRISTELA HERRERA DE BRAVO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 174

TERCERÍA EXCLUYENTE INTERPUESTA POR LA FIRMA AHUMADA Y SALAS, EN REPRESENTACIÓN DE DAYSI PANIZA LARA (EL MENOR RODRIGO GONZÁLEZ PANIZA) DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (IFARHU) A MANUEL GUERRA Y RODRIGO GONZÁLEZ JURADO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 176

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LCDO. ANTONIO RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DE BREDIO A. MENÉNDEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL A FABRICA DE BLOQUES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 178

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JULIO ELÍAS PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE PROMOVENTAS JADE, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA CAJA DE AHORROS SIGUE CONTRA PROMOVENTAS JADE, S. A. Y DIONISIA LAFFO DE LUM. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 179

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LA LCDA. INÉS YEE DE CARRERA, EN REPRESENTACIÓN DE ECKO PLAZA, S. A. Y/O MIRZAGHA DANIEL LEVY, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 180

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO PRÁXEDES PALMA C., EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A AGENCIAS ACRIDU, S. A., RICARDO ALBERTO ACRICH, NEREIDA RAQUEL DE GRACIA RUIZ Y FRANCISCO ALBERTO DUTARI BLOISE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 181

TERCERÍA EXCLUYENTE,INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME JOVANÉ, EN REPRESENTACIÓN DE RAMÓN CRISTÓBAL ARAÚZ ARANGO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO A CARL FRANKLIN CARDOZE. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 183

EXCEPCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ELIECER IZQUIERDO EN REPRESENTACIÓN DE SILVIA ROSA PORTILLO DE CORTEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 184

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA INÉS YEE DE CARRERA, EN REPRESENTACIÓN DE ECKO PLAZA, S. A. Y MIRZAGHA DANIEL LEVY, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 185

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JACINTO A. CÁRDENAS, EN REPRESENTACIÓN DE CARDMONT, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 186

EXCEPCIÓN DE FALTA DE IDONEIDAD DEL TITULO EJECUTIVO, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, EXCEPCIÓN DE SER CONDICIONAL LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA Y NO ESTAR CUMPLIDA LA CONDICIÓN, INTERPUESTAS POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE HOTEL MONTESERÍN, S. A. Y COMPAÑÍA FAMILIA SEVERINO, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO CONTRA HOTEL MONTESERÍN, S. A., Y/O COMPAÑÍA FAMILIA SEVERINO, S. A. Y/O JUAN LEONELO SEVERINO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 187

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 188

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE DAVID FRANCO, CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DAVID FRANCO-VS-EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 188

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. PLINIO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE HERMENEGILDO VALENCIA, CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1993, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: FAUNA DEL MAR, S. A. -VS- HERMENEGILDO VALENCIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 189

INCIDENTE DE DESACATO, INTERPUESTO POR EL LCDO. NARCISO HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE HERMENEGILDO VALENCIA, DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INCOADO CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: FAUNA DEL MAR, S. A. -VS- HERMENEGILDO VALENCIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 189

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 191

CARTA ROGATORIA 192

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL DE GÉNOVA (ITALIA) EN EL ACTA JUDICIAL DE NOTIFICACIÓN A LA COMPAÑÍA JESAPRIMAR, S. A. EN PERSONA DE SU REPRESENTANTE LEGAL CON SEDE EN EL BUFETE TAPIA, LINARES & ALFARO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 192

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL MUNICIPAL BOBLINGEN DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA CON RESPECTO AL ASUNTO FAMILIAR CARATULADO DAVID BURKHARDT CONTRA JOHN E. CORTEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 192

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO LOCAL, SECCIÓN CIVIL, ADMINISTRACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA CIUDAD DE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN/REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, PARA LA NOTIFICACIÓN EN EL LITIGIO CIVIL EN LA CAUSA DE DENISE SCHNEBEL CONTRA AVERY D. LEWIS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 193

COMISIÓN ROGATORIA NO.1548, LIBRADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN LA CAUSA SEGUIDA MIGUEL ÁNGEL SOLÍS POR EL DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 194

COMISIÓN ROGATORIA No.714-93, LIBRADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA CARLOS BARTOLO CASTILLO PÉREZ POR EL DELITO DE USO DE DOCUMENTOS FALSOS EN PERJUICIO DE LA FE PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ,VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 194

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE DERECHO DEL 25° OFICIO DE SAO PAULO, BRASIL, DENTRO DEL PROCESO DE NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA KIETA HOLDING INC. EN LA PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE 53-A, URBANIZACIÓN OBARRIO, TORRE DEL BANCO SUR, PISO 16. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 195

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 196

ROBERTO A. DE GRACIA, SOLICITA RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DE DEKALB DEL CONDADO DE DEKALB, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS, DE 12 DE MAYO DE 1992. MAGISTRADA PONENTE: AURA GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 196

MILCIADES DATILO ANDRIÓN SOLÍS, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE CIRCUITO DE ONCEAVO CIRCUITO JUDICIAL, EN Y POR EL CONDADO DE DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DONDE SE DECLARA DISUELTO EL MATRIMONIO DE LA SEÑORA KREMA AHMAD CASTILLO Y EL SEÑOR MILCIADES DATILO ANDRIÓN SOLÍS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ L. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 196

VIELKA E. MARRE ARCE, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE CIRCUITO UNDÉCIMO, CIRCUITO JUDICIAL DE DADE, FLORIDA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 197

VALENTINA DE AGUILAR SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR LA CORTE DE CIRCUITO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH, FLORIDA, DIVISIÓN DE DERECHO DE LA FAMILIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1990. MAGISTRADO PONENTE. JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 199

EXHORTO 200

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ATENAS, INTERPUESTO POR GEORG. H. SKOURTIS, EN CONTRA DE PREMIER SERVICES S. A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EDIFICIO COMOSA, PRIMER PISO, AVENIDA SAMUEL LEWIS, APARTADO POSTAL 5108, PANAMÁ 5, REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: AURA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 200

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PIREO, GRECIA, INTERPUESTO POR MANIDOIL JETOIL S. A., EN CONTRA DE WESTBAY SHIPPING CORPORATIONM, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, EDIFICIO EASTERN PISO 12, AVENIDA FEDERICO BOYD. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 201

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO UNIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ATENAS, PARA ESTATUIR PLEITO PENDIENTE ENTRE PETRÓLEOS DEL NORTE, S. A., CON SEDE EN LA CIUDAD DE BILBAO, ESPAÑA, CONTRA VARNIMA CHARTERING COMPAÑÍA NAVIERA, S. A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 202

EXHORTO LIBRADO POR LA ALTA CORTE DE JUSTICIA, QUEEN'S BENCH TRIBUNAL COMERCIAL, PARA QUE SE NOTIFIQUE A LA CEMENTONAVIOS COMPAÑÍA NAVIERA, S. A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE:CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 202

EXHORTO LIBRADO POR GARDENIA MARITINE INC., EN CONTRA DE TRADAX OCEAN TRANSPORTATION S. A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EDIFICIO IGRA 8 CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 203

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PIREO, GRECIA, INTERPUESTO POR SEADCO SOUTHEAST ATLANTIC CARGO OPERATORS CONTRACT STEVEDORES, EN CONTRA DE SPITHA MARITME S. A., CON SEDE EN LA CIUDAD DE PANAMÁ MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 204

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA MARO ALBERTO VEGA SOLÍS, POR EL DE FALSIFICACIÓN DE SEÑAS Y MARCAS Y OTROS EN DAÑO DE GLORIA ARGÜELLO ZUÑIGA Y CLARA ZOMMER REZLER. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 205

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

NOVIEMBRE 1993

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. RAMÓN MALCA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ MENAGED AZRAK REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD IMPERIO CALIDONIA, S. A. Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTOS. MAGISTRADO PONENTE: Dr. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, cinco (5) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado RAMÓN MALCA, actuando como apoderado judicial del ciudadano **JOSÉ MENAGED AZRAK o IMPERIO CALIDONIA, S. A.**, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales contra la Nota No.8100-643-93 del 19 de agosto de 1993, dictada por el Director General de Arrendamientos, del Ministerio de Vivienda, en la que "ordena la suspensión provisional de cualquier acción de desalojo y/o lanzamiento en contra de **Nam Sing Lao Lee, Adolfo Chan Díaz, Luis Chong Willoughby y Cesar Gem González.**", dentro del proceso de lanzamiento por intruso que le sigue el demandante a estos últimos.

Recibido el libelo de la demanda toca a esta Corporación decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, previas las siguientes consideraciones:

La acción de amparo de garantías constitucionales ha sido instituida para proteger a los ciudadanos de órdenes de hacer o de no hacer emitidas por los servidores públicos que violen derechos o garantías constitucionales que puedan causar lesiones graves o daño inminente a un ciudadano, por lo que requieren su revocación inmediata, tal como lo establece el artículo 2606 del Código Judicial.

Según se observa, la orden impugnada tal como vimos se limita a instruir al Corregidor de Calidonia a que suspenda cualquiera acción de desalojo y/o lanzamiento contra los señores Nam Sing Lao Lee, Adolfo Chan Díaz, Luis Chong Willoughby y César Gem González. La orden lleva fecha de 19 de agosto de 1993 y con ella se acompañan sendas copias de las resoluciones 212, 213, 214 y 215 de fecha 26 de agosto de 1993, en virtud de las cuales el Corregidor de Calidonia resuelve denegar la declaratoria de intruso que había presentado Imperio Calidonia, S. A. en contra de varios establecimientos comerciales, que al parecer pertenecen a las personas naturales que se mencionan en la orden de suspensión dictada por el Director General de Arrendamientos.

Se observa, además, que el argumento en base al cual se apoya el Corregidor de Calidonia para denegar la condición de intruso a los mencionados establecimientos, nada tiene que ver con la aludida orden de suspensión. Esta circunstancia nos lleva de la mano a la conclusión de que no estamos ante una orden que pueda causar lesiones graves o daño inminente a un ciudadano, en los términos estatuidos por el artículo 2606 del Código Judicial.

Por otro lado, la nota demandada se da, aparentemente, dentro de un proceso que se lleva ante la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, en el cual no consta que el demandante haya agotado los medios ordinarios de impugnación, tal como lo exige el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial.

En vista de las consideraciones anteriores, la Corte considera que la presente acción de amparo de garantías constitucionales no cumple con los requisitos indispensables para ser admitida.

Por lo anteriormente expuesto la Corte, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **NO ADMITE** el amparo de garantías constitucionales propuesto por el señor JOSÉ MENAGED AZRAK o IMPERIO CALIDONIA, S. A., contra la nota No.8100-643-93 del 19 de agosto de 1993, dictada por el Director General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ELIADES TRUJILLO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA ROXANA DEL CARMEN VARELA DE MIRO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD VARIOUS MAINTENANCE, S. A. EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N°59-DGT-93, DEL 30 DE AGOSTO DE 1993, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La sociedad VARIOUS MAINTENANCE, S. A., por intermedio del licenciado ELIADES TRUJILLO, presentó amparo de garantías constitucionales en contra de la orden de hacer contenida en el Auto N°59-DGT-93 de 30 de agosto de 1993, proferida por el Director General de Trabajo, la cual dice así:

"30 de agosto de 1993.

AUTO N°59-DGT-93 TITO SALAZAR, JULIO OLMEDO, ABDIEL JAÉN LOUIS Y OTROS -VS- MCGOWEN, S. A. Y/O SCHOOL PROTECTION SERVICE, S. A. Y/O PINTURAS GARANTIZADAS, S. A. Y/O VARIOUS MAINTENANCE, S. A.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

VISTOS:

A través del Auto PJ-7, calendado veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993), la Junta de Conciliación y Decisión N°7, con fundamento legal en el Artículo 22 de la Ley 53 de 28 de agosto de 1975, y a petición de este despacho, DECRETO secuestro sobre los dineros de propiedad de la empresa MC GOWEN, S. A., ha percibir por parte de la División de Administración de Contratos del Ejército de Los Estados Unidos, hasta la concurrencia de B/.62,865.69, a fin de salvaguardar las prestaciones de los trabajadores.

Que dicha medida cautelar no se perfeccionó en virtud de que según nota Unidad 7104-SOJA-IL(27-50b) Oficina del Procurador Militar calendada 10 de junio de 1993, que vive a foja 39 del cuaderno, el Doctor Marcos D. Ostrander, Jefe de Derecho Internacional del Departamento de la Armada en Fort Clayton, hace constar que los dineros adeudados a la empresa MC GOWEN, S. A., les fueron cancelados el 7 de mayo de 1993, por la suma de B/.113,916.20.

A fecha 4 de agosto último, el Licdo. Roberto Kouruklis Ivaldi, apoderado de los trabajadores demandantes, ha presentado memorial a este despacho, por medio del cual reitera la solicitud de secuestro y ampliación de la cuantía, esta ves sobre los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, cuentas por cobrar y dineros de propiedad de Various Maintenance, S. A., hasta la concurrencia de B/.175,609.27, alegando que:

"La empresa McGowen, S. A., alrededor del 19 de mayo de 1993, traspasó a la empresa Various Maintenance, S. A. sus intereses y bienes, asumiendo esta las obligaciones del contrato suscrito originalmente entre McGowen, S. A. y al Gobierno de Los Estados Unidos. Además McGowen, S. A. garantizó al gobierno de Los Estados Unidos, el pago de todas las deudas y el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por Vamasa.

Este hecho convierte a VAMASA en solidaria en cuanto a responsabilidad se refiere tomando en consideración la fecha del reclamo laboral y la fecha del traspaso fraudulento de McGowen, S. A., se denota claramente el carácter doloso del mismo y el interés de evitar que las medidas cautelares presentadas por los trabajadores desde el 17 de mayo de 1993, tuviesen éxito, y eludir en esta forma el pago de los derechos y prestaciones laborales."

A petición de los demandantes, esta Dirección cursó la Nota N°117-SJ-93 de 25 de junio a la señora Francis Boger, Directora de Contratos USA-ARMI recurriéndole acerca de los contratos habidos con la empresa McGowen, S. A. y si ésta había cedido sus créditos a otras empresas por los servicios que presta a la Oficina de Contratos del Ejército de Los Estados Unidos.

En nota de contestación distinguida como Unidad 7104-SOJA-IL (2750b) Oficina del Procurador Militar calendada 22 de julio de 1993, el Dr. Marcos Ostrander, Jefe de Derecho Internacional del Departamento de la Armada del Ejército de los Estados Unidos, expresa que:

"La División de Administración de Contratos del Ejército de los Estados Unidos, nos informa que dicha entidad al presente no mantiene relación contractual con la empresa McGowen, S. A., ni tampoco existen créditos a favor de dicha empresa.

McGowen, S. A., tenía un Contrato para el mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado; el contrato número DAHC92-88-C-0240. Sin embargo, alrededor del 19 de mayo de 1993, Various Maintenance, S. A. (VAMASA), sucesor de sus intereses, fue reconocido por el Oficial Contratante. Se celebró un Convenio de Novación entre McGowen, S. A., VAMASA y el gobierno de Los Estados Unidos mediante el cual se reconoce que VAMASA asume todas las obligaciones del contrato. McGowen, S. A., garantizó el pago de todas las deudas y el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por VAMASA. El gobierno de Los Estados Unidos reconoce el traspaso del contrato y de los bienes a VAMASA como sucesora en interés".

De lo anterior se desprende con claridad meridiana que los créditos adeudados por la Oficina de Contratos de Los Estados Unidos a McGowen, S. A., en virtud de contrato por la prestación de servicios, fueron traspasados a la empresa Various Maintenance, S. A., mediante la figura de novación, dentro del período de conflicto laboral, en donde un número

plural de trabajadores reclaman el pago de la diferencia de salario mínimo adeudado, así como el pago de sus prestaciones e indemnizaciones por despido injustificado.

Estima este Tribunal que resulta viable accionar en contra de un tercero que ha adquirido los bienes y dineros del demandado, en atención a lo que disponen los Artículos 14 y 15 del Código de Trabajo.

En mérito de lo anterior, el suscrito Director General de Trabajo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley; AMPLIA el secuestro decretado mediante Autos PJ-7 de 21 de mayo de 1993 y PJ-7 de 14 de junio de 1993, y lo hace EXTENSIVO a los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, cuentas por cobrar y dineros de propiedad de VARIOUS MAINTENANCE, S. A. (VAMASA) hasta la concurrencia de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO BALBOAS CON ONCE CENTÉSIMOS (B/.222,538.11), con el objeto de salvaguardar las prestaciones de todos los trabajadores de MCGOWEN, S. A.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 14 y 15 del Código de Trabajo. Artículo 22 de la Ley 53 de 28 de agosto de 1975, adicionado con el numeral 2 del Artículo 1 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986.

Notifíquese y Cúmplase.

JORGE FABIÁN GUTIÉRREZ P.
Director General de Trabajo."

Admitido el presente amparo, se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación o, en su defecto, un informe acerca de los hechos materia del recurso. La Dirección General de Trabajo remitió el expediente respectivo mediante nota N°279-DGT-93 de 8 de octubre de 1993. Recibido este negocio se pasa a resolver la acción propuesta.

Manifiesta el recurrente que se han violado los artículos 17, 18, 32 y 60 de la Constitución Política de la República.

Visto lo anterior, procede el Pleno a resolver la acción que la sociedad VARIOUS MAINTENANCE, S. A. ha promovido contra el Director General de Trabajo.

Sabido es, por reiteradas decisiones de la Corte, que los artículos 17 y 18 de la Constitución Política de la República son de carácter programático y no conceden garantías de orden individual, por lo que no pueden considerarse violados por órdenes emanadas de los servidores públicos, salvo que ellas se produzcan como consecuencia de la vulneración de otras garantías fundamentales.

En cuanto al artículo 32 de la Constitución Política de la República, que se dice también infringida, es prudente recordar que el mismo contiene los requisitos indispensables sobre el debido proceso. En esta disposición se establece que nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme los trámites legales. Así las cosas es importante determinar si la orden emitida por el Director General de Trabajo, proviene de autoridad competente y si reúne las exigencias legales para expedirse.

La Dirección General de Trabajo se rige por la Ley N°53 de 28 de agosto de 1975. El artículo 22 de la precitada ley establece lo siguiente:

"ARTICULO 22. En circunstancias excepcionales en las que exista grave, notorio e inminente peligro de que una empresa o establecimiento trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe sus bienes, de manera tal que dejaría insatisfechas las reclamaciones de los trabajadores, aún cuando no se trate de derechos inmediatamente exigibles, que derivarían de la posible terminación de las relaciones de trabajo, las Juntas de Conciliación y Decisión, a petición del Director General de Trabajo, dispondrán el aseguramiento o el secuestro de los mismos. Con el aseguramiento o el secuestro de los bienes quedarán fuera del comercio. Las diligencias ordinadas (sic) por la Resolución podrán practicarse por las Juntas, las Direcciones Regionales de Trabajo o comisionarse a uno de los Juzgados Seccionales de Trabajo.

Estas medidas se practicarán sin interrumpir ni paralizar el funcionamiento de la empresa o establecimiento.

Estas acciones cautelares podrán mantenerse en vigor hasta que concluya el término que señala el artículo 706 del Código de Trabajo para promover la acción principal. Cuando se trate de la protección de derechos que derivarían de la terminación de la relación de trabajo este término se extenderá hasta por 30 días.

Vencidos estos términos se levantarán las medidas o se enviará el asunto a la autoridad competente que esté conociendo de la acción principal, según fuere el caso.

En cualquier momento el afectado podrá pedir el levantamiento de las medidas cautelares, demostrando la inexistencia del peligro o dando caución suficiente."

En el caso traído en esta acción de amparo se dice que el Director General de Trabajo ordenó secuestrar bienes y dineros de un tercero, en este caso, de VARIOUS MAINTENANCE, S. A.

Al revisar el expediente remitido por el Director General de Trabajo, se pudo comprobar que se trata de una demanda laboral interpuesta originalmente contra las sociedades McGOWEN, S. A. y/o SCHOOL PROTECTION SERVICE, S. A., ante el referido despacho.

Consta a foja 32 del expediente el Auto PJ-7 de fecha 21 de mayo de 1993, dictado por la Junta de Conciliación y Decisión N°7, por medio del cual "DECRETA formal medida de secuestro sobre los dineros que deba percibir la empresa McGOWEN, S. A. por parte de la Dirección de Administración de Contratos del Ejército de los Estados Unidos acantonados en Fuerte Clayton que se derivan del Contrato N°DAH-C-92-89-C-0265, hasta la concurrencia de B/.62,865.69, en consideración a la certificación expedida por la Dirección de Administración de Contratos, a fin de garantizar las prestaciones laborales de JULIO E. OLMEDO y OTROS."

El referido auto se refiere también a que la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social comisionó a la Junta de Conciliación y Decisión número siete (7), mediante Nota N°41-SJ-93 de 21 de mayo de 1993, para que dicho despacho diligenciara el secuestro antes indicado.

La medida cautelar no se pudo realizar, según consta en el acta visible a fojas 70 a 72 vuelta del expediente, de fecha primero (1°) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), debido a que mediante Auto N°900 proferido por el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 19 de mayo de 1993, se DECRETO SECUESTRO a favor de CARLOS CLEMENT contra la empresa demandada McGOWEN, S. A., "sobre la administración del establecimiento y de los bienes y activos, incluyendo cuentas por cobrar, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, derechos y créditos depositados en cualquier banco de la localidad perteneciente a la sociedad demandada, hasta la concurrencia de la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON CUARENTA CENTÉSIMOS (B/.138,269.40), en concepto de capital, costas y gastos legales".

Es importante señalar que a fojas 91-92 del presente negocio, el apoderado legal de los trabajadores, solicita que el secuestro se haga extensivo contra las compañías PINTURAS GARANTIZADAS, S. A. y/o VARIOUS MAINTENANCE, S. A. Para una mejor ilustración en cuanto a la relación de estas nuevas empresas demandadas, transcribimos textualmente el artículo quinto del escrito en mención, que es del tenor siguiente:

> "QUINTO:Concretamente, la empresa McGOWEN, S. A. alrededor del 19 de mayo de 1993, traspasó a la empresa VARIOUS MAINTENANCE, S. A., sus intereses y bienes, asumiendo ésta las obligaciones del contrato suscrito originalmente entre McGOWEN, S. A. y el Gobierno de los Estados Unidos el pago de todas las deudas y el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por VAMASA.
>
> Este hecho convierte a VAMASA en solidaria en cuanto a responsabilidad se refiere."

Observa el Pleno, que la petición formulada por el apoderado de los trabajadores, se basa en la nota remitida al Director General de Trabajo, licenciado JORGE FABIÁN GUTIÉRREZ por el doctor MARCOS D. OSTRANDER, Jefe de Derecho Internacional del Departamento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es del contenido siguiente:

> "22 de julio de 1993
>
> Unidad 7104, SOJA-IL (27-50b)
> Oficina del Procurador Militar
>
> Licdo.
> Jorge Fabián Gutiérrez
> Director General de Trabajo
> Ministerio de Trabajo y Bienestar Social
> Panamá, R. de P.
>
> ASUNTO: Caso de McGOWEN, S. A.
>
> Licenciado Gutiérrez:
>
> Hemos recibido su nota número 117-SJ-93 de fecha 25 de junio de 1993, sobre el asunto mencionado arriba.
>
> La División de Administración de Contratos del Ejército de los Estados Unidos nos informa que dicha entidad al presente no mantiene relación contractual con la empresa McGowen, S. A. ni tampoco existen créditos a favor de dicha empresa.
>
> McGowen, S. A. tenía un contrato para el mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado: el contrato número DAHC-92-88-C-0240. Sin embargo, alrededor del 19 de mayo de 1993, Various Maintenance, S. A. (VAMASA), sucesor de sus intereses, fue reconocida por el Oficial Contratante. Se celebró un Convenio de Novación entre McGowen, S. A., VAMASA y el Gobierno de los EE.UU., mediante el cual se reconoce que VAMASA asume todas las obligaciones del contrato. McGowen, S. A. garantizó el pago de todas la deudas y el cumplimiento de todas las

obligaciones asumidas por VAMASA. El Gobierno de los EE.UU. reconoce el traspaso del contrato y de los respectivos bienes a VAMASA como sucesora en interés.

Esperando poder seguir brindándole nuestra cooperación en el futuro.

Atentamente,

Dr. Marcos D. Ostrander
Jefe de Derecho Internacional."

Ahora bien, dentro de los presupuestos legales que existen en el Código de Trabajo, en cuanto a que no se vean afectados los derechos y acciones de los trabajadores como es el presente caso, es obvio que con el contrato de novación entre el gobierno de los Estados Unidos y las empresas McGOWEN, S. A. y VAMASA (VARIOUS MAINTENANCE, S. A.), ésta última asume todas las obligaciones del contrato en referencia. En consecuencia, el secuestro decretado se ha realizado cumpliendo con el debido proceso, por tanto no se ha violado el artículo 32 de nuestra Carta Magna, señalado por el amparista.

Por último, se cita como norma constitucional violada el artículo 60 que dice:

"ARTICULO 60. El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa."

Con relación a este artículo 60, de la Constitución Política de la República, mal se puede sostener que la sentencia quebranta los derechos del trabajador, por cuanto que la violación del mismo es consecuencia de violaciones a la ley material o procesal, lo cual no ha sido establecido. Por otra parte, la interpretación y aplicación de las normas legales no son susceptibles de control a través del recurso de amparo de garantías constitucionales.

En relación al incidente de exclusión de bienes formulada por la empresa VARIOUS MAINTENANCE, S. A., por razones de derecho material, corresponde al Director General de Trabajo decidir al respecto.

Todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado ELIADES TRUJILLO en representación de la persona jurídica VARIOUS MAINTENANCE, S. A. en contra del Director General de Trabajo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE DESACATO INTERPUESTO POR EL LICDO. RODRIGO ANGUIZOLA SAGEL DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y EN CONTRA DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **RODRIGO ANGUIZOLA SAGEL**, presentó en nombre de la Lotería Nacional de Beneficencia, querella de desacato contra el Contralor General de la República, por considerar que éste se niega a dar cumplimiento a la sentencia de amparo de 3 de septiembre de 1993, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que concedió el amparo solicitado.

Admitido el escrito de desacato se le dio traslado al funcionario acusado y este lo contesto, en sus partes más sobresalientes, de la siguiente forma:

"Con relación a los nombramientos de personal en el sector público, hay dos momentos relativos al refrendo. Todo nombramiento en dicho sector afecta el patrimonio público del gobierno central o de la entidad descentralizada de que se trate, por cuanto los salarios que devengará el personal nombrado se pagará con fondos públicos, de lo que resulta afectado el patrimonio público respectivo. Lo anterior tiene su fundamento en el inciso primero del artículo 77 de la Ley N°32, de 8 de noviembre de 1984. Mientras el acto de nombramiento no sea aprobado por la Contraloría, el personal nombrado no puede tomar posesión del cargo respectivo y en consecuencia, no puede laborar ni ser incluido en la planilla de la institución. El refrendo de la planilla, en cambio, se concede o se niega, según sea el caso, con base en el artículo 74 de la Ley 32 de 1984.

> Por tal motivo, en el amparo presentado, con algún grado de imprecisión, al parecer deliberada, se expresó que mediante la orden de no hacer impugnada, se impedía la inclusión en la planilla. En realidad la orden de no hacer impedía la toma de posesión y por consiguiente el desempeño de labores y en consecuencia también, la inclusión en la planilla, pues esta última es la que constituye la orden de pago con cargo a un tesoro público, para cubrir los salarios del personal que está laborando".

La Corte al examinar la situación planteada considera que el artículo 771 del Código Administrativo es muy claro al establecer que se entra a ejercer el cargo a la toma de posesión y no como pretende el señor Contralor General de la República, que sea en el momento en que es aprobado el nombramiento por la Contraloría General de la República, caso en el cual, de admitirse semejante tesis, todos los nombramientos del Gobierno Central, municipal, de instituciones autónomas y semiautónomas, de la República, quedarían sujetos al Contralor General de la República, lo cuales es una interpretación errónea de los artículos 77 y 74 de la Ley 32 de 1984, de parte de la mencionada institución estatal.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, le ORDENA al señor Contralor General de la República que pague de acuerdo con la sentencia de amparo de esta Corporación de 3 de septiembre de 1993, a los empleados de la Lotería Nacional a partir de la toma de posesión del cargo, tal cual lo establece el artículo 771 del Código Administrativo. Y que los casos a que alude el Contralor de que no han tomado posesión, que haga el pago respectivo, cuando haya tenido lugar la toma de posesión.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LUIS ALBERTO MORENO EN CONTRA DEL JUEZ OCTAVO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Juez Octava del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, solicita al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la aclaración de las frase:**"Revoca la resolución del 18 de junio de 1992, emitida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial"**,contenida en la parte resolutiva de la sentencia de 2 de abril de 1993, mediante la cual esta Corporación decidió en segunda instancia, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por Luis Alberto Moreno Tejeira contra el Auto No.46 de 18 de junio de 1992, mediante el cual se le llama a juicio por la infracción de las normas contenidas en el capítulo IV, título X, Libro II del Código Penal.

La peticionaria expresa, que la aclaración de dicha frase ayudará a esclarecer aspectos procesales que mantienen en incertidumbre el presente negocio y que la solicitud no resulta extemporánea al tenor de lo preceptuado en el artículo 1,108 del Código Judicial, según el cual, las sentencias y autos de segunda instancia dentro del término de ejecutoria admiten aclaración cuando la parte resolutiva sea contradictoria o ambigua, siempre y cuando se trate de autos y sentencias de única instancia.

Aún cuando la Juez Octava no lo manifiesta expresamente, el Pleno infiere que la solicitud de aclaración recae sobre este punto: si la revocatoria de la Resolución No.46 de 18 de junio de 1992, se refiere a la parte pertinente a la suspensión del cargo de representante de Corregimiento del señor Luis Alberto Moreno Tejeira o si se extiende al propio encausamiento criminal dictado en su contra. Este último aspecto debería excluirse a juicio de la Corte por no haber sido objeto de la acción.

Empero, resulta evidente que la solicitud de aclaración es completamente extemporánea al tenor del propio artículo 1,108 del Código Judicial aducido por la petente ya que se presentó fuera del término de ejecutoria de la sentencia, o sea después del 20 de abril de 1993, fecha de dicha ejecutoria, por lo que considera la Corte que debe desestimarse.

Por las razones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la solicitud de aclaración de la sentencia de 2 de abril de 1993 presentada por la Juez Octava del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo de lo Penal.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. COSME IDRYS MORENO G., EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA ZULIMA DE BROWN Y EN CONTRA DEL GERENTE GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **COSME IDRYS MORENO G.** ha presentado Amparo de Garantías Constitucionales en representación de la señora **ZULIMA DE BROWN**, contra la orden verbal proferida por el señor Gerente General de la Zona Libre de Colón, el día 27 de agosto de 1993.

La Corte procede al análisis de la acción presentada, en vías de determinar si la misma cumple con los requisitos formales que hagan posible su admisión.

En este punto se percata este Tribunal, que la acción instaurada adolece de defectos que impiden su admisión.

En efecto, se aprecia en primer término, que el amparo en relación con la orden verbal atacada, supuestamente expedida el 27 de agosto de 1993, en manera alguna cumple con el requisito de presentar "mención expresa de la orden impugnada", que exige el numeral 1 del artículo 2610 del Código Judicial. Este máximo Tribunal de Justicia ha reiterado en ocasiones similares a la que nos ocupa, que en los casos en que no hay constancia escrita de la orden, por haber sido ésta dictada verbalmente, el interesado o perjudicado deberá presentar en abono de la demanda, dos testimonios hábiles, de acuerdo con la aplicación que por analogía debe hacerse del artículo 48 de la Ley 135 de 1943, dado que ésta sería la única manera en que la orden impugnada, por ser verbal, adquiere materialidad y certeza.

En resolución de 2 de agosto de 1993, en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por FLORENCIO CASTILLO ESPINOSA en representación de ELIECER GONZÁLEZ, contra el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, la Corte señaló:

> "El Pleno ha dejado sentado en jurisprudencia reiterada, cuál es el procedimiento que debe seguirse en estos casos, y ha manifestado que cuando la orden atacada es verbal, resulta preciso presentar prueba documental preconstituida, consistente en dos testimonios hábiles, sobre la existencia de la orden, y la fecha en que fue dictada. La sentencia de 10 de julio de 1992, en un amparo contra el Contralor General de la República, es un ejemplo de lo que aquí se expone".

Igual posición se asumió en la resolución de 10 de julio de 1992 y de 5 de agosto de 1993.

Se observa de la misma forma, que la acción de amparo propuesta no se dirige al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino de manera genérica al conjunto de los Magistrados de la Corte Suprema, contrariando con tal proceder, lo preceptuado en el artículo 102 del Código Judicial, aplicable a negocios que deban ser del conocimiento del Pleno de la Corte Suprema.

Por otra parte, la acción presentada no incluye de manera diáfana, las menciones del artículo 2610 del Código Judicial, especialmente en lo preceptuado en el numeral 2, puesto que no se expresa en un punto específico, el nombre del servidor público, funcionario, institución o corporación que impartió la orden.

La Corte desea hacer énfasis en el hecho de que la orden verbal atacada fue supuestamente proferida por el Gerente General de la Zona Libre de Colón cuando se produjo un hallazgo de sustancias ilícitas en la empresa **B.F.& P; CARIBEEAN CARGO PANAMÁ S. A.** A raíz de este hecho, alega el recurrente, el señor Gerente General procedió a cerrar la compañía, y a suspender la clave de operaciones de la misma.

La Corte desea señalar, que el señor Gerente General de la Zona Libre de Colón actúa (en caso de comprobarse la existencia de la orden verbal atacada), como autoridad de una entidad autónoma, y en aplicación de lo preceptuado en las normas legales que reglamentan el funcionamiento de la Zona Libre y que prohíben expresamente almacenar u operar artículos de prohibida importación de acuerdo a leyes fiscales y aduaneras (cfr. artículo 40 literal a) del Decreto Ley N°18 de 1948), como lo son las sustancias encontradas en el local de la empresa mencionada.

Ante la supuesta orden expedida, el afectado tendría la posibilidad de acudir ante la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón (autoridad máxima de la entidad) y accionar ante el acto que el propio amparista acusa de ilegal.

Lo anterior implica por una parte, que no se han agotado los medios de impugnación que deben ejercitarse antes de acudir en la vía del Amparo de Garantías Constitucionales, lo cual es requisito fundamental para que esta acción sea admisible, tal como ha reiterado la Corte Suprema en diversas ocasiones (v.g. resolución de 10 de

julio de 1992 y 30 de julio de 1993). Por otro lado, el hecho de que el actor estime que la actuación del Gerente General de la Zona Libre de Colón sea ilegal, presupone que la vía idónea para proceder, antes de encausar una acción de Amparo de Garantías Constitucionales, es un recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, que determine si este acto de afectación particular, se encuentra dentro del margen de la legalidad.

Todas estas consideraciones hacen concluir al Tribunal, que no puede darse curso legal a la acción instaurada, y que no debe ser admitida, en atención a los múltiples defectos anotados.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado COSME IDRYS MORENO G. en representación de la señora ZULIMA DE BROWN y en contra del Gerente General de la Zona Libre de Colón.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO EN REPRESENTACIÓN DEL DR. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, mediante escrito calendado 25 de octubre de 1993, manifiesta impedimento para conocer del presente proceso de Amparo de Garantías Constitucionales, alegando lo siguiente:

> "MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ.
>
> Al momento en que se me pasa en lectura el proyecto de resolución que recae sobre la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO en representación del doctor CARLOS IVÁN ZÚÑIGA y en contra de la Orden de No Hacer dictada por el CONTRALOR GENERAl DE LA REPÚBLICA, que se refiere a la negativa de refrendo de la planilla para el pago de los profesores de la Universidad de Panamá, que contiene el aumento bienal sobre el salario regular de los profesores, me veo obligada a solicitar al resto de los colegas de esta Corporación de Judicial que se me declare impedida para conocer de este caso, fundada en las causales 2 y 13 del artículo 749 del Código Judicial, en virtud de que dicto un curso de Derecho Penal en la Licenciatura y en la maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.
>
> En consecuencia pido que se me declare legal este impedimento y se me separe del conocimiento de la presente causa.
>
> Panamá, 25 de octubre de 1993.
>
> (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
> Magistrada de la Corte
> Suprema de Justicia."

El Pleno de la Corte, como ha sostenido en casos similares, observa que el hecho invocado por la Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, no constituye causal de impedimento a la luz de lo establecido por el Artículo 2619 del Código Judicial. Pues, esta norma de carácter especial claramente expresa que los Magistrados para no conocer de Amparos de Garantías Constitucionales sólo se manifestaran impedidos cuando sean parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de algunas de la partes o de sus apoderados, o haya participado de la expedición del acto.

En este sentido, a pesar de que la Magistrada Guerra de Villalaz, ciertamente es profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, ello no implica que se encuentre dentro de los presupuestos establecidos dentro de la causal a que alude la precitada norma del Código Judicial.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que la Honorable Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ no está impedida para conocer de los procesos de Amparo de Garantías constitucionales acumulados en este caso, y DISPONE que continúe conociendo del negocio.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR SANTIAGO MONTILLA EN CONTRA DEL JUEZ SEGUNDO SUPLENTE DEL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA, APELACIÓN. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Dr. Javier Alexis Quiroz, de la firma forense Quiroz, Murillo y Asociados, ha presentado recurso de apelación dentro del proceso de amparo de garantías constitucionales promovido por el señor Santiago Montilla contra el Juez Primero del Circuito de Herrera.

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial señaló en la Sentencia de 30 de septiembre de 1993 que no se habían infringido los artículos 32 y 50 de la Constitución porque el Juez demandado nombró un partidor en seguimiento de lo dispuesto en el artículo 1593 del Código Judicial y además observó que en el reverso de la foja 164 consta que la resolución judicial impugnada fue debidamente notificada a todas las partes y al partidor y que no era necesario notificarla personalmente nuevamente como lo pretende el abogado Quiroz Murillo.

El Pleno comparte el razonamiento del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial ya que es evidente que el Juez demandado actuó conforme a derecho al dictar la resolución judicial impugnada y que la notificó en la forma prescrita por la ley.

No puede pasar por alto esta Corte Suprema que el abogado Quiroz Murillo ha promovido un tercer proceso de amparo de garantías constitucionales relacionado con el proceso de sucesión que se surte ante el Juzgado Primero del Circuito de Herrera. Ya la Corte le había advertido a este abogado en la sentencia del Pleno de 28 de julio de 1993, que resolvió el segundo amparo, que se observaba a foja 123 y siguientes del expediente contentivo del proceso civil que dicha parte había promovido un segundo amparo y que "ha dado muestras con ello de una excesiva litigiosidad que ha prolongado el juicio por más de cuatro (4) años, haciendo uso de recursos dilatorios, práctica negativa que entorpece el esfuerzo tribunalicio por ofrecer a la colectividad una administración de justicia pronta y cumplida" (a foja 179). El citado abogado ha hecho caso omiso de esta advertencia y a través de esta tercera demanda de amparo ha pretendido continuar en su actitud dilatoria del proceso civil y, por ello, ha infringido el deber de lealtad y probidad que debe observarse en el proceso, según lo señala el artículo 462 del Código Judicial. De allí que procede imponer a dicho abogado una multa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199, numeral 15 del Código Judicial.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 30 de septiembre de 1993, expedida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial e impone una multa de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) al abogado Javier Quiroz Murillo de la firma de abogados Quiroz Murillo y Asociados por haber violado el deber de comportarse con lealtad y probidad durante el proceso.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. JAIME J. JOVANÉ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ERNESTO ENRIQUE CÓRDOBA LÓPEZ Y EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor ERNESTO ENRIQUE CÓRDOBA LÓPEZ, por intermedio de apoderado judicial, ha promovido amparo de garantías constitucionales en contra de la orden de hacer dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, contenida en la Resolución de segunda

instancia de 14 de septiembre de 1993, en la cual ese tribunal confirma el auto de llamamiento que se dictara en su contra.

Tal cual lo manda nuestro procedimiento, necesario es determinar si es procedente la admisibilidad de la acción instaurada.

En la demanda de amparo de garantías expresa el demandante que el tribunal demandado al confirmar el auto de llamamiento a juicio lo hizo "... sin haber agotado para ello, el conocimiento integral del proceso que se me sigue ... y sin siquiera haber resuelto una oportuna petición de DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL ...". Termina su escrito solicitando a este Pleno "... que se conceda el amparo impetrado y por ende declare prescrita la acción en el proceso penal seguido ...".

El artículo 2606 del Código Judicial, tal como fue subrogado por el artículo 1° del Decreto de Gabinete N°50 de 20 de septiembre de 1990, dispone que la acción de amparo de garantías constitucionales podrá interponerse contra resoluciones judiciales, sujetándola a ciertas reglas expresamente establecidas en esa disposición. Así indica que la acción procederá contra las resoluciones judiciales cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de las resoluciones judiciales de que se trata. Es claro que la acción interpuesta se promueve en contra de un auto de segunda instancia contra la cual no se ha previsto por la ley ningún recurso para su impugnación. No obstante, en señalados casos la jurisprudencia del Pleno ha establecido que las resoluciones confirmatorias de las decisiones de los tribunales inferiores, en su contexto no pueden ser recurridas mediante el amparo, puesto que la orden, en este caso, de proceder criminalmente, ha sido dictada en primera instancia por otro funcionario y la decisión del superior lo único que ha hecho es mantenerla.

Vital es el señalamiento que se hace en la demanda en el sentido que el tribunal dejó de resolver sobre supuesta prescripción de la acción penal alegada y, contra ello, dirige su acción el reclamante de la violación de la garantía constitucional. Empero, conveniente es recordar al amparista que en este instante su posición no puede ser analizada en un amparo de garantías para determinar la prescripción alegada, tal cual lo solicita, puesto que ello debe hacerse mediante la forma que establecen los artículos sobre medidas de previo pronunciamiento. El artículo 2274 del Código Judicial expresa que después de la ejecutoria del auto de enjuiciamiento y hasta la resolución que fija fecha de audiencia, las partes pueden promover incidencias sobre la extinción de la acción penal. Este es, entonces, el camino señalado por el Código Judicial por lo que, conforme al artículo 2606 de la misma excerta legal, no es atacable la resolución judicial en cuanto a la alegada prescripción de la acción penal, por un medio diferente al señalado taxativamente en aquella norma.

El Pleno de la Corte recuerda al demandante lo que dijo con motivo de una acción de inconstitucionalidad:

> "... Así, se recurre a la esfera constitucional como una vía cualquiera de acceso a la jurisdicción, aún sin ser específica, confundida en el ejercicio, simultáneo o alterno, de otras acciones procesales, por el empeño de satisfacer una misma o singular pretensión, con la natural consecuencia del perjuicio que ello ocasiona al esfuerzo de la administración de justicia en el orden laboral." (Sentencia Pleno, Acción de Inconstitucionalidad, 21 de julio de 1993).

En este caso particular tiene a su haber, para hacer uso de la defensa de sus derechos, las vías procesales, las que debe utilizar y no incurrir en acciones ineficaces como la presente.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por ERNESTO ENRIQUE CÓRDOBA LÓPEZ en contra del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR PEDRO VEGA TORRES Y EN CONTRA DEL JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el expediente contentivo de la sentencia de 8 de octubre de 1993, proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, y mediante el cual

"DECLARA NO VIABLE, el amparo de Garantías Constitucionales formulado por el PEDRO VEGA TORRES, contra la Resolución AE-17 de 22 de abril de 1993, dictada por el Juez Segundo del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

La apelación interpuesta por el demandante, se encuentra en estado de resolver, sin más trámites conforme lo ordena la ley ritual, por lo que a ello se procede previas las consideraciones siguientes:

Del contenido de la sentencia apelada se advierte que el Tribunal A-Quem al declarar no viable la acción de amparo, en el caso sub-judice, básicamente se funda en el argumento de que al confrontar "... la realidad procesal que se cuestiona en el presente amparo, se observa que se trata solamente de la **orden de detención** proferida en el auto de llamamiento a Juicio dictado por el Juez Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, porque los argumentos acerca de la medida cautelar emitidas por el amparista, carece de soporte jurídico, toda vez, que sobre la misma, la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia de 5 de mayo de 1993 se pronunció en los términos siguientes:(`...'). "Siendo la orden de detención preventiva contra PEDRO VEGA TORRES una medida que afecta la libertad personal del amparista, es obvio que la misma está garantizada por una institución constitucional distinta a la invocada en esta acción, luego no es el Amparo la vía idónea para impugnar la resolución cuestionada." (Fs. 111 y 112) (Subraya la Corte).

En efecto, el examen de lo actuado en el proceso de amparo constitucional en estudio, tiende a revelar, sin la menor duda, que a pesar de que el accionante expresa que la supuesta orden de hacer está contenida"en la Resolución AE-17 de 22 de abril de 1993 dictada por el Juez Segundo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, sin embargo, ciertamente, como se sostiene en la apelada sentencia, el accionante enderezó la demanda en contra de la "Orden de detención preventiva", al expresar a fojas 3 del aludido libelo, que: "... la cual en la parte que se pretende impugnar señala:

> `Igualmente SUSTITUYE la Medida Cautelar otorgada a los señores ALEX ANÍBAL GÓMEZ DE LEÓN y PEDRO VEGA TORRES por la Fiscalía Primera Delegada y en su lugar se Ordena la detención preventiva. ...'

Es evidente, entonces, que la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el demandante, en este caso, no es la vía idónea; pues, como se ha visto, de cualquier forma que se examine la actuación del referido proceso de amparo constitucional, cierto es que la orden acusada se refiere a la libertad corporal la cual, conforme a nuestro ordenamiento constitucional y legal, tiene prevista la acción de garantía correspondiente para que, precisamente, la pueda ejercer todo individuo en el evento de que este fundamental derecho se encuentre amenazado o violado por acto arbitrario emanado de cualquier autoridad.

Por ello, el Pleno de la Corte considera inobjetable la sentencia apelada, toda vez que la vía del amparo, escogida por el demandante, no es la correcta.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia Apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS RAMOS, CHUE & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR EUGENE C. MCGRATH, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MCGRATHCO, INC., Y EN CONTRA DE LAS ORDENES DE NO HACER DICTADAS POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense **"RAMOS, CHUE & ASOCIADOS"** en virtud de poder especial otorgado por **EUGENE C. McGRATH** en su calidad de representante legal de la sociedad **McGRATHCO INC.**, ha interpuesto Amparo de Garantías Constitucionales contra "las ordenes de no hacer contenidas en la nota s/n de 3 de agosto de 1993, dirigida al Instituto de Recursos Naturales Renovables (IN.RE.NA.RE.) y No. 93 (18-01) 42 de 11 de agosto de 1993 dirigida al Banco de Desarrollo Agropecuario (B.D.A.)", ambas dictadas por el Gerente General del **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.**

Luego de admitido el amparo de garantías propuesto, se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación o un informe sobre los hechos materia de esta demanda.

Así, el Gerente General del Banco Nacional de Panamá, remitió el respectivo informe (visible de fojas 58 a 60), adjuntando a su vez fotocopias de documentos mencionados en el mismo.

Por tanto, corresponde a la Corte fallar, concediendo o denegando el amparo, según las constancias de autos, como lo establece el artículo 2615 del Código Judicial.

Sin embargo, esta Corporación debe aclarar que a pesar de haberse admitido esta acción el examen detenido de los actos impugnados revela que los mismos no revisten la forma de órdenes.

Veamos:

El primero consiste en la Nota s/n de 3 de agosto de 1993, dirigida por el Gerente del Banco Nacional de Boquete al IN.RE.NA.RE. (fs.10). en que se expresa "un llamado de atención" en el sentido de que el Banco Nacional no ha dado permiso a terceras personas para la extracción de madera, por lo que dicha actividad no debe permitirse en las fincas ubicadas en **Jaramillo Arriba**, de propiedad de dicha institución bancaria.

La segunda nota, cuya copia no fue aportada por el amparista sino el acuso de recibo de solicitud (fs.8 y 9), fue presentada por el funcionario demandado junto al informe rendido (fs.61), tiene fecha 11 de agosto de 1993 y fue remitida al Gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario por el Gerente del Banco Nacional(sucursal Boquete). Su contenido tampoco constituye una orden de no hacer, pues del mismo se colige la información, que a solicitud del primero, el segundo proporciona sobre el estatus legal en que se encuentran una finca y otros inmuebles (propiedad del Banco Nacional), por lo que concluye pidiendo se abstengan de tramitar cualquier solicitud de crédito sobre las mismas.

De los hechos que fundamentan el amparo bajo estudio, se desprende en términos generales que se acusa al Banco Nacional de desconocer la vigencia y validez de un contrato de arrendamiento suscrito por **EUGENE C. McGRATH** con dicha institución estatal.

El amparista alude a una sentencia de 23 de mayo de 1993 dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí (hecho quinto), por la que se niega un lanzamiento solicitado por el **Banco Nacional** contra **Eugene Mcgrath.**

Que tal sentencia fue apelada, concediéndose el recurso en efecto diferido, por lo que se mantiene la relación entre las partes (hecho séptimo).

A su vez alega, que no comparte la posición de Banco, respecto a que el arrendatario no pueda efectuar un subarriendo sobre las fincas a favor de una sociedad anónima.

En base a lo anterior su desacuerdo con los señalamientos que se hacen en las Notas acusadas, sobre la abstención de conceder créditos y otorgar permisos para la extracción de madera, en relación a las fincas arrendadas.

Finalmente, concluye manifestando que el funcionario acusado al emitir las aludidas notas desconoció las cláusulas del contrato de arrendamiento.

El demandante señala que se ha violado el artículo 17 de la Constitución, disposición que no es dable invocar aisladamente para fundamentar la acción de amparo, por su finalidad y contenido, que ha sido reiteradamente definido por la jurisprudencia de la Corte como, claramente programático.

Expresa además, que los actos acusados violan la ley, citando específicamente los artículos 1107 y 1109 del Código Civil, lo que resulta totalmente improcedente pues el amparo sólo puede fundamentarse en normas de rango constitucional.

Por último alude a la violación del artículo 44 de la Constitución, que "garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales".

En ese sentido se indica que las órdenes del Banco Nacional atentan contra el derecho de propiedad de las futuras cosechas de los siembros de las fincas 332 y otras, cuya titularidad es del señor Mcgrath.

Luego de lo expuesto, es pertinente transcribir parte del informe remitido por el Gerente General del Banco Nacional a esta Corporación de Justicia.:

> "10.- Finalmente me permito reiterarle al Magistrado Sustanciador que las fincas a que se refieren las notas enviadas por esta Institución a Inrenare y que motivan el Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales, en contra de mi persona son de propiedad del Banco Nacional de panamá y que en el Contrato de arrendamiento, incumplido por el señor Eugene Charles Mcgrath, se convino expresamente en que el uso que se le daría a las fincas era exclusivamente para la siembra y cosecha de café y no para otras actividades. Por esta razón el Banco Nacional de Panamá en las referidas notas al BDA y a INRENARE, advirtió a estas entidades de que sin permiso de esta Institución no se debía atender las solicitudes del señor Mcgrath. ..." (Subrayado como aparece) (fs.60).

Según lo expresado y de las constancias de autos se evidencia que el derecho de propiedad sobre las fincas lo posee el Banco Nacional y que la situación de conflicto respecto al contrato de arrendamiento (proceso de lanzamiento) no ha sido dilucidada en forma definitiva por la justicia ordinaria, pues está pendiente de decisión un recurso de apelación sobre el particular.

En consecuencia no se ha conculcado el derecho de propiedad que consagra el artículo 44 de la Constitución.

La función del amparo como institución de garantía es la de proteger los derechos fundamentales de las personas, previniendo su violación o restituyendo su disfrute, por lo que no puede ser utilizado como mecanismo para dilucidar conflictos sobre la validez, vigencia o resolución de un contrato u otros asuntos de legalidad como se pretende en este caso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por EUGENE C. McGRATH, representante legal de la sociedad McGRATHCO INC. contra el Gerente General del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.

Notifíquese y Archívese

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ANÍBAL HERRERA PEÑA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JUAN PAULINO RODRÍGUEZ BEITÍA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°12 DE 29 DE JUNIO DE 1993, DICTADA POR EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

El licenciado ANÍBAL HERRERA PEÑA, en nombre y representación del señor JUAN PAULINO RODRÍGUEZ BEITÍA, presenta acción de amparo de garantías constitucionales contra la Resolución N°12 de 29 de junio de 1993, dictada por el Fiscal Auxiliar de la República, mediante la cual se declara insubsistente el nombramiento de JUAN PAULINO RODRÍGUEZ en el cargo de Secretario de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Corresponde determinar, en primer lugar, si el amparista en su memorial ha llenado todos los requisitos a que se contrae el artículo 2610 del Código Judicial. Respecto a ello, observa la Corte que, de manera general, se han cumplido con las formalidades requeridas.

No obstante lo expresado, el apoderado judicial del señor RODRÍGUEZ BEITÍA manifiesta que su representado fue declarado insubsistente en el cargo que ejercía como Secretario de la Fiscalía Auxiliar de la República el día 29 de junio de 1993. La Corte ha mantenido el criterio que el amparo no es la vía idónea para juzgar acerca de la justificación legal del despido de un funcionario. El proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción constituye la vía legal en donde esta situación debe ser resuelta, previo el agotamiento de la vía gubernativa. Ello lleva al Pleno a no admitir la demanda.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales propuesta por JUAN PAULINO RODRÍGUEZ BEITÍA, a través de su apoderado judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ROBERTO ENRIQUE FUENTES EN CONTRA DEL JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Roberto Enrique Fuentes** presentó Recurso de Apelación de la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de 7 de octubre de 1993 por medio de la cual no se admite el amparo de garantías Constitucionales propuesto contra el proveído de mero obedecimiento de 23 de septiembre de 1993, proferido por el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil mediante el cual se declaró extemporáneo y sin valor alguno el incidente que el suscrito, ROBERTO ENRIQUE FUENTES, actuando en nombre y representación de CAMILO VALDÉS DIEZ, interpuso dentro del proceso de sucesión testada de AFRICA DIEZ DE VALDÉS (q.e.p.d.).

El Primer Tribunal Superior consideró para no admitir el amparo, lo siguiente:

"Al respecto, se advierte, que si bien el Licenciado RICARDO ENRIQUE FUENTES alega ser apoderado legal del incidentista dentro del proceso de sucesión testamentaria de la señora AFRICA EUGENIA DIEZ DE VALDÉS (Q.E.P.D.) y en el que fue expedida la resolución judicial atacada en el presente amparo (ver fojas 8), no acompañó prueba idónea demostrativa de tal acerto. Lo que resulta indispensable para acreditar su legitimación en esta acción de carácter extraordinaria, pues, por no ser él la persona directamente afectada con la resolución judicial impugnada se hacía obligatorio, para la viabilidad del mismo, que dicho profesional del derecho demostrara en autos el interés que lo vincula con la revocatoria de la meritada resolución judicial. En este sentido resulta ilustrativa la sentencia de fecha 5 de noviembre de 1990, dictada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la acción de amparo de garantías constitucionales, promovida por el señor JUAN CARLOS DUDLEY PORRAS contra el PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, en la que nuestro más alto Tribunal de Justicia dejó declarado que:

`Como hemos repetido, la acción de amparo en nuestra Constitución procura otorgarle a la persona que faculta, que puede usar o no, para reclamar en contra de las órdenes de hacer o no hacer expedidas por el servidor público. Así es titular de una acción, quien se encuentra perjudicado por órdenes emanadas de servidor público y que atentan contra los derechos y garantías consagrados en la Constitución. No en otra forma puede entenderse la expresión "... tendrá derecho a que la orden sea revocada". Es un derecho personal que se le confiere a la parte agraviada. Bajo ese crisol debe, entonces, observarse la terminología usada por el constituyente "a petición... de cualquier persona". Esta persona, quien no es el agraviado directamente, no puede ser extraño al interés de la persona contra la cual se expida o se ajecute (sic) la orden de hacer o de no hacer'. (Criterio que reiteró la Corte en sentencias de 14 de julio de 1992 y de 13 de noviembre de 1992). (Lo subrayado es del Tribunal).

Como quiera que el accionante no ha demostrado su vinculación con el interés que tiene el señor CAMILO VALDÉS DIEZ en la revocatoria de la resolución de fecha 23 de septiembre de 1993, proferida por el Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, se concluye que el Licenciado RICARDO ENRIQUE FUENTES carece de legitimación activa para demandar el amparo propuesto y de consiguiente, procede declarar su inadmisibilidad por ser manifiestamente improcedente (ver artículo 2611 del Código Judicial, reformado por el Decreto de Gabinete N°50 de 20 de febrero de 1990)."

El amparista, manifiesta su inconformidad con la decisión apelada en los siguientes términos:

... "no le asiste razón ni fundamento alguno al tribunal "a quo" cuando para "no admitir" mi amparo se basa en que "no acompañé prueba idónea" demostrativa de que soy apoderado judicial del Licenciado CAMILO VALDÉS DIEZ, lo cual -según dicho tribunal-, era "indispensable para demostrar legitimación con la meritada resolución judicial", puesto que, ello no era necesario en modo alguno, pues la acción de amparo que nos ocupa la presenté en mi propio nombre y representación, como un medio de defensa más que ejercí dentro del proceso. La referencia que en mi demanda de Amparo hago del Licenciado CAMILO VALDÉS DIEZ, la hago en la parte de los "hechos", cuya probanza estaba sujeta a la información o documentos que requiriera del Juzgado Sexto del Primer Tribunal Superior de Justicia. Mi deber básico era presentar copia autenticada de la orden de hacer impugnada, lo cual hice perfectamente. Entonces, no se explica por qué razón el Primer Tribunal Superior de Justicia, para decidir la admisión o no de la demanda, me exigió de antemano las pruebas sobre un hecho de la misma, habida cuenta que el proceso no se encontraba en esa etapa procesal.

Tampoco le asiste razón ni fundamento al tribunal "a quo" cuando sostiene la tesis que mi acción de amparo es "inadmisible", por cuanto yo, ROBERTO ENRIQUE FUENTES, no soy afectado con la resolución impugnada. Entonces le pregunto a los Magistrados de dicho Tribunal: ¿Qué yo soy en el proceso que ha provocado esta demanda de amparo? ¿Una momia o un fantasma? Nada de eso, pues de hecho mi persona en el proceso se conjuga con la persona de la parte que represento, ya que oigo, veo, hablo y decido a nombre de ésta, aceptando los hechos que la favorecen y oponiéndome a los que la perjudican".

Un examen de la situación procesal planteada nos lleva a la conclusión de que, si bien es cierto dentro de la acción de amparo es necesario que se presente poder a nombre de quien se habla, ya que la acción de amparo no es una acción popular en el sentido estricto del término, pues de manera expresa el artículo 2609 del Código Judicial exige que las partes deberán nombrar abogados que la representen, y por tanto en este sentido la decisión del Primer Tribunal Superior es inobjetable, la razón más inmediata para no aceptar la Acción de Amparo presentada es que esta se dirigió contra un proveído de mero obedecimiento que no admite recurso de ninguna clase. La aplicación del artículo 476 del Código Judicial por parte del Juez de Circuito así lo demuestra, además que el artículo 697 del mismo Código establece que si el incidente promovido fuese manifiestamente improcedente el Juez deberá rechazarlo de plano sin más trámite. Esto es lo que se conoce como el **Rechazo in limine de incidentes.**

Los anteriores razonamientos demuestran que no es posible admitir un amparo contra un proveído de mero obedecimiento, porque de lo contrario se desvirtuaría la naturaleza de éste último al aceptar un medio de impugnación en su contra y que por otro lado se le estaría brindando la oportunidad de acceder a una instancia que ya precluyó.

La Corte no puede dejar de observar que la apelación la dirigió el amparista a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia cuando debió ser dirigida al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pleno, y que además el propio amparista al final de su escrito le pide a los Magistrados de la Sala Primera que revoquen la resolución impugnada, incurriendo en otro error de forma en la interposición de este recurso de apelación.

Por lo expuesto la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 7 de octubre de 1993 del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ DE LA CRUZ BERNAL EN CONTRA DEL JUEZ SÉPTIMO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, (APELACIÓN). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José de la Cruz Bernal, actuando en su propio nombre y en interés de Teresita Tapia de Chism, presentó recurso de apelación contra auto de 22 de septiembre de 1993 dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que no admite amparo de garantías presentado contra auto de 26 de agosto de 1992, emitido por el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

Por debidamente sustentado el recurso en tiempo oportuno, le corresponde al Pleno de la Corte decidir lo que corresponda en Derecho.

ANTECEDENTES DEL CASO

De acuerdo con las constancias procesales, el accionante interpuso recurso de alzada contra auto dictado por el Juez Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo de lo Penal, mediante el cual se llama a juicio a la señora de Chism como infractora de normas contenidas en el Capítulo I, Título X, Libro II del Código Penal.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió la apelación mediante auto de 1° de septiembre del presente año, en el que confirma el auto de proceder impugnado.

Contra la decisión original de llamamiento a juicio el licenciado José de la Cruz Bernal presentó, ante el Primer Tribunal Superior de justicia del Primer Distrito Judicial, amparo de garantías constitucionales.

En la parte motiva del fallo que ahora se recurre, el Tribunal *a quo* consideró que el Licenciado Bernal carece de legitimación activa para demandar el amparo y, en consecuencia, procedió a declarar la inadmisibilidad del recurso por ser manifiestamente improcedente (ver artículo 2611 del Código Judicial, reformado por el Decreto De Gabinete N° 50 de 20 de febrero de 1990).

A juicio del tribunal de amparo, la iniciativa procesal corrió a cargo de un profesional de la abogacía que no se encuentra afectado directamente por la resolución judicial atacada, correspondiéndole explicar y demostrar "en qué forma se encuentra vinculado con el interés" de la señora de Chism en cuanto a la revocatoria que pide, lo que no hizo. Advierte la Corte que la acción de amparo propuesta adolece de

defectos formales y de técnica jurídica, complementarios de los señalados por el tribunal *a quo*, que igualmente tornan improcedente la acción.

En reiterada jurisprudencia este Pleno ha precisado la naturaleza jurídica de la acción de amparo de derechos fundamentales. Con tal propósito se ha descartado que esta institución de garantía constituya un recurso ordinario tendiente a revisar la actuación del juez en cuanto a la valoración de los medios de prueba y en cuanto a la interpretación de la ley.

Su leitmotiv, que tan sólo puede manifestarse en el plano constitucional, guarda exclusivamente relación con la tutela de derechos y garantías consagrados por la propia Constitución, que resultaren lesionados por verdaderas órdenes de hacer o de no hacer expedidas o ejecutadas por los servidores públicos.

Por ello es necesario determinar, como cuestión previa, si la resolución judicial atacada contiene una orden de hacer arbitraria, violatoria de derechos y garantías constitucionales.

En otras palabras es importante dilucidar si la decisión del juzgador mediante la cual se llama a juicio a un imputado puede considerarse, en estricto derecho, una orden de hacer susceptible de ser atacada por vía del amparo.

El auto de proceder es un acto jurisdiccional de naturaleza formal, declarativa, interlocutoria, que tiene por objeto dilucidar si concurren o no los presupuestos del juicio oral, es decir si se encuentra acreditada en las sumarias la existencia del hecho punible y la identidad de su presunto autor, con lo que se da inicio a la fase plenaria del proceso penal (artículo 2220 C.J.).

El Pleno de la Corte tiene sentenciada en jurisprudencia plural la improcedencia de la acción de amparo para enervar este acto jurisdiccional. Así, en sentencia de amparo de 16 de noviembre de 1992, expresó:

> "No debe perderse de vista que el auto de enjuiciamiento es interlocutorio por excelencia, es decir, que no decide el fondo del negocio y no entra por tanto a considerar la inocencia o culpabilidad del procesado, que sigue conservando a su favor el principio de presunción de inocencia, aparte de que no es necesario esperar el auto de enjuiciamiento para tomar medidas cautelares contra el imputado. El auto de proceder tiene por objeto calificar el sumario, es decir, ponderar si existe algún indicio racional de criminalidad en contra de determinada persona y esta apreciación es una facultad inherente a la de juzgar, a fin de declarar si se abre o no la fase plenaria del proceso penal" (subrayado la Corte).

En situaciones similares también se ha manifestado en el sentido de que esta clase de decisiones no revisten la naturaleza y forma que deben reunir los actos susceptibles de ser atacados por vía de amparo.

Con ocasión de acción de Amparo de Garantías Constitucionales incoada contra un auto de segunda instancia que negaba a un detenido la concesión de una fianza de excarcelación, el Pleno de la Corte señaló:

> "Opina la Corte que la decisión que niega el beneficio de excarcelación solicitado por el detenido no es una orden de hacer. Lo que el Tribunal hace es decidir una solicitud de conceder o no una fianza, por lo que, al resolver la solicitud en forma negativa, no está ordenando que no se haga una cosa, sino decidiendo que el solicitante no tiene derecho al beneficio de excarcelación." (Sentencia del Pleno de 27 de abril de 1990).

En igual sentido se pronunció esta Corporación en acción de amparo presentada contra un auto del Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, que negó un incidente de nulidad propuesto por el imputado:

> "Este razonamiento, lógicamente puede extenderse por analogía a la resolución judicial que niega un incidente de nulidad, respetadas las características y naturaleza de este instituto procesal, ya que el juez se limitó a decidir una solicitud en forma negativa sin ordenar que se hiciese alguna cosa y como bien ponderó el Tribunal a quo en este caso, el beneficio se hubiese obtenido para el imputado si se hubiese decretado la nulidad del proceso, pero no suspendiéndose la resolución que niega tal nulidad" (El subrayado es de la Corte, Sentencia del Pleno de 24 de septiembre de 1993).

En estricta lógica jurídica estamos en presencia de una orden de hacer cuando un acto administrativo o jurisdiccional contiene en su parte dispositiva o resolutiva un mandato imperativo dirigido al afectado o que deba cumplir o ejecutar alguna autoridad pública y de ese *acto positivo* se deriva un virtual o actual desconocimiento de derechos fundamentales subjetivos del amparista.

De otra parte, en el trascurso de la fase plenaria del proceso penal ordinario la defensa podrá hacer valer los medios impugnativos y de defensa a favor de su patrocinada, los que por la naturaleza extraordinaria del Amparo de Garantías Constitucionales no pueden resolverse por esta especialísima vía.

Por las razones anteriores, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, aunque por motivos distintos, la resolución de 22 de septiembre de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que ha sido apelada en esta causa.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO FIDEL VÁSQUEZ CEBALLO EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Fidel Vásquez Ceballo, quien actúa en virtud de poder especial conferido por Eduardo Valdés Escoffery, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la "Orden Implícita de no hacer al NEGARSE a darle viabilidad financiera a un crédito extraordinario al presupuesto de funcionamiento del Tribunal Electoral para la vigencia fiscal de 1993, previamente aprobado por el Órgano Ejecutivo" (ver f.109 del cuaderno de amparo).

Según afirma el accionante, la orden implícita de no hacer vulnera los artículos 17, 18 y 136 de la Constitución vigente.

Corresponde en estos momentos determinar si la demanda propuesta cumple con los presupuestos procesales formales que establece la ley, particularmente los contenidos en el artículo 2610 del Código Judicial, a objeto de decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede.

En el presente caso no se encuentra debidamente acreditada la existencia de la orden implícita de no hacer, acreditación que resulta imperativa (párrafo segundo, numeral cuarto del artículo 2610 C.J.). En jurisprudencia reiterada el Pleno ha dejado establecido el procedimiento a seguir a tales efectos y ha manifestado que, cuando el acto atacado es una orden de hacer verbal o cuando la orden de no hacer es de naturaleza implícita, a los efectos de su acreditación es necesario presentar prueba documental preconstituida, consistente en la deposición de dos testigos hábiles, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley 135 de 1943, aplicado por analogía (Cfr.Sentencia de Pleno de 10 de julio de 1992).

El artículo 48 de la Ley 135 de 1943 es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 48. Si se trata de un acto, orden o disposición de que no hay constancia escrita por haberlo dictado verbalmente la autoridad respectiva el interesado o perjudicado deberá presentar en abono de la demanda dos testimonios hábiles por lo menos".

Por las razones anteriores el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado Fidel Vásquez Ceballo en representación de Eduardo Valdés Escoffery, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, por caer en la calificación de manifiestamente improcedente a que se refiere el artículo 2611 del Código Judicial.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LCDA. ELSIE ALVAREZ A. EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA NIDIA PIMENTEL CERRUD Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, DR. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora NIDIA PIMENTEL CERRUD, debidamente representada por la licenciada Elsie Alvarez A., presentó demanda de amparo de garantías constitucionales "en contra de la orden de no hacer impartida por el Rector de la Universidad de Panamá, Dr. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA, en la que ordena el no pago del sueldo que devengo como profesora asistente".

En los hechos en que se fundamenta la acción expone la amparista que sin motivo legal alguno el Rector de la Universidad de Panamá impartió la orden de no hacer consistente en ordenar la retención de los cheques a nombre de Pimentel Cerrud, correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de septiembre de 1993. Señala que la Ingeniera Pimentel labora como asistente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Provincia de Chiriquí y que la decisión que se tomó fue una medida extrema que no ha agotado las vías establecidas en la ley para proceder. De esta manera -sostiene- sin que oyera a la parte afectada el demandado adoptó la orden de no hacer y se ejecutó ilegalmente la retención del pago del sueldo que devenga Nidia Pimentel Cerrud.

Alega la accionante que con esta retención del sueldo se está afectando el debido proceso, además de que no hubo previa notificación o procedimiento disciplinario comunicado.

Como garantías constitucionales que se estiman infringidas se mencionan las contempladas en los artículos 32, 40, 61, 75 y 101.

Atendiendo al trámite legal establecido para esta clase de demandas, el amparo fue admitido y, puesto en conocimiento de la autoridad demandada, la cual procedió a rendir el informe correspondiente.

Parte del informe contiene el texto que a continuación se cita:

> "La señora NIDIA PIMENTEL CERRUD, se desempeñó en la Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el cargo de Asistente Tiempo Completo, en una relación contractual no permanente desde el año 1985. Tales contratos tienen una duración de un año y se renuevan a solicitud de la Facultad de acuerdo a sus necesidades y en los mismos figura la Cláusula Séptima que se expresa en los términos siguientes:
> SÉPTIMA: El presente contrato podrá ser resuelto administrativamente por la UNIVERSIDAD sin que ésta quede obligada al pago de indemnización, por mala conducta, incompetencia o incumplimiento de sus deberes por parte de EL ASISTENTE.
>
> El último contrato celebrado con la Ingeniera NIDIA PIMENTEL CERRUD, venció el 13 de marzo de 1992. Con anterioridad a la fecha mencionada, debido a acciones del Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el Consejo Académico por conducto de su Comisión de Disciplina hizo una revisión de la conducta de la demandante en la que recomendaba la no renovación de su contrato, en el mismo sentido el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias remitió la nota N°ND-LCS-CHI-084-93.
>
> Las situaciones expuestas dieron lugar a que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias no se incluyera en la Organización Docente a la Asistente NIDIA PIMENTEL, por lo que no fue contratada, y desde el vencimiento de su último contrato dejó de laborar en la Universidad y, consecuentemente, de recibir salarios.
>
> Las retenciones de cheques que, por inercia administrativa, han salido a favor de NIDIA PIMENTEL CERRUD se debe a lo últimamente expresado y no a una orden de retención".

Resalta del informe presentado, así como de las pruebas documentales que con él se adjuntan, que estamos ante un proceso de índole administrativo, seguido contra una funcionaria que laboraba por contratos en la Universidad de Panamá, proceso que no es del caso entrar a revisar a través de esta demanda de amparo. Por otra parte, se observa que la orden de retención de cheques señalada como violatoria de garantías constitucionales, es consecuencia de la no inclusión de Nidia Pimentel Cerrud en la Organización Docente de la Facultad a la cual brindaba sus servicios y no es una orden que stricto sensu haya emanado del Rector de la Universidad de Panamá, por lo que es procedente declarar no viable el amparo presentado.

Es necesario destacar que según criterio del Pleno, los actos emanados de los entes administrativos (como es el caso de la Universidad de Panamá), tienen el carácter de actos administrativos y, por tanto, corresponden ser revisados ante la Sala Tercera de la Corte, que tiene la competencia para decidir sobre la legalidad de dichos actos.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo presentada por NIDIA PIMENTEL CERRUD contra el Rector de la Universidad de Panamá.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR KREPORT INVESTMENTS, INC. Y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A. EN CONTRA DEL JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha llegado al conocimiento de la Corte la acción de amparo de garantías constitucionales, interpuesta por KREPORT INVESTMENTS, INC. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A., representadas por su apoderado judicial, el licenciado Luis A. Moreno H. La demanda fue propuesta contra las órdenes de hacer contenidas en la resolución de 3 de marzo de 1993, dictada por el Juez Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso ordinario incoado por REPLIX, S. A. contra las sociedades que constituyen la parte que presenta el amparo.

El cargo fundamental que se hace a la orden impugnada dentro del amparo, consiste en que "El Juez acusado no debió aprobar la transacción a que llegaron las partes en ese proceso, ya que era evidente que ante sus ojos se estaba fraguando un fraude procesal; y menos aun (sic) debió decretar embargo a favor de PINEHART ENTERPRISES INC., ya que esta persona jurídica ni siquiera había sido admitida como parte en el proceso en su calidad de sucesora procesal de REPLIX, S. A., por lo que al hacerlo dicho funcionario violó la garantía del debido proceso que nuestra Constitución ampara" (fs. 6 y 7).

El recurrente alega que la resolución atacada infringe el artículo 32 de la Constitución Nacional y los artículos 462, 617, 464 y 601 del Código Judicial.

Por su parte, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de 27 de septiembre de 1993, lo declaró no viable sobre la base de que contra el auto impugnado mediante el presente amparo, se interpuso recurso de apelación. El a quo señaló que aún cuando consideraba que contra esta resolución no cabía el recurso de apelación, en vista de que en este caso el mismo ya había sido concedido y se encontraba pendiente de resolver, el amparo presentado resultaba manifiestamente improcedente, ya que no se habían agotado los medios o trámites ordinarios de impugnación.

No conforme con esta decisión, el apoderado judicial de las sociedades amparistas, manifiesta que "que si el Primer Tribunal Superior estima que el auto de 3 de marzo de 1993 no es atacable por la vía ordinaria del recurso de apelación, entonces deberá serlo por la vía del amparo toda vez que se adecua a lo dispuesto en el artículo 2606 del Código Judicial y de allí que es injurídico declarar no viable el amparo propuesto" (fs. 59).

La Corte coincide con el criterio del Tribunal Superior, en el sentido de que el amparo de garantías constitucionales sólo procede cuando se han agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate, como claramente lo establece el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial. En el caso que nos ocupa, de lo que consta en autos, resulta evidente que no se ha cumplido con este requisito y por ello, el Pleno concluye que se debe confirmar la resolución dictada por el a quo.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 27 de septiembre de 1993, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.)ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS BERRÍOS Y BERRÍOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES MANUEL ALVAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MAYORISTA DE AZUERO, S. A. Y AURELIO DOPESO CARREIRO, REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES SUPERMERCADO LA GARANTÍA, S. A.; GONZÁLEZ FOYO, S. A. Y SUPER COMERCIAL LA GARANTÍA, S. A. Y EN CONTRA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN LAS TABLAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Dr. **Julio E. Berríos H.** interpuso Acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra el auto de 15 de julio de 1993, expedido por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, por medio de la cual se dispuso admitir el Recursos de Hecho interpuesto por el Banco Exterior y conceder la apelación contra la sentencia de 20 de agosto de 1992 del Juzgado Primero del Circuito de Herrera.

Acogida la Acción de Amparo y recibida la actuación por este Tribunal, se pasa a desatar la controversia constitucional planteada.

El Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, expuso, para fundamentar su decisión, en la parte más sobresaliente, lo siguiente:

> "El análisis cabal de esta actuación permite adelantar de manera objetiva, que el apoderado legal del **BANCO EXTERIOR, S. A.** ante la petición de 9 de septiembre de 1992 (fs.2218) formulada por **Berríos y Berríos**, apoderado legal de la parte actora, consignó el 17 septiembre de ese año (FS. 2225) el Certificado de Garantía N°06711 de 14 de septiembre de 1992, por la suma de B/.350.00, emitido por el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Las Tablas, en el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, y el Juez Suplente señaló que:
>
> `Al efecto el coamperesiente (sic) consigna en el Tribunal el certificado de garantía (sic) N°06711, de fecha 14 de septiembre de 1992 expedido por el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Las Tablas, a favor del Juzgado Primero del Circuito de Herrera a petición del LICDO. RAÚL CÁRDENAS, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.350.00). Como el certificado de garra-tía (sic) antes descrito, **cubre el monto de la fianza exigida**, **el Tribunal** LO ADMITE y ordena su registro en el libro de contabilidad (las negritas son de la Sala).'
>
> Si el Juzgado de la instancia, ante esa realidad permite al apoderado del BANCO EXTERIOR, S. A. notificarse e interponer recurso de apelación, es evidente que debe tenerse como valedera tal manifestación.
>
> Si posteriormente el demandante aduce que el total de las costas es de B/.425.00 y no de B/.350.00, y así lo admite el **Juez a-quo** (fs.2224-2226), aflora una incongruencia ente lo que se admitió primero y se indicó después, por ello, el Juez de la instancia, tomando en consideración que en el momento de decidir ya no existía la morosidad, sencillamente porque la diferencia que se dice había fue consignada en fecha anterior a la de la resolución en que se decide no acceder a la apelación tantas veces mencionada, debió conceder tal impugnación.
>
> Hubiese procedido tal actitud por parte del **Juez a-quo**, si esta decisión se emite antes del recibo de los B/.100.00
>
> Para que prospere un recurso de hecho es requisito irrefragable que la resolución jurisdicción sea recurrible; que el recurso se haya interpuesto oportunamente, todo ello de acuerdo con el artículo 1141 ibídem.
>
> Por su parte el artículo 1116 establece, que además de las sentencias, existen otras resoluciones dictadas en primera instancia y que son susceptibles de este tipo de impugnación, y sin la menor duda que esa enumeración incluye el auto contra el que anunció apelación el apoderado del BANCO EXTERIOR, S. A. por lo tanto, debe concederse la alzada."

El auto que se acaba de transcribir fue objeto de un salvamento de voto por parte de la Magistrada Suplente Licenciada Otilda V. de Valderrama, que en sus aspectos más importantes dice lo siguiente:

> "Se encuentra evidentemente acreditado en el proceso que el **Banco Exterior, S. A.** estaba condenado en costas en una suma mayor que la consignada primeramente y está igualmente demostrado que cuando interpuso el recurso de apelación se encontraba en mora en el pago de las costas.
>
> A la fecha, 19 de septiembre de 1992, había pagado gran parte de las mismas pero no su totalidad y en ese sentido la ley -artículo 1066- es muy clara y del mismo se infiere que aún cuando se deba una mínima parte de las costas impuestas, no puede ser oída la parte que las adeuda en casos como éste, en donde la contraparte había reclamado con anterioridad -desde el 9 de septiembre de 1992- que el demandado no fuera oído hasta que pagara las costas."

El amparista, sostiene que la resolución impugnada ha violado el artículo 32 de la Constitución Nacional y el concepto de infracción lo explica en esta forma:

> "Este precepto constitucional ha sido violado directamente, por comisión, y el auto atacado que concede el Recurso de Hecho se ha dejado de aplicar el debido proceso judicial que corresponde y de acuerdo a las consideraciones que exponemos a continuación:

> 1) El Tribunal acusado admite que la parte demandada estaba morosa en el pago de las costas y había sido condenada en el momento de notificarse de la sentencia, pero que al consignarlas y el juzgador primario demorar en su decisión, ya no estaba moroso y que, por tanto, debe concedérsele la apelación que; sin embargo, el planteamiento de la resolución atacada le da un efecto retroactivo a situaciones agotadas y concluidas en flagrante violación del mandato contenido en el artículo 1066, del Código Judicial. Se da así al traste con el principio procesal del debido proceso y sin tomar en cuenta que con dicha medida se deja a los Jueces para que se transformen en tiranos y funcionarios parcializados precisamente con la parte más poderosa económicamente.
>
> 2) El Tribunal acusado admite que la parte demandada estaba en mora al momento de notificarse de la demanda y que la consignación del saldo de las costas se da con posterioridad al término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia; pero por arte de las interpretaciones torcidas se recurre a argumentaciones subjetivas, caprichosas y arbitrarias que, lógicamente, se apartan del rumbo normativo del artículo 1066, del Código Judicial. Este artículo regula la morosidad en el pago de condena de costas durante la secuela del proceso. El Tribunal acusado en abierto desafío al debido proceso y accede al Recurso de Hecho y libra la orden de hacer atacada por el presente Recurso Extraordinario de Amparo de Garantías Constitucionales."

Es necesario hacer un examen del expediente para que pueda surgir de una manera clara la situación jurídica planteada en este caso.

1. De acuerdo con las fojas 2049 y 2050 del expediente la parte demandada debía B/.25.00 balboas de costas de la Resolución del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial del 1 de agosto de 1991

2. La parte demandada también debía B/.25.00 balboas de costas de la Resolución de 30 de agosto de 1991 del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial (fojas 2090 del expediente).

3. Igualmente debía la parte demandada B/.100.00 balboas en costas por la Resolución de 21 de noviembre de 1991 del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, tal como se puede apreciar a foja 2147 del expediente. Esto lo reconoce el propio demandado a foja 2228 en escrito del 24 de septiembre de 1992.

4. El 20 de agosto de 1992 el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, dicta la sentencia de primera instancia. El 2 de septiembre se notifica el actor y el 17 de septiembre de 1992 se notifica el demandado y dice que apela (fojas 2204 a 2216 del expediente).

5. El 9 de septiembre de 1992 la parte actora le pide al Juzgado Primero del Circuito de Herrera, Ramo de lo Civil que no se oiga a la parte demandada hasta que pague las costas (foja 2218 del expediente).

6. A foja 2225 la parte demanda consigna el día 17 de septiembre de 1992, B/.350.00 balboas en costas, casi un mes después de la sentencia de primera instancia apelada y un año después de la ejecutoria de las Resoluciones que condenaba en costas. Las costas que se deben en el proceso, son, sin embargo, B/.425.00 balboas, de acuerdo a las constancias de autos.

7. A foja 2230 del expediente la parte demandada cancela el 29 de septiembre de 1992 el saldo de las costas adeudadas, cuando han transcurrido más de mes y diez días de la sentencia de primera instancia apelada y a más de un año de la ejecutoria de la condena en costas.

8. A foja 2234 del expediente, mediante auto de 28 de octubre de 1992 del Juzgado Primero de Herrera se niega la apelación a la parte demandada por no haber pagado las costas en tiempo y cuando ya la sentencia de primera instancia estaba ejecutoriada.

9. El demandado recurre de hecho al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que admite el recurso y al decidir ordena que se admita la apelación contra la sentencia de primera instancia. Esta es la Resolución que está siendo recurrida en amparo.

Del análisis transcrito se ve con claridad que la parte demandada no podía ser oída a partir del momento en que reclamó la parte actora, favorecida en este caso y esto ocurrió el 9 de septiembre de 1992. También se ha demostrado que las Resoluciones señaladas en los puntos 1, 2 y 3 que imponían costas estaban ejecutoriadas. También se demostró a través del examen del expediente, que cuando se completó de pagar, el 29 de septiembre de 1992 ya la sentencia de primera instancia estaba ejecutoriada al igual que la Resolución que imponían costas. Es opinión de esta Corte que no debió concederse el Recurso de Hecho en vista de que era evidente que no podía ser oído la parte condenada en costas sin haberlas cancelado dentro del término del artículo 1066 del Código Judicial. Es claro entonces que se violó el debido proceso establecido en el artículo 32 de la Constitución Nacional, al oír a quien no podía ser oído, sin antes cancelar la totalidad de las costas.

Por lo expuesto la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el auto de 15 de julio de 1993 proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, y en su lugar CONCEDE el amparo solicitado por la parte actora en el presente caso.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LICENCIADA NORIS CASTILLO DE MEDINA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SERGIO ULLOA SING EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **NORIS CASTILLO DE MEDINA** ha interpuesto, en nombre y representación del señor **SERGIO ULLOA SING**, amparo de garantías constitucionales contra el Director General de Aduanas Licenciado **RODRIGO AROSEMENA**.

En el libelo de la demanda se señala como demandante al señor **SERGIO ULLOA SING** y como demandado al licenciado **RODRIGO AROSEMENA**. Del mismo modo observa la Corte que en el epígrafe destinado a expresar la orden que se impugna, la apoderada del demandante manifiesta lo siguiente:

> "La presente acción va dirigida contra la orden de hacer emitida por el señor Director General de Aduanas, LICDO. RODRIGO AROSEMENA, consistente en comisar una computadora San Sung completa, y del equipo de sonido Pioner, propiedad del señor Oscar Espinosa, además de un vehículo marca Internacional, con capacidad de 54-56 pasajeros, el cual se utilizaba al momento de su comiso, en la ruta Mano de Piedra Durán, Transistmica - Calle 12, propiedad del señor Guillermo Espinosa E, portador de la cédula de identidad personal N° 8-239-00085, todo dentro del expediente que se le instruye a nuestro representado, quien se le imputa el delito de Falsificación de Sellos Estatales.

Advierte el Pleno que la apoderada del amparista manifiesta entre los hechos que fundamentan la pretensión, que los bienes comisados provisionalmente son de propiedad del señor **GUILLERMO ESPINOSA**, quien es hermano del señor **SERGIO ULLOA SING**. Y en el hecho sexto, la licenciada De Medina expresa que las autoridades de aduana han comisado dichos bienes a sabiendas de que pertenecen a personas distintas de la investigada, es decir, que no pertenecen a **SERGIO ULLOA SING**, quien es el que promueve el presente amparo.

Ahora bien, el relato que ha hecho la Corte hasta este momento, pone en evidencia la falta de legitimación que tiene el señor **SERGIO ULLOA SING** para interponer la presente acción, pues los bienes incautados provisionalmente por las autoridades de aduana no son de su propiedad. En consecuencia, mal podría el amparista tratar de ejercer la presente acción para liberar bienes que no le pertenecen.

Estas circunstancias conducen a que se declare inadmisible el presente amparo de garantías constitucionales, por carecer el proponente de la acción de legitimación activa en la causa.

Por ello, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales propuesto por SERGIO ULLOA SING contra la orden de hacer dictada por el Director General de Aduanas.

Notifíquese y archívese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ, DIRECTOR DISTRITAL DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE OFICIO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA JUDITH ELVIRA FAJARDO VEGA Y EN CONTRA DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 356 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1992, PROFERIDO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Judith Elvira Fajardo Vega, mediante apoderado judicial, ha propuesto Amparo de Garantías Constitucionales contra el Decreto Ejecutivo No. 356 de 27 de noviembre de 1992, dictado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante el cual se la destituye del cargo de empleada de los Correos y Telégrafos Nacionales, dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia.

El Pleno debe, en primer lugar, resolver acerca de la admisibilidad del recurso propuesto a la luz de las disposiciones legales que regulan la materia. Esta Corporación ha expresado, en reiteradas ocasiones, que la legalidad de los actos administrativos debe ventilarse por la vía contencioso administrativa, y que son manifiestamente improcedentes, de conformidad con el artículo 2611 del Código Judicial, las demandas de amparo mediante las cuales se pretende revocar actos administrativos. La vía que debe utilizarse para impugnar la legalidad de los actos administrativos es la gubernativa, y agotada esta vía lo procedente es ocurrir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Como mediante la presente acción de amparo se pretende que se revoque un Decreto Ejecutivo, la misma es improcedente. (Ver resolución de 10 de septiembre de 1993, dictada en acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por RAMIRO ELIÉCER SÁNCHEZ BEDOYA contra el Director de la Policía Nacional, y resolución de 26 de julio de 1993, dictada en amparo propuesto por el licenciado José Luttrell, en representación de ANTONIO GONZÁLEZ Q. contra la orden de hacer dictada por el Procurador General de la Nación).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Recurso de Amparo propuesto por la señora JUDITH ELVIRA FAJARDO VEGA y en contra del Decreto Ejecutivo No. 356 de 27 de noviembre de 1992, proferido por el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ERNESTO RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA LICENCIADA AIDELENA PEREIRA Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER A TRAVÉS DEL ACUERDO NO.93-24 DE 13 DE AGOSTO DE 1993 Y EN CONSECUENCIA EL ACUERDO CONFIRMATORIO NO. 93-28 DEL 23 DE AGOSTO DE 1993, DICTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada AIDELENA PEREIRA VÉLIZ, mediante apoderado especial legalmente constituido, interpuso demanda de amparo de garantías constitucionales ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la orden de hacer contenida en el Acuerdo No.93-24 del 13 de agosto de 1993, confirmado por Acuerdo 93-28 del 23 agosto de 1993, dictados por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, y por virtud del cual se" RESUELVE:

> "PRIMERO: Evaluar a la Licenciada Aidelena Pereira, Juez Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil de manera REGULAR (74 puntos), según el artículo 41 del Reglamento de la Carrera Judicial;
>
> SEGUNDO: Considerar la evaluación anterior como no satisfactoria para los efectos de ingresar a la Carrera Judicial;
>
> TERCERO; Comunicar el resultado de esta evaluación a la Licenciada Aidelena Pereira, al tenor de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de Carrera Judicial;
>
> Se deja constancia que contra este Acuerdo cabe el recurso de reconsideración, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de Carrera Judicial.
>
> No siendo otro el objeto de la presente reunión, se dio por terminada la misma y para constancia se firma el presente Acuerdo por todos los que en ella han intervenido. ..."

Por cumplidas las reglas de reparto, el despacho sustanciador mediante proveído de fojas 37 decidió admitir la demanda de amparo propuesta, por encontrarla debidamente formulada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2610 y 2611 del Código Judicial, solicitando a la autoridad demandada el envío de la actuación a esta Superioridad, si la hay, o en su defecto un informe acerca de los hechos materia del recurso, y, a su vez, ordenó la suspensión inmediata de los efectos de la orden

impugnada mientras se decidiera el recurso, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 2612 idem.

Al cumplir el Tribunal Superior de la orden acusada con los requerimientos arriba indicados, el caso se encuentra, por tanto, en estado de fallar, y a ello se procede previas las consideraciones que a continuación se exponen.

ANTECEDENTES

Los documentos allegados al expediente del presente proceso de amparo constitucional dan cuenta que:

1. La posición de Juez Cuarto de Circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, fue abierta mediante Concurso No. 126, de conformidad con el Reglamento de la Carrera Judicial.

2. La Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil, una vez realizado el concurso por Resolución No.47-92 del 24 de agosto de 1993, escogió a la licenciada Aidelena Pereira Véliz entre las tres primeras posiciones en la lista de seleccionables para el Concurso No.126. (fs.8)

3. El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial como autoridad nominadora escogió entre la lista de los seleccionables para el Concurso No.126, a la licenciada Aidelena Pereira Véliz para ocupar el cargo de Juez Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, conforme a lo dispuesto por los artículos 34 y 35 del Reglamento de Carrera Judicial.

4. El Primer Tribunal Superior antes de cumplido el período de prueba evaluó a la Juez Cuarta de Circuito Judicial del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, mediante Acuerdo No.93-23 de 12 de Agosto de 1993, con calificación de REGULAR (74 puntos), de acuerdo al artículo 41 del Reglamento de Carrera Judicial, y, al siguiente día 13 de agosto de 1993, por Acuerdo No.23-24 resolvió evaluar a la licenciada Aidelena Pereira, Juez Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil de manera "REGULAR (74 puntos)" y considerar la evaluación como "no satisfactoria para los efectos de ingresar a la Carrera Judicial"; por lo que la Juez afectada interpuso recurso de reconsideración contra este Acuerdo el cual fue mantenido o confirmado en todas sus partes por el Primer Tribunal Superior, mediante Acuerdo No. 93-28 de 23 de agosto de 1993.

SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE AMPARO

De los hechos y el concepto de las disposiciones constitucionales invocadas como violadas, reseñadas en la demanda de amparo de garantías constitucionales propuesta por la amparista. en síntesis se colige lo que sigue:

La accionante luego de hacer un recuento cronológico de los Acuerdos relacionados con la evaluación hecha por la autoridad nominadora, en este caso, sostiene que habiéndose agotado los recursos ordinarios contra el Acto impugnando, resulta procedente la acción de amparo propuesta, toda vez que se le han conculcado claras garantías individuales.

En ese sentido alega que la orden impugnada viola los artículos 17, 18, 32, 206, 207 y 208 de la Constitución Política. Sin embargo, el Pleno de la Corte desde ahora estima oportuno señalar, que el examen de las alegadas violaciones a los derechos y garantías constitucionales que se endilgan a la orden acusada debe concretarse a las tres primeras normas constitucionales citadas por la accionante, y no así a las tres últimas, por las razones que se expondrán más adelante.

En efecto, en relación con la violación del artículo 32 de la Constitución, la proponente de la acción de amparo expresa que esta norma constitucional consagra el llamado principio del debido proceso, que contiene básicamente garantías que deben, imperativamente, ser observadas en forma permanente e invariable en la conducción de todo proceso; y, entre esos requisitos señala el "... cumplimiento de todos los procedimientos legales previamente establecidos", siendo que, en el caso particular, también los reglamentos de la Carrera Judicial. De manera que se ha dado la violación del debido proceso, de manera directa, ya que en el proceso de evaluación no se cumplió con lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 269 del Código Judicial que dispone que para "... ingresar a la Carrera Judicial es preciso cumplir con los requisitos exigidos por la Ley o los reglamentos para ocupar el cargo".

Además de lo antedicho, la accionante también señala que el Tribunal Superior hizo la evaluación, en su caso, antes de finalizar el período de prueba, ignorando de esa manera los requisitos exigidos en el Reglamento de la Carrera Judicial, esto es, que la evaluación debe hacerse una vez finalizado el período probatorio de seis meses y no antes. De igual manera expresa, que se violaron los preceptos reglamentarios al abrogarse la autoridad nominadora atribuciones de interpretación de las normas de la Carrera Judicial que no le eran atribuidas a la misma, como se desprende el texto del punto segundo de la parte resolutiva del Acuerdo 93-24 impugnado al expresar "... CONSIDERAR la evaluación anterior como NO SATISFACTORIA para los efectos de ingresar a la Carrera Judicial", todo lo cual según la demandante la orden de hacer acusada violó el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política.

En este mismo orden de ideas, sobre la infracción del artículo 17 de la Carta Política sostiene que dicha norma constitucional ordena a las autoridades garantizar la efectividad de los derechos individuales, lo mismo que cumplir con las disposiciones legales. Pero, en el presente caso, alega la accionante, el Primer

Tribunal Superior de Justicia ha omitido el aseguramiento de los derechos estatuidos en su beneficio y brindarle las garantías del debido proceso, pasando por alto el efectivo cumplimiento de la ley al no ajustarse a la atribución establecida en el numero 3. del artículo 130 del Código Judicial.

Por último, la demandante, en esta síntesis de la referida demanda de amparo, arguye que el artículo 38 del Código Judicial desarrolla el llamado "Principio de Legalidad" que la Carta Política recoge en los artículos 17 y 18, y constituye un límite al ejercicio arbitrario de las facultades del funcionario y que es una emanación evidente del Estado de Derecho, por lo que, indudablemente, el Primer Tribunal Superior violentó tales preceptos -Constitucional y Legal - al excederse en la evaluación, "... al llenar lagunas o vacíos en el articulado del Reglamento de Carrera Judicial"; ya que en virtud de la excerta legal citada,"... su actuación debió ceñirse estrictamente al tenor del Reglamento señalado y no dentro de un marco estrictamente subjetivo, como efectivamente se hizo, con la expedición del Acuerdo 93-24 de 13 de agosto de 1993, impugnado".

LA ORDEN ACUSADA Y EL CRITERIO DE LA CORTE

Por expuesta la anterior reseña, como marco de referencia sobre la cuestión planteada en el proceso de amparo constitucional que ocupa al Pleno de la Corte, es del caso, entonces, proceder al examen de la orden acusada a fin de determinar si la misma viola los derechos y garantías constitucionales invocadas por la amparista. Veamos:

Es conveniente que el Pleno aclare antes lo siguiente:

La demandante, con anterioridad a la presente demanda de amparo constitucional, interpuso demanda por la misma vía de amparo de garantías constitucionales pero en contra del Acuerdo No. 93-29 de 26 de agosto de 1993, emitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia y mediante el cual resolvió "NO CONCEDER el recurso de apelación enunciado".

La referida demanda fue admitida por la Corte y a la misma se le imprimió el trámite de la sustanciación hasta concluir el proceso con la dictación de la sentencia de 24 de septiembre de 1993, que "DENIEGA la acción de amparo propuesta por el licenciado Ernesto D. Rodríguez, en representación de la licenciada Aidelena Pereira Véliz".

La licenciada Pereira Véliz el 30 de septiembre de 1993, es decir, en fecha posterior a la indicada sentencia, propone nueva demanda de amparo de garantías constitucionales, pero esta vez, en contra del Acuerdo No.93-24 del 13 de agosto de 1993 emitido también por el Primer Tribunal Superior de Justicia, por lo que se trata de un acto distinto del que fuera objeto de impugnación en la primera demanda de amparo de la accionante.

En ese sentido, queda claro entonces que al tenor de lo dispuesto por los artículos 709, 710, 711 y siguientes del Código Judicial, en el caso que ocupa al Pleno de la Corte, legalmente no procedía ni procede la acumulación de los referidos procesos de amparo constitucional, al no darse los presupuestos contemplados por las normativas de los precitados artículos del procedimiento civil.

Al cumplir en el examen de fondo sobre la cuestión planteada por la accionante, cabe señalar que el Primer Tribunal Superior de Justicia en los considerandos que sirven de fundamento al Acuerdo No.93-24, del l de agosto de 1993, por una parte reconoce: "1. Que mediante Acuerdo 4 del 10 de febrero de 1993 se escogió de la lista de concursantes elegibles a la Licenciada Aidelena Pereira Véliz, para ocupar el cargo de Juez Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil;".

Por otra parte acepta: "3. Que mediante Acuerdo No. 93-23 de 12 de agosto de 1993, este Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá como autoridad nominadora de la Juez Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, procedió a hacer la evaluación correspondiente, a fin de establecer y medir el nivel de eficiencia del funcionario y su conducta laboral."

De igual manera en los referidos Acuerdos de evaluación de la Juez Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, en período de prueba, la autoridad nominadora deja expresado claramente que el período probatorio, en ese caso, vencía el 15 de agosto de 1993, sin embargo, la evaluación la hizo con dos días de anticipación y no al finalizar el período de los seis meses.

Así, la amparista entonces, como se tiene visto, entre los derechos y garantías constitucionales que considera violados por la acusada orden emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que según ella afecta su ingreso a la Carrera Judicial, invoca las consagradas en los artículos 32, 17 y 18 de la Constitución Política, porque a su juicio la autoridad nominadora, en su caso, no cumplió con la garantía del debido proceso ni con el aseguramiento de los derechos individuales. Veamos:

Los artículos 37 y 39 del Reglamento de Carrera Judicial, en cuanto a la evaluación del personal en el desempeño del cargo, disponen lo siguiente:

> "Artículo 37. La evaluación del personal en el desempeño del cargo consiste en la aplicación de los instrumentos adecuados que tienen como finalidad establecer y medir el nivel de eficiencia del funcionario y su conducta laboral. Los Jefes de Despacho serán instruidos sobre la

aplicación de estos criterios de evaluación del personal subalterno, bajo coordinación del Departamento de Personal."

-o-

"Articulo 39. Corresponde al Jefe inmediato la evaluación anual del desempeño del personal permanente bajo su dirección.

Los funcionarios en período de prueba serán evaluados al finalizar dicho período como paso previo a su incorporación a la Carrera Judicial.

Las evaluación del personal interino se hará al finalizar el período por el cual se le nombró."

Si bien es cierto que de las transcritas disposiciones del Reglamento de Carrera Judicial se infiere que corresponde a la autoridad nominadora, en este caso al Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, la evaluación del personal en el desempeño en el cargo así como la de los funcionarios en período de prueba, no menos lo es, que las disposiciones reglamentarias en comento igualmente establecen las pautas a las que debe ceñirse la autoridad nominadora, al hacer la evaluación del personal en el desempeño del cargo o de los funcionarios en período de prueba; pues, por un lado, determinan que la evaluación consiste en la aplicación de los instrumentos adecuados que tienen como finalidad establecer y medir el nivel de eficiencia del funcionario y su conducta, y, por otro lado, fijan expresamente el término dentro del cual serán evaluados los funcionarios en período de prueba.

No obstante, en el caso de la Juez Aidelena Pereira Véliz, salta a la vista que en el Acuerdo No. 93-23 de 12 de agosto de 1993, fojas l, se exponen como razones para establecer y medir el nivel de eficiencia y su conducta laboral, que:

"...
En este estado, la Presidenta hizo un recuento del comportamiento desplegado por la Juez, tanto en su función administrativa como legal o judicial; incluyendo la entrevista que previamente se le hiciera a la funcionaria; entrevista en la cual la Juez puso de manifiesto ser conocedora con anterioridad de la mayoría de los problemas que se le pusieron en conocimiento y acepto no haber tomado las medidas correspondientes.

Luego de considerados todos los criterios de evaluación, tanto de la eficiencia de la funcionaria calificada, como de su conducta laboral, y puestos en la balanza los mismos, y en atención a las facultades conferidas a la autoridad nominadora por los artículo 37 y 39 del Reglamento de la Carrera Judicial, se sometió a votación la evaluación de la mencionada Juez Cuarta, resultando por mayoría de votos con una calificación de REGULAR (74 puntos), de acuerdo al artículo 41 del Reglamento de Carrera Judicial. ...".

De esa manera el Primer Tribunal Superior de Justicia, fundándose en el criterio que aparece en los párrafos transcritos, mediante el acusado acuerdo No. 93-24 de 13 de agosto de 1993, fojas 2, decidió evaluar a la licenciada Aidelena Pereira Véliz de manera "REGULAR (74 puntos)", considerando el resultado de la misma como "no satisfactoria para los efectos de ingresar a la Carrera Judicial". Es en esta apreciación que el Pleno de la Corte estima que se produce la violación de los derechos y garantías Constitucionales invocadas por la amparista, al impedirle el ingreso a la Carrera Judicial, de la manera como fue evaluada.

En efecto, como prueba de la manera como la autoridad nominadora hizo la evaluación a la prenombrada funcionaria en período de prueba, en el Acuerdo No. 93-24 de 23 de agosto de 1993, que consta a fojas 5, en el cual la autoridad nominadora, en este caso, sin mayores explicaciones y fundamentos válidos expresa: "5. Que esta Colegiatura, con anterioridad a la evaluación de la Licenciada Aidelena Pereira Véliz, por unanimidad, había resuelto considerar las evaluaciones EXCELENTE Y BUENO como satisfactorias para ingresar a la Carrera Judicial y las evaluaciones REGULAR y DEFICIENTE como no satisfactorias para ingresar a la Carrera Judicial;".

El artículo 41 del Reglamento de Carrera Judicial, sin embargo, clara y taxativamente establece la escala cualitativa y cuantitativa para calificar a los funcionarios, al establecer lo que sigue:

"De acuerdo con los resultados obtenidos se calificará a los funcionarios de acuerdo con la siguiente escala cualitativa y cuantitativa:

1. Excelente (91-100 puntos)
2. Bueno (81-90 puntos)
3. Regular (61-80 puntos)
4. Deficiente (menos de 60 puntos)

Los resultados de la evaluación se notificarán por escrito a los funcionarios evaluados y copia de ella se incorporará al expediente de cada uno."

Ciertamente, como sostiene la amparista, ni la disposición reglamentaria transcrita ni otras del Reglamento de Carrera Judicial facultan a la autoridad nominadora para resolver y considerar la evaluación "REGULAR ... como no satisfactoria para ingresar a la Carrera Judicial", como lo hizo el Primer Tribunal Superior de Justicia en el caso concreto de la evaluación de la Juez en período de prueba. Además, la ley sobre Carrera Judicial tampoco establece que el "Jefe inmediato" o la autoridad

nominadora tenga la señalada facultad al evaluar al personal en el desempeño del cargo o a los funcionarios en período de prueba como paso previo a su incorporación a la Carrera Judicial.

De todo lo cual se ha de concluir, sin la menor duda, que el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial al evaluar, como lo hizo, en el caso de la accionante en período de prueba, para el ingreso a la Carrera Judicial, la impugnada orden de evaluación contenida en el Acuerdo No.93-24 del 13 de agosto de 1993 emitido por la autoridad demandada, infringe la garantía del debido proceso receptada por el artículo 32 de la Carta Política y por ende las reglas establecidas en los artículos 17 y 18 del mismo estatuto fundamental.

Por último, es cierto que la regla general es que el amparo contra actos administrativos como el impugnado no es procedente sino un proceso contencioso administrativo. Sin embargo, en el presente caso por no existir otro recurso distinto del de reconsideración, y estar en juego la evaluación del desempeño del cargo de un juez que lo obtuvo mediante concurso público, considera el Pleno que excepcionalmente procede una demanda de amparo.

Por lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el apoderado especial de la licenciada AIDELENA PEREIRA VéLIZ, y, en consecuencia, REVOCA la orden de hacer emitida por el Acuerdo No. 93-24 del 13 de agosto de 1993 por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, solamente en cuanto al punto de la parte resolutiva que dice: "SEGUNDO: CONSIDERAR la evaluación anterior como no satisfactoria para los efectos de ingresar a la carrera Judicial;".

Notifíquese, Cúmplase y Archívese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LIC. VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO EN REPRESENTACIÓN DEL DR. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA, CONTRA EL CONTRALOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado VIRGILIO E. VÁSQUEZ PINTO, mediante poder especial otorgado por el doctor CARLOS IVÁN ZÚÑIGA GUARDIA, Rector de la Universidad de Panamá, interpuso demanda de Amparo de Garantías Constitucionales en contra de la orden de hacer "configurada en la omisión de refrendar las planillas correspondientes al aumento bienal del personal docente de la Universidad de Panamá, aduciendo razones de orden económico expresada en la nota No. DC.1859-93 de agosto de 1993", emanada del señor Contralor General de la República.

Por admitida la demanda de Amparo propuesta se requirió del Contralor General el envió de la actuación, si la hay o en su defecto un informe acerca de los hechos materia de la acción extraordinaria constitucional, cumpliendo el alto funcionario demandado con ambos requerimientos.

El aludido proceso de amparo constitucional se encuentra, por tanto, en estado de decidir y a ello se procede previas las consideraciones que a constitución se expresan:

HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DEMANDA

La demanda interpuesta por el Rector de la Universidad de Panamá se fundamenta en ocho hechos en los cuales alega lo siguiente:

Que el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, mediante acuerdo 8-93 de 6 de abril de 1993, en ejercicio de sus facultades legales y debidamente sustentado, decretó aumento bienal del cinco por ciento (5%) sobre el salario base a todo el personal docente de la Universidad de Panamá.

Que el precitado aumento figura en la partida del Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal de 1993 y estaba supuesto a pagarse a partir de la primera quincena del mes de mayo de 1993, inclusive.

Que la Universidad de Panamá, a través del Rector representante legal de la Institución, desde la primera quincena de mayo de 1993 ha presentado las planillas que contiene la orden de pago del aumento bienal del cinco por ciento (5%) del salario base a todo su personal docente.

Que el contralor General de la República funda la improbación del pago en argumento expresado en su Nota. D.C. 1859-93 de 16 de agosto de 1993, en la que expresa:'...

Que el Rector sometió ante el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, el hecho de que se habían refrendado las planillas presentadas desde el mes de mayo de 1993, para que éste decidiera si se debe insistir en cumplir o no la emisión del acto o cumplimiento de la orden.

Que el Consejo Administrativo expidió la Resolución No. 32-93 de 11 de agosto de 1993, cuya parte resolutiva se expresa así: '...'.

Que la decisión del Consejo Administrativo citada, que es la máxima corporación de Órgano de Gobierno, que conforme al artículo 14 de la Ley 11 de 1981 'es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos, económicos, financieros y patrimoniales de la Universidad'; impone a la Controlaría el deber de refrendar las planillas que implican el pago de la misma, ya que dicho órgano de gobierno asume la responsabilidad a que se deriva de dicho acto, en los términos expresados en el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley 32 de 1984.

Finalmente, sostiene que las decisiones del Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá fueron comunicadas al Contralor General de la República y reiteradas en la Nota No.1337-93 de 20 de agosto de 1993 que le remitió el señor Rector de la Universidad de Panamá, comunicaciones de las que ha hecho caso omiso el Contralor General de la República.

De esa manera el accionante acusa la orden de no hacer expedida por el Contralor General de violar directamente las garantías y derechos fundamentales que consagran los artículos 17 y 99 de la Constitución Política porque a su juicio, en lo que respecta a la violación de la primera de las normas constitucionales citadas, el Contralor General de la República, "... con su orden de no hacer consistente en la negativa de refrendar las planillas del pago del aumento bienal al personal docente de la Universidad, o sea, la improbación de la orden de pago ha violado directamente la norma constitucional transcrita, porque con dicha orden en vez de asegurar, contraviene los derechos y deberes individuales y sociales de los profesores de la Universidad de Panamá al impedirles percibir una remuneración justa, y al mismo tiempo, incumple lo dispuesto por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá en su Acuerdo 8-93 de 6 de abril de 1993".

Además agrega que igualmente incurre en violación directa de dicha norma porque en vez de cumplir con lo ordenado en la ley, ha omitido tal cumplimiento al no proceder al refrendo inmediato, tal como lo ordena el párrafo pertinente del artículo 77 de la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Controlaría General de la República. el cual señala lo que puede hacer el funcionario u organismo que emitió el acto, esto es, de someterlo a la corporación administrativa que ejerce la máxima autoridad administrativa de la Institución, que en el caso de la Universidad de Panamá, lo es el Consejo Administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 11 de 1981 y fundado en esa atribución, dicho órgano emitió la Resolución 32-93 de 11 de agosto de 1993, insistiendo en la emisión del acto o en el cumplimiento de la orden, caso en el que la Controlaría debe refrendar las orden de pago para que se cumpla. Esa omisión según el proponente de la acción de amparo conlleva la violación directa del artículo 17 de la Constitución Nacional.

Por otra parte el amparista sostiene que el Contralor General de la República con su omisión incumple el artículo 1080 del Código Fiscal y el artículo 45 de la Ley 32 de 1984 que le imponen el deber de refrendar las planillas, particularmente cuando éstas cumplen las exigencia del artículo 1076 del Código Fiscal.

En cuanto a la violación del artículo 99 de la Constitución Nacional, también invocado como infringidos en la demanda de amparo en estudio, se arguye que la autonomía de la Universidad de Panamá constituye un derecho fundamental consagrado en la Constitución, pues, entre otras cosas dicho derecho, autoriza a la Universidad a administrar su patrimonio autónomamente; lo que implica que, cumplidos los trámites legales correspondientes, ninguna autoridad puede impedirle que utilice los recursos presupuestarios, como sus órganos internos dispongan.

Además se alega que el ámbito de protección del mencionado derecho fundamental comprende la facultad de decretar aumentos a sus personal; pues hay que tener cuenta que la Universidad de Panamá es la institución constitucionalmente designada para impartir la educación superior, como parte del servicio público organizado por el Estado.

Finalmente, también se alega que el derecho fundamental a la autonomía universitaria de la Universidad de Panamá, al estar consagrada en el capitulo V, Educación, del Titulo III de los derechos y deberes individuales y sociales, indica que la finalidad de ésta consiste en asegurar las condiciones, tanto humanas como materiales, para la debida prestación del servicio. Este derecho contenido en el artículo 99 de la Carta Política, a juicio de la amparista, ha sido violado directamente por el Contralor General de la República al desconocer el aumento bienal decretado por las autoridades competentes de la misma, con la omisión de refrendar las planillas que implican una orden de no hacer.

SÍNTESIS DE LA POSICIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA DE LA REPÚBLICA

El señor Contralor General de la República, por su parte, al rendir el informe requerido por el Pleno de la Corte alude en primer lugar a los "informes" que también

rindiera al "Dr. Edgardo Molino Mola, mediante Nota No.1930-C-93, de 23 de agosto de 1993, con ocasión del amparo de garantía constitucionales propuesto por los Lcdos. Rodrigo Anguizola Sagel y Agapito Atencio B. en representación del Dr. Luis Guillermo Casco Arias, como Director de la Lotería Nacional de Beneficencia, y en contra de la orden de no hacer proferida por mí como Contralor General de la República, y que consiste en negar el refrendo, autorización o firma de la planilla de salarios de un grupo de funcionarios que fue nombrado en la Lotería Nacional de Beneficencia". Y también a la Nota No.1868-D.C- de 17 de agosto de 1993, "... que le remitiera a la Dra. Aura Emérita Guerra de Villalaz, conteniendo el informe que le rendí a propósito del amparo de garantías constitucionales propuesto por el Lcdo. Antonio Loaiza Batista, como apoderado judicial de los señores Mercedes Valdés de Poveda, Pablo A. Pabilo, Florencio Villarreal y Miguel A. Martínez, en contra de la orden de no hacer proferida por mí como Contralor General de la República, relacionada al pago de ajustes y ascensos, que se debió pagar, según se afirma en la acción impetrada, desde el mes de diciembre de 1992 y el mes de enero de 1993".

Por otra parte, el titular de la Contraloría General en el extenso y detallado informe rendido a la Corporación aborda diferentes temas y aspectos como son: "II.Observaciones a la vía utilizada";" III.Razones en que pude fundarse la Contraloría General para improbar un gasto o un acto que afecte un patrimonio público"; "IV.Situación de las finanzas pública al 20 de diciembre de 1989"; "V.Situación fiscal y equilibrio del Presupuesto General del Estado el déficit está prohibido"; "VI.Atribuciones de la Controlaría General para evitar el déficit fiscal"; "VII.Acción gubernamental frente a las situaciones de las finanzas públicas"; "VIII.Carga del servicio de parte de la deuda publica en el Presupuesto General del Estado y monto actual de la misma"; "IX.Ingresos probables previstos en el Presupuesto General del Estado de la actual vigencia y comportamiento real de los mismos"; "X.Incremento del monto en las planillas del sector Público: una nueva carga en el Presupuesto General del Estado"; "XI.Los sacrificios fiscales del erario público y situación laboral y social en el país"; "XII.Efectos del auto de las planillas del sector público en el Presupuesto General del Estado";" XIII.Observaciones a las garantías constitucionales que se invocan como violadas en la acción de amparo propuesta"; "1.Violación del artículo 17 de la Constitución". "2. Violación del artículo 99 de la Constitución"; "XIV. Otros documentos que se acompañan".

Salta a primera vista que los interesantes planteamientos que aparecen en los apartados romanos "II a XII" del extenso, minucioso y detallado informe rendido en el caso por el señor Contralor General de la República, tienden a destacar la situación de las finanzas públicas al 20 de diciembre de 1989; y el esfuerzo realizado con posterioridad por la Contraloría General de la República para poner y mantener un estricto orden en el manejo de las finanzas del Estado, así como las atribuciones constitucionales y legales de la Contraloría General para que el Presupuesto General del Estado se ejecute cumplidamente y las razones de orden económico que permiten a la Controlaría General, para improbar un pago a cargo de un tesoro público, o un acto que afecte un patrimonio público, de conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del artículo 77 de la Ley 32 de 1984. De igual manera se destaca en dichos apartados los ingresos probables previstos en el Presupuesto General del Estado de la actual vigencia y el comportamiento real de los mismos; y, además, se alude al incremento del monto de las planillas del sector público como una nueva carga en el Presupuesto General del Estado del 20 de diciembre de 1989 al 31 de diciembre de 1993, ilustrando cómo se ha reducido el número de empleados públicos, y como ejemplo para el logro de esa reducción se refiere al caso de la creación del plan de retiro voluntario; y, finalmente, en los aludidos apartados se señala los efectos del aumento de las planillas del sector público en el Presupuesto General del Estado.

En otro orden del contenido del informe emanado del despacho de la Contraloría General, en lo que respecta a las garantías constitucionales que se invocan como violadas en la acción de amparo instaurada por el Rector de la Universidad de Panamá, se alegan igualmente una serie de argumentos oponiéndose a las acusadas infracciones a los artículos 17 y 99 de la Constitución Política invocadas en la demanda, entre las que cabe destacar:

En lo que respecta a la violación del artículo 17 de la Constitución se sostiene que:

La Resolución No.8-93, de 6 de abril de 1993, expedida por el Consejo Administrativo y suscrita por el Rector de la Universidad de Panamá y el Secretario General de esa institución, dispone no sólo de las partidas del actual presupuesto de la Universidad, sino que dispone también, del resto de las partidas que le sean asignadas en los presupuestos generales del Estado que se adopten en el futuro y cuya elaboración y aprobación no es precisamente atribución del Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, según los artículos 264 a 270 de la Constitución.

Alega que no se requiere mayores explicaciones para demostrar que la Resolución No.8-93, de 6 de abril de 1993 (fs.1 y 2), dictada por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, constituye un acto administrativo que afecta el patrimonio público de esa universidad, por lo que ese acto, desde el principio, está comprendido dentro de las premisas contempladas por el inciso primero del mismo artículo 77 de la Ley 32 de 1984.

Finalmente sostiene que el inciso segundo del artículo 77 de la Ley 32 de 1984, es incompatible con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución, toda vez que el mencionado inciso de la Ley en cita obliga a la Contraloría General a otorgar el refrendo y esto, en la práctica, viene a eliminar el control previo por parte de esa institución, respecto de los actos de manejo de bienes y fondos públicos objeto de la insistencia a la cual se refiere la norma en comento. El control previo

de esos actos de manejo, es una atribución de la Controlaría General de la República, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución el cual dispone que a la Contraloría General le corresponde fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección y según lo establecido en la Ley.

En cuanto a la violación del artículo 99 de la Constitución en síntesis se alega, que el hecho de que la Universidad de Panamá conforme al citado artículo de la Constitución Política tenga autonomía y personalidad jurídica propia, y sus consecuencias, tener patrimonio propio y gozar del derecho de administrado, no le quita el carácter de eminentemente estatal que tiene la Universidad de Panamá, por muy autónoma que sea; tampoco le quita el carácter público al patrimonio propio que le reconoce la norma constitucional en comento; tampoco le quita, en consecuencia, el carácter de bienes y fondos públicos, a los bienes que constituyen ese patrimonio propio, ni a los fondos que se le asignen en el Presupuesto General del Estado a la Universidad de Panamá, para sus inversiones y funcionamiento.

Por otra parte señala que el derecho que tiene la Universidad de Panamá de administrar su patrimonio, y los bienes que lo puedan constituir, tampoco puede extenderse en el sentido, que esa administración , es decir la administración de los bienes y fondos públicos que lo constituyen, se pueda hacer al margen de la fiscalización, regulación y control , a que están sujetos, de modo previo, todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos conforme a lo dispuesto por la propia Constitución en el numeral 2 del artículo 276.

En otro orden del análisis sobre la violación del supracitado artículo de la Constitución Política, el Contralor General de la República, finalmente, desde la página 32 a la 37 inclusive, del aludido informe, le dedica extensas consideraciones al tema de la autonomía universitaria a partir de la creación de la Universidad de Panamá, en cuanto a sus alcances y propósitos culturales.

ACUMULACIÓN DE LOS PROCESOS

Los señores Francisco Cabrera, Felipe A. Waisome y Edith Gallardo de Castillo, mediante poder especial otorgado a la firma forense denominada "ABOGADOS ASOCIADOS", igualmente interpusieron demanda de Amparo de Garantías Constitucionales en contra de la misma orden de no hacer objeto del presente proceso de amparo constitucional, instaurado por el señor Rector de la Universidad de Panamá.

En ese sentido, el despacho sustanciador de la aludida demanda de amparo dispuso acumular dicho proceso al presente proceso de amparo constitucional por ser este último el más antiguo, con fundamento en lo estatuido por el artículo 711 del Código Judicial, y a fin de que ambos procesos acumulados se fallen en la misma sentencia.

CRITERIO DEL PLENO DE LA CORTE

En el proceso constitucional que ocupa al Pleno de la Corte consta la Resolución No. 8-93 de abril de 1993, dictada por el Consejo General Administrativo de la Universidad de Panamá, y por virtud de la cual "RESUELVE:"Artículo Primero: Autorizar el aumento Bienal de 5% sobre el salario base a todo el personal Docente de la Universidad de Panamá, a partir de la primera quincena del mes de mayo de 1993.

> Artículo Segundo: El aumento a que se refiere el Artículo primero de ésta Resolución, será con cargo a la siguiente partida de gastos 190.0.2.0.01.080.
>
> Artículo Tercero: Inclúyase en el Presupuesto de la Universidad para cada vigencia fiscal, las sumas de dinero necesarias para tal propósito.
>
> Dado en la Ciudad Universitaria a los 6 días del mes de abril de mil novecientos noventa y tres.
>
> Comuníquese y Publíquese.
> (fdo.) Dr.Carlos Iván Zúñiga Guardia.
> Rector.
>
> (fdo.) Migdalia de Aviles
> Secretaria General a.i. "

De igual manera consta dos Resoluciones adicionales dictadas por el Consejo Administrativos de la Universidad de Panamá cuyas partes resolutivas se transcriben a continuación:

> 1. Resolución No.25-93 de 28 de julio de 1993.
>
> "El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá en uso de sus facultades legales y estatutarias, y Considerando:
> ...
>
> RESUELVE
>
> Declarar que la Universidad de Panamá entiende por negado el refrendo por parte de la Controlaría General de las planillas que reconocen el aumento bienal equivalente al 5% del salario del docente, si para el día 6 de agosto próximo, no se ha recibido el refrendo del señor Contralor.
>
> Autorizar al Rector de la Universidad para que comunique la presente Resolución al señor Contralor ..."

-o-

2. Resolución No.32-93 de 11 de agosto de 1993.

"El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

...

RESUELVE:

Insistir ante la Contraloría General de la República para que cumpla orden de pago convenida en las cinco (5) planillas remitidas por el Señor Rector y en las que se presenten en los sucesivo con relación al pago del bienal, a efecto que la Contraloría la refrende en los términos del último párrafo del Artículo de la Ley 32 de 1984.

Dada en la Ciudad Universitaria "Octavio Méndez Pereira", a los once días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres. ..."

Por otra parte, la orden de no hacer acusada aparece contenida, según la demanda de amparo, en la Nota No.D.C. 1859-93, de 16 de agosto de 1993 en la que el señor Contralor General de la República expresa al Doctor Carlos Iván Zúñiga, Rector de la Universidad de Panamá, lo siguiente:

"Estimado Señor Rector:
En varias ocasiones he recibido correspondencia de su parte sobre el aumento bienal que la Universidad considera debe hacerse efectivo en beneficio de todo el personal docente de esa institución.

Ya anteriormente le he comunicado a usted que la Contraloría objetó los aumentos propuestos con base en un acuerdo, celebrado hace varios años entre el Rector de aquella época y un grupo de profesores, ya que como las condiciones estipuladas en él no se cumplieron, no se podían hacer ajustes en los salarios, con apoyo en el mismo, y por eso la Contraloría indicó que el ajuste señalado no tenía fundamento.

Al no prosperar lo anterior, entonces en la Universidad se decidió decretar un aumento que primeramente compensara lo que se había dejado de recibir al no proceder los ajustes con base en el acuerdo al cual ya se hizo referencia.

Yo comprendo el interés de todos los miembros del personal docente de la Universidad en cuanto a la conveniencia y ventaja que supone para ellos recibir aumentos de sueldo, y entiendo que si pudieran hacerlo con mayor frecuencia, se ajustaría más a las expectativas y necesidades de todos. Sin embargo, la Controlaría tiene una obligación y es examinar, en forma cuidadosa y responsable, los aumentos que pretenden alcanzar, con derecho o sin él, los distintos sectores de la administración publica.

Es por lo anterior que, frente a la campaña que se ha desatado en varios sectores de la administración pública, para lograr aumentos de sueldo, bajo diversos nombres, denominaciones y justificaciones, la Controlaría ha tenido que iniciar un proceso de evaluación económica de los mismos, porque tal como van las cosas, frente a las pretensiones de aumentos por todos los empleados públicos, la situación de las finanzas públicas se hará insostenible.

Yo estoy seguro, señor Rector, que usted comprenderá que el caso de la Universidad es uno entre una gran cantidad de situaciones en las cuales empleados públicos personalmente, mediante gremios y en forma institucional, reclaman y hacen manifestaciones de sus aspiraciones.

En lo que a mi concierne, tengo la obligación de velar porque las finanzas públicas se manejen en forma ordenada, y estos aumentos como lo que ustedes pretenden no son sino un aspecto dentro de una situación de carácter general que obliga a que procedamos con cautela en cuanto a la capacidad de seguir reconociendo aumentos establecidos en leyes, reglamentos, acuerdos y disposiciones que conceden privilegios y beneficios discriminatorios a ciertos grupos de empleados públicos, mientras en el país existen miles de ciudadanos que no reciben el beneficio de un sueldo.Tenemos limitaciones en cuanto a la posibilidad de seguir incrementando el gasto de planilla en el sector público.

Yo comprendo la posición suya como Rector, pero le ruego que comprenda la posición del Contralor que no puede seguir aceptando aumentos de sueldos. Para su información, le envío copia de cartas que he enviado al Presidente de la República y a los Ministros de Estado sobre el asunto de las planillas.

Del señor Rector, atentamente,

(fdo.) RUBÉN CARLES
Contralor General"

La impugnada orden de no hacer, en lo concreto del caso, se reduce a la negativa u omisión del señor Contralor General de la República, de refrendar las planillas de

pago sobre el aumento bienal del cinco por ciento (5%) al salario base del personal docente de la Universidad, autorizado por el Consejo General Administrativo de la Universidad de Panamá de conformidad con las parcialmente transcritas resoluciones dictadas por dicho Organismo universitario. Estas autorizaciones del aumento bienal docente se fundamentan en el convenio No.3 de 28 de mayo de 1985 celebrado por la Universidad con la **APUDEP**, y la partida prevista en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de 1992 aprobado por la Asamblea Legislativa.

1. Antecedentes.

En este sentido, cabe señalar que el conflicto planteado entre las dos instituciones del Estado tiene como antecedentes la sentencia de 20 de diciembre de 1992, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, recaída en la "Petición de Interpretación, interpuesta por el señor Contralor General de la República para que la Sala se pronuncie sobre la validez y valor legal del acto administrativo contenido en la Nota No. 1068-92 de 18 de junio de 1992, suscrita por el Rector de la Universidad de Panamá, mediante la cual se hace un incremento salarial a los Profesores de la Universidad, basado en Acuerdos Universitarios celebrados en 1985, entre la Administración y Docentes Universitarios".

En el referido fallo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte, a pesar de que "DECLARA QUE NO ES VIABLE JURÍDICAMENTE Y POR TANTO NO DEBE EJECUTARSE el acto administrativo contenido en la nota No.1068-92 , de 18 de junio de 1992, ..."; sin embargo, es evidente que dejó sentado algunos criterios que guardan relación con la cuestión planteada entre la Universidad de Panamá y la Controlaría General de la República.

Entre esos criterios oportuno resulta destacar, por ejemplo, que a página 12 del mencionado pronunciamiento jurisdiccional se lee lo siguiente:

> " A juicio de la Sala, el cálculo del porcentaje de incremento salarial debió ser hecho tal como convino en el punto 8 del acuerdo de mayo de 1985, ya que el mismo no fue revisado en el término fijado con ese fin. El convenio celebrado por la Universidad con la APUDEP es de obligatorio cumplimiento en los términos en que fue celebrado. Si algunas de la partes pretende modificarlo, esas modificaciones deben ser convenidas, en la misma forma en que fue convenido el acuerdo original. La dirigencia de APUDEP así lo reconoce cuando recomienda al gremio que se den los pasos pertinentes para llegar a un acuerdo con la Administración para cambiar el método para calcular el próximo ajuste bienal, con la asearía de la Contraloría General de la República. ...". (Subraya la Corte)

El fallo de la Sala Tercera de la Corte, además, señala que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el artículo 84 de Ley 32 de diciembre de 1991, por la cual se aprobó el Presupuesto del Estado para el año 1991, "... en reciente fallo fechado el 5 de octubre de 1992, en el cual expuso que el Presupuesto es un mandato de ejecución que debe cumplirse y no puede quedar al arbitrio de la Administración el cumplirlo o no, 'claro está, previo el cumplimiento de los requisitos que se exigen para el desembolso de la partida, pero sujeto sólo a ese cumplimiento, sin que pueda excusarse el cumplimiento o ejecución del Presupuesto, si se cumple con esos requisitos establecidos' (Acentuada la Sala)".

No cabe la menor duda que en los párrafos anteriormente transcritos, la Corte, a través de una de sus Salas y del Pleno inclusive, por una parte dejó sentado que el mencionado "Acuerdo No. 3 de 28 de mayo de 1985" a que alude uno de los considerando de la Resolución No. 8-93 de 6 de abril de 1993, dictada por el Consejo General Administrativo de la Universidad de Panamá, "... es de obligatorio cumplimiento en los términos en que fue celebrado ...", y, por otra parte, que "... el Presupuesto es un mandato de ejecución que debe cumplirse y que no puede quedar al arbitrio de la Administración el cumplirlo o no ...", siempre que se cumplan previamente los requisitos que se exigen para el desembolso de la partida, '... pero sujeto sólo a ese cumplimiento, sin que pueda excusarse el cumplimiento o ejecución del Presupuesto, ... Con lo cual queda aclarado, entonces, dos aspectos de importancia que guardan estrecha relación con el conflicto planteado por las dos Instituciones del Estado.

2. Viabilidad de la vía de amparo utilizada por el actor

Como quiera que una de las observaciones señaladas por el Contralor General en el informe rendido, se refiere a la "... vía del amparo utilizada por el actor al impetrar la acción propuesta, no es la que corresponde a la señalada por el ordenamiento jurídico vigente", es menester aclarar que el Pleno de la Corte, en caso similar, admitió la demanda de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Director de la Lotería Nacional contra la orden de no hacer dictada por el Contralor General de la República, "... que niega el refrendo, autorización o firma de la planilla de salarios relacionadas con el nombramiento de un grupo de funcionarios que trabajan en las oficinas de la Lotería Nacional de Beneficencia". La Corte en esta ocasión, luego de surtirse los trámites de la sustanciación del proceso de amparo, concedió el amparo y revocó la orden de no hacer impugnada por vía de la acción de amparo de garantías constitucionales. En esta misma dirección existe, además, otro precedente.

Por ello, la Corte, en cuanto al punto de la viabilidad de la acción de amparo instaurada por el actor, estima que no existe razón para proceder de manera distinta a la del caso del amparo propuesta por la Lotería Nacional de Beneficencia, sobre todo cuando se trata de la misma entidad estatal demandada y la cuestión planteada desde el punto de vista de las atribuciones de la Contraloría es similar, por lo que ambas

acciones de amparos constitucionales merecen igual tratamiento por parte de la Corte. Además, la demanda interpuesta, en este caso, cumple con los requisitos formales exigidos por la ley procedimental.

3. La orden de no hacer acusada en el marco de la Constitución y la Ley

Es evidente que el señor Contralor General a pesar de las interesantes consideraciones expuestas en el informe rendido a la Corporación, sobre diversos aspectos relacionados con las finanzas públicas y las razones en que se funda para improbar un gasto o un acto que afecte un patrimonio público, como sostiene que ocurre con el aumento bienal autorizado al salario de los docentes de la Universidad de Panamá, con ello está confirmando la existencia de la orden de no hacer, consistente en la negativa u omisión de refrendar las planillas de pago del aumento bienal autorizado al sueldo del personal docente de la Universidad.

Esa negativa u omisión de la Controlaría, según la documentación que consta en el proceso de amparo y de acuerdo con las alegaciones del accionante, es la que, justamente a juicio del Pleno de la Corte, obligó al máximo organismo administrativo de la Universidad de Panamá, que emitió o autorizó la orden de pago o el acto administrativo, a insistir en el cumplimiento de la orden de pago ajustándose de esa manera a lo dispuesto por el inciso del artículo 77 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984. que reza así:

> " La Contraloría improbará toda orden de pago contra un tesoro público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida. En caso de que el funcionario u organismo que emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquella o de éste, la Contraloría deberá cumplirlos o, en caso contrario, pedir a la Sala de loa Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto. ...". (El énfasis de la Corte)

Del párrafo del artículo de la ley en cita, parcialmente transcrito, se deja en claro, en consecuencia, que al insistir el organismo competente de la Universidad de Panamá que emitió la orden de pago o el acto administrativo, en el caso subjudice, la Contraloría General debió pedir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunciara sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto, como lo hizo en situación idéntica con el referido Acuerdo o Convenio celebrado el 28 de mayo de 1985, según se pone de manifiesto en el fallo de la Sala Tercera de la Corte, anteriormente examinado como antecedente.

En este sentido, la violación de los derechos y garantías constitucionales indicadas, en el caso subjudice, se hace recaer en lo preceptuado por los artículos 17 y 99 de la Constitución Política de la República. Veamos:

La primera de las precitadas normas constitucionales, en el párrafo señalado como infringido, establece que las autoridades de la República están instituidas para "... asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley".

La segunda norma constitucional, que también se postula como infringida, consagra la autonomía de la Universidad de Panamá, al disponer que :

> "ARTICULO 99: La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Tiene facultad para organizar sus estudios y designar y separar su personal en la forma que determine la Ley".

De acuerdo a lo anterior tíenese entonces, por una parte, que las autoridades de la República conforme al Estatuto fundamental están en el deber de asegurar la efectividad de los derecho sociales, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley; y, por otra parte, la Universidad Oficial de la República, vale decir la Universidad de Panamá, por expreso mandato de la Constitución Política es autónoma, se le reconoce personería jurídica , patrimonio propio y derecho de administrado.

Así las cosas, es incuestionable que el conflicto institucional que se plantea en el proceso de amparo constitucional, por su relevancia ocupa al Pleno, gira en torno a la autonomía de la Universidad de Panamá, esto es, planteado el conflicto desde el marco de la Constitución Política y de la Ley.

Lo anterior expuesto, sin desconocer que corresponde a la Controlaría General de la República también por mandato de la Constitución y la Ley Orgánica, "como organismo estatal independiente", ejercer el control fiscal el cual, entre otras funciones, consiste en vigilar o fiscalizar, regular y controlar los actos de manejo de todos los fondos públicos.

No obstante esas funciones claras y precisamente determinadas en la Constitución y la Ley la ejerce la Controlaría General dentro de un radio de operaciones específicos y propio, determinado por el ordenamiento jurídico, de manera que no puede invadir, para fines distintos a su misión controladora de las finanzas públicas o bienes del Estado, el campo de acción que corresponde a los distintos órganos e entidades del Estado que también es propio y privativo de ellas, como es el caso concreto de la Universidad de Panamá y la autonomía de que goza en los términos diseñados por la Constitución Política.

Planteadas las anteriores premisas, no cabe la menor duda que la Universidad de Panamá está entre las dos únicas instituciones del Estado que goza de autonomía a nivel de la Constitución Política de la República, porque así lo dispuso el poder constituyente.

En el caso de la Universidad de Panamá, por ser el que interesa, tíenese, entonces, que la autonomía universitaria vista dentro del ámbito del ordenamiento constitucional constituye un derecho social fundamental, el cual, precisamente, aparece consagrado en las normativas del Capitulo 5. "EDUCACIÓN", del Titulo III de los "DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES", de la Carta Política.

De allí que la propia Constitución a la par que concede autonomía a la Universidad, igualmente le reconozca personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo, para que dicha autonomía sea realmente efectiva.

De lo cual resulta, en consecuencia, que a tenor de lo estatuido por el artículo 17 de la Carta Política, ninguna autoridad de la República debe intervenir en el normal desarrollo de la Universidad de Panamá, no sólo en cuanto al aspecto de su organización interna sino también en lo que respecta a su patrimonio y el derecho de administrarlo, siempre que los actos que expidan los Órganos de Gobierno que la conformase, se enmarquen dentro de la Constitución y la ley. Es por ello, además, que la Constitución panameña al consagrar la acción de amparo de garantías constitucionales en el artículos 50, precisamente, en armonía con lo dicho sobre los derechos sociales fundamentales, dispuso que el amparo puede dirigirse no sólo contra eventuales infracciones de las garantías sino también contra violaciones de los derechos fundamentales que tengan su origen inmediato y directo en un acto u omisión emitido por cualquier servidor público.

En este orden de análisis del caso examinado, de los documentos allegados al proceso resulta fácil comprobar:
La Universidad de Panamá, a través del máximo organismo de Órgano de Gobierno en asuntos de su competencia legal, y en acatamiento además a lo resuelto por una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia de 30 de septiembre de 1992), mediante Resolución 71o.-8-93 de 6 de abril de 1993 autorizó el pago bienal del personal docente; y, ante la improbación del pago por la Contraloría, la accionante recurrió al procedimiento fiscal establecido en el primer párrafo del artículo 77 de la Ley 32 de 1984 anteriormente citada, es decir, insistir en el cumplimiento de la orden de pago, por lo que la Contraloría General, en ese caso, debió cumplir la orden de pago o, en caso contrario, pedir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto, como lo hizo en el caso de la aludida sentencia de 30 de septiembre de 1992, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte.

Por otra parte, según certificado que aparece a fojas 34 expedido por el Director General de Planificación Universitaria, en el presupuesto vigente de la Universidad de Panamá existe la partida correspondiente para afrontar el gasto que se requiera para pagar el ajuste bienal docente en el año de 1993.

De donde se colige que la Contraloría al interferir o limitar el libre desenvolvimiento de la Universidad de Panamá, impidiendo el cumplimiento de un acto expedido por el organismo superior de Gobierno conforme a sus facultades legales, viola el derecho fundamental consagrado en el artículo 99 de la Constitución Política, y por ende la regla estatuida en el artículo 17 del mismo Estatuto fundamental, que impone a todas la autoridades el deber de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

La Corte estima, en consecuencia, que debe acceder a lo solicitado por la accionante en el amparo propuesto contra la orden impugnada, consistente en la negativa u omisión del señor Contralor General de la República de refrendar las planillas de pagos correspondientes al aumento bienal docente.

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por la Universidad de Panamá, y ORDENA al señor CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA que refrende las planillas de pagos correspondiente al aumento bienal de los docentes de la Universidad de Panamá.

Notifíquese, Cúmplase y Archívese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTA G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ GUERRA EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA LOURDES MARÍA TAMAYO Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ACADÉMICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Lourdes María Tamayo Pérez ha presentado, mediante su apoderado judicial especial, demanda de amparo de garantías constitucionales contra el Director de Educación Secundaria Académica del Ministerio de Educación.

En la demanda se pide a la Corte que se revoque una "orden de no hacer" contenida en la providencia de 9 de septiembre de 1993 en la cual se ordena la suspensión provisional de su cargo como Directora del Instituto Rubiano a la Profesora Lourdes María Tamayo Pérez y a su vez le suspende el recibo de su salario.

Considera el Pleno que estamos en presencia de un acto administrativo el cual es impugnable en la vía contencioso administrativa mediante proceso de plena jurisdicción ante la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, previo agotamiento de la vía gubernativa. En este sentido, no es el amparo de garantías constitucionales la vía procesal adecuada para impugnar el mencionado acto administrativo, criterio que ha sentado la Corte en numerosas ocasiones.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE , por ser manifiestamente improcedente, la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por la señora Lourdes María Tamayo Pérez contra el Director de Educación Secundaria Académica del Ministerio de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA ELICIA CÓRDOBA DE VALENCIA EN CONTRA DE LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

El señor HÉCTOR MUÑOZ BAZÁN interpuso recurso de habeas corpus a favor de ELICIA CÓRDOBA DE VALENCIA y en contra de la Directora Nacional de Corrección. En la parte pertinente, del escrito en que se formula la petición del mandamiento, se expresa que la detenida fue condenada en 1988 a la pena de año y medio de prisión, por lo cual , desde la fecha en que quedó firme la decisión judicial hasta la fecha en que se le ha privado de su libertad, había transcurrido el plazo de prescripción de la pena.

Librado el mandamiento, la Directora de Corrección en su informe manifiesta lo siguiente:

"...
La interna **Elicia Córdoba Chaverra**, con cédula de identidad personal N°5-11-961 fue condenada por el Juzgado 2° del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia del 11 de mayo de 1988, a la pena de un año 6 meses de prisión y 90 días multa por el delito de "Posesión Ilícita de Droga".

La misma ingresó por esta causa el 29-9-86 según oficio de la Fuerza Especial Antinarcótico de esa misma fecha; Egresó el 31-12-86 por fianza de excarcelación según oficio N°2171 de la fecha; Reingresó el 9 de octubre de 1993.
...".

Con el propósito de poder determinar si efectivamente, tal como afirma el accionante, al momento de la detención había transcurrido el término señalado por la ley para que se produjera la prescripción de la pena que se impuso, por Secretaría se solicitó al Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá la remisión del expediente contentivo del proceso. Recibida la actuación judicial, se procede a su revisión.

A foja 105 aparece la sentencia que pronunciara el Juzgado Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá el 11 de mayo de 1988, cuya parte resolutiva dice:

"...
En mérito de lo expuesto, quien suscribe, JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Leu, DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE a ELICIA CÓRDOBA CHAVERRA, mujer, panameña, unida, doméstica, no porta cédula de identidad personal pero manifiesta que la misa (sic) es la N°5-11-961, nació el 7 de septiembre de 1964, hija de Daniel Córdoba y Esher Chaverra, reside en Curundú, Sector El Aguila, casa 14-

15, cursó estudios hasta quinto año de secundaria, y la CONDENA A LA PENAL DE UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN Y NOVENTA (90) DÍAS MULTAS, que se cobrarán a razón de tres balboas diarios (B/.3.00), lo que arroja la suma de doscientos veintisiete balboas (B/.227.00) que debe pagar a favor del erario público o, en su defecto, un día de prisión por cada dos días multa, por el delito de Posesión (sic) Ilícita de Drogas. Asimismo, se le inhabilita para el ejercicio de funciones públicas, de elección popular y de cualquier otro derecho político, por igual término, luego de haber cumplido la pena principal.

Una vez ejecutoriada esta sentencia, envíese copia debidamente autenticada al Departamento Nacional de Corrección para los efectos de la ejecución de la pena. Infórmese al Departamento Nacional de Investigaciones y a la Dirección de Estadística Judicial sobre el resultado final de esta sentencia. Infórmese, además, de la inhabilitación a la Contraloría General de la República y al Tribunal Electoral.

Tiene derecho de la procesada a que se le descuente de la pena impuesta, el tiempo que estuvo detenida como consecuencia de este delito. ...".

La sentencia que se menciona anteriormente fue notificada al señor Fiscal Sexto de Circuito el 17 de mayo, al abogado defensor el 30 de mayo y a la sindicada el 19 de mayo de 1988.

Aparece en ese expediente, por otro lado, providencia dictada por el Juzgado, la que le fue notificada al fiador de la procesada el día 17 de diciembre de 1990 en donde se le concedía un plazo de diez días para presentar a su fiada al tribunal, con el fin de que cumpliera la pena impuesta.

El artículo 98 del Código Penal establece que la prescripción de la pena corre desde el día en que la sentencia queda ejecutoriada o cuando ella haya empezado a cumplirse desde el día en que se interrumpa por cualquier causa. En el caso presente, de acuerdo al artículo 97 de ese mismo cuerpo de leyes, la pena privativa de la libertad prescribe en el término igual al doble de la pena señalada en la sentencia, esto es, en el plazo de treinta y seis meses, y en cuanto a la pena pecuniaria en el plazo de cinco años.

Por otro lado, el artículo 99 de ese mismo Código, en su último párrafo, establece que "se interrumpirá la prescripción de la pena por cualquier acto de la autoridad competente que tiende a la ejecución de la sentencia legalmente notificada al sancionado". De lo expuesto se desprende que si la sentencia quedó ejecutoriada en mayo de 1988, la prescripción de la pena debía producirse en mayo de 1991. Empero, al dictar la providencia del 11 de diciembre de 1990, que le fue notificada al fiador el 17 de ese mismo mes, a fin que presentara a su fiada al tribunal para cumplir la pena impuesta, se produce la interrupción del término de prescripción. En esa fecha nuevamente comienza a correr el término de prescripción que vendría a darse en el mes de diciembre de 1993. Lo anterior nos lleva a concluir que en el presente caso no se han dado los presupuestos que exige el fenómeno de la prescripción de la pena, contemplado en nuestro Código Penal, por lo que la privación de la libertad se ajusta al querer de la ley.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de la señora ELICIA CÓRDOBA DE VALENCIA y ORDENA que sea puesta nuevamente a órdenes de la Directora Nacional de Corrección.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO BERBEY CONTRA LA FISCAL TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Uziel Morán Toribio interpuso ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, formal acción de habeas corpus a favor del señor EDUARDO BERBEY y contra la Juez Cuarta del Primer Circuito de lo Civil de Panamá.

Mediante Resolución de 12 de octubre de 1993 se libró el mandamiento de habeas Corpus contra el funcionario demandado, a fin de que pusiera al detenido a órdenes de ese Tribunal y rindiera, dentro del término de ley, un informe en relación con la detención del señor BERBEY.

Por medio de Oficio No. 1515 de 14 de octubre de 1993, la Suplente de la Juez Cuarta rindió el informe que se le requirió, señalando que ese despacho no había ordenado ni se ventila expediente alguno en el que se ordene la detención del señor BERBEY.

Mediante informe de 19 de octubre de 1993, la Secretaria del Segundo Tribunal informó que en la Sala que preside la Magistrada Sandra Huertas de Icaza se resuelve una solicitud de fianza formulada a favor del señor Berbey, sindicado por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Aidelena Pereira, y en la copia autenticada de la actuación principal que al efecto se utiliza hay constancia de que el señor Berbey está a órdenes de la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial.

En consideración al informe anterior, el Segundo Tribunal Superior se inhibió del conocimiento de la presente acción y dispuso la remisión de lo actuado a esta Corporación de Justicia.

Librado el mandamiento de habeas corpus correspondiente, y rendido el informe sobre las causas de la detención por el agente del Ministerio Público, el señor Uziel Morán Toribio, mediante escrito fechado el 25 de octubre de 1993, desistió de la acción presentada.

Como quiera que conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, "toda persona que haya entablado una demanda, promovido incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente", esta Corporación considera que debe acoger el desistimiento presentado.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el señor EDUARDO BERBEY y ordena que el mismo sea puesto a órdenes de la señora FISCAL TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR CESAR SAUCEDO EN CONTRA DE LA FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CON SEDE EN LAS TABLAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Con fecha 22 de octubre de 1993, fue recibida ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia Acción de habeas Corpus a favor del señor CESAR SAUCEDO, y en contra de la Secretaría de Drogas de las Provincias de Herrera y Los Santos.

De inmediato se libró el mandamiento de habeas corpus, en contra de la Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Las Tablas.

La respuesta a ese mandamiento fue recibida el 25 de octubre de 1993. En 4 puntos la Fiscal Primera Superior dio respuesta a dicho mandamiento, puntos que se transcriben a continuación:

> "PRIMERO: Es cierto que se ordenó por escrito la detención de CESAR SAUCEDO, por la Secretaría Primera de la Secretaría Especializada de los delitos relacionados con Drogas del Cuarto Distrito Judicial, Agencia Las Tablas, que lleva fecha 7 de septiembre de 1993, en el sumario que en su contra se instruye por el delito contra la Salud Pública.
> SEGUNDO: Los motivos o fundamento de hecho y de derecho, que tuvo la Agencia instructora para decretar la detención del recurrente fueron: Los testimonios de los Detectives de la Policía Técnica Judicial, señores JOSÉ GILBERTO BARRÍA RUDAS (Fs. 14-15 y 16) y ABEL ANTONIO FRÍAS (Fs. 17-18); así como también la prueba de campo que dio resultado positivo en 40.21 gms. de cocaína (F.10).
> TERCERO: Mediante Oficio N°155, de 21 de octubre de 1993, dirigido a la Policía Nacional, Zona de Herrera, se puso al detenido CESAR SAUCEDO, a disposición de la Fiscalía del Circuito de Herrera, a cargo del Lic. Julio Lu Osorio, por motivo de jurisdicción y competencia y donde actualmente reposa la investigación.
>
> CUARTO: La Secretaría Primera Especializada para los delitos relacionados con Drogas del Cuarto Distrito Judicial tal como resulta del informe rendido, y la Resolución N°9 del 22 de junio de 1993, que delega funciones a los Fiscales Superiores de las Provincias de Coclé, Los Santos y Chiriquí y a dos Fiscales de Circuito de las Provincias de Colón y Darién".

Por haber sido el detenido puesto a disposición de la esfera circuital, del Cuarto Distrito Judicial, corresponde al Pleno declinar la competencia del presente habeas corpus ante el Tribunal Superior de ese Distrito.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA ante el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Las Tablas, el conocimiento de la presenta acción de habeas corpus, de conformidad con lo que establecen los artículos 2588 y 2602, numeral 2 del Código Judicial.

Notifíquese y Envíese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA IRIS ROSAS DE BETHANCOURT Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ Y SEIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Señora IRIS ROSAS DE BETHANCOURT, interpuso acción de Habeas Corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República, Lcdo. Omar A. Macías Salinas.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus contra el Fiscal Auxiliar, el funcionario contestó que no ordenó detención preventiva en contra de la Señora IRIS ROSAS DE BETHANCOURT, por delito alguno, ni se encuentra en investigación, y que ignoraba los fundamentos de hecho o de derecho en que se basaba su detención.

En vista de lo anteriormente aludido esta máxima Corporación de Justicia consideró conveniente en este caso solicitar a la Directora del Centro Femenino de Rehabilitación , que informara a la mayor brevedad si la Señora IRIS ROSAS DE BETHANCOURT se encontraba detenida en dicho Centro y a órdenes de quién.

La respuesta en este sentido de la Directora del Centro Femenino de Rehabilitación fue: " En atención a su Nota N°1212 del 13 de octubre de 1993, tengo a bien informarle que la Señora IRIS ROSAS DE BETHANCOURT, no se encuentra detenida en este Centro de Rehabilitación".

Pese a las aseveraciones que hace la parte actora en su recurso, el resultado del informe rendido por el funcionario contra quien se libró el mandamiento de Habeas Corpus, así como las gestiones realizadas por la propia Corte Suprema de Justicia revelan:

a Que no se ha acreditado que la Señora IRIS ROSAS DE BETHANCOURT se encuentre detenida.

b Que ninguno de los funcionario a los que se refiere el numeral 1, del Artículo 2602 del Código Judicial ha ordenado su detención.

c Que, en consecuencia, no se da, con relación a este caso uno de los presupuestos esenciales de la acción de Habeas Corpus, a tenor de lo que dispone el Artículo 2565 del Código Judicial.

Que en razón de todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista de que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la acción de Habeas Corpus interpuesta en este caso a favor del la ciudadana IRIS ROSAS DE BETHANCOURT y DISPONE, el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTA
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO SALAZAR Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora **ARACELYS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**, ha presentado acción de habeas corpus a favor del ciudadano **ROBERTO SALAZAR**, quien fue detenido por un agente de la Policía Nacional de la Zona A, el día 7 de octubre próximo pasado.

La detención del señor Salazar se dio, según la recurrente, como consecuencia de una riña que sostuvo éste con un agente policial, pero hasta la fecha no existe orden escrita que ampare esta detención, ni ha sido puesto a órdenes de autoridad competente.

Recibida la acción, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Nacional, quien respondió mediante oficio No.1653-93 de 18 de octubre de 1993, explicando que su despacho no ordenó la detención del señor Salazar, que éste está convaleciente, bajo custodia, en el Hospital Santo Tomás a órdenes de la Juez Nocturna de Policía.

En vista de lo anterior y de que esta Corporación sólo puede conocer de acciones de habeas corpus que se dirijan contra autoridades con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias, (artículo 2602 del Código Judicial) el Pleno debe declinar competencia en el Juzgado Municipal correspondiente.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE de conocer de la acción de habeas corpus presentada a favor del señor Roberto Ernesto Salazar Galán y en su lugar DECLINA COMPETENCIA en el Juzgado Municipal Penal de Turno.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL VILLA GONZÁLEZ Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA. PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

El 12 de octubre de este año, el licenciado Teófanes López, en representación del señor MANUEL MILLA GONZÁLEZ, presentó en la Secretaría General de esta Corporación Judicial demanda de habeas corpus contra el Director General de la Policía Técnica Judicial, por haber ordenado verbalmente la detención de su poderdante y mantenerlo privado de libertad en violación de las leyes y garantías procesales que la Constitución Política le confiere.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial, se recibió en respuesta al informe solicitado, el oficio A.L.268-93 de 14 de octubre de este año, en el que niega tener bajo sus órdenes al accionante, ni haber ordenado su detención. Señala que si bien es cierto que el señor MANUEL MILLA GONZÁLEZ se encuentra bajo custodia de la institución que él dirige, pero a órdenes de la Procuraduría General de la Nación, específicamente a través de la Secretaría especializada relacionada con delitos de drogas.

Reencausado correctamente el mandamiento de habeas corpus al Procurador General de la Nación, se recibió el informe contentivo en la Vista N°41 de 21 de octubre de 1993, que en lo pertinente señala:

> "Al librarse el mandamiento de habeas corpus, correspondiente mediante proveído del 8 de octubre de este año presento el informe escrito que dispone el Artículo 2582 del Código Judicial, como sigue.
>
> 1)- Sí es cierto que este Despacho ordenó la detención de Manuel Milla González, mediante providencia escrita del 11 de octubre del presente año (FS-70).
>
> 2)- La detención de Milla González se fundamenta en el hecho de que el 8 de octubre del año en curso, se practicó diligencia de allanamiento en la EMPRESA SUB-AQUA PANAMÁ, S. A., ubicada en Cristóbal, Provincia de Colón, la cual se dedica a la inspección, reparación y provisión de barcos.
>
> En dicho lugar y en presencia del Gerente de la Empresa, se procedió al registro de rigor, en la oficina principal, en el techo de arriba del cielo raso se localizaron dos (2) paquetes forrados de papel negro, contentivos en su interior de un material blanco que se presume sea "COCAÍNA". Cabe señalar que dentro del mismo local en un archivador ubicado en la oficina de la recepción se descubrieron dos (2) paquetes

más de papel manila con cierta cantidad de polvo blanco, que se presume sea droga ilícita.

Hay que resaltar que el Gerente de la Empresa, antes designada, es el señor Pedro Antonio Emanuel Avila, quien se encontraba en dicho lugar y se ordenó su detención preventiva.

Asimismo, de acuerdo con entrevista sostenida por el prenombrado Emanuele Avila con los miembros de la división de Narcóticos, la droga incautada tenía aproximadamente de un mes (1) a tres (3) semanas de estar en dicho local y con la ayuda de sus empleados logró subirla a su oficina. Igualmente señaló que el señor Manuel Milla González, natural de España, labora en dicha agencia y éste posee llaves de dichas oficinas, lo que indica a juicio de este Despacho que ambos sujetos tenían acceso al recinto donde se encontró la sustancia ilícita.

Manuel Milla González, al ser sometido a los rigores de indagatoria, señaló que efectivamente labora en la empresa sólo como asesor en la reparación de buques y que su jefe inmediato lo es el señor Pedro Antonio Emanuele Avila. Asimismo, niega tener conocimiento de que éste se dedicase al tráfico de Estupefacientes y manifiesta desconocer el lugar, sitio y destino donde se encontró el narcótico; empero sí aceptó que tiene llaves de la empresa.

Los motivos de derecho que fundamentaron la detención preventiva se contienen en los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. En contra del sumariado existen graves indicios de presencia, conocimiento y oportunidad; es empleado de la empresa allanada y posee llaves del local. Por ello se presume que el sumariado tiene acceso permanente a dichas instalaciones, y al encontrarnos frente a un delito Contra la Salud Pública sancionado con la pena mínima que sobrepasa a los dos (2) años de prisión se procedió en consecuencia".

Al informe se adjuntó copia de los antecedentes adelantados hasta el presente en la Secretaría especializada en delitos relacionados con drogas, en el que constan algunas diligencias realizadas, entre ellas, allanamientos, declaraciones indagatorias, examen de las sustancias decomisadas, etc. También en el cuaderno contentivo de la investigación aparece la resolución que ordena la detención y que se apoya en lo previsto por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, que demuestran que el funcionario de instrucción ponderó los indicios graves que se desprenden de sus facilidades para ingresar al local donde se descubrió la droga, su vinculación al establecimiento comercial allanado, lo que es suficiente para sustentar al inicio de esta investigación la medida cautelar personal adoptada. Son indicios racionales de criminalidad que le dan categoría de imputado a Milla González.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada en este caso y dispone que se hagan las comunicaciones correspondientes para que se ponga al detenido a órdenes de la Procuraduría General de la Nación.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA PARRA CHAVERRA Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **MAGALY JANNETH CASTILLO** ha presentado demanda de Habeas Corpus a favor de la señora **ROSA PARRA CHAVERRA** y en contra del Fiscal Auxiliar de la República, por considerar que la detención es arbitraria, ya que se violan derechos humanos consagrados en la Constitución.

Acogida la dicha demanda se libró el mandamiento de Habeas Corpus al Fiscal Auxiliar de la República, quien contestó de la siguiente manera:

"A.- Si es cierto que este Despacho ordenó la detención preventiva de ROSA PARRA CHAVERRA, sindicada por el delito de HURTO, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas, representado por el señor PEDRO GONZÁLEZ MARÍN, mediante proveído calendado el día cinco (5) de mayo de 1993.
B.- La Detención Preventiva de ROSA PARRA CHAVERRA se fundamenta en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

> C.- La recurrente fue trasladada a las instalaciones del Centro Femenino de Rehabilitación, a órdenes de esta Agencia del Ministerio Público, mediante oficio N°5628 del día 18 de mayo de 1993.
> **Asimismo le comunico que el expediente en mención se encuentra radicado en el Juzgado Tercero Municipal de Panamá, Ramo Penal".** (Lo resaltado es nuestro)

En vista de que el expediente de la señora **PARRA** se encuentra en el Juzgado Tercero Municipal de Panamá, Ramo Penal, en donde el Juez Titular asume el conocimiento de la detención, y pierde competencia el Fiscal Auxiliar de la República, lo que procede en este caso es enviar el presente recurso de Habeas Corpus, al Tribunal competente.

Por lo expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA al Juzgado de Circuito de Turno, Ramo Penal del Circuito Judicial de Panamá, la acción de Habeas Corpus a favor de la señora ROSA PARRA CHAVERRA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA MÉLIDA MENDOZA EN CONTRA DE LA FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN LAS TABLAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ Y NUEVE (19) NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora YOLANDA MENDOZA interpuso recurso de habeas corpus a favor de la señora MÉLIDA MENDOZA y en contra de la Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial con sede en Las Tablas.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Las Tablas, dicha funcionaria contestó, mediante Nota de 25 de octubre de 1993, lo siguiente:

> "PRIMERO: Es cierto que se ordenó mediante providencia razona la detención de MÉLIDA MENDOZA, por la Secretaría Primera de la Secretaría Especializada de los delitos relacionados con Drogas del Cuarto Distrito Judicial, Agencia de las Tablas, la cual lleva fecha 7 de septiembre del presente año, en el sumario que en su contra se instruye por el delito CONTRA LA SALUD PUBLICA.
>
> SEGUNDO: Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho, que tuvo la Agencia Instructora para decretar la detención del recurrente fueron los siguientes: Se recabaron los testimonios de los detectives de la Policía Técnica Judicial, señores JOSÉ GILBERTO BARRÍA RUDAS (fs. 14-15 y 16) como también el de ABEL ANTONIO FRÍAS (fs. 17-18); además de la prueba de campo que dio resultado positivo en la cantidad de (40.21 gms) de cocaína (ver fs. 10).
>
> TERCERO: Mediante Oficio No. 155 de 21 de octubre de 1993, enviado a la Policía Nacional, Zona de Herrera, la detenida MÉLIDA MENDOZA, fue puesta a disposición de la Fiscalía del Circuito de Herrera, a cargo del Lic. JULIO LU OSORIO, por motivo de jurisdicción y competencia, lugar donde reposa actualmente la investigación.
>
> CUARTO: La Secretaría Primera Especializada para los delitos relacionados con drogas del Cuarto Distrito Judicial, y la Resolución No. 9 del 22 de junio de 1993, que delega funciones a los Fiscales Superiores de las Provincias de Coclé, Los Santos y Chiriquí y a dos Fiscales del Circuito de las Provincias de Colón y Darién."

La Fiscalía de Circuito de Herrera tiene mando y jurisdicción en una provincia. El numeral 2 del artículo 2602 otorga competencia para conocer de la demanda de habeas corpus, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en este caso, al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Procede entonces declinar el conocimiento de la presente acción de habeas corpus a favor del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2588 del Código Judicial, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en favor del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el conocimiento de este recurso de habeas corpus, a fin de que continúe la

tramitación del caso y lo resuelva, y ORDENA que la detenida MÉLIDA MENDOZA sea puesta a órdenes del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Cúmplase y Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS PÉREZ ALMENGOR EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: Dr. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Luis A. Carrasco ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del ciudadano LUIS PÉREZ ALMENGOR, en contra del Fiscal Auxiliar de la República.

El licenciado Carrasco, fundamenta su acción en que su representado está detenido ilegalmente a órdenes de la autoridad acusada sin que exista una resolución escrita que ordene su detención, por lo que su privación de libertad viola normas legales y constitucionales.

Recibida la demanda se libró mandamiento de Habeas Corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante oficio No. 11234 de 21 de septiembre de 1993, negando que haya ordenado la detención del demandante, por lo que no existen fundamentos de hecho o de derecho para mantenerlo detenido.

En vista de la notificación anterior se solicitó al Director de la Cárcel Modelo que nos informara si el recurrente se encontraba detenido en ese centro penitenciario y a órdenes de qué autoridad, pregunta a la cual respondió el Director en el sentido de que Luis Pérez Almengor no estaba registrado como interno de esa institución.

En un intento por determinar si Pérez Almengor se encontraba detenido, el Magistrado Sustanciador remitió nota al Director de la Policía Técnica Judicial, quien mediante oficio del 15 de octubre de 1993, también negó que el demandante estuviese detenido en esa dependencia.

De todo lo anterior, se colige que el demandante no se encuentra privado de su libertad, por lo que procede ordenar el cese del proceso por sustracción de materia, de acuerdo con lo que establece el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara que se ha producido el fenómeno jurídico de la sustracción de materia por lo que se ordena el cese del proceso.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO MUÑOZ BEDOYA EN CONTRA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Pérez, Marchosky y Morales interpuso acción de habeas corpus a favor del señor **EDUARDO BEDOYA MUÑOZ** en contra del Fiscal Segundo de Circuito. Esta acción fue interpuesta ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, quien libró el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, la cual respondió mediante Oficio 2233 de 10 de julio de 1992, en el sentido de que el accionante estaba a órdenes de la Secretaría Especializada en Delitos Relacionados con Droga de la Procuraduría General de la Nación. De allí que el Tribunal Superior haya remitido fallo inhibitorio, con fecha 15 de julio de 1992, declinando competencia al Pleno de la Corte.

Recibido el expediente en la Secretaría General de la Corte, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Procurador General de la Nación quien respondió

mediante nota DPG-SD-2787-92 de 24 de julio de 1992, señalando que no podía responder el mandamiento, toda vez que el expediente se encontraba en comisión en la Fiscalía Segunda de Colón.

El 30 de julio, el 22 de septiembre y finalmente el 23 de agosto de 1992 se le reiteró al Procurador General de la Nación la solicitud de que respondiera el mandamiento de habeas corpus, y no fue hasta el 23 de septiembre de los corrientes que esta Autoridad contestó, respuesta que se recibió en la Secretaría General de la Corte el 30 de septiembre.

Antes de entrar a considerar el fondo del asunto, el Pleno de la Corte no puede menos que expresar su preocupación por la dilación con que el Ministerio Público viene atendiendo los mandamientos de Habeas Corpus, situación de la que ha tomado nota la Sala Penal, a fin de que, conjuntamente con otros puntos de interés relativos al mismo tipo de asuntos, sean considerados con el señor Procurador General de la Nación.

Ahora bien, la respuesta del señor Procurador General de la Nación es del siguiente tenor:

1.- No fue ese despacho el que ordenó la detención del señor Muñoz Bedoya.

2.- La orden fue dictada por el Fiscal Segundo de Colón y dicho proceso se encuentra actualmente en el Juzgado Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal, para calificar el mérito legal.

En vista de que el Pleno de la Corte sólo tiene competencia para conocer de estos negocios cuando se interponen contra autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias, es necesario emitir una resolución inhibitoria declinando competencia en el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE de pronunciarse sobre la acción de habeas corpus interpuesta por EDUARDO MUÑOZ BEDOYA y DECLINA el conocimiento ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ISAAC RODRÍGUEZ MARTÍNEZ EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

María Rodríguez ha presentado acción de habeas corpus con el objeto de que se declare ilegal la detención que sufre Isaac Rodríguez Martínez, quien se encuentra privado de su libertad corporal por virtud de providencia de 30 de julio de 1993, dictada por el Fiscal Auxiliar de la República, Omar A. Macías.

Por concedido el mandamiento de habeas corpus, el funcionario demandado remitió el informe de conducta que exige el artículo 2582 del Código Judicial. Asimismo envió la actuación cumplida hasta ahora en el presente caso, la que consta de 21 fojas útiles.

A foja 17 de las sumarias aparece la diligencia que decreta la medida cautelar impugnada, la que, en su parte medular, expresa:

> "Con relación a la cédula o documento en la cual aparece una foto de su persona, acepta que le pertenece.
>
> Agrega el señor ISAAC RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, que dicho documento la (sic) adquirió por intermedio de un sujeto de nacionalidad Colombiana, mientras se encontraba en el Restaurante conocido como Compostela, el cual esta ubicado en Avenida Cuba. Este sujeto de nombre CARLOS MARTÍN URIBE le propone la adquisición del mencionado documento, y para la cual el imputado le entregó una foto tamaño carnet. Posteriormente, el señor URIBE, le hizo entrega del referido documento el cual una vez en su poder se la mostró a unos familiares ... (ver fs. 17-19, Subraya la Corte).

Se desprende de la encuesta sumarial que la detención preventiva decretada contra Isaac Rodríguez Martínez tuvo razón de ser en la comisión del delito de falsedad de documento público, en la modalidad que establece el artículo 271 del Código Penal, que es del siguiente tenor:

> "ARTICULO 271. El que, a sabiendas, haga uso o derive provecho de cualquier modo que sea, de un documento falso o alterado aunque no haya cooperado en la falsificación o alteración, será sancionado como si fuese el autor."

De otra parte, el artículo 265 del mismo Código establece la pena imponible al autor del delito de falsificación de documento público:

> "ARTICULO 265. El que falsifique en todo o en parte una escritura o documento público o auténtico de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ..."

La Corte debe, en estos momentos, examinar si la medida cautelar impugnada se ajusta a los requisitos establecidos por el Código Judicial.

Entre los elementos probatorios allegados a las sumarias para la comprobación del hecho punible aparece a folio tres una cédula de identidad personal adulterada, N° 4-194-277, a nombre de Abelardo Ríos Serracín, en la que aparece la foto correspondiente al imputado Isaac Rodríguez Martínez, según su propia manifestación.

En lo que respecta a los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena, milita confesión del imputado en el sentido de que él entregó unas fotos tamaño carnet para la adulteración del referido documento público (ver declaración indagatoria, f.15).

El examen detenido de la diligencia de 30 de junio de 1993, que decreta la detención preventiva, permite establecer que la misma fue ordenada con el cumplimiento de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2159 del Código Judicial: en ella se expresa el hecho imputado, los elementos que comprueban la existencia del hecho punible y los elementos probatorios que vinculan personalmente al investigado. Asimismo, de conformidad con la exigencia establecida por el artículo 2148 de la excerta procesal, el delito que se instruye conlleva sanción consistente en pena mínima dos años de prisión (artículo 265 del Código Penal).

Por las razones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de ISAAC RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JORGE SANIDAS A. A FAVOR DE CARLOS CEPEDA AREVALO EN CONTRA DE LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Sanidas ha presentado acción de habeas corpus contra la Juez del Tribunal Tutelar de Menores y en favor de Carlos Cepeda Arévalo, de quien dice se encuentra detenido a órdenes de la licenciada Méndez de García "sin conocer la cárcel en donde se encuentra".

A juicio del demandante la detención preventiva acusada viola el artículo 21 de la Constitución Nacional en cuanto esta norma establece que "no hay prisión, detención o arresto por deuda u obligaciones puramente civiles". Es el caso que la detención de que se trata fue ordenada al ser declarado Cepeda incurso en desacato, "hasta por treinta (30) días mientras dure su renuencia a consignar la Pensión Alimenticia a favor de las menores Jeny, Massiel y Mariell Cepeda Vásquez", con fundamento en lo que establece el artículo 1318 del Código Judicial.

Por librado el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada rindió el informe de conducta que le fuera solicitado, en el que indica que la actuación principal se encuentra radicada en el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Distrito Judicial de Panamá, en virtud de recurso de apelación interpuesto. Por encontrarse entonces este negocio constitucional en estado de resolver, a ello se procede.

Como viene visto, la censura que se formula a la orden atacada consiste en la alegada violación del artículo 21 constitucional, que prohíbe la privación de libertad "por deudas u obligaciones puramente civiles" siendo que, como se afirma a renglón seguido, "en el caso que nos ocupa el señor Carlos A. Cepeda A. se encuentra sin trabajo permanente y subsiste de trabajos eventuales y aún así a (sic) hecho frente a sus obligaciones para con sus menores hijas" (f.16).

El mismo artículo 21 constitucional establece que "Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley". En tal virtud, lo que debe consagrarse la autoridad de habeas corpus es a examinar si la orden atacada cumple con las exigencias que instituye la norma transcrita. Preciso es, sin embargo, señalar que carece de fundamento la violación constitucional alegada por el demandante, fundada en la improcedencia de la medida por tratarse en este caso -a su juicio- de deudas u obligaciones puramente civiles. En la causa que ahora ocupa la atención del Pleno no opera el supuesto constitucional de obligación corriente de naturaleza civil, por cuanto que se trata del cumplimiento de una obligación surgida de actuación jurisdiccional, como producto de actividad procesal de naturaleza contenciosa.

Como viene expresado, corresponde examinar si a) la privación de libertad obedece a "mandamiento escrito de autoridad competente", b) "expedida de acuerdo con las formalidades legales" y c) "por motivo previamente definido en la Ley".

En cuanto al primero de estos requisitos superiores, se observa (f.12-13) que el propio demandante aportó fotocopia debidamente autenticada de la resolución No. 328-S.C., de 19 de abril de 1993, mediante la cual se declara en desacato a Cepeda Arévalo y se ordena su arresto, diligencia motivada que a todas luces cumple con la primera de las exigencias constitucionales. Como uno de los fundamentos de derecho que cita en su apoyo, en ella se menciona el artículo 1318 del Código Judicial, que es, precisamente, la norma que establece las "formalidades legales" requeridas para imponer sanciones conminatorias o por desacato al demandado en proceso de alimentos, hasta por el término de treinta días de privación de libertad, así como indica también el "motivo previamente definido en la Ley" de la medida, que lo es el desacato originado en alguno de los motivos a que se refieren los tres ordinales que trae norma en cita.

En el caso particular de Cepeda Arévalo, la resolución 328-S.C. considera que "actuó de mala fé (sic) al renunciar al trabajo que mantenía en el IDAAN, por lo que lo Declara en Desacato y ordena su arresto", ello como complemento del desacato resultante en la renuencia de consignar la pensión alimenticia que le fuera impuesta.

La función del tribunal de habeas corpus se limita a verificar la satisfacción, por la medida, de las exigencias constitucionales que la ley desarrolla y no es, en forma alguna, de su competencia proceder a un examen exhaustivo del acervo probatorio en cuanto a otras particularidades del proceso de alimentos.

Por todo lo anterior, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva que sufre Carlos Adolfo Cepeda Arévalo, decretada por la Juez del Tribunal Tutelar de Menores.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR CESAR ANTONIO LORENZO CASTRO Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En escrito dirigido a la Presidencia de esta Corporación la señora **DIANA DE LORENZO** interpuso recurso de habeas corpus en favor de **CESAR ANTONIO LORENZO CASTO** y en contra del señor Fiscal Auxiliar de la República, hecho que motivó que se diera acogida a la acción propuesta librándose de inmediato el mandamiento de habeas corpus contra el señor Fiscal Auxiliar, quien envió el informe respectivo en donde se expresa:

> "A. Si es cierto que el suscrito ordenó la detención del prenombrado **ALEXANDER RUJANO MARTÍNEZ**, mediante proveído fechado el 6 de octubre de 1993.
>
> B. Dicha detención se ordenó en virtud de que el sumariado, en su condición de ex-miembro de las fenecidas fuerzas de defensa, y conocedor del peligro que representaba para la seguridad colectiva, procedió a transportar sin ningún tipo de precaución dos granadas de fragmentación en vías y transportes públicos, poniendo en peligro la vida e integridad de los asociados, los fundamentos de derecho que dan asidero jurídico a la detención se encuentran en los artículos 181, numeral a) y 237 del Código Penal y el 21 48 del Código Judicial.

C. El detenido se encuentra bajo nuestras órdenes en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial de Ancón, y desde este momento he ordenado que quede a disposición de ese Augusto Tribunal de Justicia.

Adjunto expediente contra el señor **ALEXANDER RUJANO MARTÍNEZ** y **CESAR ANTONIO LORENZO CASTRO**, sindicados por el delito contra la Seguridad Colectiva y Hurto Agravado constante de veintisiete (27) fojas útiles.

Cumplido con el trámite correspondiente, el habeas corpus se encuentra en proceso de proferir fallo del caso, previa las consideraciones siguientes.

Conforme con los antecedentes respectivos, se aprecia que en horas de la noche del día 1 de octubre, encontrándose en el salón-bar conocido con el nombre de **EL COMANDANTE** en la comunidad de Chilibre, el señor **ALEXANDER RUJANO MARTÍNEZ** ofreció en venta al propietario de dicho local **BOLÍVAR PASTOR PITTÍ POWEL**, dos granadas de fragmentación, con serie N° COMP-BLS-84B058014, color verde M67, negándose éste a comprarlas y procediendo a enviar al señor **JORGE BUITRAGO** para que informara a la Policía del ofrecimiento que se había hecho, dando como resultado que Agentes del orden público se apersonaran seguidamente al local y capturaran a **ALEXANDER RUJANO MARTÍNEZ**, un ex-miembro de las Fuerzas de Defensa, con las dos granadas y quien desde el momento en que rindió información a la Policía y posteriormente en su declaración indagatoria ante la Fiscalía Auxiliar declarara que las dos granadas que pretendía venderle a **PITTÍ POWEL** le fueron entregadas por una persona conocida por él con el nombre de **CESAR**, a quien conocía, desde cinco años antes, con el objeto de que las vendiera. En su declaración indagatoria en la Fiscalía Auxiliar, reconoce **ALEXANDER RUJANO MARTÍNEZ** las granadas que le entregó CESAR y agrega que cuando **CESAR** le hizo entrega de esas dos granadas le manifestó que "eran dos de las que habían usados (sic) en el robo de la Joyería Manhattan en días pasados, esta Joyería queda cerca de mi trabajo y también me dijo que del robo de la mencionada joyería le iba a tocar algo."

Por otra parte, el propio **CESAR ANTONIO LORENZO CASTRO** acepta que fue la persona que entregó al señor **ALEXANDER RUJANO MARTÍNEZ** las dos granadas para su venta, reconoce las mismas cuando el funcionario instructor se las muestra e indica que encontró dichas granadas "para el año de 1989 mes de diciembre de la invasión a Panamá."

Independientemente de que sea verdad o no ese encuentro, lo cierto es que la detención preventiva decretada por el Fiscal Auxiliar mediante Resolución de 6 de octubre último (fojas 26) se estima legal, por cuanto se cuenta con el propio testimonio de **CESAR ANTONIO LORENZO CASTRO** y con el del otro sindicado **ALEXANDER RUJANO MARTÍNEZ** que lo vinculan con el hecho punible investigado, advirtiéndose que la medida cautelar censurada se expidió por funcionario competente en caso penado con prisión con un mínimo de dos (2) años y en la expedición de la orden de detención se cumplieron con los presupuestos legales requerido para adoptar dicha medida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada por el señor Fiscal Auxiliar de la República y DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a sus órdenes.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR NIVALDO MADRIÑÁN APONTE CONTRA LA FISCAL SÉPTIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Sentencia de 14 de septiembre de 1993, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por la cual se declara legal la detención preventiva de NIVALDO MADRIÑÁN APONTE, a quien se le vincula con los supuestos delitos de tráfico ilícito de drogas, simulación de hechos punibles, delitos contra la libertad individual y otros. Dicha sentencia resolvió en primera instancia la acción de habeas corpus promovida contra la Fiscal Séptima del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Como se indica en el fallo de primera instancia, "al señor NIVALDO MADRIÑÁN APONTE lo vinculan con la acción de intentar comprometer al señor ABDALA BUCARAM ORTIZ con el supuesto delito contra la salud pública relacionado con drogas y para ello le introdujeron en su vehículo un kilo de cocaína, esta acción la llevó a cabo el señor Evaristo Gómez con la ayuda del Agente Jorge Guerra Alvarado (a) "BALLENATO", también

lo vinculan con otros delitos, conforme a la demanda formulada por el señor BUCARÁN ante la Procuraduría General de la Nación, el día 27 de enero de 1992 (fs. 1-16) y así lo declaran los señores Jorge Guerra Alvarado (a) "Ballenato" (FS. 31-32), Jaime Anguizola (fs. 33-34) y Evaristo Gómez (fs. 35-38), cuyas declaraciones extra-juicio fueron debidamente ratificadas ante la Secretaría Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, tal como consta de fojas 83 a 94" (fs. 14-15).

Se observa asimismo, que en la sumarias que se adelantan consta "copia del proceso penal seguido al señor ABDALA BUCARAM ORTIZ (fs. 99-342), por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas, el cual concluyó con un sobreseimiento definitivo y se demostró en el mismo que la droga encontrada en el vehículo respondía a la finalidad de ocasionarle daños al señor BUCARAM" (fs. 15).

De acuerdo al fallo de primera instancia, "en el proceso bajo examen, el señor NIVALDO MADRIÑÁN APONTE y otras personas están vinculadas con un concurso material delictivo, y uno de los hechos punibles consiste en el tráfico ilícito de drogas previsto en el Capítulo V, Título VIII, Libro Segundo del Código Penal, porque la modalidad delictiva para el tráfico ilícito de drogas, prevista en el artículo 258 del Código Penal, prevé el traspaso de la droga a cualquier título y ello contempla sanción de 5 a 10 años. Uno de los verbos rectores significa traspasar la droga y a cualquier título, ese concepto involucra la situación planteada". Señala el Tribunal a quo que en estas sumarias las pruebas testimoniales y documentales aportadas acreditan la existencia del hecho punible que se investiga, y la orden de detención expedida cumple con las formalidades legales exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

El apelante sustenta la alzada interpuesta, señalando en lo medular lo siguiente:

> "... y partiendo de la versión del inculpado **EVARISTO GÓMEZ Jr.**, al político **ABDALA BUCARAM ORTIZ,** se le impusieron en el baúl de su carro, un kilo de cocaína, el cual fue sacado de las bóvedas de la Fuerza Especial Antinarcotráfico del otrora Departamento Nacional de Investigaciones, con el propósito de imputarle al ofendido, un caso penal dentro del Capítulo y Título que regula los delitos contra la salud pública.
>
> De esa versión y de la del señor **JORGE GUEVARA ALVARADO (a) BALLENATO**, se desprende perfectamente que la intención era la de inculparle falsamente a una persona, la comisión de un hecho delictivo y no la de traficar con ese sujeto, cocaína o cualquier otro tipo de estupefacientes.
>
> Ello es así, toda vez que nadie, incluyendo a los declarantes, indicaron que hubiera habido contacto con **BUCARAM ORTIZ** u otra persona allegada a él, con el propósito de transar drogas.
>
> En ese sentido, por más que se pretenda justificar legalmente esa coyuntura, no se dan los elementos exigidos en el artículo 258 del Código Penal, porque no hubo en el ánimo de los hoy acusados, el deseo de traficar, vender o traspasar drogas a nadie, sino, la de involucrar al ofendido, en un supuesto tráfico de sustancias prohibidas, lo cual constituye un supuesto delito de Simulación de un hecho punible.
>
> Para que exista un traspaso de droga a cualquier título tal cual ha pretendido hacer ver el Tribunal a quo, ese traspaso ha debido haber sido aceptado por la contraparte, no obstante, a la persona que se le "traspasó a cualquier título". el kilo de cocaína, negó enfáticamente, haber tenido relación con alguna persona vinculada al tráfico de drogas.
>
> Por ello sostengo, que en caso de haberse perpetrado algún delito, no por **NIVALDO MADRIÑÁN APONTE**, sino por EVARISTO GÓMEZ Jr. y **GUEVARA ALVARADO (A) BALLENATO**, el mismo hubiera sido el de Simulación de un hecho Punible y no el de tráfico de drogas y ello nace de la propia versión de los prenombrados.
>
> Por otro lado, creemos que con respecto al delito de detención ilegal, el Magistrado Sustanciador compartió mi postura y por ello no se refirió a ese hecho punible en la sentencia objetada.
>
> Con respecto al delito de Simulación de Hecho Punible, tal y como lo externamos en el libelo de la demanda constitucional que nos ocupa, el artículo 2148 del estatuto procedimental patrio, veda que este tipo de delito sea sometido a la institución de la detención preventiva y ello obedece a la penalización que consagran los artículos 351, 352 y 353 del Código Penal, lo cual da visos de ilegalidad en torno a la detención ordenada en contra de mi protegido.
>
> Precisamente, cuando sus excelencias penetren al expediente, tal y como lo hizo el Tribunal a-quo, entenderán que jamás se le puede endilgar a los sumariados, el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, ya que los elementos exigidos en el artículo 258 del Código Penal, no se ha satisfecho en esta actuación, máxime cuando dos de los implicados señalaron cuál fue su intención, es decir, la de inculpar al denunciante de haber perpetrado un delito y no el de haber traficado drogas con él, aunado a la circunstancia, que por parte de los coacusados, no hubo nunca la voluntad de cometer actos que atenten contra la salud pública, ya que

> la droga fue sacada de las bóvedas de la Fuerza Antidrogas del DENI y por ello tampoco utilizaron dinero para comprar en el bajo mundo, el kilo que dos de los sindicados señalaron que habían puesto en el baúl del carro del hoy afectado.
>
> Al desvirtuarse el supuesto Tráfico de Drogas; al no poder acreditar la comisión de un delito de Detención Ilegal y al ser sancionado el delito de simulación de un hecho punible, con pena inferior a los dos años de prisión, no cabe duda que la detención padecida por mi cliente es a todas luces ilegal" (fs. 19-20).

Corresponde a esta Corporación verificar si el fallo de primera instancia impugnado se ajusta a derecho, y para ello debe determinarse si la detención preventiva decretada en contra de NIVALDO MADRIÑÁN APONTE es fundada, o sea, si ha cumplido con las formalidades exigidas por la Ley.

Conforme lo indicado en el artículo 2147-A del Código Judicial, nadie será sometido a detención preventiva si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra. El artículo 2148 ibidem establece que podrá decretarse detención preventiva, previo cumplimiento de las formalidades previstas en la Ley procesal, cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión. El artículo 2159 del referido texto legal establece que en todo caso la detención preventiva debe ser decretada por medio de diligencia, so pena de nulidad, en la cual el funcionario de instrucción expresará el hecho imputado, los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible, y los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

En el presente caso, la detención preventiva del MADRIÑÁN APONTE y la de MANUEL ANTONIO NORIEGA, LUIS QUIEL, JORGE GUERRA ALVARADO y EVARISTO GÓMEZ, fue decretada por la Fiscal Séptima del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante diligencia de 23 de agosto de 1993, en la que luego de resumir los hechos que dieron origen a la presente investigación, hace un análisis de las pruebas que obran en contra de los detenidos, entre las que se encuentran "las declaraciones de VILMA CABEZAS DUQUE, quien para la fecha de marras fungía como Inspectora de Narcóticos de servicio en el Aeropuerto de Paitilla, quien señala que para el año de 1986, participó en un allanamiento en la residencia del señor BUCARAM, que luego de revisar el apartamento se encontró nada ilícito, pero al revisar el auto del mismo en el asiento delantero del pasajero un bulto que luego resultó ser cocaína. Se aporta a las investigaciones fotocopia del sumario seguido al precitado señor BUCARAM por delito Contra la Salud Pública". En dicha diligencia se señala asimismo, que la vinculación de los imputados con el hecho punible quedó acreditada con la declaración de EVARISTO GÓMEZ, quien dice que colocó un kilo de cocaína en el auto del señor BUCARAM, en compañía de un agente del G-2 de las extintas Fuerzas de Defensa apodado "BALLENATO", por orden del Capitán LUIS QUIEL y NIVALDO MADRIÑÁN que fue quien le ordenó a LUCINIO MIRANDA que le entregara la droga, teniendo conocimiento después que todo esto había sido por orden de MANUEL ANTONIO NORIEGA. La declaración del señor GÓMEZ es corroborada por la declaración de JORGE GUERRA ALVARADO a folios 92-94 del expediente. Considera la Fiscal del Circuito que las acciones realizadas por los imputados se encuentran enmarcadas en el Capítulo III, Título II, Capítulo I, Título XI y Capítulo V, Título VII del Libro II del Código Penal, cuya pena admite detención preventiva.

Los respectivos capítulos de la ley penal contienen las figuras de los delitos contra la libertad individual, simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales y delitos contra la salud pública.

Del estudio de las presentes sumarias se desprende que el señor ABDALA BUCARAM ORTIZ interpuso denuncia criminal en contra de Manuel Antonio Noriega, Nivaldo Madriñán Aponte, León Febres-Cordero Rivadeneira, Miguel Orellana Arenas, Lucinio Miranda, Luis Quiel y otros por la comisión de delitos contra la libertd individual, inviolabilidad del secreto, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, asociación ilícita para delinquir, simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales, encubrimiento y delito contra la salud pública.

Estos mismos cargos fueron repetidos por el ofendido en posterior acusación particular, en la que explica entre otras cosas, que Manuel Antonio Noriega a solicitud del Ex-Presidente ecuatoriano León Febres-Cordero y de otras personalidades políticas de Ecuador, ordenó realizar una serie de acciones tendientes a desprestigiarlo políticamente, entre ellas la vigilancia ininterrumpida, intervención de conversaciones telefónicas, la colocación por parte de agentes antinarcóticos de droga (un kilo de cocaína) en su vehículo, para que luego le fuera encontrada mediante allanamiento realizado a su residencia, cuando se le golpea y se le somete a tratos degradantes y se le levanta un proceso criminal, que más tarde culmina en sobreseimiento definitivo.

Entre los tipos penales que se le imputan al señor Nivaldo Madriñán Aponte en la presente investigación, se encuentra el previsto en el artículo 258 del Código Penal que sanciona con prisión de 5 a 10 años al que con fines ilícitos compre, venda o traspase droga a cualquier título.

Aunque no corresponde en la presente acción hacer una valoración de fondo sobre las pruebas que obran en el expediente en contra del detenido Madriñán Aponte, el Pleno de la Corte debe manifestar que en las sumarias hay pruebas suficientes que dan cuenta de la existencia de la referida figura delictiva, ya que se llevó a cabo un traspaso de la droga que se mantenía en custodia en las instalaciones del entonces Departamento Nacional de Investigaciones (D.E.N.I.) al vehículo del señor BUCARAM, con el fin ilícito de involucrarlo como autor de un delito contra la salud. Para que haya

dicho traspaso, no es necesario que el mismo deba ser "aceptado por la contraparte" como lo indica el apelante, ya que esta última acción configuraría entonces una coautoría de la acción delictiva. Tampoco es necesario que la droga haya sido adquirida en el bajo mundo con la intención de atentar contra la salud pública, como también agrega el apelante, ya que en el presente caso el kilo de cocaína utilizado se mantenía en custodia en una oficina pública, y el mismo fue sustraído de la institución, colocado en el auto de la víctima a fin de involucrarle en un hecho delictivo, lo que constituye un traspaso con fines ilícitos.

El señor Nivaldo Madriñán Aponte se encuentra vinculado a la colocación de la droga en el vehículo del señor Bucaram, por las declaraciones juradas ante en Notario Público Tercero del Circuito de Panamá del señor JORGE GUEVARA ALVARADO (a) BALLENATO, que al explicar ese hecho expresó que "el Mayor Madriñán me dijo que había una misión que debía ejecutar con el Inspector Gómez. El mayor Madriñán me informó que tenía que acompañar a Gómez y ayudarlo con un trabajo que Gómez iba a realizar en la madrugada y que me pusiera a las órdenes de Gómez ..." (fs. 31). Esta versión es corroborada por el señor EVARISTO GÓMEZ GONZÁLEZ, que con lujo de detalles describe la referida operación en su declaración jurada visible a fojas 35-38 de las sumarias. Ambas declaraciones fueron ratificadas ante la Secretaria Especializada en Delitos Relacionados con Droga de la Procuraduría General de la Nación, de fojas 83 a 94.

Como quiera que se cumplen las formalidades exigidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial para decretar la detención preventiva, debe confirmarse el fallo de primera instancia.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de 14 de septiembre de 1993 dictada por el Segundo Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR PEDRO ANTONIO EMANUELE AVILA EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Filomena Isolina Emanuele Avila ha interpuesto recurso de habeas corpus en favor de **PEDRO ANTONIO EMANUELE AVILA** quien, según afirma, fue detenido desde el 8 de octubre de 1993, por unidades de la Policía Técnica Judicial en su empresa SUB AQUA PANAMÁ S. A., ubicada en la ciudad de Colón.

Dictado el mandamiento correspondiente se solicitó el informe al Procurador General de la Nación quien lo rindió en los siguientes términos:

> "A. La detención de **PEDRO ANTONIO EMANUELE AVILA** fue ordenada por escrito por el Fiscal Tercero del Circuito de Colón, Aérea de Cristóbal, en providencia calendada 8 de octubre de 1993.
>
> B. Los fundamentos de hechos que originaron la detención de **EMANUELE AVILA** gravitan en torno a diligencia de allanamiento practicado el 8 de octubre del presente año en la empresa **SUB AQUA PANAMÁ S. A.**, ubicada en Cristóbal la cual se dedica a la inspección y reparación bajo agua y a suplir barcos. En dicho lugar y en presencia del sumariado se procedió al registro de rigor y en la oficina de la gerencia, en el techo de arriba del cielo raso se localizaron dos paquetes forrados en papel negro contentivos en su interior de un material blanco que se presume sea cocaína. Igualmente dentro del mismo local en un archivador ubicado en la oficina de recepción se descubrieron dos paquetes en papel manila con cierta cantidad de polvo blanco que se presume sea droga ilícita.
>
> Por otro lado el Despacho procedió a tomarle declaración indagatoria a **PEDRO ANTONIO EMANUELE AVILA** para que éste hiciese los descargos correspondientes, empero se acogió al Artículo 22 de la Constitución Nacional y no dio mayores detalles al respecto.
>
> Los motivos de derecho que originan la detención preventiva están fundamentados en los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial ya que en presencia del sumariado se realizó la prueba de campo a la sustancia incautada la que dio resultado positivo, por lo que al encontrarnos frente a un Delito contra la Salud Pública (Droga) que tiene señalada pena mínima que sobrepasa a los dos años de prisión, e identificado el presunto autor del delito se procedió en consecuencia.

C. Actualmente el sumariado se encuentra detenido a ordenes de esta Procuraduría, pero a partir de esta fecha es puesto a disposición del Máximo Tribunal de Justicia. Adjunto envío copia autenticada del sumario correspondiente".

Esta Corporación ha logrado establecer que las anteriores afirmaciones hechas por el señor Procurador General están debidamente probadas en el proceso, y por tanto, se ha aplicado correctamente al caso los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

De consiguiente, se estima que la detención de PEDRO ANTONIO EMANUELE AVILA, ES LEGAL y así lo DECLARA el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARIEL JAÉN EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS RANGEL CASTILLO** ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor de **ARIEL JAÉN** y en contra del **FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA**, por encontrase detenido a órdenes de dicha autoridad en la **POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL**, por el "supuesto delito de **intento de violación**".

Librado el mandamiento de habeas corpus, fue remitido por la autoridad acusada el informe de rigor, en que se expresa lo siguiente:

"...
A. No se ha ordenado la detención preventiva del señor ARIEL GUILLERMO JAÉN T., por el supuesto delito de "VIOLACIÓN CARNAL".
B. En virtud de lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, nunca dispuso ordenar la detención al señor ARIEL GUILLERMO JAÉN, por considerar que no existe mérito para tal acción.
C. No, se encuentra bajo custodia ni a órdenes de este Despacho, bajo la presente causa.
..."

En la misma fecha del informe que antecede pero en horas vespertinas, la Secretaría General de esta Corporación recibió una llamada del proponente de esta acción, Licdo. CARLOS RANGEL CASTILLO, "para informar que ayer en la tarde había sido puesto en libertad el señor ARIEL JAÉN" (Fs.16).

En base a lo expuesto, se infiere que el favorecido con esta acción de habeas corpus no se encuentra privado de su libertad corporal, por lo que debe ordenarse el cese del procedimiento conforme lo establece el artículo 2572 del Código Judicial.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE del procedimiento y el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JULIO CESAR RIVAS MURILLO EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El estudiante de Derecho de la Universidad de Panamá, ERNEST SIMONS, en su propio nombre interpuso Acción de Habeas Corpus a favor del detenido JULIO CESAR RIVAS MURILLO, y en contra del señor Procurador General de la Nación.

Por cumplidas las reglas de reparto el despacho sustanciador libró de inmediato el mandamiento de habeas corpus, en contra de la autoridad demandada quien en el informe de conducta rendida a la Corporación, expresa:

"...
A) Efectivamente ordené la detención de Julio César Rivas Murillo, mediante providencia escrita de 4 de octubre de este año.

B) Los fundamentos de hecho que tuve para proceder ha(sic) ordenar dicha medida surgen de la diligencia de allanamiento practicada el 1 de octubre en el Corregimiento de Calidonia Calle 23, casa 438, en los cuartos 22 y 26.

En el cuarto No. 22 se encontraron dos (2) carrizos de plásticos transparente y ocho (8) envoltorios de papel aluminio que contenían en su interior cierta sustancia que se presume sea "Droga".

En el cuarto No. 26 se encontraron cincuenta y cuatro (54) envoltorios confeccionados en papel aluminio, y tres (3) envoltorios confeccionados con papel color amarillo contentivos en su interior de material que se presume es "Droga"

Cabe señalar que esta diligencia de allanamiento se realizó luego de efectuada una compra simulada, realizada por unidades de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, donde se utilizaron varios billetes americanos.

Durante la diligencia se logró la detención de Julio César Rivas Murillo y Alexis De León, sujetos estos que fueron señalados por los detectives Napito Solano y Teodora Rosvelt, como las personas que les ofrecieron en venta sustanciales ilícitas antes de realizar el allanamiento en mención (F-S-10).

La detención de Rivas Murillo es conforme a derecho, ya que se fundamenta en los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por cuanto se está en presencia de un delito Contra la Salud Pública (Droga), cuya pena mínima sobrepasa los dos (2) años de prisión, y al autor se la ha(sic) sorprendido en flagrante delito.

C) Actualmente el recurrente se encuentra detenido en la Cárcel Modelo de esta ciudad, pero el mismo de inmediato es puesto a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

De los Honorables Magistrados.
(fdo.) Jorge Ramón Váldez Ch.
Procurador General de la Nación."

El señor Procurador General de la Nación conjuntamente con el transcrito informe, remitió fotocopias autenticadas relacionadas con la investigación que adelanta, por el presunto delito "contra la Salud Pública" (Droga), en la que aparecen supuestamente involucrados los sindicados JULIO CESAR RIVAS MURILLO y ALEXIS DE LEÓN.

Para fallar la Corte considera antes:
El accionante entre las consideraciones expuestas en la demanda sostiene que el Procurador General de la Nación decretó la detención preventiva del joven JULIO CESAR RIVAS MURILLO el 4 de octubre de 1993, "bajo el absurdo cargo de `aparecer vinculado a la presunta comisión del hecho punible junto con el señor Alexis De León y sumándose los indicios de presencia en el referido lugar de los acontecimientos", que se pretende vincular a Rivas Murillo con el presunto hecho punible, toda vez que por accidente se encontraban en el inmueble donde realizaban la diligencia de allanamiento los Agentes de Narcóticos, sin encontrárseles en su poder sustancia ilícita ni nada que lo incrimine con el presente caso.

De esa manera alega que la detención preventiva decretada, en el caso de Rivas Murillo viola los artículos 2159 del Código Judicial y los artículos 21 y 22 de la Constitución Política. Veamos:

El examen de las sumarias a cargo del despacho Superior del Ministerio Público desde fojas 1 a 13 revela: por una parte, el allanamiento decretado por la procuraduría General de la Nación el 1 de octubre de 1993 en la Casa No.438, El Marañón, Corregimiento de Calidonia, cuartos 22 y 26, y practicado por la Secretaría Especializada de Delitos relacionados con Droga, encontrándose en el Cuarto 22 "la cantidad de dos (2) carrizos de plásticos transparentes contentivos de una sustancia de color blanco que se presume sea droga; ocho (8) envoltorios de papel de aluminio cuyo contenido es una sustancia de color chocolatoso que se presume sea la droga conocida como **BAZUCO,"**. y en el Cuarto 26, "la cantidad de cincuenta y cuatro (54) envoltorios confeccionados con papel de aluminio contentivos de una sustancia de color chocolatosa en forma de polvo, que se presume sea droga conocida como **BAZUCO**; trece (13) envoltorios confeccionados de papel color amarillo y (1) papel periódico, los cuales son contentivos de hierba seca conocida cono **"MARIHUANA".**

Por otra parte, que en el lugar donde se practicó el allanamiento se encontraba la persona favorecida con el mandamiento librado por la Corte, siendo capturado en compañía además de Alexis De León.

En adición a lo expuesto cabe resaltar que a fojas 14 consta la diligencia motivada, mediante la cual el funcionario instructor de las sumarias ordena la

detención preventiva de Julio César Rivas Murillo, así como también consta la declaración indagatoria rendida por el sumariado a fojas 17 a 21; y, como elemento complementario de la actuación que consta en el referido sumario a fojas 33 aparece el dictamen pericial realizado por la Sección de Sustancias Controladas del Departamento de Criminalística, de la Policía Técnica Judicial, en el que se "Certifica "... que las muestras analizadas resultaron **POSITIVAS**, para la determinación de **COCAÍNA**, en la cantidad de 0.41 Gramos; **COCAÍNA (BAZUCO)**, en la cantidad de 26.04 Gramos y **CANNABIS SATIVA** (MARIHUANA), en la cantidad de 19.10 Gramos".

De lo expuesto se colige, entonces, que en el sumario examinado existen suficientes elementos probatorios que justifican legalmente la detención preventiva de JULIO CESAR RIVAS MURILLO, decretada por el Procurador General de la Nación, en relación con el ilícito y su presunta vinculación, conforme a lo dispuesto por los artículos 2148 y 2159 del Código de Procedimiento Penal, y, en consecuencia, no se han infringido las garantías procesales consagradas en los artículos 21 y 22 de la Constitución Política.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor JULIO CESAR MURILLO RIVAS, y DISPONE que sea puesto nuevamente a ordenes del señor Procurador General de la Nación.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JESÚS ANTONIO BRIONES Y EN CONTRA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

La señora NIDIA EDILMA OROZCO presentó acción de habeas corpus en favor de su menor hijo JESÚS ANTONIO BRIONES. Sostiene en la demanda que hace tres meses el menor fue detenido por haberse metido en una propiedad ajena, en donde fue detenido por las autoridades policiales. Además, solicita que se declare la ilegalidad de la detención de su hijo, por lo que debe ser puesto en libertad.

Al librarse el mandamiento de habeas corpus, se notificó a la Juez del Tribunal Tutelar de Menores para que pusiera al detenido a órdenes de esta Corporación y rindiera el informe correspondiente, en el término de dos horas.

La Magistrada del Tribunal Tutelar de Menores presentó el informe que se transcribe:

> "La suscrita, Licenciada Elsa Méndez de García, Magistrada del Tribunal Tutelar de Menores, con el respeto acostumbrado, damos respuesta al Recurso de Habeas Corpus incoado contra la suscrita y en favor del menor de edad JESÚS ANTONIO BRIONES.
>
> Seguidamente damos contestación al cuestionario formulado con el acogimiento del Recurso de Habeas Corpus:
>
> a) Esta Juzgadora no ha ordenado el internamiento ni la detención del menor BRIONES.
>
> b) El menor se encuentra interno en el Centro de Observación y Diagnóstico del Tribunal de Menores, sin embargo, la causa y el expediente seguido contra el menor JESÚS ANTONIO BRIONES se encuentra bajo la jurisdicción de la Licda. Isis Joseph, Juez del Juzgado Seccional de Menores de La Chorrera, por lo que desconocemos con certeza los motivos de hecho y de derecho que motivaron el internamiento del menor en estudio.
>
> c) El menor JESÚS ANTONIO BRIONES OROSCO se mantiene interno en el Centro de Observación y Diagnóstico del Tribunal de Menores, ubicadoa (sic) en Tocumen detrás del INAFORP, desde el día veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), cuando fue remitido por la Licda. Isis Joseph, Juez Seccional de Menores del Distrito de La Chorrera".

En virtud que el menor JESÚS ANTONIO BRIONES OROZCO se encuentra interno en el Centro de Observación por órdenes de la Juez del Juzgado Seccional de La Chorrera, corresponde el conocimiento de este negocio a uno de los Juzgados de Circuito de la Chorrera, Ramo Penal, por lo que al tenor del artículo 2588 del Código Judicial debe enviarse a dicho tribunal la acción de habeas corpus.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA el conocimiento del presente negocio en favor del Juzgado de Circuito de Chorrera, Ramo Penal, en turno.

Cúmplase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR MARCO ANTONIO BRIONES SÁNCHEZ Y EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA P.T.J. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora **NIDIA EDILMA OROZCO** presentó acción de Habeas Corpus a favor del señor **MARCO ANTONIO BRIONES SÁNCHEZ,** y en contra del Director de la Policía Técnica judicial por considerar que su detención es ilegal.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial, dicho funcionario contestó, mediante Nota de 8 de noviembre de 1993, lo siguiente:

"A. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor MARCO ANTONIO BRIONES SÁNCHEZ.

B. No tiene razón de ser en base al punto anterior.

C. El señor MARCO ANTONIO BRIONES SÁNCHEZ, no se encuentra bajo nuestra custodia, por lo tanto no tenemos conocimiento donde se encuentra".

En vista del Informe Secretarial enviado por el Dr. **CARLOS H. CUESTAS,** Secretario General de la Corte Suprema, que consta a foja 6 del expediente bajo estudio, se desprende que el señor **MARCO ANTONIO BRIONES SÁNCHEZ**, se encuentra recluido en la Cárcel Pública de La Chorrera desde el día 23 de agosto de 1993 por supuesto delito contra la Salud Pública, y se encuentra a órdenes de la Fiscalía Décima Segunda del Circuito Judicial de Panamá.

La Fiscalía Décima Segunda del Circuito de Panamá tiene mando y jurisdicción en una Provincia, y de acuerdo al numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial, los actos que procedan de autoridad o funcionarios con mando y jurisdicción en una Provincia son de competencia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por lo que corresponde al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá conocer del presente Recurso de Habeas Corpus.

En consecuencia,la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA en favor del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá el Recurso de Habeas Corpus interpuesto a favor del señor MARCO ANTONIO BRIONES SÁNCHEZ, a fin de que continúe la tramitación del caso, y ORDENA que el detenido sea puesto a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER ALBERTO MEJÍA BOSQUEZ EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Luis Marcial Quintero Poveda, actuando como apoderado judicial del ciudadano **JAVIER ALBERTO MEJÍA BOSQUEZ,** quien está detenido por el supuesto delito contra la salud pública, ha interpuesto acción de habeas corpus en contra del Magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, licenciado Andrés Almendral.

Señala el accionante que su representado se encuentra injustamente detenido desde el 12 de junio pasado, cuando se realizó un allanamiento de su residencia en la comunidad de Pacora, a propósito de un operativo de la Policía Técnica Judicial, sección de narcóticos, denominado "junio sin nieve".

Recibido el expediente se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio 223 del 9 de noviembre de los corrientes, en el que negó que su despacho haya ordenado la detención del demandante, que se encuentra a órdenes de la Fiscalía Sexta del Circuito del Panamá, además agrega lo siguiente:

> "Por otro lado hago de su conocimiento que JAVIER ALBERTO MEJÍA BOSQUEZ permaneció filiado a disposición de este Tribunal, ya que su Defensor Técnico propuso acción de habeas corpus contra la señora Fiscal Sexta del Circuito, mismo que fue decidido mediante resolución del 20 de octubre de este año declarándose LEGAL la detención de éste.
>
> He de señalarle que durante el trámite de notificación del citado recurso, se propuso otro igual contra la misma funcionaria y a favor de dicho ciudadano; éste fue rechazado de plano en sentencia del 1° de noviembre del actual; y, durante el término de notificación por edicto ordinario es cuando se presenta el recurso que ahora nos ocupa" (fs. 13 y 14).

Efectivamente, al momento de revisar el expediente principal, el Pleno se ha podido percatar que el señor Mejía Bósquez se encuentra a órdenes de la Fiscal Sexta de Circuito del Primer Circuito Judicial, por tanto, esta Corporación no tiene competencia para conocer del fondo de este negocio, la que le corresponde al Tribunal Superior.

No obstante lo anterior, de acuerdo con las constancias el Tribunal Superior ha resuelto dos habeas corpus a favor del mismo ciudadano, interpuestos por el abogado Quintero Poveda y contra la misma orden de detención emanada de la Fiscalía Sexta de Circuito, lo que conoce el abogado, dichas acciones fueron negadas, luego lo que cabe es rechazar de plano la presente acción, pues es manifiestamente improcedente y dilatoria.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el habeas corpus presentado en favor del señor JAVIER ALBERTO MEJÍA BOSQUEZ, contra el Magistrado Andrés Almendral.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUNDO SUPLENTE ENCARGADO, DOCTOR BOLÍVAR DÁVALOS MONCALLO DENTRO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MUEBLE ADUNCA V., EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JAIME PADILLA BELIZ. PANAMÁ,CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

Mediante escrito fachado 5 de octubre de 1993, el doctor BOLÍVAR DÁVALOS MONCAYO, en su carácter de Procurador General de la Nación, Segundo Suplente Encargado, manifiesta impedimento para emitir concepto en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la licenciada MABEL ATENCIO V., en representación del señor JAIME PADILLA BÉLIZ.

La manifestación de impedimento está concebida, en su parte pertinente, en los siguientes términos:

> "...
> Considero que esta solicitud encuentra asidero legal en lo dispuesto en el numeral 13, del artículo 749, cuyo tenor literal es el siguiente:
>
> "artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual está impedido.
>
> Son causales de impedimento:
> ...
> 13. Estar vinculado el Juez o Magistrado con una de las partes por relaciones jurídicas susceptibles de ser afectadas por la decisión;"
>
> Fundamento esta solicitud en el hecho de que he actuado como representante judicial del señor JAIME PADILLA BÉLIZ, dentro de la acción

de inconstitucionalidad que presentara en su nombre, en contra de los artículos 22, numeral 6 y 57 de la ley 16 de 1991."

El Pleno observa que, la circunstancia invocada por el Procurador General de la Nación, Segundo Suplente Encargado, doctor BOLÍVAR DÁVALOS MONCAYO, es causal de impedimento y la misma se encuentra consagrada dentro de las señaladas en el artículo 749, numeral 13 del Código Judicial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el doctor BOLÍVAR DÁVALOS MONCAYO y DISPONE llamar al Fiscal auxiliar de la República, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 350, numeral 2 del Código Judicial, para que asuma el conocimiento del presente negocio.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANUEL BELOI GARCÍA ALMENGOR SOLICITA LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 7° DE LA LEY 1 DE 1985. REPARTIDO EL 31 DE JULIO DE 1990. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro del recurso de inconstitucionalidad propuesto por el licenciado **MANUEL BELOI GARCÍA ALMENGOR** contra el Artículo 7° de la Ley N° 1 de 28 de febrero de 1985, que grava en concepto de impuesto sobre la renta a una tasa del 5%, a los Gastos de Representación que perciben los servidores públicos, el Magistrado **FABIÁN A. ECHEVERS** ha manifestado impedimento el cual fundamenta en el numeral 3 del Artículo 2562 del Código Judicial que dice:

"ARTICULO 2562. Son causales de impedimentos:
...
3. Tener el Magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, interés en la decisión del caso." (lo subrayado es nuestro).

La situación descrita por el Honorable Magistrado se enmarca dentro de la causal invocada y como quiera que el fallo que se dicte en este negocio constitucional pudiera afectar a todos los funcionarios que, por razón del cargo que ocupan, reciben gastos de representación, se considera fundada solicitud de impedimento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado FABIÁN A. ECHEVERS; en consecuencia LO SEPARA del conocimiento del presente negocio, y DISPONE llamar a su suplente para que lo reemplace.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA DRA. CELMA MONCADA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO EL 14 DE FEBRERO DE 1991 (PROCESO LABORAL: DAMARIS CAMBRA DE VALLESTER CONTRA SOCIEDAD ROGA, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Damaris Cambra de Vallester ha promovido, por intermedio de su apoderada judicial, la Licda. Celma Moncada, proceso constitucional en el cual pide a la Corte que declare que es inconstitucional la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo el 14 de febrero de 1991, dentro del proceso entablado por la demandante contra la sociedad ROGA, S. A. (LURIA'S).

Estima la parte demandante que la sentencia por ella impugnada ha infringido los artículos 19, 32, 70, 73 y 74 de la Constitución.

El Procurador de la Administración emitió concepto sobre la pretensión formulada en la demanda mediante la Vista No.103 de 5 de marzo de 1992.

El Pleno pasa a analizar las infracciones que se imputan a la resolución judicial antes mencionada.

Sostiene la demandante que la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo ha infringido el artículo 19 de la Constitución ya que el citado tribunal dejó de lado lo dispuesto en el artículo 214 del Código de Trabajo que exige que el despido sea notificado por escrito y, por ello, se creó una discriminación en contra de la demandante.

No advierte el Pleno violación de esa norma ya que no se percibe que el Tribunal Superior de Trabajo haya creado una distinción injusta al emitir un auto de mejor proveer mediante el cual se hiciera llegar al proceso la carta de despido de la empresa.

No puede perder de vista la Corte Suprema que a la trabajadora Damaris Cambra de Vallester se le pudo comprobar que cobró sumas pagadas por diversos clientes de ROGA, S. A. (Almacén Luria's) y no reportó a la empresa haber recibido esas sumas por lo que no puede pretender ahora la demandante, a través de un proceso constitucional, tratar de desconocer su conducta que fue calificada por el Tribunal Superior de Trabajo como falta de probidad u honradez.

Tampoco se ha infringido la garantía constitucional del debido proceso prevista en el artículo 32 de la Constitución ya que la demandante pudo aportar pruebas, asistió a la audiencia, pudo contradecir los argumentos de la contraparte y tuvo la oportunidad de presentar objeciones al recurso de apelación promovido por la empresa demandada.

En cuanto al artículo 70 de la Constitución estima la Corte que no puede entrar a evaluar dentro de un proceso constitucional la apreciación que hizo el Tribunal Superior de Trabajo en la sentencia impugnada sobre si la empresa cumplió o no con las formalidades previstas en la ley para despedir a la demandante.

En nada choca con la citada norma constitucional que el Tribunal Superior de Trabajo haya decidido dictar un auto para mejor proveer a fin de hacer llegar al proceso la carta de despido. Por el contrario, estima la Corte que el Tribunal Superior de Trabajo actuó correctamente al tratar de averiguar la verdad material en ese proceso laboral a fin de esclarecer si se había cumplido con el requisito formal del despido porque dicho tribunal estimó que se encontraba debidamente probada la conducta deshonesta de la demandante.

En nada infringe la sentencia antes citada los artículos 73 y 74 de la Constitución ya que el primero se refiere a la existencia de la jurisdicción especial de trabajo y el segundo es una norma de carácter programático que declare cuales son los fines de la legislación de trabajo. Tampoco lesiona dicha sentencia otras normas de la Constitución.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, DECLARA que no es inconstitucional la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo el 14 de febrero de 1991, dentro del proceso promovido por la señora Damaris Cambra de Vallester contra la sociedad ROGA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. MARCO ANTONIO HERRERA MOW, EN CONTRA DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL NUMERAL 2 DEL ART. 202 DEL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO JUDICIAL Y DEL TERMINO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTENIDO EN EL PÁRRAFO TERCERO, NUMERO 2 DE LA MISMA EXCERTA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

El licenciado MARCO ANTONIO HERRERA MOW demandó la declaratoria de inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 202 del Código Judicial y la frase "que sólo será susceptible del recurso de reconsideración" contenida en el párrafo tercero de dicho artículo.

Una vez admitida la demanda, le fue corrida en traslado al Procurador General de la Administración, quien contestó el traslado en la vista N°295 del 17 de junio de 1993.

Continuando con la ritualidad establecida para esta clase de juicios, el negocio fue fijado en lista por el término de 10 días y se efectuaron las publicaciones del edicto correspondiente. Posterior a ello, tanto el demandante como un interesado presentaron argumentos por escrito sobre el caso. Por lo que habiéndose celebrado cada uno de los trámites de ley, toca al Pleno de la Corte decidir sobre los cargos de inconstitucionalidad presentados en esta acción.

Los hechos en que el demandante fundamenta la acción hacen mención de las leyes a través de las cuales se adoptó el Código Judicial y posteriormente se modificó, adicionó y derogó parte de dicho Código, el cual contempla el Título VIII denominado Deberes, Responsabilidades y Facultades de los Magistrados y Jueces, en cuyo texto se encuentra la norma que contiene el párrafo y la frase señalados de inconstitucional.

A continuación se transcribe el artículo 202 del Código Judicial, subrayándose el párrafo y frase considerados inconstitucionales por el accionante:

> "Artículo 202. Los Magistrados y Jueces tendrán las siguientes facultades disciplinarias:
>
> 1- Sancionar con multa de DIEZ BALBOAS (B/.10.00) a CINCUENTA BALBOAS (B/.50.00) a sus subalternos, a los demás empleados públicos y a los particulares que no cumplan o demoren sin causa justificada, las órdenes que dichas autoridades les impartan en ejercicio de sus funciones e imponer las demás multas que autoriza este Código. La multa se impondrá por resolución motivada, previo informe secretarial o comprobación sumaria y contra ella sólo procederá el recurso de reconsideración.
>
> Ejecutoriada la resolución que imponga una multa, si no se consigna su valor, se convertirá en arresto a razón de DOS BALBOAS (B/.2.00) por cada día y sin exceder de veinte días.
>
> 2- Imponer pena de arresto hasta por cinco días a quienes le falten el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.
>
> Para imponer esta pena es necesario comprobar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho o con prueba testimonial sumaria.
>
> La sanción se impondrá por medio de resolución motivada, que sólo será susceptible del recurso de reconsideración dentro de los tres días siguientes a su notificación personal.
>
> En firme la resolución, se remitirá copia de ella al correspondiente funcionario de policía del lugar, quien deberá cumplirla inmediatamente;
>
> 3- Expulsar de las audiencias a quienes perturben su curso;
>
> 4- Sancionar con multa de DIEZ BALBOAS (B/.10.00) a CINCUENTA BALBOAS (B/.50.00) a los patronos o representantes legales de la empresa que impidan a sus trabajadores la comparecencia al despacho judicial para rendir declaración o para atender cualesquiera otra citación que se les haga".

Sostiene el licenciado Herrera Mow que la disposición constitucional que estima infringida es el artículo 32, cuyo contenido es el siguiente:

> ARTICULO 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

En cuanto al concepto de la infracción, manifiesta el demandante que el artículo 32 resulta violado en concepto de violación directa "toda vez que la imposición de la pena que postula -entiéndase el artículo 202 del Código Judicial-, se sustentará antojadiza y unilateralmente en la certificación de un empleado de la oficina donde labora el Magistrado o Juez o conforme a la prueba testimonial sumaria, que se reflejará en la deposición de subalternos, los cuales, dado el temor reverencial, deberán proceder acorde a los dictados de su superior, en perjuicio del sancionado y sin que se surta el contradictorio que debe regir el trámite legal conforme al debido proceso".

Expresa el letrado que a la persona que se persigue sancionar debe dársele todas las garantías procesales que contempla el debido proceso, ya que el artículo 202 no está desarrollando el artículo 33 de la Constitución Nacional que sí permite sancionar sin juicio previo. Y que el procedimiento que establece la norma procesal presupone un juicio disciplinario previo, el cual debe surtirse conforme al artículo 32 de la Constitución que garantiza el debido proceso.

Con relación a la frase "que sólo será susceptible el recurso de reconsideración", alega el accionante que dicha frase viola directamente el artículo 32 de la Constitución, puesto que atenta contra el principio rector de la doble instancia al dejar en manos del mismo juzgador la posibilidad nugatoria de enmendar el

agravio. En ese sentido, considera que es el recurso de apelación el que debe concederse, para que así de manera imparcial, sea el superior quien decida (fs. 1-5).

El Procurador de la Administración contestó el traslado que le fue corrido, en el cual después de analizar las alegaciones hechas por el demandante, llega a la conclusión de que el párrafo y frase del artículo 202 acusados de inconstitucionales, no violan el artículo 32 de la Constitución Nacional, "ya que para imponer la pena de que trata el numeral 2 del artículo 202, se exige que sea comprobada con la certificación de un empleado de la oficina "que haya presenciado el hecho" (NO CUALQUIER FUNCIONARIO) o con prueba testimonial sumaria, además que se puede impugnar la resolución a través del recurso de reconsideración".

Anota el Procurador que contrario a lo que expone el actor, quedan salvaguardados los presupuestos del artículo 32 de la Constitución y no se violenta la garantía del debido proceso legal que este artículo consagra (fs.9-15).

Por su parte, el licenciado Adolfo Alberto Benedetti Evers, hizo uso de al facultad que le confiere el artículo 2555 del Código Judicial y, dentro del término correspondiente, presentó argumentos escritos sobre el caso.

El interesado tácitamente apoya las alegaciones del accionante, toda vez que considera que "la aplicación indiscriminada de los preceptos atacados de inconstitucional colocaría a todos los profesionales del derecho y a los litigantes a merced de la voluntad omnímoda y caprichosa de los juzgadores que podrían sancionar a aquellos que por alguna circunstancia se harían blanco de las pasiones desbordadas de los jueces sin que las mismas puedan encontrar una morigeración procesal en la doble instancia que rige universalmente en la materia judicial y sin la cual quedarían inexistentes las garantías fundamentales que consagra la Carta Magna".

En otro aspecto el licenciado Benedetti se refiere a las consecuencias punitivas que sobre la libertad individual del abogado tiene el artículo 202 del Código Judicial, situación que a su juicio "constituye un nefasto corolario a la aplicación de las normas que convierten al legista en un paria del proceso, inerme frente a la voluntad tanto del juzgador como de sus respectivos patrocinadores". Todo esto en detrimento del derecho que tienen los ciudadanos de ejercer sus oficios dentro de los parámetros de seguridad y protección profesional (fs. 23-24).

El demandante, licenciado Herrera Mow, también presentó argumentos por escrito. Al reafirmar las alegaciones planteadas en la demanda, señala que en el proceso disciplinario que contempla el artículo 202 del Código Judicial, no se surte el debido proceso legal, ya que dentro del proceso disciplinario se debe hacer imperioso escuchar los descargos que el eventual sancionado presente, para luego de ello comprobar entre ambas versiones o elementos de pruebas cuál es más idónea a fin de que amerite o no una sanción. Anota el alegante que la inconstitucionalidad de la norma radica en la forma en que se hace esa comprobación.

En ese sentido menciona que la certificación que debe hacer el empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, aparte de ser sospechosa, no se surte conforme al principio del contradictorio.

Hechas las anotaciones sobresalientes de cada una de las posiciones presentadas durante la sustanciación de esta demanda de inconstitucionalidad, corresponde al Pleno de la Corte exponer sus consideraciones en torno al debate que se plantea.

Previamente se hace necesario establecer que lo que se cuestiona en esta acción no es la facultad del juez o magistrado de imponer sanciones disciplinarias a quienes les falten "el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas". Facultad que, demás está decir, es una regla imperiosa de ética, que consiste "en respetar al juez, al propio tiempo que exigir del juez igual respeto" MONROY CABRA, Marco Gerardo, Ética del Abogado, Librería Jurídica Wilches, Colombia, 1985, pág. 45); y que se ejerce no solamente en contra de los abogados que gestionan ante los despachos judiciales, sino también contra las partes, particulares o público en general.

El accionante claramente ha determinado que es el procedimiento que se sigue en el juicio disciplinario que dispone el artículo 202 del Código Judicial, según su criterio, violenta el principio del debido proceso, fundamentalmente porque no se contempla la realización de un juicio previo en el cual la parte contraria al juez pueda hacer los descargos correspondientes y porque la prueba que se practica antes de decidir la pena de arresto es ofrecida por un testigo sospechoso y por último, porque el principio de la doble instancia no tiene cabida en la norma denunciada.

Tal como lo anotó el Procurador en su Vista ya comentada, esta Corte ha sentado jurisprudencia en el sentido de que el principio del debido proceso contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional involucra tres aspectos: 1. El derecho a ser juzgado por el juez competente previsto en la Ley; 2. El derecho a que el proceso se lleve a cabo de conformidad con los trámites previamente establecidos por la Ley; y, 3. El derecho a ser juzgado por una sola vez.

De lo planteado por el actor, se colige que el segundo de estos tres elementos es el que resultaría conculcado por el párrafo y la frase del artículo 202 del Código Judicial que ha censurado como inconstitucionales.

La Corte no opina igual. El mencionado artículo 202 guarda relación con una sanción disciplinaria a que se harán merecedores quienes le falten el debido respeto al juez en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, es decir, es este un

proceso especial, independiente y de distinta naturaleza de los procesos civiles o penales que consagra el Código Judicial. En este aspecto hay que resaltar que es precisamente la naturaleza o razón de ser de la contienda la que va a establecer la clase de procedimiento con que se surtirá la misma.

El artículo 202 le otorga a los jueces y magistrados un poder disciplinario consistente en imponer pena de arresto hasta por cinco días a quienes, como hemos dicho, le falten el debido respeto. Seguidamente dicho artículo dispone que "para imponer esta pena es necesario comprobar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho o con prueba testimonial sumaria". Y más adelante dispone que la resolución motivada que se dicte, "sólo será susceptible del recurso de reconsideración ...". Es este precisamente el trámite previamente establecido por la ley a través del cual debe llevarse a cabo el proceso disciplinario. Proceso que, en todo caso, es distinto al que se surte ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados por faltas a la ética, las cuales en veintisiete causales describe el artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.

El hecho que da origen al procedimiento que el abogado actor califica de inconstitucional, es una ofensa que se hace a la persona e investidura del juez. Siendo que dicha ofensa, en principio, se puede proferir de manera regular en el despacho judicial, obviamente deben resultar como testigos funcionarios del despacho. No puede afirmarse que la certificación que rinda este funcionario tenga el carácter de sospechosa, a la luz de lo que prevé el artículo 896 del Código Judicial, artículo que se refiere a los supuestos de testimonios sospechosos sobre todo para los procesos surgidos a raíz de pretensiones legales.

El juez o magistrado es el titular del despacho, y como tal representa a la justicia, además de estar investido de autoridad. Tiene una sagrada función que ejercer y en el cumplimiento de ella merece y debe respeto, de la misma forma en que correlativamente merecen y deben respeto los asociados que necesitan en un momento determinado de ese servicio judicial.

El accionante considera que el incidente en el cual el juez es objeto de irrespeto por parte de terceras personas debe ser sometido a los trámites regulares y ordinarios de un juicio común. El legislador no lo consideró así y por eso creó un procedimiento distinto, de tipo sumario. Este procedimiento se encuentra regulado previamente en la ley y a criterio del Pleno no es violatorio del debido proceso, como tampoco lo es el hecho de que contra la decisión del juez solo cabe el recurso de reconsideración. Admitir el criterio de que por esa razón se viola el principio de la doble instancia equivale a considerar violatorias todas las normas del Código Judicial que resuelven situaciones en las que por su naturaleza sólo pueden impugnarse a través del recurso de reconsideración; y peor aún, esto conduciría a dejar sin efecto más de diez normas de dicho Código que establecen la irrecurribilidad de algunas decisiones, es decir, ni siquiera es admisible el recurso de reconsideración.

El procedimiento que contempla el Código no es antojadizo, como tampoco es omnímodo el poder que tiene el juez. Este tiene la responsabilidad de guardar el orden y velar por el debido funcionamiento del despacho a su cargo, en ocasiones, por esa misma razón es objeto de insultos, ofensas e incluso de agresiones verbales y hasta físicas; cuando esta situación se da, necesariamente hay que construir los mecanismos de reacción y solución jurídicos con efectos persuasivos, ejemplarizantes y expeditos. ¿Acaso podría tal solución encontrarse sometiendo ese incidente a los trámites legales ordinarios? Definitivamente la respuesta es negativa ya que propiciaría el irrespeto, el caos y el desorden.

La premura en resolver faltas disciplinarias de la índole que sanciona el segundo párrafo del numeral 2 del artículo 202, amerita trámites también expeditos, que permiten reestablecer el equilibrio y sosiego dentro del ambiente de respeto y seguridad que debe rodear la delicada función pública de administrar justicia. A criterio de la Corte, ese procedimiento no es violatorio del derecho fundamental del debido proceso que la Constitución consagra a favor de los ciudadanos.

El demandante perdió de vista el contenido del artículo 33 de la Constitución Política vigente, que prevé la posibilidad de que algunos servidores públicos puedan sancionar sin juicio previo, dándose el caso específico del numeral 1° que dice:

> "ARTICULO 33. Pueden penar sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos de la ley:
>
> 1. Los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción, quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo del desempeño de las mismas.
>
> 2. Los Jefes de la Fuerza Pública, quienes pueden imponer penas de arresto a sus subalternos para contener una insubordinación, un motín o por falta disciplinaria.
>
> 3. Los capitanes de buques o aeronaves quienes estando fuera de puerto tienen facultad para contener una insubordinación o motín o mantener el orden a bordo, y para detener provisionalmente a cualquier delincuente real o presunto".

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que el Artículo 202, numeral

2, párrafo segundo, y la frase "que solo será susceptible del recurso de reconsideración", no vulnera el artículo 32 de la Constitución Nacional ni ninguna otra norma de rango constitucional.

Notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ CONSULTA ANTE EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICDO. VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO EN REPRESENTACIÓN DEL DR. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ EN CONTRA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO**, actuando como apoderado judicial del Dr. Carlos Iván Zúñiga, Rector y Representante Legal de la Universidad de Panamá, ha presentado advertencia de inconstitucionalidad del artículo 1165 del Código Fiscal, aplicable al amparo de garantías constitucionales, presentado por esa institución de educación superior contra el Contralor General de la República.

La Magistrada Sustanciadora del amparo elevó la consulta al Pleno de la Corte y de acuerdo a las reglas del reparto dicho negocio quedó radicado en este despacho.

Recibida la acción, toca resolver, primeramente, sobre su admisibilidad, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:

De acuerdo con el artículo 2549 del Código Judicial cuando a alguna de las partes dentro de un proceso advierta que la disposición legal o reglamentaria que se aplicará al caso es inconstitucional se lo advertirá a la autoridad correspondiente quien elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia (PLENO). En este caso se trata de una advertencia dentro de un amparo de garantías constitucionales, acciones de las que conoce el Pleno de la Corte, pues se trata de interpretación y aplicación de la normativa constitucional.

Luego de transcribir la norma impugnada, el advertidor señala lo siguiente:

> "La norma transcrita establece un procedimiento en el caso que el Contralor General de la República impruebe un pago. Al efecto señala lo siguiente:
>
> a) En caso de insistencia el Contralor envía el caso a la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia.
>
> b) La persona afectada podrá demandar la revisión ante la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia." (Fs.3-4)

Considera el advertidor que la norma impugnada es una limitante al ejercicio del artículo 50 de la Constitución, que consagra la institución del amparo de garantías constitucionales, pues establece que es necesario agotar la vía ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para poder llegar al amparo. Agrega que lo que se demanda en el amparo es la negativa del Contralor General de la República a pagar los salarios de los funcionarios de la Universidad de Panamá, "cuyo apercibimiento es una garantía constitucional, los que por ser necesarios e indispensables para la subsistencia no pueden dejarse a merced de una demanda contencioso administrativo de larga y tediosa tramitación." (Fs.5)

En vista que se trata de una advertencia dentro de una acción de amparo de garantías Constitucionales, es necesario tener presente fallos de la Corte en los que se han negado éstas últimas, en base a los siguientes razonamientos:

> 1. Que en las demandas de amparo, de acuerdo con el artículo 2620 del Código Judicial, sólo cabe incidentes de recusación por impedimento, por lo que la Corte ha interpretado que no procede la advertencia de inconstitucionalidad, pues la redacción del artículo es imperativa. (Sentencia del 22 de octubre de 1993.)
>
> 2. Que desde el momento en que la Corte se convierte en Tribunal Constitucional no procede introducir advertencias, pues el Pleno va a resolver en base a normas constitucionales y no de carácter legal, que son las que se advierten.(Sentencia del 22 de enero de 1992).

En vista de lo anterior y de que el caso en estudio tiene las mismas circunstancias, el Pleno de la Corte considera que la presente advertencia no debe ser admitida.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Virgilio Vásquez Pinto en contra del artículo 1165 del Código Fiscal.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DESARROLLO DE CERMEÑO S. A. PARA QUE SE DECLARE QUE SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS 4 Y 7 DEL DECRETO N° 17 DE 3 DE ABRIL DE 1974 EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Sucre, Arias, Castro & Reyes, actuando en nombre y representación de la sociedad DESARROLLO DE CERMEÑO, S. A., interpuso acción de inconstitucionalidad para que se declaren que son inconstitucionales los artículos 4 y 7 del Decreto N° 17 de 3 de abril de 1974, publicado en la Gaceta Oficial N° 17.589 del jueves 9 de mayo de 1974.

La demanda fue admitida por cumplir con los requisitos formales del caso y, en consecuencia, se corrió en traslado al señor Procurador General de la Nación para que emitiera concepto.

Consta en el expediente que se han cumplido a cabalidad todos los trámites procesales pertinentes, motivo por el cual la Corte pasa a decidir el fondo de la pretensión con base en las siguientes consideraciones:

EL FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN

El estudio del libelo pone en evidencia que la pretensión del recurrente encuentra sustento en cuatro argumentos básicos:

Primero: que la sociedad DESARROLLO DE CERMEÑO, S. A. era propietaria de la finca 3119 inscrita en el tomo 62, folio 130 del Registro Público, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá;

Segundo: que mediante Decreto Ejecutivo N° 17 de 3 de abril de 1974, dicha finca fue expropiada a favor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para fines de reforma agraria y por motivos de interés social urgente;

Tercero: que a pesar de que el propietario de la finca nunca fue abordado por autoridad alguna para el establecimiento de la suma que se le debía pagar en concepto de indemnización por la expropiación, no se realizó el juicio de expropiación a que aludía el artículo 3 de la ley 57 de 1946 y demás disposiciones concordantes del Código Judicial que regía en aquel entonces, sino que por el contrario el Ejecutivo fijó unilateralmente el monto de la indemnización; y

Cuarto: que como consecuencia de lo anterior han resultado violados los artículos 32 (que en 1974 era el 31), 44 (que correspondía al 43), 47 (que correspondía al 46), 287 (que correspondía al 251) y 17 de la Constitución Nacional.

LA OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En su debida oportunidad el Procurador General de la Nación opinó que los artículos impugnados (4 y 7 del mencionado Decreto Ejecutivo) violaban únicamente los artículos 32 y 287 de la Constitución vigente.

A juicio de este servidor público, el primer precepto constitucional resulta infringido porque no se realizó el correspondiente juicio de expropiación para fijar el monto de la indemnización; en tanto que el artículo 287 resulta conculcado por cuanto que al establecer el artículo 4 del Decreto un plazo de 40 años para que los bonos agrarios pudieran redimirse, se estableció un plazo que supera con creces el plazo de 20 años que establece el citado precepto constitucional para que las obligaciones sean redimibles.

ASPECTOS DE FONDO

Antes de proceder a fallar el fondo de la pretensión, la Corte estima oportuno abordar algunos conceptos que guardan relación con el tema a debatir.

La expropiación puede ser definida como el instrumento mediante el cual el Estado se hace dueño de un bien perteneciente a un particular, con el objeto de destinarlo a la satisfacción de un interés público o social.

Tradicionalmente en nuestra legislación se han regulado dos tipos de expropiación que han sido denominadas, expropiación ordinaria y expropiación extraordinaria. La primera tiene lugar cuando una Ley declara los motivos de utilidad pública o de interés social que el bien que va a ser expropiado debe satisfacer. En este caso es necesario que un juez decrete la expropiación, que fije el monto de la suma que debe recibir el expropiado como indemnización, y que el Estado pague previamente la indemnización antes de que se haga la transferencia del bien.

Por su parte, para que la expropiación extraordinaria tenga lugar, no se requiere que una Ley fije los motivos de utilidad pública que deban satisfacerse, sino que el Ejecutivo está facultado para decretarla en caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente que exija medidas rápidas. En este caso, y a diferencia de la expropiación ordinaria, el Ejecutivo puede ocupar inmediatamente el bien expropiado sin siquiera haber pagado la indemnización, pues ésta puede ser pagada con posterioridad al acto de expropiación y ocupación del bien.

Pues bien, como quiera que el Decreto parcialmente impugnado fue expedido en abril de 1974, es necesario hacer un análisis de la legislación que estaba vigente en esa fecha para poder determinar si los artículos impugnados contradicen algún precepto constitucional.

En ese sentido, tenemos que el Código Judicial de 1917 reguló lo relativo a la expropiación en el Capítulo IV, Título VIII, del Libro II del Código Judicial. Es de notar que este cuerpo legal estableció dos procesos para la expropiación: uno ordinario y otro sumario, según el motivo que daba lugar a la expropiación, tal como se infiere de los artículos 1467 y 1481. En ambos supuestos, la autoridad administrativa (Poder Ejecutivo o Alcalde de Distrito) debía promover un juicio para que un juez decretara la expropiación y fijara la suma de indemnización en favor del expropiado. Dicha suma debía ser pagada antes de que se le entregara a la autoridad demandante el bien expropiado, según se deduce de los artículos 1479 y 1488 ibidem.

Como puede apreciarse, la descripción del procedimiento de expropiación que contemplaba el Código Judicial derogado, pone en evidencia que el mismo estaba en consonancia con los principios inherentes a la denominada expropiación ordinaria. Ello es así, porque las normas contenidas en el Capítulo referente a la expropiación, fueron expedidas durante la vigencia de la Constitución de 1904, la cual no consagró en sus disposiciones la llamada expropiación extraordinaria.

Ahora bien, estando vigente la Constitución de 1946, la Asamblea Nacional de Panamá expidió la Ley 57 de 30 de septiembre de 1946, a través de la cual se desarrollaba el artículo 46 de la Constitución Nacional, que regulaba la expropiación ordinaria. Sin embargo, aun cuando la mencionada ley estaba dirigida a desarrollar el artículo 46 de esa Constitución, lo cierto es que en el artículo 3 no sólo estableció el procedimiento que debía seguirse para la expropiación ordinaria, sino que también desarrolló la expropiación extraordinaria que figuraba en el artículo 49 de la Constitución de 1946. El texto del referido artículo 3 es del siguiente tenor:

> "Artículo 3. Cuando el Estado necesite en todo o en parte una finca de propiedad particular para una obra de utilidad pública o de beneficio social, llamará al propietario y le notificará el propósito del gobierno, a fin de señalar, de mutuo acuerdo, el precio razonable de la misma. Si el propietario y el representante del gobierno no llegasen a convenir en el valor de la propiedad, la Nación promoverá el juicio de expropiación correspondiente. En caso de necesidad urgente al tenor del artículo 49 de la Constitución el gobierno procederá a tomar posesión del bien inmediatamente.
>
> Ocupado ya el bien y convenido el precio con el propietario, la nación o el municipio, según el caso, efectuarán los pagos en los términos del convenio o sentencia, según proceda ..." (la subraya es del Pleno).

Al analizar el texto anterior, se deduce que en caso de que fuese necesario decretar una expropiación extraordinaria (por el hecho de que se presentaba alguna de las condiciones que daban lugar a la adopción de una medida como esta), el Ejecutivo estaba facultado para expedir el decreto de expropiación, y si no había logrado ponerse de acuerdo previamente con el expropiado sobre la suma que debía pagarle en concepto de indemnización, el gobierno estaba facultado para proceder a ocupar el bien expropiado, pero debía entablar un juicio para que un juez fijara el monto de la indemnización.

Lo anotado tiene tremenda importancia, por cuanto que los artículos 46 y 49 de la Constitución de 1946 corresponden, respectivamente, a los artículos 44 y 46 de la Constitución originaria de 1972 (es decir al texto de la Constitución cuando no había sufrido las reformas de 1978 y de 1983, y que estaba vigente en abril de 1974 cuando se dictó el Decreto parcialmente impugnado).

Se dice que lo anotado es virtualmente importante, porque siendo que entre los citados preceptos de la Constitución de 1946 y los de la Constitución originaria de 1972 no existen diferencias normativas sustanciales, hay que concluir que, al no haber

perdido vigor el artículo 3 de la Ley 57 de 1946 por la entrada en vigencia de la Constitución de 1972, dicho artículo (el 3 de la Ley 57 de 1946) también desarrolló los artículos 44 y 47 de la Constitución originaria de 1972 y, desde este punto de vista, había que tomarlo en consideración al momento en que se expidió el Decreto de expropiación parcialmente impugnado.

En efecto, de acuerdo a los considerandos y al artículo 1 del Decreto recurrido, las razones por las cuales se decretaba la expropiación de la finca del demandante, obedecían a los problemas provenientes de la ocupación precaria de tierras, lo cual, a tenor del artículo 32 del Código Agrario en concordancia con el artículo 46 de la Constitución de 1972, representaba un motivo de interés social urgente que requería la adopción de medidas rápidas para solucionarlo.

En ese sentido, le asiste razón al Procurador General de la Nación cuando asevera que la expropiación decretada tiene las características de extraordinaria, porque ciertamente el artículo 46 de la Constitución originaria de 1972 consagraba esa institución.

Ahora bien, teniendo presente los conceptos y lineamientos que se han vertido con relación a las clases de expropiación, y tomando en cuenta que mediante el Decreto parcialmente impugnado se decretó una expropiación extraordinaria, no cabe la menor duda que el Ejecutivo podía ordenar tanto la expropiación como la ocupación inmediata del terreno, como hizo, sin necesidad de que en un juicio previo se decretara la expropiación. Sin embargo, lo que no podía hacer el Ejecutivo era fijar unilateralmente la suma que correspondía al expropiado en concepto de indemnización, como hizo en el artículo 4 del Decreto impugnado.

En otras palabras, el Ejecutivo podía expropiar el bien de la sociedad Desarrollo de Cermeño, S. A., pero no podía fijar unilateralmente el monto de la indemnización que debía recibir el expropiado, toda vez que, al no haber mediado acuerdo sobre este extremo entre el gobierno y el dueño del bien expropiado, era imprescindible que se entablara un proceso con el propósito de que un juez estableciera el monto de la indemnización.

Como ello no se hizo, resultó infringido el artículo 31 de la Constitución originaria de 1972 que consagraba el principio del debido proceso legal.

Es necesario destacar que, si bien el Decreto que contiene las normas impugnadas fue expedido cuando la actual Constitución no había sufrido las reformas constitucionales de 1983, la doctrina del bloque de constitucionalidad permite que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos expedidos durante la vigencia de otras normas constitucionales, sobre todo cuando el contenido de los preceptos constitucionales pertinentes no han sufrido alteraciones sustanciales, como ocurre en el caso que nos ocupa. Esa es la razón por la cual la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos impugnados se pronuncia utilizando el artículo 31 de la Constitución originaria de 1972.

En mérito de los razonamientos expuestos, la Corte Suprema, PLENO, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 203 de la Constitución Nacional, DECLARA QUE SON INCONSTITUCIONALES los artículos 4 y 7 del Decreto N° 17 de 3 de abril de 1974, "Por el cual se ordena la expropiación para los fines de Reforma Agraria de la Finca No. 3119, inscrita en el Registro Público, Sección de la Propiedad, al Folio 130, Tomo 62, Provincia de Panamá".

Notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL E. COLLINS NÚÑEZ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ENRIQUE JIMÉNEZ Y EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NO.31 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1992, DICTADA POR LA GOBERNACIÓN DE VERAGUAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante apoderado **ENRIQUE JIMÉNEZ** ha propuesto un recurso que él denomina "de inconstitucionalidad" de la resolución No.31 de 26 de septiembre de 1992, dictada por la Gobernación de Veraguas en un asunto de carácter policivo y mediante el cual se revocan una resolución del Alcalde Municipal de Santiago de Veraguas y se absuelve a los señores **EDUARDO BARRIOS Y JAIME BARRIOS** de la pena impuesta por lesiones corporales a **ENRIQUE JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ.**

Señala como disposición inconstitucional infringida el artículo 17 de la Carta Fundamental, que en forma reiterada a esta Corte ha declarado que es de carácter programático, por ello susceptible de violación. Y ha señalado también como violado el

artículo 31 de la misma Carta Fundamental conceptuando que no se han valorado debidamente ciertas pruebas, y que no se han cumplido, según su opinión, con requisitos que son propios del proceso y no inciden en la interpretación de ninguna norma constitucional.

La guarda de integridad de la Constitución se cumple a través de tres recursos regulados de diferente manera en nuestro Código Judicial, y ellos son: el recurso de habeas corpus, el amparo de garantías constitucionales y el recurso de inconstitucionalidad. No es discrecional de las partes escoger el que mejor le parezca sino que cada uno de ellos tiene su propia connotación que encaja correctamente en la estructura jurídico normativa del Estado Panameño.

En el presente negocio se discute un asunto relacionado con garantías constitucionales y no con la interpretación legítima de la disposiciones de la Carta. Por consiguiente, a la situación jurídica planteada corresponde el recurso de amparo, si a ello hubiere lugar, previo el cumplimiento del trámite que para su ejercicio tiene establecida la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el recurso propuesto por el señor ENRIQUE JIMÉNEZ contra la Resolución No. 31 de 26 de septiembre de 1992 dictada por el Gobernador de Veraguas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA MINISTRA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, LICENCIADA DELIA CÁRDENAS CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO N°6 DE DE ABRIL DE 1981 POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO NUMERO 15 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1978, Y SE APRUEBA UN NUEVO REGLAMENTO DE PERSONAL PARA EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro del proceso Contencioso-Administrativo de Plena Jurisdicción promovido por el licenciado JULIO BARBA, en representación de DORIS OLMEDO Y REYNALDO NÚÑEZ MONTOTO para que declare nula por ilegal, la Resolución N° 100 de 5 de noviembre de 1992, la Licenciada DELIA CÁRDENAS, Ministra de Planificación y Política Económica ha presentado Advertencia de Inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N°6 de 1981 por el cual se deroga el Decreto Número 15 de 29 de septiembre de 1978, y se aprueba un nuevo Reglamento de Personal para el Ministerio de Planificación y Política Económica por ser violatorio de los artículos 297 y 300 de la Constitución Política de la República.

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Según la advertidora, el Decreto N°6 en su totalidad infringe de manera directa los artículos 297 y 300 de la Constitución por establecer estas disposiciones una reserva legal en cuanto a la regulación de los deberes y derechos de los servidores públicos, como los principios que deben regir sus nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones, en fin lo que la propia Constitución denomina como Carrera Administrativa.

Agrega, que al corresponder a la Ley el desarrollo y reglamentación de estas materias, las normas constitucionales invocadas consagran de manera clara y precisa, el principio de la reserva legal, por lo que, sólo a través de leyes formales dictadas por el Órgano Legislativo puede darse esa reglamentación con sujeción a los principios constitucionales pertinentes.

En consecuencia, al Órgano Ejecutivo le está vedado reglamentar directamente la materia por medio de decretos y reglamentos autónomos.

Haciendo suyos conceptos de los tratadistas panameños Moscote y Quintero y remontándose al desarrollo histórico del derecho constitucional patrio, afirma, entre otras cosas, que la Asamblea Nacional (hoy, Legislativa) no puede habilitar al Ejecutivo para que legisle por decreto en aquellas materias cuya regulación le compete sólo a ella, sino que sólo puede hacerlo para aquellos asuntos que la Constitución no reserva de manera expresa a la ley formal. (Moscote y Quintero)

Tampoco puede el Órgano Ejecutivo, desde esta perspectiva doctrinal, reglamentar la carrera administrativa con fundamento a las facultades extraordinarias que le reconozca la Ley (Moscote).

OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

Admitida la Advertencia de Inconstitucionalidad por cumplir con los requisitos de forma previstos en la Ley, se corrió traslado de la misma al Señor Procurador de la Administración para que emitiera el concepto de Ley.

El representante del Ministerio Público, tras ponderar los criterios expuestos por la advertidora, conceptúa en plena coincidencia con ésta, que el Decreto Ejecutivo N° 6 de 6 de abril de 1981 infringe los artículos 297 y 300 de la Constitución y así lo solicita los declare esta Corporación.

Tras describir el contenido del decreto reglamentario impugnado, el Procurador de la Administración considera que el mismo desarrolla de manera amplia toda una gama de aspectos atinentes al funcionario público que presta sus servicios en el Ministerio de Planificación y Política Económica y que al hacerlo viola el artículo 297 constitucional que establece una reserva legal en cuanto a la regulación de los deberes y derechos de los servidores públicos.

Según el mandato constitucional, sólo corresponde a la Asamblea Legislativa emitir las leyes para desarrollar las normas superiores relativas a las carreras de los servidores públicos, por lo que no es dable a través de un decreto ejecutivo regular esta materia.

Con relación al artículo 300, el funcionario colaborador concluye en que el Constituyente estableció otra reserva legal para el desarrollo de las carreras en los servicios públicos, incluida la Administrativa, por lo que al provenir la norma impugnada de un ente público distinto del Órgano Legislativo, se viola también esta norma superior.

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS

Las disposiciones constitucionales que se dice han sido infringidas son las siguientes:

> "ARTICULO 297. Los derechos y deberes de los servidores públicos, así como los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones, serán determinados por la Ley.
>
> Los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán con base al sistema de mérito.
>
> ARTICULO 300. Se instituyen las siguientes carreras en los servicios públicos conforme a los principios del sistema de méritos.
>
> 1. La Carrera Administrativa.
> ...
> La Ley regulará la estructura y organización de esta carreras de conformidad con las necesidades de la administración."

DECISIÓN DE LA CORTE

Cumplida la fase para presentar argumentos por escrito sin que ningún interesado ejerciera ese derecho, debería la Corte decidir el fondo del negocio. Sin embargo, al adentrarse al estudio de la inconstitucionalidad demandada, surge el inconveniente que plantea el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 203 de la Constitución Política de la República.

Es del conocimiento que el control constitucional corresponde a la Corte Suprema de Justicia el cual se produce a través de la iniciativa de cualquier persona o a través de la consulta judicial o del Órgano Ejecutivo. Así, la acción pública y la consulta judicial están contenidas en el numeral 1 del artículo 203 y la objeción a los proyectos de ley por inexiquibilidad por parte del Ejecutivo en el artículo 165, ambos de la Carta Fundamental.

El constituyente al establecer la consulta judicial limitó, sin embargo, esa iniciativa exclusivamente a la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso que es materia del proceso.

En el caso en estudio estamos frente a una consulta judicial, esto es, realizada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en atención a la advertencia que una de las partes le hiciera.

La advertencia de inconstitucionalidad enviada, sin embargo, pugna con la norma constitucional al pretender que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad "in toto" del Decreto N°6 de 1981 y no sobre alguna disposición legal o reglamentaria aplicable al caso. No es posible que se pueda resolver acerca de la pretendida inconstitucionalidad a través de una consulta judicial, ya que ello sólo es factible por medio de la acción pública, esto es, mediante el recurso independiente.

Por todo lo anterior, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la advertencia de inconstitucionalidad presentada en contra del Decreto Ejecutivo N° 6 de 6 de abril de 1981, por el cual se deroga el Decreto Número 15 de 29 de septiembre de 1978, y se aprueba un nuevo Reglamento de Personal para el Ministerio de Planificación y Política Económica.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA FAUSTINA S. A., EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 4° Y 6° DEL DECRETO N° 80 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1975. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Galindo, Arias y López ha interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 80 del 22 de diciembre de 1975, "Por el cual se ordena la expropiación de una finca."

De acuerdo a la firma recurrente, mediante el Decreto antes mencionado se ordenó "la expropiación para los fines de la Reforma Agraria de la Finca N° 5865, inscrita en el Registro Público, Sección de la Propiedad, al Tomo 187, Folio 116, Provincia de Panamá", de propiedad de la empresa COMPAÑÍA FAUSTINA S. A. cuyo Presidente y Representante Legal lo es el señor **FERNANDO ELETA ALMARÁN**, tal como lo demuestran las certificaciones del Registro Público visibles a fojas 10 y 1, respectivamente.

Los artículos demandados como inconstitucionales son del siguiente tenor:

"ARTICULO 4°: Ordénase pagar en Bonos Agrarios, al 1% de interés anual y redimibles en un plazo máximo de 40 años, en concepto de indemnización, en la proporción correspondiente, a los que aparecen inscritos como propietarios o acrediten derechos como tales, la suma de B/.30,081,78."

"ARTICULO 6°: Encárguese a la Contraloría General de la República, para que cancele el valor de indemnización, conforme se ordena en este Decreto, tan pronto se inscriba el mismo en el Registro Público."

El argumento central que sustenta la pretensión que nos ocupa, consiste en que, si bien el Órgano Ejecutivo podía llevar a cabo la expropiación de la finca 5865, lo cierto es que no podía fijar unilateralmente el monto de la indemnización, sobre todo cuando las partes (gobierno y expropiado) nunca llegaron a ponerse de acuerdo en el monto de ésta (la indemnización).

En efecto, de acuerdo al recurrente, el artículo 3 de la Ley 57 de 1946 dispone que cuando las partes no se pongan de acuerdo en lo que respecta al monto de la indemnización, se debe someter esa discrepancia a un juez para que sea éste quien fije la suma que el Ejecutivo debe pagar.

Por consiguiente, al omitirse el trámite legal que consagra el mencionado artículo 3 de la ley 57 de 1947, han resultado infringidos los artículos 17, 32, 44 y 46 de la Constitución Nacional.

Por su parte, el Procurador General de la Nación, a quien correspondió, por razón de turno, emitir concepto en este proceso constitucional, considera que únicamente el artículo 4 del Decreto de expropiación resulta inconstitucional. Ello es así, según este servidor público, porque al establecer el citado artículo 4 que los bonos agrarios serían redimibles al cabo de 40 años, se viola el artículo 287 de la Constitución Nacional, según el cual valdrán hasta un máximo de 20 años las limitaciones temporales "al derecho de enajenar y las condiciones o modalidades que suspendan o retarden la redención de las obligaciones."

A juicio del Procurador, los artículos 32, 44, 46 y 17 de la Carta Magna no han sido infringidos, toda vez que el Ejecutivo podía decretar la expropiación y fijar unilateralmente el monto de la indemnización, porque la expropiación que fue decretada no posee las particularidades de ordinaria -para la cual sí sería necesario la indemnización previa-, sino de extraordinaria.

Ahora bien, el estudio de la situación planteada pone de manifiesto que, contrario a la opinión del Procurador, las normas impugnadas sí violentan el artículo 32 de la Constitución Nacional.

Si bien el Decreto que contiene las normas infringidas fue expedido cuando la actual Constitución no había sufrido las reformas constitucionales de 1983, la doctrina del bloque de constitucionalidad permite que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos expedidos durante la vigencia de normas constitucionales anteriores, sobre todo cuando el contenido de los preceptos constitucionales pertinentes no han sufrido alteraciones sustanciales, como ocurre en el presente negocio.

En ese sentido, conviene tomar en cuenta lo siguiente: en la época en que se realizó la expropiación de la finca 5865 estaba vigente el texto del artículo 3 de la ley 57 de 1946. Esta ley desarrollaba el artículo 46 de la Constitución Nacional de

1946. Sin embargo, hay que destacar que el texto del citado artículo 46, es muy similar al del artículo 44 de la Constitución Nacional de 1972 (antes de sufrir las dos reformas) y al del actual artículo 44. Ello significa que a la fecha en que se expidió el Decreto N° 80 de 1975, el artículo 3 de la citada ley 57 había que tomarlo en consideración, dado el hecho de que dicho artículo desarrollaba el artículo 44 de la Constitución originaria de 1972. Lo anterior significa que el gobierno debió llevar a juicio el tema relacionado con el monto de la cuantía de indemnización.

En efecto, el artículo 46 de la Constitución originaria de 1972 (que corresponde al artículo 49 de la Constitución de 1946 y al artículo 47 de la actual Constitución) establece que "En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada". Este tipo de expropiación se le conoce con el nombre de expropiación extraordinaria. Y es tal aquella enajenación forzosa que realiza el Ejecutivo, sin necesidad de que exista una ley de expropiación, cuando ocurra en el seno de la sociedad alguna de las condiciones que el artículo 49 (ahora 47) de la Constitución de 1946 enumera (guerra, grave perturbación del orden público ...).

Esta clase de expropiación (la extraordinaria) permite que el Ejecutivo pueda expropiar y ocupar inmediatamente el bien expropiado, aun cuando no exista acuerdo entre el gobierno y el expropiado en lo que respecta al monto de la indemnización que el primero debe pagar al segundo por el acto de la expropiación. Sin embargo, el Ejecutivo no puede fijar unilateralmente la suma de indemnización, porque esta tarea corresponde a los jueces, cuando las partes (gobierno y expropiado) no han logrado ponerse de acuerdo, conforme se desprende del artículo 3 de la ley 57 de 1946, que a la letra dice:

> "Artículo 3: Cuando el Estado necesite en todo o en parte una finca propiedad particular para una obra de utilidad pública o de beneficio social, llamará al propietario y le notificará el propósito del gobierno, a fin de señalar, de mutuo acuerdo, el precio razonable de la misma. Si el propietario y el representante del gobierno no llegasen a convenir en el valor de la propiedad, la Nación promoverá el juicio de expropiación correspondiente. En caso de necesidad urgente al tenor del artículo 49 de la Constitución el gobierno procederá a tomar posesión del bien inmediatamente.
>
> Ocupado ya el bien y convenido el precio con el propietario, la Nación o el Municipio, según el caso, efectuarán los pagos en los términos del convenio o sentencia, según proceda" (la subraya es del Pleno)

Ahora bien, como existe suficiente prueba en el proceso de que el Ejecutivo no promovió el correspondiente juicio para que un juez fijara el monto de la indemnización, sino que, por el contrario, fijó unilateralmente la suma de la indemnización, se evidencia claramente la violación de la garantía constitucional del debido proceso.

En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS 4° y 6° DEL DECRETO N° 80 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1975, "POR EL CUAL SE ORDENA LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA N° 5865, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO, SECCIÓN DE LA PROPIEDAD, AL FOLIO 116, TOMO 187, PROVINCIA DE PANAMÁ", que era de propiedad de la COMPAÑÍA FAUSTINA, S. A.

Notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS VILLAMONTE EN CONTRA DEL ARTÍCULO 893 DEL CÓDIGO DE TRABAJO,(PROCESO LABORAL: AGAPITA DE LAÍNO -VS- COMPAÑÍA GOLY, S. A.) MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Juez Tercero de Trabajo de la Primera Sección mediante Oficio No.397 de 29 de octubre de 1993, ha elevado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la advertencia de inconstitucionalidad formulada por el licenciado Luis Villamonte D., dentro de la ejecución de sentencia del proceso laboral incoado por **AGAPITA DE LAINO** contra **COMPAÑÍA GOLY, S. A.**

Por cumplidas las reglas de reparto el Pleno de la Corte debe decidir antes si la advertencia de inconstitucionalidad, en este caso, se ajusta o no a los requisitos legales para que procede su viabilidad. Veamos:

Sabido es que de conformidad con lo expuesto por el párrafo segundo del numeral 1o. del artículo 203 de la Constitución Política, la consulta o la advertencia de inconstitucionalidad tienen lugar:

> "...
> Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advierte o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del Pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y cuestionará el caso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir. ..." (Subraya la Corte).

El Código Judicial vigente en armonía con la norma constitucional, parcialmente transcrita en el artículo 2549 dispone a su vez que:

> "Cuando alguna de las partes en un proceso, advierta que la disposición legal o reglamentaria es inconstitucional, hará la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente, quien en e l término de dos días, sin más trámite elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia, para los efectos del artículo anterior."

Del contenido de las normas anteriormente transcritas se colige, clara y sin la menor duda, que la Consulta o la Advertencia de inconstitucionalidad como aparece contemplada en el ordenamiento jurídico panameño, sólo tiene lugar contra la "disposición legal o reglamentaria" aplicable al caso en un proceso. En igual sentido existe reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

De lo cual se colige, en consecuencia, que los autos o actuaciones judiciales de un proceso no pueden ser impugnados por vía indirecta de la consulta o la advertencia de inconstitucionalidad.

Ahora bien, expuesto lo anterior en el caso de la consulta elevada por el sentenciador de la jurisdicción especial de trabajo, sin mayor esfuerzo se observa que la advertencia de inconstitucionalidad está enderezada en contra del "acto de ejecución de la sentencia" del referido proceso laboral, y no así, contra la "disposición legal o reglamentaria" aplicable al caso.

Por ello, es evidente que la advertencia de inconstitucionalidad, en ese caso, es a todas luces improcedente.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE la Advertencia de Inconstitucionalidad elevada por el Juez Primero de Trabajo de la Primera Sección.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

APELACIÓN DEL AUTO DE 8 DE OCTUBRE DE 1993 EN EL NEGOCIO DE QUEJA PRESENTADA POR EL SEÑOR ROLANDO ELÍAS GONZÁLEZ EN REPRES. DE SOCIEDADES CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES S.A Y KREPORT INVESTMENTS INC., CONTRA EL LCDO. RICARDO NAVARRO JURADO, MGDO. DEL PRIMER TRIB. SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DTTO. JUD. PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rolando Elías González, apoderado judicial de las sociedades Corporación de Inversiones Navales y Kreport Ivestments, en la queja disciplinaria que presentara contra el magistrado Ricardo Navarro Jurado sustentó, en tiempo oportuno, apelación que anunciara contra resolución de 8 de octubre de 1993, que dispuso admitir las pruebas documentales solicitadas por el denunciante y negar las testimoniales "en vista de que no se ha designado los nombres de las personas que deban declarar".

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Sostiene el recurrente que no es cierto el sustento de la resolución apelada para no admitir las pruebas testimoniales por falta de designación de las personas que deben declarar. En el escrito de sustentación de la alzada el licenciado Domínguez manifiesta:

> "en el hecho "**SEXTO**" de nuestra queja expresamos que los abogados que vieron en el mes de marzo, cuando se encontraba de vacaciones el Magistrado Ricardo Navarro Jurado, apersonarse a los Juzgados de Circuito

> Civil donde se tramitan casos de la parte que represento, son los licenciados Luis Moreno, Braulio Carrera y Ariosto Ardila y que los Tribunales visitados en esa fecha fueron los juzgados Tercero, Cuarto y Séptimo del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá. Igualmente, en el hecho **"NOVENO"** señalamos que el 27 de abril del presente año, a las nueve de la mañana, se apersonó a los Juzgados y Tercero del Circuito de Panamá, Ramo Civil." (Subraya la Corte).

Ciertamente en el escrito de queja, como también en el de sustentación, se identifican e individualizan las personas que deben rendir testimonio (ver f.6 y 54 del expediente de queja). El Pleno es de opinión de que en el procedimiento disciplinario de queja es aplicable el principio de informalidad, también conocido con el nombre de antiformalista, lo que implica que el desconocimiento, equivocación u omisión de requisitos o trámites exigidos por la ley no hacen nulo o ineficaz el acto o solicitud impetrada, **siempre que la forma adoptada y que da lugar a la censura logre la finalidad que persigue el ordenamiento jurídico** (artículo 467 C.J.).

En tal sentido se debe concluir que el recurrente, al expresar en el hecho sexto los nombres de las personas que vieron al magistrado Navarro Jurado apersonarse a los juzgados mencionados, identifica e individualiza con precisión a los sujetos de la prueba testimonial.

De otra parte, en el escrito de sustentación del recurso el abogado reitera la petición formulada, por lo que esta Superioridad debe acceder a lo pedido.

Por las consideraciones antes expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto apelado en el sentido de ADMITIR las pruebas testimoniales anunciadas y lo confirma en todo lo demás.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

NOVIEMBRE 1993

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

BANCO GENERAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SILVIA RAQUEL SCHAW U. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Agotados los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso extraordinario, es labor de esta Sala de Casación Civil de la Corte resolver la casación interpuesta por la firma forense ALEMÁN, CORDERO, GALINDO y LEE en su condición de apoderados judiciales del BANCO GENERAL, S. A., lo cual hace previas las siguientes consideraciones jurídicas:

ANTECEDENTES

1. Silvia Raquel Schaw Ureta confirió poder especial al licenciado Abdiel González Acosta para que promoviera proceso ordinario de mayor cuantía contra la sociedad BANCO GENERAL, S. A. con el propósito de que mediante los trámites legales fuera condenada la aludida sociedad a pagarle la suma de cinco mil balboas (B/.5,000.00) en concepto de daños y perjuicios, salvo mejor apreciación pericial, como consecuencia de la devolución por parte del Banco General del cheque No. 664356 por la cantidad de B/.220.00 expedido a favor de la empresa HUMAN DEVELOPMENT, S. A.

2. Admitida la demanda y corrida en traslado al representante legal de la sociedad demandada, éste confirió poder especial a la firma forense ALEMÁN, CORDERO, GALINDO y LEE como apoderada especial principal y al licenciado Lorenzo Marquínez Bolaños como sustituto. Al contestar dicha demanda, la representación judicial se opuso a la pretensión de la demandante y solicitó al tribunal que la desestimara por carecer de fundamento y ser además temeraria. Cumplidas las fases procesales de pruebas y alegatos, el juzgador primario desató la controversia el día veintitrés (23) de enero de 1991 condenando al BANCO GENERAL, S. A. a pagarle a la señora SILVIA RAQUEL SCHAW URETA la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS (B/.235.00); absolvió a las partes del pago de costas en cuanto al trabajo en derecho; y cada una asumiría los gastos conforme lo causaron.

3. Apelada la resolución por los procuradores judiciales de las partes; y, concedido dicho recurso por el juez a-quo, ingresó el negocio al Primer Tribunal Superior de Justicia en donde, de conformidad con el artículo 1264 del Código Judicial se abrió el negocio a pruebas en vista de que al momento del acto de la notificación de la sentencia de primera instancia el licenciado Abdiel González así lo había solicitado. Precluido dicho término, se le señaló el término para los alegatos, concurriendo las partes a la Secretaría a presentar sus escritos. En este estado se puso el negocio para resolver, lo cual hizo el Primer Tribunal Superior de Justicia el día once (11) de agosto del pasado año conceptuando que se hacía necesario la reforma de la sentencia apelada en el sentido de establecer la condena en concepto de daños y perjuicios en contra del BANCO GENERAL, S. A. y a favor de SILVIA RAQUEL SCHAW URETA en la suma que resulta de la aplicación del procedimiento que dispone el artículo 983 del Código Judicial. Para la cuantificación de los daños y perjuicios se establecieron las siguientes bases:

"a) Determinar, con la asistencia de peritos idóneos en la materia, el valor de los daños materiales ocasionados por razón de la debitación de la suma de B/.235.00, de la cuenta No. 04-001-724456-0, así como el daño que experimentó la demandante a raíz de la devolución del cheque No. 664356 que giró a favor de HUMAN DEVELOPMENT, S. A.;

b) Valor del lucro cesante representado por los intereses legales que debía reportarle a la demandante, la suma indebidamente debitada de la cuenta No. 04-001-724456-0, desde la fecha de su debitación hasta la fecha de la presentación de la demanda; y

c) Valor del daño moral que sufrió la demandante, con ocasión de la debitación de la cuenta No. 04-001-724456-0, y la devolución del cheque No. 664356 girado a favor de HUMAN DEVELOPMENT, S. A., para lo cual habrá de valerse el Tribunal de dictámenes de expertos en la materia".

Contra dicha resolución anunció recurso de casación la representación jurídica de la sociedad demandada.

CONTENIDO DEL RECURSO

La causal de fondo alegada por la parte impugnante es la de: "**Infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida**" y se encuentra fundamentada en los motivos que a continuación se transcriben:

> "1. El Primer Tribunal Superior de Justicia, dictó en el presente proceso la sentencia de 11 de agosto de 1992, modificando la sentencia de 23 de enero de 1991 dictada por el Juez Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de establecer la condena en daños y perjuicios en contra de BANCO GENERAL, S. A. y a favor de SILVIA RAQUEL SCHAW URUETA en la suma que resulte de aplicar el

procedimiento previsto en el artículo 983 del Código Judicial, por considerar -en forma errónea. que BANCO GENERAL, S. A. no podría legalmente efectuar la compensación de B/.235.00 entre la deuda que con él tenía CARLOS LÓPEZ SCHAW por razón de sobregiro en la cuenta corriente 01-1-01-001-006796-0 y la deuda de BANCO GENERAL, S. A. frente a CARLOS LÓPEZ SCHAW como cotitular (junto con SILVIA RAQUEL SCHAW URUETA) de la cuenta "o" número 04-001-724456-0. Esta actuación del Primer Tribunal Superior de Justicia desconoce por completo el hecho de que BANCO GENERAL, S. A. y CARLOS LÓPEZ SCHAW tenían recíprocamente las calidades de acreedor y deudor hasta la concurrencia de B/.235.00, porque existían entre ellos dos deudas diferentes, y no un sólo crédito que el banco pretendió cobrar unilateralmente al aplicar la precitada suma de una cuenta a la otra, como se afirma en la sentencia de segunda instancia (foja 205), con lo cual se desconoce una compensación válidamente realizada, conforme a la legislación civil vigente.
2. La sentencia recurrida se profirió en base al criterio de que existía una sola deuda, y no dos diferentes, porque en ella no se valoraron los elementos probatorios -aportados en el cuaderno de pruebas de la parte demandada- que establecen fehacientemente que BANCO GENERAL, S. A. y CARLOS LÓPEZ SHAW eran recíprocamente acreedores y deudores, como son el dictamen del perito JULIO ANTONIO EFFIO (fojas 47 a 50) y el dictamen de los peritos DIANA LEE CHEN y MARIO GARUZ (fojas 57 a 59) dentro de la diligencia de inspección jurídica de los libros, registros y archivos de BANCO GENERAL, S. A. , además de los testimonios de MARÍA ESTHER TAYLOR DE MOSCOSO (fojas 33 y 34) y de ILDA ANGÉLICA GUTIÉRREZ DE ALEMÁN (fojas 35 y 36), todos los cuales demuestran que al 17 de febrero de 1989, CARLOS LÓPEZ SCHAW era deudor de BANCO GENERAL, S. A. en la suma de B/.235.00 por razón de la cuenta número 01-1-01-001-006796-0 (la cual estaba sobregirada en esta misma cantidad), y que a su vez BANCO GENERAL, S. A. era deudor de CARLOS LÓPEZ SCHAW en la suma de B/.253.37 por razón de la cuenta "o" número 04-001-724456-0 de la cual dicho señor CARLOS LÓPEZ SCHAW era cotitular junto con SILVIA RAQUEL SCHAW.
3. El Primer Tribunal Superior de Justicia no apreció correctamente las pruebas antes señaladas, incurriendo por ello en error de derecho al ejercer su función valorativa, cuando concluyó que entre BANCO GENERAL, S. A. y CARLOS LÓPEZ SCHAW sólo existía una deuda, y que por lo tanto no procedía la compensación de obligaciones recíprocas. Si hubiese dado el valor correcto a las pruebas que constaban en el proceso, no habría llegado a la equivocada conclusión de que entre BANCO GENERAL, S. A. y CARLOS LÓPEZ SCHAW no existían dos deudas recíprocas, y por tanto no hubiese fallado en la forma en lo que hizo, violando las normas sustantivas de derecho que establecen el derecho de compensación entre deudores y acreedores recíprocos".

Seguido de los motivos transcritos, el casacionista sostiene que la sentencia acusada infringe las siguientes normas de derecho: 769 y 945 del Código de Procedimiento Civil; 1081, 1082 y 1088 del Código Civil; y, el artículo 3 de la ley 42 de 8 de noviembre de 1984.

CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

Tal como se ha mencionado en líneas que anteceden, el recurso ha sido dirigido contra la sentencia del 11 de agosto de 1992 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario que SILVIA RAQUEL SCHAW le sigue a la sociedad recurrente. Pues bien, en la citada resolución, el Tribunal ad-quem exterioriza sus razonamientos jurídicos, en lo medular, así: APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA: según el Tribunal Superior la demandada escinde la materia de su inconformidad con respecto a la sentencia del juzgador primario en dos puntos sustanciales, a saber:

I.- El fallo recurrido adolece de incongruencia por extrapetita;
II. Que la devolución de la suma debitada es improcedente porque CARLOS LÓPEZ S. era dueño de la totalidad de la cuenta debitada.

Con respecto al primer cargo se consideró que la incongruencia acusada en el grado de ultrapetita no se había producido en la sentencia impugnada. El segundo cargo fue descartado de la manera siguiente:
1. Que el punto medular de la controversia gira en torno a determinar si el Banco demandado podría efectuar compensación de dicha cuenta, o no, a manera de establecer si la debitación que provocó la devolución del cheque No. 664356 girado por la demandante contra la cuenta No. 04-001-724456-0 produjo los daños y perjuicios que por esta vía reclama la señora SILVIA RAQUEL SCHAW URETA o, en su defecto, se ajusta a derecho, tal como lo señala la institución bancaria demandada.

2. Que al analizar la encuesta sub-judice, el Tribunal observa que el BANCO GENERAL no podría efectuar la pretendida compensación alegada, pues para ello era menester que existieran dos deudas, a tenor de lo dispuesto en el numeral 1), del artículo 1082 del Código Civil, ya que a pesar de que el señor LÓPEZ SCHAW era titular de la cuenta "O" NO. 04-001-724456-0 abierta en la institución bancaria demandada, y que a la vez mantenía un sobregiro sobre la cuenta corriente No. 01-001-006796-0, por el orden de B/.235.00. no se colige en autos que entre la parte demandada y el señor LÓPEZ SCHAW existiera o se dieran las cualidades de acreedor y deudor, recíprocamente, cuenta habida que no se observan dos créditos, sino más bien un sólo crédito que pretendió el banco cobrar al aplicar la suma de B/.235.00 de una cuenta a la otra con respecto al primer cargo se consideró que la incongruencia acusada en el grado de ultrapetita no

se había suscitado en la sentencia impugnada. El segundo cargo fue descartado de la manera siguiente:

3. Que la situación planteada hubiese tenido un cariz distinto si se observara entre el señor LÓPEZ SCHAW y el BANCO GENERAL las calidades de acreedor y deudor recíprocamente, porque al operar la compensación de pleno derecho, por el solo ministerio de la ley, las dos deudas se hubiesen extinguido mutuamente desde el mismo instante en que existen a la vez, hasta la concurrencia de la menor.

APELACIÓN DE LA DEMANDANTE:

El cargo esgrimido por la demandante se concreta al quantum de la condena que persigue y establece en la suma de B/.5,000.00, más B/.235.00 que entraña la sentencia de primera instancia.

A este cargo el Tribunal consideró que:

1.- Los daños y perjuicios reclamados por lógica jurídica tienen su génesis en esta reclamación en la obligación de que está revestido todo depositario, incluyendo a cualquier institución bancaria de custodiar y salvaguardar los fondos que le han sido depositados (art. 1459 del Código Civil y 838 del Código de Comercio), en determinada cuenta corriente, en este caso, la cuenta No. 04-001-724456-0, ya que en autos no se aprecia que el señor CARLOS LÓPEZ SCHAW haya autorizado a la entidad bancaria a debitar de dicha cuenta corriente la suma de B/.235.00, tal como lo hizo la parte demandada, argumentando para ello, haber procedido conforme al medio de extinción de las obligaciones conocido como la compensación.

2.- Hay que tener presente que al momento de girar la parte actora el cheque No.664356 a favor de HUMAN DEVELOPMENT, S. A. lo hizo a sabiendas de que contaba con fondo para ello, y por otro extremo que en nuestra legislación penal el girar cheque sin fondos está erigido en delito, conforme lo tipifica el artículo 28 y siguientes del Código Penal.

3.- Al haber debitado el BANCO GENERAL, S. A. la cuenta No. 04-001-724456-0 en la suma de B/.235.00 para compensar un saldo insoluto que sobre la cuenta No. 01-1-01-001-0067960 tenía por dicha suma el señor CARLOS LÓPEZ SCHAW, sin la autorización de éste ni de la demandante, se desprende entonces, que se tipificó el delito de girar cheques sin suficiente provisión de fondos, porque HUMAN DEVELOPMENT, S. A., a pesar de que sea una sociedad familiar, es un ente o persona jurídica autónoma, con capacidad jurídica para ejercitar derechos y contraer obligaciones, por lo que no puede operar como un eximente, aquello de que la señora SILVIA RAQUEL SCHAW U. sea suscriptora y vicepresidenta de la referida sociedad anónima, frente a la comisión del delito de girar cheque sin fondos a que se vio avocada la parte actora por el manejo poco precavido de la parte demandada de los dineros depositados, evento que suscita la existencia de los daños y perjuicios que entraña la pretensión.

4.- Mirado el daño no como elemento constitutivo de la responsabilidad civil, sino en cuanto a las cuestiones que suscita su reparación, el Tribunal arriba a la conclusión de que la parte demandante no acreditó en autos la cuantía que en concepto de daños y perjuicios reclama y que asciende a la suma de B/.5,000.00, "salvo mejor tasación pericial"; por ende, no cabe otra alternativa que proceder a condenar a la parte demandada en forma abstracta, conforme lo pauta el artículo 983 del Código Judicial.

CRITERIO DE LA SALA

Al exponer el contenido del recurso hemos señalado que el casacionista invoca la causal de "Infracción de las normas sustantivas de derecho, por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida" y que la misma se encuentra respaldada en tres (3) extensos motivos. De los mismos (motivos) concluye esta Sala que se hacen, básicamente, los siguientes cargos de injuricidad:

a) Que la sentencia del tribunal ad-quem se profirió en base al criterio de que existía una sola deuda y no dos diferentes al no valorar los elementos probatorios aportados por la parte demandada como lo son el dictamen del perito JULIO ANTONIO EFFIO (fojas 47 a 50) y el dictamen de los peritos DIANA LEE CHEN y MARIO GARUZ (fojas 57 a 59) dentro de la diligencia de inspección judicial de los libros, archivos y registros de BANCO GENERAL, S. A.

b) Igualmente se sostiene que no se valoraron los testimonios de MARÍA ESTHER TAYLOR DE MOSCOSO (fojas 33 y 34) y de ILDA ANGÉLICA GUTIÉRREZ DE ALEMÁN (fojas 35 Y 36), los cuales demostraban que al 17 de febrero de 1989, CARLOS LÓPEZ SCHAW era deudor del BANCO GENERAL, S. A. en la suma de B/.235.00 por razón de la cuenta número 01-01-001-006796-0 y a su vez BANCO GENERAL era deudor de CARLOS LÓPEZ SCHAW en la suma de B/.253.37, por razón de la cuenta "o" número 04-001-724456-0 de la cual dicho señor CARLOS LÓPEZ SCHAW era cotitular junto con SILVIA RAQUEL SCHAW.

En síntesis pues, la discrepancia fundamental de la casacionista con la sentencia impugnada, a juicio de la Sala, consiste en la errada apreciación del dictamen pericial (fs. 47 a 50 y 57 a 59) y la prueba testimonial (fs. 33 a 36). De haber dado el valor correcto a las pruebas, según el recurrente, el Tribunal de segunda instancia no habría llegado a la equivocada conclusión de que entre BANCO GENERAL, S. A. y CARLOS LÓPEZ SCHAW no existían dos deudas recíprocas.

Tratándose de la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba se hace necesario recordar que los errores probatorios conforman una cadena de tres eslabones: a- el error y su demostración; b- la consiguiente infracción de la ley sustantiva; y c- la incidencia del cargo sobre la parte dispositiva de la resolución recurrida. Qué significa lo anteriormente señalado? Pues bien, que el hecho de que el sentenciador cometa yerros en la apreciación de la prueba los mismos por sí solos, no configuraran la causal de casación sino que dichos yerros son medios por el cual puede arribarse al motivo que va a consistir justamente en la infracción de la norma de derecho sustantiva o material. Pasemos pues, a realizar un análisis del asunto de una forma separada respecto a la valoración de cada prueba.

a.- Lo relacionado a el dictamen del perito JULIO ANTONIO EFFIO (fs.47 a 50) y el dictamen de los peritos DIANA LEE CHEN y MARIO GARUZ (fs. 57 a 59) dentro de la diligencia de inspección judicial de los libros, registros y archivos de BANCO GENERAL.

A fojas 47,48,49 y 50 de este negocio se observa el dictamen rendido por el perito licenciado JULIO ANTONIO EFFIO T., perito nombrado por el Tribunal. Dicho dictamen pericial fue recibido en el tribunal en el término y hora señalado. En dicho dictamen el perito del tribunal al emitir concepto de acuerdo con el cuestionario que le fue propuesto señaló que había llevado a cabo el examen de las tarjetas de firmas, contratos de cuenta corriente, notas de débitos y créditos, correspondencias, listado de computadoras (movimiento diario) archivo de microfilmes, informes internos de gestión de cobranza, memorándum y estados de cuentas bancarias; y, en lo pertinente se lee así:

> "... El Banco fundamentó esta nota de débito en su contrato de cuenta corriente con su cliente, pero somos de la opinión que el mismo no lo autoriza para debitar la cuenta de un cliente sin su debida autorización escrita, y menos dos cuentas corrientes distintas con los mismo titulares en una ...
> Además, la cuenta corriente número 01-1-01-001-006796-0 a nombre de CARLOS LÓPEZ SCHAW no fue simultáneamente acreditada, debido a que en esa fecha, es decir 17 de febrero de 1989 estaba cerrada, y el crédito fue a la cuenta RESERVA PRESTAVOS (sic) INCONBRABLES, asiento contable que cumple con los principios de contabilidad de aceptación general y el artículo 43-A del Decreto Número 60 de 28 de junio de 1965 ..."

El análisis de la acusada sentencia revela que el juzgador ad-quem no menciona ni analiza el dictamen del perito Julio Antonio Effio T. Ahora bien, esta Sala de la Corte llega a la conclusión de que el hecho que la sentencia acusada nada diga con respecto a los elementos de convicción que aporta este elemento probatorio, ello no es motivo para que se case la sentencia toda vez que, como se anotó en líneas anteriores, es necesario que el error probatorio conduzca a la infracción de la norma sustantiva de derecho.

Por otro lado, el dictamen de los peritos DIANA LEE CHEN y MARIO GARUZ es evidente que sí fue valorado por el tribunal ad-quem. A fojas 201 de este negocio se puede observar que el Primer Tribunal Superior de Justicia señala:

> "Igualmente acompañó la demanda la tarjeta de apertura la cuenta No. 01-1-01-001-006796-0 a nombre de CARLOS LÓPEZ SCHAW (fd. 26), así como el Informe Pericial rendido por los Contadores Públicos Autorizados Diana Lee Chen y Mario Garuz (fs. 57-59), quienes sobre el particular, dictaminaron lo siguiente:
> "De acuerdo con los registros contables del Banco General, S. A., al cierre del día 16 de febrero de 1989 el saldo de la cuenta corriente número 01-1-01-001-006796-0 de la cual era titular Carlos López Schaw era cero. El saldo cero de la cuenta corriente número 01-1-01-001-006796-0 es producto de la transferencia de saldo, el cual estaba en sobregiro por la suma de doscientos treinta y cinco balboas (B/.235.00), a la cuenta de mayor general No. 189 "Deudores Varios (cuentas por cobrar)", efectuada el día 29 de septiembre de 1988. Posteriormente, el saldo de la cuenta de Deudores varios (cuenta por cobrar) Carlos López Schaw por la suma de doscientos treinta y cinco balboas (B/.235.00) fue acreditado con cargo a la cuenta No. 270 "Reserva para préstamos Incobrables". (fs.57).
>
> Y más adelante dice:
>
> "Empero, a pesar de que los peritajes citados con antelación arriban a conclusiones idénticas, al señalar que la parte actora no sufrió daños y perjuicios, materiales o morales-, por la circunstancia especial de que el cheque devuelto por falta de provisión de fondos de la cuenta No. 04-001-724456-0, identificado con la numeración 664356, fue girado a favor de la empresa HUMAN DEVELOPMENT, S. A., sociedad familiar, en la cual aparece como suscriptora y vicepresidente la propia demandante, el Tribunal debe dilucidar que los daños y perjuicios reclamados por lógica jurídica".

No obstante lo anotado, esta Sala advierte que de fojas 57 a fojas 59 consta el informe pericial de los licenciados DIANA LEE CHEN, Contador Público Autorizado con Licencia No. 2545 y MARIO GARUZ, Contador Público Autorizado con Licencia No. 293, pero, al momento de ser presentado ante el Juzgador Primero del Circuito de lo Civil, el Secretario de dicho tribunal dejó constancia que dicho dictamen se recibía a insistencia de conformidad con lo que prescribe el artículo 476 del Código Judicial

puesto que fue presentado fuera del término señalado para la entrega del mismo (informe); y, aunado a lo anterior, no se apersonaron al Tribunal para someterse a las preguntas y repreguntas que la ley exige. Dicho informe fue presentado el día 29 de mayo de 1990. pero, fuera de la hora señalada para entregarlo.

Tanto el juzgador primario como el ad-quem tomaron en cuenta y valoraron este medio de prueba; cabe preguntarse ¿ qué valor tiene el mismo si no fue presentado en la hora que el Tribunal señaló para que se rindiera el dictamen y como consecuencia de ello los peritos no pudieron ser interrogados, contrainterrogados y tachados por el adversario. A todas luces resulta evidente que en este caso no se dado cumplimiento al principio de la contradicción ni a lo que prescribe el artículo 945 del Código Judicial.

Dentro de los principios que gobiernan la teoría general de la prueba judicial se encuentra el principio de la contradicción de la prueba, el cual guarda relación con los principios de la unidad y la comunidad de la prueba. Este principio es considerado como un requisito esencial para su validez y autoridad, consistente en que "la parte contra quien se opone un prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes" (DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General de la Prueba, Tomo I, pág. 123). El contradictorio constituye una garantía para la contraparte y un instrumento para que la prueba sea lo más auténtica y fiel posible. Si la prueba se ha surtido sin darle cumplimiento a este principio y a lo que se establece en el párrafo primero del artículo 945 de la citada ley, pero, dicho dictamen rendido antes de que se dicte la sentencia de primera instancia es válido y eficaz, máxime en un proceso escrito como lo es el de conocimiento.

No hay que perder de vista que cuando la inspección judicial es practicada por el Juez en asocio de peritos se conjugan dos pruebas (el reconocimiento y la peritación). El valor que cada una de ellas tenga será asignado por el juzgador según el resultado que la misma muestre.

Colígese de lo expuesto que, el Primer Tribunal valoró el dictamen de los peritos LEE CHEN y GARUZ, por consiguiente se descarta este cargo.
a.- Lo referente a los testimonios de MARÍA ESTHER TAYLOR DE MOSCOSO (fs. 33 y 34) y de ILDA ANGÉLICA GUTIÉRREZ DE ALEMÁN (fs. 35 y 36).

La parte demandada adujo los testimonios de Estela Tarte, Mary Esther Taylor de Moscoso, Ilda Angélica Gutiérrez de Alemán y Luis Manuel Landero Urriola. El juzgador primario los admitió y fijó fecha para la práctica de los mismos. Con respecto a los testimonios que el casacionista señala como no valorados por el ad-quem, se trata de las declaraciones de Estela Irene Tarte Viggiano y María Esther Taylor de Moscoso quienes coinciden en afirmar que antes de compensarse la deuda se le avisó al señor CARLOS LÓPEZ SHAW sobre el débito que se le iba a hacer el 17 de febrero de 1989 en la cuenta conjunta "O" que mantenía con SILVIA RAQUEL SCHAW. De conformidad con lo que establece el artículo 896 del Código Judicial en su numeral 3o. nos encontramos ante testigos sospechosos puesto que son dos funcionarias del BANCO GENERAL, parte del proceso que pidió la prueba. La primera de las personas llamadas aquí, en la posición de asistente de oficial en el departamento de cobros de sobregiro y la segunda como vicepresidente en la casa matriz de dicha institución bancaria. Obviamente que siguiendo las reglas de la sana crítica resulta evidente que la circunstancia anotada disminuye la fuerza de esas dos declaraciones, lo cual significa que no es que se haya incurrido en un error de derecho al ejercer su función valorativa sino que se le ha dado el valor correcto a estos dos testimonios. En consecuencia, tampoco prospera este cargo.

Cabe señalar en este mismo orden de ideas que el artículo 769 del Código de Procedimiento no guarda relación con la causal invocada; por consiguiente ni éste ni el 945 del mismo cuerpo legal han sido infringidos como tampoco el 1081, 1082, 1088 del Código Civil y 3 de la Ley 42 del 8 de noviembre de 1984.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del once (11) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) proferida por el Primer Tribunal Superior de justicia.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EDUARDO AROSEMENA Y CARLOS CHAVARRÍA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA (ACCIÓN DE SECUESTRO) QUE LES SIGUE VARELA HERMANOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DOS (2) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL.

VISTOS:

Contra la decisión del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de 18 enero de 1993, dentro del proceso ordinario seguido por VARELA HERMANOS, S. A. en contra de EDUARDO ENRIQUE AROSEMENA ROMÁN y CARLOS CHAVARRÍA, la parte demandada recurrió oportunamente en casación.

Recibido el negocio, la Sala consideró oportuno que el recurso fuera corregido, lo que se hizo en el término señalado, y luego de admitido, se concedió seis días para que el recurrente, durante los tres primeros, alegara en cuanto al fondo y, en los días restantes, presentara el opositor sus puntos de vista. Transcurrido este período, en donde los apoderados judiciales de las partes aprovecharon el término concedido, corresponde a la Corte dictar la sentencia de rigor.

La parte demandada intenta desvirtuar la sentencia acusándola de infringir normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba con influencia en lo dispositivo del fallo. Fundamenta la causal alegada, en los tres primeros motivos, sobre la mala interpretación que el sentenciador de segunda instancia hace de un contrato por "servicios profesionales de venta" aportado como contraprueba. Así expresa en estos hechos lo siguiente:

> "PRIMERO: El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial al analizar el contenido del contrato por servicios profesionales de ventas, celebrado el 30 de mayo de 1988, entre la Distribuidora ZARATI, representada por el señor CARLOS CHAVARRÍA y el señor EDUARDO AROSEMENA R., cuyas firmas fueron autenticadas en esa misma fecha ante la Notaría Especial de San Miguelito, (Fs. 144 y 145), no le da el valor que la Ley otorga a dichos documentos privados auténticos; toda vez que a pesar que el mismo expresa que CARLOS CHAVARRÍA actúa en representación de su negocio (Distribuidora Zaratí) y el expresado EDUARDO AROSEMENA R, como "EL VENDEDOR", la sentencia impugnada lo considera "RES INTER ALIOS ACTA" para el demandante VARELA HERMANOS, S. A., es decir no oponible a éstas, condenando solidariamente al señor EDUARDO AROSEMENA R., sin tener ninguna responsabilidad u obligación con la demandante.
>
> La prueba a que hacemos referencia en el párrafo (sic) anterior, al no ser debidamente valorada, a pesar que la misma constituye un documento auténtico, no tachado de falso y que el mismo constituye una prueba lícita, de conformidad con nuestra legislación procesal, no permite que la sentencia se produzca en el sentido querido por la Ley.
>
> SEGUNDO: De acuerdo a la causal que invocamos (infracción de normas sustantivas de Derecho por error de Derecho en cuanto a la apreciación de la prueba) el Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Civil) ha violentado los artículos 1132 y 1133 del Código Civil, Capítulo IV (Cuarto)-DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS-, toda vez que no da al Contrato (visible a f. 144 y 145 del presente expediente) la valoración que la Ley Sustantiva precita le otorga; esta ignorancia del texto legal lo conduce -en una operación lógico-causal- a aplicar en forma incongruente e inconsecuente con la verdad jurídico-procesal que reposa en el expediente, las normas adjetivas o de procedimiento que se contienen en los artículos 845 y 848, en concordancia con los artículos 846 y 858, de la misma excerta legal.
>
> TERCERO: Con esa misma tesis de inoponibilidad de dicha prueba documental a la demandante, de que "lo convenido por otros no me aprovecha ni me daña", la sentencia recurrida deduce la existencia de una sociedad de hecho formada por los demandados, la cual no existe, no ha existido ni ha sido demandada (ver demanda)."

Lo expuesto en estos motivos determina que, tal como lo expresa textualmente, el tribunal violenta los artículos del Código Civil sobre la interpretación de los contratos al no valorarlos conforme la ley sustantiva prescribe. No se está en presencia del hecho que el tribunal no le concede el valor de documento auténtico a la prueba presentada, sino que, según el casacionista, interpreta mal el contrato contenido en ese documento. En otras palabras, estamos en presencia de supuestos errores en la interpretación de un contrato aportado al expediente en calidad de contraprueba. Ante esta situación la Sala se ve impedida a adentrarse al estudio de la supuesta mala interpretación del contrato, por cuanto ello sólo puede ser atacado en casación por intermedio de una causal no probatoria. Cosa distinta sería si se tratara de ignorar el documento o darle un valor diferente al señalado por la ley probatoria, lo que sí daría cabida a una causal como la presentada en el recurso. Así lo ha establecido la jurisprudencia nacional y extranjera. En la Sentencia de 28 de junio de 1978, citada por el Dr. Dulio Arroyo, en sus Veinte Años de Jurisprudencia de la Sala Primera Civil de la Corte, se dijo:

> "Las cuestiones atinentes a la interpretación de un contrato deben ser examinadas conforme a la causal de Interpretación errónea de la Ley Sustantiva, ya que la misma depende de que la actividad interpretativa del Tribunal conduzca a darle efectos contrarios a lo pactado".

Por otro lado, el Tribunal Supremo de España, en Sentencia de 3 de diciembre de 1975 indica sobre el particular "El error de derecho en la apreciación de la prueba sólo se da cuando en la sentencia se infringe algún precepto legal de los que determinan el valor que deben concedérseles, no teniendo por ciertos los hechos que como ciertas pruebas se patentizan, pero no hay tal error cuando de lo que se trata no es de la certeza y realidad de esos hechos, sino de la trascendencia y eficacia que puedan tener, siendo realmente lo que se impugna, la interpretación que se le da a los

contratos cuya realidad en esta forma se justifica" (TOVAR MORAIS, Antonio, El Recurso de Casación Civil y el Contencioso Administrativo, Editorial Aranzadi, 1993, pág. 241).

En fallo de 30 de junio de 1992, dentro del proceso ordinario THOMAS KOALICK contra YOLANDA ARBELAEZ DE GÓMEZ y ALFONSO GÓMEZ SANTOS, la Corte se pronunció en los términos siguientes:

"...
La idea esencial en que se funda este criterio, se deriva de la visión distinta que ha de dársele al documento contentivo de un contrato. Desde un punto de vista general, el documento en el cual consta un contrato debe apreciarse según las reglas de la sana crítica (normas procesales) en lo que respecta a su valor probatorio como documento, a su validez, a su autenticidad, etc. Sin embargo, lo referente a la interpretación jurídica de las estipulaciones contractuales, debe ser regido por las disposiciones que en nuestro Código Civil (normas sustantivas) se incluyen para regular la interpretación de los contratos (Art. 1132 y ss.). Las estipulaciones de un contrato constituyen ley para las partes vinculadas y las normas que conducen al juzgador en la interpretación de esta ley contractual son, lógicamente, de naturaleza sustantiva; en consecuencia, la operación de interpretación de un contrato, involucra un análisis jurídico que es independiente de toda cuestión de hecho. Por lo tanto, no puede impugnarse la interpretación de los contratos, a través de los conceptos probatorios de la causal de fondo, ya que dichos conceptos se refieren a factores propios de los hechos de la causa.
...".

Por otro lado, el casacionista señala como motivo cuarto lo siguiente: "Que al momento de examinar la declaración de la señora CIELO GRIMALDO DE TATIS, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) comete el error de poner en boca del testigo, hechos nunca comentados por ésta en su declaración jurada, al decir el Tribunal en el fallo atacado, que la señora CIELO GRIMALDO DE TATIS, había manifestado que tanto el señor CARLOS CHAVARRÍA, como el señor EDUARDO AROSEMENA R., "eran socios" (vr. F. 232 tercer párrafo -vs- declaración foja 72 a 75)". Sin embargo, dentro de las normas probatorias que se dicen violadas, por ningún lado se menciona alguna que tenga relación con la prueba testimonial, lo que no estructura el fundamento legal de la supuesta violación probatorio de tal testimonio.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 18 de enero de 1993, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario seguido por VARELA HERMANOS, S. A. contra EDUARDO ENRIQUE AROSEMENA ROMÁN y CARLOS CHAVARRÍA.

Las obligantes costas a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ROBERTO ROJAS Y OTROS, RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BANCO SURAMERICANO DE DESARROLLO, S. A. (BANCOSUR). MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL.

VISTOS:

La firma forense SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES en su condición de apoderados judiciales de ROBERTO ROJAS y OTROS, ha interpuesto recurso de casación contra los autos de 25 de agosto de 1992 y 14 de julio de 1993 dictados por el Primer Tribunal Superior, dentro del proceso ordinario que la parte recurrente le sigue al BANCO SUDAMERICANO DE DESARROLLO, S. A. (BANCOSUR).

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, lo que fue hecho por ambas como consta de fojas 167 a 171 y 172 a 173.

Seguidamente la Sala procede a decidir la admisibilidad del recurso según las exigencias contenidas en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil. Es decir:

1- Si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2- Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3- Si el escrito de formalización del recurso cumple con los requisitos del artículo 1160 ibídem. y,

4- Si la causal invocada es de las que establece la ley.

En base a lo dispuesto por el inciso primero del artículo antes citado, las resoluciones recurribles en casación deben ajustarse a lo dispuesto por los artículos 1148 y 1149 del Código Judicial.

En ese sentido, del libelo de casación se percibe que se recurre contra dos autos dictados por el Primer Tribunal Superior de Justicia, de fechas 25 de agosto de 1992 y 14 de julio de 1993.

El primer auto (fs.129) decide REVOCAR la resolución de 4 de marzo de 1991 emitida por el Juzgado Séptimo de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, por la que se ordena a los liquidadores del BANCOSUR mantener en reserva la suma de B/.1,634,851.10 reclamada por Roberto Rojas como tenedor de las Cartas de Crédito que tal Banco no pagó.

La otra resolución que señala el recurrente como objeto de casación (14 julio de 93) es la que **NIEGA** un recurso se reconsideración contra la antes citada resolución de 25 de agosto de 1993, confirmándola.

Respecto al artículo 1149, el recurrente considera que la resolución de segundo grado impugnada, se ajusta al caso que prescribe el numeral 4 de dicha norma, es decir, cuando "se trate de autos que decidan oposiciones, levantamientos o exclusiones, en procedimientos cautelares". Veamos:

Se trata de una resolución dictada en proceso ordinario, en el que se discute el pago de unas Cartas de crédito contra el banco intervenido, encontrándose en la etapa de liquidación, mediante la cual el tribunal Superior, como se tiene citado, **REVOCA** el auto de 4 de marzo de 1991 del Juez Séptimo del primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, que ordena a los liquidadores del banco demandado mantener en reserva B/.1,634,851.10, suma esta que reclama el demandante como depositante y acreedor de dicho banco, en el aludido proceso ordinario.

Evidentemente, entonces, la resolución impugnada no es de las contempladas en el numeral 4, ni otros, del artículo 1149 del Código en cita; pues, no se trata de autos que decidan oposiciones o levantamientos o exclusiones "... en procedimientos cautelares". Expresado en otros términos, la impugnada resolución no decide el levantamiento de una medida cautelar, ni ha sido dictada en procedimiento cautelar, más bien se trata de una resolución en que se discute la aplicación de ciertas normas del Decreto de Gabinete No. 238 de 1970 (Reforma el régimen bancario y Crea la Comisión Bancaria Nacional), para así decidir si existe dentro del ámbito de aplicación de dicho instrumento la justificación legal para retener una suma de dinero reclamada mediante un proceso ordinario, encontrándose el Banco demandado intervenido en la etapa de liquidación.

De todo lo cual se colige, en consecuencia, que no tiene lugar el recurso de casación contra esta clase de resoluciones, por no encontrarse entre las contempladas por el artículo 1149 del Código Judicial.

En mérito de lo señalado, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por ROBERTO ROJAS Y OTROS.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.75.00).

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ROGELIO CARPINTERO GARCÍA, RAMIRO CARPINTERO JIMÉNEZ Y ELIGIO CARPINTERO JIMÉNEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN POR DESPOJO QUE LE SIGUEN A NORBERTO CARPINTERO CASTRELLÓN, VICENCIO CARPINTERO CASTRELLÓN, DEMETRIO CARPINTERO CASTRELLÓN Y PEDRO CARPINTERO CASTRELLÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ MARÍA LEZCANO, actuando en su condición de apoderado especial de **ROGELIO CARPINTERO GARCÍA, RAMIRO CARPINTERO JIMÉNEZ, ELIGIO CARPINTERO JIMÉNEZ,** partes demandantes en el proceso de Restitución de Posesión por Despojo que le siguen a **NORBERTO CARPINTERO CASTRELLÓN, VICENCIO CARPINTERO CASTRELLÓN, DEMETRIO CARPINTERO CASTRELLÓN Y PEDRO CARPINTERO CASTRELLÓN,** ha interpuesto recurso de casación en la forma contra la Resolución de 11 de junio de 1993, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial.

Al ingresar el negocio a la Secretaría de la Sala y por cumplidas las reglas de reparto, se fijó en lista por el término señalado en la ley a fin de que las partes alegaran, por escrito, sobre la admisibilidad del recurso, lo que no fue hecho por ninguna, dejando vencer dicho término sin presentar escrito al respecto.

Vencido de esa forma el término de lista a que se refiere el artículo 1164 del Código de Procedimiento Civil, la Corte observa que, el escrito de formalización del recurso de casación interpuesto, ha sido concedido por el Tribunal Superior de la sentencia recurrida, mediante la concurrencia de los requisitos expresamente establecidos en los numerales del artículo 1165 del Código Judicial, o sean:

1.- La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2.- El escrito fue interpuesto en tiempo;

3.- El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 y;

4.- La causal expresada es de aquellas señaladas por la ley.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto contra la Resolución de 11 de junio de 1993, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso de Restitución de Posesión por Despojo.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VÍCTOR AGUILAR RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COOPERATIVA DE VIVIENDA DE NUEVO CHORRILLO, R. L. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, ONCE(11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado Elvis Alberto Polo Vargas, en su condición de apoderado judicial de **VÍCTOR AGUILAR**, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 2 de agosto de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso ordinario que el recurrente le sigue a la **COOPERATIVA DE VIVIENDA DE NUEVO CHORRILLO, R. L.**

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista por el término de ley para que la parte opositora y recurrente alegaren sobre la admisibilidad del recurso. En este sentido sólo el opositor presentó su escrito, según consta a fojas 1099 a 1101.

Procede la Sala al examen del recurso interpuesto según las exigencias contenidas en el artículo 1165 del Código Judicial. Que consisten:

1.- En que la resolución objeto del recurso sea de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2.- Que el recurso haya sido interpuesto en tiempo;

3.- Que el escrito de formalización del recurso reúna todos los requisitos dispuestos por el artículo 1160 ibídem.

4.- Que la causal expresada sea de las que señala la ley.

El recurso de casación formalizado en este caso, cumple con los numerales 1o., 2o. y 4o. del artículo 1165 antes citado. Sin embargo, no llena a cabalidad lo dispuesto por el numeral 3o., es decir las formalidades establecidas por el artículo 1160 del Código Judicial.

El artículo 1160 del Código de Procedimiento Civil establece tres apartados para el escrito de casación, que son:

1.-La determinación de la causal invocada;

2.-Los motivos que fundamentan la causal; y,

3.-Citación y Explicación de las normas de derecho infringidas.

Es necesario que el libelo de casación exprese estos requisitos, pero además, el contenido de los mismos ha de ser conforme a la técnica que se ha señalado para este tipo de recurso.

Así, la causal invocada ha sido determinada de acuerdo a los términos que establece la ley (artículo 1154), para la casación en el fondo, pues se expresa la "INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, POR ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, LA CUAL HA INFLUIDO SUSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA".

El segundo apartado, referente a los motivos que fundamentan la causal, se denotan algunos defectos que a continuación se pasan a indicar:

El primer y segundo motivos, si bien contienen el respectivo cargo de injuridicidad contra la sentencia, contienen una serie de consideraciones e interpretaciones del recurrente en cuanto a la actuación del Ad-Quem y sobre ciertas normas, e incluso el primero cita disposiciones legales, lo que no corresponde a este apartado del recurso.

En el cuarto motivo se repite el cargo aludido en el primero, referente al contrato de préstamo.

El quinto motivo no precisa cargo de injuridicidad contra la sentencia, sino que trata sobre el contenido de ciertas pruebas, su presentación y admisión.

En el sexto motivo se transcribe un párrafo de la parte motiva del fallo recurrido, lo que no es procedente expresar en el recurso de casación.

El séptimo motivo contiene una evaluación del recurrente sobre el contenido del contrato.

El octavo motivo repite los cargos señalados con anterioridad.

Finalmente, el apartado correspondiente a las disposiciones legales infringidas y el concepto de su violación ha sido desarrollado en la forma y orden debido.

Por tanto, a juicio de la Sala, el recurrente debe corregir los defectos indicados, a fin de que el segundo numeral del artículo 1160 del Código Judicial se cumpla a cabalidad.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación interpuesto por VÍCTOR AGUILAR contra la Sentencia de 2 de agosto de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLEDAD JIMÉNEZ DE CAMPOS, ABELARDO JIMÉNEZ ESCOBAR, BALBINA JIMÉNEZ DE HERRERA Y FERNANDO JIMÉNEZ ESCOBAR RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO DE NULIDAD QUE LE SIGUEN A ARTURO JIMÉNEZ ESCOBAR Y CAJA DE AHORROS. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Civil de la Corte Suprema, mediante sentencia de 1 de octubre de 1993 ordenó a los recurrentes en casación, **SOLEDAD JIMÉNEZ DE CAMPOS**, **ABELARDO JIMÉNEZ ESCOBAR**, **BALBINA JIMÉNEZ DE HERRERA Y FERNANDO JIMÉNEZ ESCOBAR**, la corrección del recurso que interpusieron contra la Resolución de 23 de junio de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso ordinario que le siguen a **ARTURO JIMÉNEZ** y a la **CAJA DE AHORROS**.

La parte recurrente cumplió con la corrección ordenada, según consta de fojas 454 a 469 del expediente, por lo que la Sala considera se llenan las exigencias determinadas por el artículo 1154 en concordancia con el 1160 del Código Judicial. Es decir:

1.- La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3.- El escrito de casación cumple con los presupuestos formales; y,
4.- La causal expresada es de las que consigna la ley.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación propuesto en este caso contra la Sentencia de 23 de junio de 1993, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSÉ GÁLVEZ LÓPEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (SECUESTRO) QUE LE SIGUE A SOFÍA V. DE CHONG, CESAR ROBLES Y GILMA ROBLES DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario que **JOSÉ GÁLVEZ LÓPEZ** le sigue a **SOFÍA V. DE CHANGA, CESAR ROBLES Y GILMA ROBLES DE LEÓN**, la Sala Civil de la Corte mediante resolución de 14 de octubre de 1993 ordenó la corrección del recurso de casación que interpusiera el apoderado del demandante contra la sentencia de 29 de junio de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Vencido el término para la corrección del recurso de casación en este negocio, se ha podido constatar que la parte recurrente no cumplió con lo ordenado, lo que imposibilita declarar la admisibilidad del recurso, conforme lo dispone el artículo 1166 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación propuesto por JOSÉ GÁLVEZ LÓPEZ contra la Sentencia de 29 de junio de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las obligantes condena en costas se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JULIETA MARTÍNEZ MURILLO RECURRE EN CASACIÓN EN LA TERCERÍA EXCLUYENTE QUE PROPONE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR ELECTRÓNICA ADAMS, S. A. CONTRA JULIO BLANCO. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RICARDO STEVENS, actuando en su condición de apoderado especial de **JULIETA MARTÍNEZ MURILLO**, tercerista en el proceso ejecutivo propuesto por **ELECTRÓNICA ADAMS,S. A.** contra **VÍCTOR JULIO BLANCO**, ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra la Resolución de 10 de agosto de 1993, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Al ingresar el negocio a la Sentencia de la Sala y por cumplidas las reglas de reparto, se fijó en lista por el término señalado en la ley a fin de que las partes alegaran, por escrito, sobre la admisibilidad del recurso, lo que no fue hecho por ellas, dejando así vencer el término respectivo.

Vencido de esa forma el término de lista a que se refiere el artículo 1164 del Código de Procedimiento Civil, la Corte observa que, el escrito de formalización del recurso interpuesto, ha sido concedido por el Tribunal Superior de la sentencia recurrida, mediante la concurrencia de los requisitos expresamente establecidos en los numerales del artículo 1165 del Código Judicial, o sean:

1.- La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3.- El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 y;

4.- La causal expresada es de aquellas señaladas por la ley.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por JULIETA MARTÍNEZ MURILLO contra la Resolución de 10 de agosto de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la Tercería Excluyente propuesta contra ELECTRÓNICA ADAMS,S. A. y VÍCTOR JULIO BLANCO.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BIENES Y EMPRESAS ESTRIPEAUT,S. A. Y FÉLIX ESTRIPEAUT NAVARRO RECURREN EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL PRESENTADA EN EL PROCESO EJECUTIVO QUE LES SIGUE BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **DÁMASO DÍAZ DUCASA**, actuando en su condición de apoderado especial de **BIENES Y EMPRESAS ESTRIPEAUT**, **S. A**. y **FELIPE ESTRIPEAUT NAVARRO**, partes ejecutadas excepcionante en el proceso ejecutivo que les sigue el **BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ**, **S. A.**, ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra la Resolución de 29 de diciembre de 1992, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que confirma la decisión del a-quo de declarar no probada la Excepción de Pago Parcial propuesta.

Al ingresar el negocio a la Secretaría de la sala y por cumplidas las reglas de reparto, se fijo en lista por el término señalado en la ley a fin de que las partes alegaran, por escrito, sobre la admisibilidad del recurso, lo que fue hecho por ambas, como consta a fojas 140-141 (opositor) y 146 (recurrente). Vencido de esa forma el término de lista a que se refiere el artículo 1164 del Código de Procedimiento Civil, la Corte observa que, el escrito de formalización del recurso de casación interpuesto, ha sido concedido por el Tribunal Superior de la sentencia recurrida, mediante la concurrencia de los requisitos expresamente establecidos en los numerales del artículo 1165 del Código Judicial, o sean:

1.- La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede ley;

2.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3.- El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 y;

4.- La causal expresada es de aquellas señaladas por la ley.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por BIENES Y EMPRESAS ESTRIPEAUT, S. A. y FÉLIX ESTRIPEAUT contra la Resolución de 29 de diciembre de 1992, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro de la Excepción de Pago Parcial propuesta por el recurrente ejecutado.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIDLAND INVESTMENTS, S. A. Y ALMACARGA, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE ALMACARGA, S. A. LE SIGUE A MIDLAND INVESTMENTS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Civil de la Corte Suprema, mediante sentencia de 13 de octubre de 1993 ordenó a una de las partes recurrentes en casación, **MIDLAND INVESTMENTS**, **S. A.**, la corrección del recurso que interpusieron contra la Resolución de 12 de abril de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso ordinario que le sigue **ALMACARGA**, **S. A.**

La parte recurrente de la demanda cumplió con la corrección ordenada, según consta de fojas 163 a 170 del expediente, por lo que la Sala considera se llenan las exigencias determinadas por el artículo 1154 en concordancia con el 1160 del Código Judicial. Es decir:

1.- La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3.- El escrito de casación cumple con los presupuestos formales; y,

4.- La causal expresada es de las que consigna la ley.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA , SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación propuesto por MIDLAND INVESTMENTS, S. A., contra la Sentencia de 13 de abril de 1993, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CRISTINO ANTONIO BRAVO RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINO QUE LE SIGUE MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Conoce la Sala de recurso de casación en la forma y en el fondo, presentado por el Licenciado Humberto José Chang, en representación de CRISTINO ANTONIO BRAVO contra la sentencia de 15 de febrero de 1991, por medio de la cual el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, confirma la de primera instancia dictada el 25 de septiembre de 1989, por el Juez Primero del Circuito de Veraguas.

En la etapa de admisibilidad, la Sala no admitió el recurso de casación en la forma, por lo que procede dictar la sentencia de mérito en base a la casación de fondo, que se contrae a una sola causal: la de "INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO POR ERROR DE HECHO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA".

Antes de entrar en la cuestión de fondo, conviene tener en cuenta los siguientes antecedentes:

Inicialmente, la demandante MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ RÍOS solicitó que con audiencia de los señores BERNABÉ BRAVO VÁSQUEZ Y CRISTINO ANTONIO BRAVO, se reconociera que había adquirido por prescripción la Finca No. 5846, inscrita al Tomo 592, folio 180 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Veraguas, finca que inicialmente aparecía inscrita a nombre de BERNABÉ BRAVO VÁSQUEZ, y que posteriormente éste vendió a CRISTINO ANTONIO BRAVO (su hijo), mediante Escritura Pública No.250 de 28 de julio de 1966.

La aludida finca No.5846, constituye un globo de terreno de aproximadamente 35 hectáreas, en que han ejercido acciones de domino en primer lugar, BERNABÉ BRAVO VÁSQUEZ y luego alegan haber hecho lo mismo, su hijo CRISTINO ANTONIO BRAVO y finalmente, MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ RÍOS, concubina de BERNABÉ BRAVO VÁSQUEZ.

En la primera instancia se realizaron dos inspecciones judiciales, las cuales condujeron a resultados contradictorios, lo que obligó al Tribunal del conocimiento a decretar una tercera inspección judicial.

Pese a que duro del juicio se dieron ciertas irregularidades en la notificación de la demanda al demandado, BERNABÉ BRAVO VÁSQUEZ, la Sala no puede entrar a conocer de este extremo, en vista de que el recurso de casación en la forma dentro del cual se planteó esta irregularidad, tuvo que ser rechazado porque no se formuló la reclamación correspondiente en la instancia en que ocurrió la falta.

Tal como consta en autos, en la primera instancia el Juez Primero del Circuito de Veraguas, reconoció que la demandante MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ RÍOS, había ganado por prescripción no la totalidad, sino una parte de la finca No.5846, consistente en 18 hectáreas en las que realizó acciones de domino, específicamente de carácter agrícola, y que el resto de la aludida finca, estaba siendo utilizado por el demandado CRISTINO ANTONIO BRAVO para la ganadería.

Contra la sentencia mencionada apelaron ambas partes y al surtirse la alzada, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial confirma la sentencia de primera instancia, con el salvamento de voto del Magistrado Mario Van Kwartel.

Se trata, como vimos, de un recurso de casación, en el fondo, cuya única causal es la de error de hecho sobre la existencia de la prueba. Los motivos sobre los cuales se apoya la causal invocada, son expuestos por el recurrente así:

> "PRIMERO: En este proceso de prescripción adquisitiva de dominio el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, al confirmar la sentencia del Juez de primera instancia se fundó en la inspección judicial decretada de oficio por este funcionario, la cual es consultable a fs. 139 a 43, llegando igualmente a la conclusión de que la demandante laboró una cuota-parte de la finca en su beneficio personal, y que es poseedora de buena fe por mas de 15 años. Sin embargo, pasó por alto, es decir ignoró completamente, en dicha diligencia la declaración del señor Bernabé Bravo Vásquez, el otro demandado y esposo de la actora, donde a fs. 141 el mismo manifiesta que es él el que ha laborado personalmente la tierra. La ignorancia de esta prueba implicó error de hecho sobre la existencia de la prueba influyendo tal error en lo dispositivo del fallo.

SEGUNDO: El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, al confirmar la sentencia de primera instancia llegó a la conclusión de que está probado que la actora María de Jesús Méndez laboró una cuota-parte de la tierra y que poseyó con ánimo de dueña. Sin embargo, tal prueba no consta por ninguna parte del proceso, pues tanto las declaraciones de ambas partes, como las inspecciones judiciales prueban lo contrario. Por tanto el Ad-Quem incurrió en error de hecho sobre la existencia de a prueba al dar por sentado un hecho no acreditado debidamente en el proceso, influyendo tal error en lo dispositivo del fallo recurrido.

TERCERO: El Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial no valoró las declaraciones de los testigos de la parte demandada, que se leen de fs.69 a 75, y a fs. 100, las cuales son contestes en que el demandado Cristino Antonio Bravo ha venido usando la finca 5846, ya que la trabaja, limpia, arregla y paga a los peones y que la demandante jamás ha trabajado esa tierra personalmente. Esas declaraciones concuerdan también con el testimonio de los testigos de la misma parte actora, que corren de fs. 51 a 56, que no fueron tomadas en cuenta, y quienes declaran que es el señor Bernabé Bravo Vásquez -y no su señora María de Jesús Méndez,- quien labora la tierra. Por tanto el Ad-Quem incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba, influyendo tal error en lo dispositivo del fallo recurrido

CUARTO: A pesar de que la sentencia de segunda instancia, que confirmó la de primera, reconoció expresamente que el señor Bernabé Bravo Vásquez, el otro demandado, es marido de la actora María de Jesús Méndez, y que la declaración de los testigos que consta a fs. 51 a 75 , y 100, señalan sin contradicciones que la actora María de Jesús Méndez es la mujer de Bernabé Bravo Vásquez, pasó por alto esta otra prueba que demuestra que ambos esposos realizan actos de mera tolerancia permitidos por el dueño, situación que no da lugar a la prescripción adquisitiva por no cumplirse los presupuestos.

QUINTO: Por causa de ese error probatorio de carácter sustancial el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial confirmó la sentencia de primera instancia; y al declarar probada parcialmente la prescripción adquisitiva sobre el lote de mi poderdante, le coarta la mitad de su derecho sobre su propiedad, para lo cual se aplicó indebidamente norma civil sobre prescripción, dejando de aplicar, en cambio, las normas que no la reconocen."

El casacionista agrega que se han infringido los artículos 769, 773 del Código Judicial; 1696, 417 y 430 del Código Civil.

ANÁLISIS DE LA CAUSAL INVOCADA

En primer término, la Sala ha expuesto reiteradamente que el error de hecho en cuanto a la apreciación de la prueba, se produce cuando el juzgador incurre en un error de percepción material en cuanto a la existencia o inexistencia del elemento probatorio, en cambio el error de derecho se suscita cuando el juez conculca disposiciones legales que norma, la eficacia o la evaluación del elemento probatorio.

Resulta entonces que el error de hecho surge con motivo del desacierto del juzgador en la contemplación objetiva de la prueba, y el error de derecho se produce por la desatinada contemplación jurídica o valoración de la prueba, valoración que no se compagina con las normas sobre valoración probatoria.

Una vez esclarecidos los supuestos en los que tiene lugar el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, la Sala destaca algunos planteamientos que el casacionista le endilga a la resolución acusada, a saber:

1) Que el Tribunal Superior, ignoró la prueba que corre a fs. 139 a 143, es decir la inspección ocular decretada de oficio por el juez de primera instancia, en el sentido de que dicha diligencia ignoró que el demandado, Bernabé Bravo Vásquez, quien es esposo de la parte actora, manifestó que laboró personalmente la tierra cuya prescripción de adquisición se demanda.

2) Que dicho Tribunal, concluyó que en el proceso se probó que María de Jesús Méndez laboró una cuota parte de la tierra y que poseyó con ánimo de dueña, más no consta la prueba pertinente, es decir que se dio por sentado un hecho sin que se acreditara.

3) Que no se valoraron los testimonios de la parte demandada, los cuales coinciden en señalar que Cristino Antonio Bravo, es quien usa la finca, arregla y trabaja la tierra y que jamás la demandante fue poseedora de la misma.

4) Que el Tribunal de segunda instancia pasó por alto a prueba que avala que la demandante es la concubina de Bernabé Bravo Vásquez, lo que demuestra que ambos esposos realizan actos de mera tolerancia permitidos por el dueño, lo que constituye sustento para la prescripción adquisitiva de dominio.

Visto lo anterior, la Sala observa que en el primer motivo el recurrente ha confundido la causal de error de hecho con la de error de derecho, habida cuenta que no se puede ignorar una prueba cuando el juzgador valoró la misma. A efecto de que se comprenda la incongruencia que existe entre la causal invocada y el motivo comentado es conveniente transcribir lo señalado por el Tribunal ad quem en la resolución

acusada en la que se dice "Para sentenciar el Juez se fundamentó en su propia inspección judicial, prueba ésta a la que otorgamos la mayor credibilidad por su objetividad y desinterés" (fs.179).

Es evidente que la inspección judicial a la que se refirió el Tribunal de segunda instancia es la diligencia que corre de fojas 139 a 143 y que es precisamente la que señala el casacionista, la que por cierto fue transcrita en su totalidad en la resolución recurrida, todo lo cual desvirtúa el cargo formulado por el recurrente en lo que concierne a esta prueba.

En el segundo motivo el casacionista expresa en términos genéricos que las declaraciones de ambas partes y las inspecciones judiciales, constituyen la prueba en contrario de la conclusión del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en el sentido de que estimó comprobado que la parte actora o sea María de Jesús Méndez laboró una cuota parte de la tierra y que poseyó con ánimo de dueña.

Contrario a lo expresado en este segundo motivo, se aprecia que tanto las inspecciones judiciales practicadas por el Juez Municipal de la Mesa, como los testimonios aportados por las partes fueron valorados por el Tribunal de segunda instancia, cuando en lo pertinente dice:

> "Con respecto a las inspecciones judiciales practicadas por el Juzgado Municipal, de La Mesa, observamos que sus conclusiones son diametralmente opuestas. Lo mismo sucede con los testigos aportados al proceso. Esta situación que se repite casi a diario en nuestros Tribunales está constituyéndose en una inmoral costumbre de irrespeto a los juzgadores, razón de más para que los jueces ordenen de oficio que se investiguen, ya que no podemos permitir que los despachos judiciales sean utilizados para realizar mascaradas tendientes a burlar la justicia." (F. 178)

El tercer motivo viene a profundizar aún más la incongruencia entre la causal aducida y el cargo de injuridicidad que esta contiene, pues expone el recurrente que el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial no valoró las declaraciones de los testigos de la parte demandada, que se leen de fojas 69 a 75 y a fojas 100, las cuales son consistentes en señalar que el demandado Cristino antonio Bravo ha venido usando la finca 5846, ya que la ha trabajado y en cambio la demandante jamás ha trabajado esa tierra personalmente.

Frente a lo señalado, es evidente que el casacionista pretende mediante un juicio valorativo invalidar la resolución consabida a través de un supuesto error de hecho, que no se compagina con el cargo formulado en el tercer motivo.

En cuanto a los motivos cuarto y quinto también se incurre en la anomalía advertida con anterioridad ya que la discusión se circunscribe a la valoración del caudal probatorio.

Forzosamente hay que concluir que cuando el recurrente cuestiona la existencia de hechos que el Tribunal Superior da por probados, lo que impugna realmente es la valoración probatoria que realizó el Tribunal de segunda instancia.

Así las cosas,a la Sala no le queda otra alternativa que destacar el error de hecho alegado por el recurrente, pues lo que ocurre es que se estimaron los testimonios y las diligencias judiciales aportadas en el proceso como eficaces para acreditar la pretensión de la parte actora y el presunto yerro probatorio, de existir, habría sido de derecho, por lo que a la Corte no le es dable analizar mediante los planteamientos del casacionista la mencionada causal.

Como corolario de todo lo expuesto, el error en el planteamiento de los motivos conlleva necesariamente a que tampoco se haya dado la pretendida violación de las disposiciones citadas por el casacionista.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del 15 de febrero de 1991 expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Las costas se fijan en ciento cincuenta balboas (B/.150.00).

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

OTILIA CALDERÓN LUNA, ENRIQUE CALDERÓN LUNA, JOSEFA CALDERÓN DE RUIZ, ADOLFO BENALCAZAR CALDERÓN, ANA MARÍA CALDERÓN DE MONTERREY Y MODESTO CALDERÓN LÓPEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUEN A MANUEL CALDERÓN BERNAL. MAGISTRADO PONENTE: Dr. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Por medio de resolución de 27 de abril de 1992 esta Sala admitió el recurso extraordinario de Casación interpuesto por el licenciado José Luis Varela quien actúa en representación de Otilia Calderón Luna, Enrique Calderón Luna, Josefa Calderón de Ruiz, Adolfo Benalcazar Calderón, Ana Marta Calderón de Monterrey y Modesto Calderón López contra la sentencia de 21 de enero de 1991, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del proceso de ordinario de oposición promovido por sus poderdantes contra Manuel Calderón Bernal.

Agotados los términos concedidos a las partes para que alegaran en cuanto al fondo, sin que hicieran uso de ese derecho, esta causa se encuentra en estado de resolver, a lo que procede la Sala, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

El señor MANUEL CALDERÓN BERNAL, solicitó a la Comisión de Reforma Agraria de Herrera, a través de memorial 6-144 9 de 29 de septiembre de 1988, que se le adjudicara una parcela de terreno estatal ubicada en Río Parita, corregimiento de Cabecera, Distrito de Parita, en la Provincia de Herrera, cuyos linderos son: NORTE: Camino de Río Parita; SUR: Río Parita; ESTE: Carlos Bernal y OESTE: Sergio Calderón. (Fs. 1)

Posteriormente el señor Enrique Calderón Luna, mediante nota remitida al Director de la Reforma Agraria se opuso a tal adjudicación, por lo que se inició la controversia que hoy llega a este Despacho.

Efectivamente, los opositores, quienes se hicieron representar por un apoderado judicial, propusieron el juicio de oposición ante el Juzgado Primero del Circuito de Herrera. En el libelo de la demanda solicitaban que se declarara la oposición y se les adjudicara la parcela de terreno descrita en el párrafo anterior, ya que son "las únicas personas que tienen derechos de posesión sobre el globo de terreno descrito ... y han ejercido trabajos de arreglo de construcción de cercas, pastoreo de ganado vacuno, ciembros (sic) de arroz, maíz y frijoles y árboles frutales." (Fs.22)

Al contestar el traslado de la demanda, el licenciado Moisés Espino Bravo, aceptó los hechos primero, segundo y tercero, negando el cuarto, así como las pruebas aludidas por el demandante, señalando que en el momento oportuno presentaría las pruebas que le permitiera la ley.

El juez de primera instancia negó las pretensiones de la parte actora, basándose en los testimonios presentados y en la inspección ocular realizada en el terreno en litis, ordenado por ese despacho; de este pronunciamiento apeló el apoderado legal de los demandantes, y luego de surtido el trámite pertinente, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial mediante sentencia del 21 de enero de 1991, confirmó lo decidido en primera instancia en cuanto a que los postulantes de la demanda no tienen derecho a que se declare la oposición sobre el lote de terreno descrito.

EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

El tribunal de alzada, luego del análisis de la apelación y de la sentencia de primera instancia consideró lo siguiente:

> "Independientemente de otras consideraciones que pudieran hacerse debe tenerse presente que en el pronunciamiento que se haga, el hecho que se alega como motivo de la oposición está vinculado con la posesión, que se afirma ejercen los opositores sobre el ya descrito globo de terreno, dedicándolo al pastoreo de ganado vacuno y a otras labores de carácter agrícola.
>
> Ese es el punto fundamental que se tiene que acreditar y que debe hacerlo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 773 del Código Judicial,la parte accionante, pues incumbe a ella "probar los hechos o datos que constituyan el supuesto de hecho de las normas que les son favorables". (Fs.98-99)

De acuerdo al juez de segunda instancia los demandantes no aportaron al expediente las pruebas que corroboran las afirmaciones hechas en la demanda. Por el contrario, se llegó a confirmar que el demandado vivió y trabajó la parcela de terreno por más de veinte años. Por lo que el juez confirmó la sentencia de primera instancia.

En la apelación la parte actora introdujo un nuevo elemento en lo pedido, en el sentido que el terreno se adjudicara por partes iguales, ya que se trata de hermanos que recibieron el bien en herencia, cuando en primera instancia se había señalado que el demandado no tenía derechos a dicha parcela de terreno, porque eran los demandantes los que la habían poseído y cultivado por muchos años, en relación a este punto el Tribunal Superior señaló lo siguiente:

> "Posiblemente la postura que ha adoptado el Licenciado José Luis Varela G., ... sea la más equilibrada, pero ello no es factible de ser decidido en este proceso, por lo que se impone la preservación del fallo del inferior ..." (Fs. 100)

Contra este fallo de segunda instancia se anunció y formalizó el presente recurso de casación.

EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO

Se trata de un recurso de casación en el fondo, cuya única causal es enunciada por el recurrente en los siguientes términos: "infracción de las normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida" (fs. 107).

Los motivos que constituyen el sustento de la causal aducida, los expresa el recurrente así:

> "PRIMERO: La sentencia fechada 21 de enero de 1991, del Tribunal Superior del cuarto Distrito Judicial que confirma la sentencia de 11 de septiembre de 1990 dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, le dio valor jurídico a las declaraciones de los señores CARLOS BERNAL TEJADA (fs 45-46), SERGIO CALDERÓN BATISTA (fs. 48) y FRANCISCO BERNAL GODOY o FRANCISCO BERNAL PERALTA (fs. 49) aun cuando señala que tales declaraciones no son concordantes, porque admiten que el demandado trabajó ese terreno durante cierto lapso.
>
> SEGUNDO: La sentencia fechada 21 de enero de 1991, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, al confirmar la proferida por el Juzgado del conocimiento primario, también expresa que conforme a los testimonios presentados por los actores, el demandado vivió y trabajó por más de 20 años, pero hoy no está en capacidad de hacerlo por ser invidente.
>
> TERCERO: Como corolario del motivo anterior, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, estima en su fallo aludido, que la postura del suscrito es la más razonable y equilibrada, no obstante, se niega acceder a la reclamación que se exige en el libelo.
>
> CUARTO: El fallo recurrido y dictado por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, contradice sus propias argumentaciones para no declarar la oposición solicitada por mis representados, por cuanto le da valor a unos testimonios que de suyos manifiestan que en la actualidad el demandado no se encuentra trabajando el globo de terreno, objetos de esta litis.
>
> QUINTO: Como si lo anterior fuera poco, el fallo recurrido revela que la inspección ocular practicada al terreno aludido, demostrar que el mismo se encuentra abandonado y pese a ello determinó que al demandado es quien le asiste la razón". (Fs.107-108)

El recurrente considera que, pese a que el propio Juez de primera instancia consideró contradictorios los testimonios presentados por los testigos de la parte demandante les dio valor jurídico que benefició al demandado, igualmente la inspección ocular ordenada por el juez, que estableció que el terreno en disputa está abandonado y que el demandado no lo está cultivando. Criterio que ha confirmado el Tribunal de alzada, lo que según el recurrente no se ajusta a derecho.

A juicio del casacionista, se han infringido los artículos 769 y 906 del Código Judicial, así como los artículos 427 y 559 del Código Civil.

ANÁLISIS DE LA CAUSAL INVOCADA.

Un aspecto de relevancia que la Sala debe aclarar una vez transcritos los motivos en que se funda la causal invocada es que, tanto el segundo como el tercer motivo, no contienen cargo de injuricidad, de los cuales emerja con claridad la prueba a la que no se le otorgó el valor o la eficacia probatoria que la ley le atribuye, es decir, que no se determinó la prueba que fue valorada indebidamente. Resulta entonces que el recurrente en vez de ceñirse a lo establecido por la técnica casacionista, incurre en el error de exponer algunos señalamientos a los cuales arribó el Tribunal ad quem.

Ahora bien, por lo que respecta a los otros cargos de injuricidad se comprende que a juicio del recurrente el Tribunal ad quem incurrió en yerro probatorio al valorar indebidamente los testimonios aportados al proceso y la inspección ocular practicada sobre el terreno en pleito, ya que estos elementos probatorios acreditan que en la actualidad el demandado no se encuentra trabajando el citado lote de terreno puesto que el mismo está abandonado.

En el primer y cuarto motivo el recurrente sostiene que el Tribunal ad quem le dio valor jurídico a las declaraciones de los señores Carlos Bernal Tejada (fs.45-46), Sergio Calderón Batista (fs.48) y Francisco Bernal Godoy o Francisco Bernal Peralta (fs.49), pese a que las mismas no son concordantes, ya que admiten que el demandado trabajó ese terreno durante un período.

En el motivo quinto hace mención a la valoración que hiciera el juez de la inspección ocular ordenada sobre el terreno, según la cual la parcela está inculta, lo que considera el representante judicial de los recurrentes que no apoya la tesis del demandado que está ejerciendo actos de posesión sobre dicho terreno.

CRITERIO DE LA SALA

Frente a lo expuesto la Sala anota, en primer término, que las declaraciones a las que se refiere el casacionista constituyen precisamente los testigos aportados por la parte actora.

Pues bien, la Sala aprecia que el señor Carlos Bernal Tejada al ser preguntado con respecto a quienes son las personas que desde hace 20 años trabajaban y ocupaban con ánimo de dueño el globo de terreno nacional, ubicado en el Distrito de Parita, de un área de 8371 metros cuadrados, cuyos linderos son al norte: Camino a Trabajadero; Sur: Río Parita; Este: Carlos Bernal y Oeste: Sergio Calderón, señaló: "Mire yo ahí en ese terreno tengo como cincuenta años de estar trabajando y en ese terreno trabajó primero el señor Benigno Calderón Luna, Gaspar Calderón Luna, Mingo Calderón Luna, Enrique Calderón y Manuel Calderón Luna". Y a continuación afirmó el mencionado testigo, refiriéndose al terreno que "Ahora no está cultivado".

Sergio Calderón Batista al ser interrogado en igual sentido declaró: "Allí estuvo temporalmente el señor Manolo Calderón, pero eso no está trabajado está inculto, la cerca que pega conmigo esta toda estrampada" (sic).

Por otra parte el último testigo precitado, también se le interrogó con respecto a las personas que trabajaban en el terreno en pleito y sobre este punto afirmó: "Este globo de terreno, no está trabajado, porque cuando los viejos partieron este señor Manolo no estaba ni aquí, él se mudó después, esos mismos son los linderos de dicho globo de terreno". Y además puntualizó que "el señor Manolo, fue el que trabajó allí, hace como cuatro años atrás, pero ya no lo trabaja ...".(fs 49).

Lo cierto es que las declaraciones de los aludidos testigos no son concordantes en cuanto a los hechos por ellos explicados, ni coinciden en señalar a los demandantes como poseedores del terreno en litigio, lo cual sin duda alguna contribuyó a que el Tribunal de segunda instancia en lo pertinente expresara: "dentro de los parámetros de la sana crítica tenemos que convenir en que tales declaraciones no son concordantes, porque, inclusive están admitiendo que Manuel Bernal Calderón (sic) trabajó en ese terreno durante cierto lapso"(f.100).

Sobre este primer motivo nos parece que el recurrente cuestiona el hecho de que el Tribunal Superior le dio valor a las declaraciones de los testigos de los demandados, cuando se comprende por lo planteado que lo que hizo fue valorar conforme a los principios de la sana crítica dichos testimonios, señalando que a pesar de que los mismos no son concordantes en cuanto a la especificación de la persona que trabajó y es el poseedor del bien inmueble en pleito, sí se expresa en estos que el demandado, Manuel Calderón Bernal, llegó a trabajar por un período de tiempo en el lote de terreno en conflicto.

De allí que, tal y como se expuso con antelación, los testigos de la parte que se opuso a la solicitud de adjudicación, no acreditaron que ellos eran los poseedores legítimos del terreno cuya adjudicación solicitó ante la Reforma Agraria el señor Manuel Calderón Bernal.

Como señala el jurista panameño Jorge Fábrega en un estudio relacionado con los principios probatorios en materia civil, en cuanto a la carga de la prueba:

> "De suerte, pues, que este principio debe enunciarse así: cada parte asume la carga de los presupuestos de hecho de la norma jurídica que les es favorable.
>
> Es la concepción alemana, elaborada con mayor profundidad por Rosemberg. Para esta teoría se considera la posición que el hecho ocupa en relación con el fin jurídico perseguido por cada parte, es decir, con la norma legal que lo contempla como presupuesto de su aplicación, y de tal premisa se deduce la regla general: quien resulta favorecida en esa norma, porque consagra el fin jurídico que persigue, soporta la carga de probarlo." (Estudios Procesales. Tomo II. Editora Jurídica Panameña. Panamá 1990. Pág. 890)

En ese mismo sentido se expresa el artículo 773 del Código Judicial, en el caso que nos ocupa correspondía a los demandantes comprobar las afirmaciones hechas en su demanda, es decir que tenían la posesión del bien y mejor derecho que el demandado.

Por otro lado, la Sala observa que las pruebas testimoniales presentadas por el demandado, es decir, las de Manuela Santana, Enrique Ortega Avila, José Amado Saavedra, Cecilia Villarreal Díaz y Fermín Avila García fueron contestes al señalar que la parcela de tierra cuya adjudicación se solicita ha sido trabajada por Manuel Calderón Bernal, a más de que es el poseedor del terreno por más de veinte años. Estos testimonios corroboran los hechos en los que el demandado fundamenta su defensa.

En vista de lo constatado, mediante los testimonios que obran en el proceso no se aprecia que el Tribunal ad quem haya valorado indebidamente la prueba testimonial, máxime cuando la parte demandante ni siquiera aportó las pruebas que permitiera sustentar sus pretensiones.

Con respecto a la diligencia de inspección ocular ordenada por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, con la finalidad primordial de examinar o reconocer directamente el terreno objeto de la controversia, (foja 74), se lee en el informe escrito que rindieron los peritos (Fs.75-76), lo siguiente: "Ese globo de terreno está en completo abandono sin indicios de que alguien lo estuviese poseyendo. En el acto fuimos informados que el señor Manuel Calderón Bernal no permitía que ningún miembro de la familia lo trabajara y por ello está en total abandono" (f. 75).

Asimismo expresan los peritos que "El primer globo de terreno colinda con Fernando Antonio Ortega Bernal, Carlos Bernal Tajada, camino servidumbre. La cerca no tiene atención alguna, está completamente destruida.

El segundo globo de terreno, el cual se encuentra a 40 metros de distancia aproximadamente, pudimos observar que dicho globo de terreno está abandonado y lleno de monte y allí existen varias palmas y mangos, la cerca tiene 4 cuerdas de alambre de púa, bastante nuevo."

A pregunta que se formuló a los presentes, sobre quien puso el alambre, "nos informaron que fue el señor Enrique Calderón Luna, quien se nos informó también que fue quien corrió con el gasto de la misma."

Visto lo anterior, se observa que el informe de los peritos contribuyó a evidenciar que los opositores de la adjudicación no estaban labrando el terreno en calidad de poseedores, y que tampoco lograron acreditar alguno de los supuestos legales que justificarían acceder a la oposición presentada por los demandantes.

Sobre la inspección ocular realizada, conviene destacar lo expuesto en la resolución impugnada, la cual en lo pertinente acotó: "El recurrente afirma que en el litigio el juzgador se percató a través de la inspección ocular, que el terreno está inculto, por lo que no puede ser adjudicado al demandado, sino a todos por partes iguales, ya que se trata de hermanos que recibieron ese bien por vía herencial" (Fs.99). Más adelante se agrega con relación a esta postura del apoderado legal de la parte actora que posiblemente "sea lo mas razonada y equilibrada, pero ello no es factible de ser decidido en este proceso, por lo que se impone la preservación del fallo del inferior, con la obligante imposición de costas ordenadas por el artículo 1058 del Código Judicial, como consecuencia de la aprobación de lo resuelto por el Juez Primario." (Fs. 101).

Al no estimarse configurados los motivos en los que se apoya la causal invocada, es forzoso concluir que tampoco se produce la violación de las normas de derecho citados por el casacionista.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del 21 de enero de 1991 expedida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Las costas se fijan en la suma de ciento cincuenta balboas (B/.150.00).

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.)RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
(fdo.) Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIRÓ Y APARICIO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL ORDINARIO QUE LE SIGUE GABRIEL ALEXIS APARICIO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Conoce esta Sala del presente recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de MIRÓ Y APARICIO, S. A., contra el auto proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 14 de abril de 1993, en la solicitud de embargo de un Certificado de Garantía, dentro del Proceso Ordinario convertido en Ejecutivo, incoado por el señor **GABRIEL ALEXIS APARICIO** contra la parte recurrente.

Ingresado el negocio a esta Sala, previo reparto de rigor, fue fijado en lista por el término de seis días, para que dentro de los tres primeros la parte opositora al recurso alegara sobre la admisibilidad del mismo; y para que dentro de los tres siguientes, el recurrente replicara. Dicho término ha vencido, sin que hubiese sido aprovechado por ninguna de las dos partes, por lo que corresponde a esta Corporación pronunciarse ahora sobre la admisibilidad o no del recurso, previas las siguientes consideraciones.

En primer lugar, debe examinarse si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley. La Sala observa que el auto impugnado ha sido dictado por un Tribunal Superior en segunda instancia y que la cuantía del negocio es mayor de B/.5,000.00. Es imperante determinar entonces, si la resolución corresponde a alguno de los presupuestos previstos en el artículo 1149 del Código Judicial, que contiene una lista taxativa de las resoluciones susceptibles de impugnación a través del recurso extraordinario de casación y que a continuación se transcribe:

> "ARTÍCULO 1149: El recurso de casación tendrá lugar contra las resoluciones de segunda instancia proferida por los Tribunales superiores de Justicia en los siguientes casos:
>
> 1.-Cuando se trate de sentencias en procesos de conocimiento o que deciden excepciones en procesos ejecutivos;
>
> 2.-Cuando se trate de autos que pongan término a un proceso o que por cualquier causa extingan o entrañen la extinción de la pretensión o imposibiliten la continuación del proceso;

3.-Cuando se trate de autos que nieguen mandamiento de pago, o decidan tercerías excluyentes o coadyuvantes, prelación de crédito, o aprueben o imprueben remates;

4.-Cuando se trate de autos que decidan oposiciones o levantamientos o exclusiones, en procedimientos cautelares;

5.-Cuando se trate de los autos que, por cualquier causa, pongan fin a la ejecución de sentencia;

6.-Cuando se trate de los autos sobre declaratorias de herederos o adjudicación de bienes hereditarios;

7.-Cuando se trate de autos que ordenen, nieguen o aprueben o imprueben la participación de bienes hereditarios o la división de bienes comunes;

8.-Cuando se trata de resoluciones que confirmen, modifiquen o revoquen las que aprueben o imprueben las liquidaciones de perjuicios, de conformidad con el artículo 983 de este Código y,

9.-Cuando proceda Recurso de Casación en contra de autos que deciden procesos no contenciosos, en cuyo caso también podrá ser interpuesto por el Ministerio Público".

El recurrente alega que el Auto en cuestión "pone fin a la ejecución de la sentencia y que por tanto, admite el recurso de casación, de acuerdo con el ordinal 5 del artículo transcrito. Esta Sala considera que la resolución que niega una solicitud de embargo de un Certificado de Garantía, como la que nos ocupa en el presente caso, no pone fin a la ejecución de la sentencia, ya que el interesado puede hacer valer su derecho de otra manera.

Por otro lado, la resolución impugnada tampoco encaja en ninguno de los otros supuestos establecidos por el artículo 1149 del Código Judicial, lo que conduce a esta Corporación a concluir que el presente recurso de casación es inadmisible, porque no cumple con la primera exigencia contemplada por el artículo 1165 del mismo Código.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por MIRÓ Y APARICIO, contra el Auto proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el 14 de abril de 1993.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.)RODRIGO MOLINA A. (fdo.)AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.)SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretraria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN EN DIVORCIO

VIRGILIO ORLANDO GUARDIA E. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A TERESA LUCIA TORCHIA VELARDO. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL

VISTOS:

En pronunciamiento de casación de 11 de agosto de 1993, dentro del proceso de divorcio promovido en contra de TERESA LUCIA TORCHIA VELARDO por el señor VIRGILIO ORLANDO GUARDIA, la Corte dispuso casar la sentencia dictada el 9 de septiembre de 1992 por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá y la Sala, convertida en tribunal de instancia, ordenó que se pidiera al tribunal los documentos correspondientes a la demanda, contestación de la demanda, la reconvención y contestación de la reconvención del proceso de divorcio que se ventila en el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, así como las sentencias que se hubieren dictado en dicho proceso. En cumplimiento de lo ordenado por la Corte, el señor Juez Séptimo remitió las copias acerca de la demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación de la misma, omitiendo lo relacionado a la sentencia. Posteriormente, el Juzgado envío nuevo oficio en donde se indica que en ese proceso no se había dictado sentencia y que se encontraba pendiente de una notificación de la designación de un nuevo apoderado por parte del señor Guardia. Por último, adicionó dicho oficio mediante nueva nota en donde remitió copia íntegra, debidamente autenticada, del expediente que contiene el proceso.

Cumplido como ha sido lo ordenado por la Corte, la Sala se avoca a dictar la sentencia que reemplace a la que dictó el Tribunal Superior.

El proceso que se ventila se inicia con la demanda de divorcio que propone el señor VIRGILIO ORLANDO GUARDIA E., a través del licenciado LUIS HIGUERA A., el 16 de abril de 1991, por medio de la cual pretende que se decrete el divorcio del matrimonio que lo une con TERESA LUCIA TORCHIA VELARDO. Esa demanda se le corrió en traslado al Ministerio Público y a la parte demandada. Ni el Ministerio Público ni la demandada contestaron el traslado que se le hiciera. Así las cosas, el tribunal señaló la fecha

de audiencia el 7 de agosto de 1991, la cual se realizó ese día y sólo se apersonó el apoderado de la parte actora.

Este negocio fue desatado mediante sentencia dictada el 28 de octubre de 1991, en donde se decreta disuelto el vínculo matrimonial que une a las partes en el proceso.

Al notificarse de la sentencia la señora TERESA LUCIA TORCHIA VELARDO, le concedió poder al licenciado RAÚL GARCÍA para que la representara en dicho juicio. El licenciado GARCÍA de la demanda en escrito presentado el 7 de noviembre de 1991. Dentro del término que se el concediera para que presentara alegato en segunda instancia expresó lo siguiente:

"...

Nos oponemos categóricamente a la pretensión del demandante toda vez que en esta demanda ha pretendido sorprender a nuestra cliente mediante una acción de divorcio inusitada y carente de toda consistencia para ejecutarla, utilizando para ello en una forma poco responsable, al Órgano Judicial.

HECHOS:

PRIMERO: Virgilio Guardia E. presentó demanda de divorcio en contra de mi poderdante por la causal de abandono el día 2 (dos) de julio de 1990. Demanda que quedó radicada en el Juzgado SÉPTIMO de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo civil.

SEGUNDO: Dicha demanda le fue notificada a la Sra. Teresa Torchía el 24 de julio de 1990.

TERCERO: El día 11 de septiembre de 1990, la demandada (Teresa Torchía) contesta la demanda y a su vez presenta RECONVENCIÓN en contra del Sr. Orlando Guardia, por la causal de trato cruel.

CUARTO: El Sr. Orlando Guardia se notificó de la demanda de reconvención el 4 de octubre de 1990.

QUINTO: El 20 de febrero de 1991, el señor Orlando Guardia, contestó la demanda de reconvención.

SEXTO: En toda la vía procesal que ha sufrido este negocio en el Juzgado SÉPTIMO de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, se ha garantizado a las partes su derecho a defensa, pruebas, contra pruebas, objeciones, práctica de pruebas, alegatos y actualmente se encuentra en proceso de dictar sentencia.

SÉPTIMO: Sólo la Sra. Torchía hizo uso del derecho a presentar y practicar sus pruebas y alegatos para acreditar los hechos de su reconvención basada en el trato cruel profesado por esposo, ante el Juzgado Séptimo ya referido.

OCTAVO: El 16 de abril de 1991, en forma insólita y sorprendente, el Sr. Guardia E. presenta nuevamente otra demanda de divorcio en contra de mi cliente, por la MISMA causal (abandono). Pero en esta ocasión dicha acción queda radicada en el Juzgado SEXTO de CIRCUITO del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo civil.

NOVENO: El Sr. Guardia E. ejerce esta acción, a sabiendas que existía un proceso previo, por la misma causal en el Juzgado SÉPTIMO (al lado) a menos de un (1)mes y veintiséis (26) días de haber contestado una demanda de RECONVENCIÓN incoada por su esposa por la causal de TRATO CRUEL.

DÉCIMO: En forma increíblemente rápida, el Juzgado SEXTO de Circuito del Primer Circuito Judicial, produce la sentencia decretando divorcio por la causal de abandono, de la cual hoy disentimos; producto del trámite seguido "con los estadros del Tribunal" ya que se notificó a nuestra cliente pero que no obstante, ella no compareció al proceso creyendo que se trataba del anteriormente iniciado.

UNDÉCIMO: El Sr. Guardia no sólo ha subutilizado los esfuerzos de un Tribunal serio y competente sino que ha pretendido sorprender, en su buena fe a dicho estrado y a su contraparte con esta acción, en la que se utiliza los servicios que fehacientemente otorga la ley a los particulares para lograr en forma poco transparente, su objetivo.

Si el Sr. Guardia presentó como causal de divorcio el abandono; debió preocuparse para comprobar responsablemente su causal dentro del proceso u oponerse a la que por reconvención inició su esposa sin escudarse en otras fórmulas para que inoída parte se disolviera el vínculo "por la causal" por él delegado.

Al respecto, nuestro Código Judicial es diáfano en lo que respecta a esta acción, garantizando así la rectitud del derecho, pues se podría resquebrajar el principio aquel por el cual no puede juzgarse a una misma persona dos veces por la misma causal, produciendo una indefensión jurídica del agraviado en un proceso determinado, pero vencido en otro, por la misma causal.

Ello puede invitarnos a reflexionar seriamente sobre la suerte que correrá aquel que tenga esta misma suerte.

El artículo 663 del Código procesal prohíbe estos actos de fraude en las actuaciones judiciales en las que el actor utilizando y aprovechando la infraestructura tribunalicia presenta más de una acción por la misma causal, con la misma pretensión y en contra de la misma persona. Esto es realmente insólito. ...".

El representante de la parte demandante y favorecida con la sentencia de primera instancia, se expresó así:

"...
Antes de adentrarnos a las constancias procesales para determinar si el Juez A - quo cumplió con las ritualidades de la ley procesal. La demanda fue admitida por el Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante resolución de 15 de mayo de 1991, esgrimiéndose como causal de divorcio el abandono absoluto por parte de la mujer de sus deberes de esposa, causal 7° del artículo 114 del Código Civil, reformado por la ley 19 de 9 de julio de 1991, la que fue admitida y dada en traslado el 17 de junio de 1991, a la demandada, quien dejó precluir el término de contestación. Es decir, que la litis contestación se trabó entre los litigantes, teniendo como basamento la causal de divorcio, de abandono absoluto de sus deberes de esposa, por lo que la decisión se enjuició sobre este extremo.

Mediante providencia de fecha doce (12) de julio de los corrientes, ese augusto tribunal, se dispuso dar cumplimiento a la siguiente etapa procesal, fijó fecha de Audiencia Oral (7 de agosto de 1991) para que concurrieran las partes a ser valer sus pretensiones. Etapa procesal esta que concurrimos a darle cumplimiento con la exigencia del artículo 773 de nuestro ordenamiento procesal civil, es decir probar los hechos que invocaremos en nuestra demanda, para probarlo adujimos como elementos de convicción el certificado de matrimonio, testimonio de los ciudadanos Rogelio Fragueiro, Emilza Testa Jirón y Omar Rodríguez y una series de pruebas documentales, acreditándose que la parte demandada dejó de proponer o aducir pruebas.

Enviado a la Fiscalía Octava del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, luego de analizar las pruebas testimoniales, el distinguido representante de la sociedad concluyó en su Vista Fiscal N°232, de 25 de septiembre de 1991, que debía acceder a la pretensión de mi mandante. Esta conclusión arribó producto de la valoración de las pruebas testimoniales, indiciales de acuerdo a lo normado por nuestro ordenamiento procesal civil (artículos 673, 904, 906 y 909 del Código Judicial).

El Tribunal de conocimiento consideró prudente recabar otras pruebas, a fin de tener más elementos de juicios, por lo que ordenó oficiar a al (sic) corregiduría de Río Abajo y al Tribunal Tutelar de Menores, donde se tiene conocimiento de otros procesos en donde figuran como parte los esposos Guardia-Torchía.

Ambas instituciones públicas cumplieron con la exigencia del Tribunal de conocimiento, de las pruebas recabadas en concordancia con las pruebas testimoniales se deducen que en el hogar de los esposos Guardia - Torchía no existe la paz ni el sosiego doméstico lo que justifica el divorcio por la causal cuarta (4) del artículo 114 de la principal legislación sustantiva civil, a pesar de que no fuera invocada. Al respecto el artículo 470 del Código Judicial, en su párrafo segundo nos dice "en proceso de relaciones de familia o relativo al estado civil, el juez de primera instancia podrá reconocer pretensiones u ordenar prestaciones aún cuando no estén pedidas, siempre que los hechos que las originen hayan sido discutidos por las partes en el proceso, estén debidamente comprobados, sus relaciones con las peticiones de la demanda y con causa de pedir".

Como puede apreciarse, el problema que se plantea emerge sobre si la excepción de litis pendencia invocada en el alegato de la demandada debe ser considerada por el tribunal y, en caso afirmativo, si se han dado los presupuestos procesales que acrediten su existencia.

El artículo 663 del Código Judicial establece en forma expresa que cuando se inicia un proceso sobre la misma pretensión, los mismos hechos y por las mismas partes, no podrá iniciarse otro, cualquiera que sea la vía que se elija. Agrega que el Juez de oficio o a petición de parte, una vez que se compruebe que se ha dado la existencia de otra demanda anterior, ordenará el rechazo de la demanda.

La finalidad primordial de esta disposición es evitar la existencia de juicios paralelos que puedan producir sentencias contradictorias.

De acuerdo a las piezas procesales traídas de oficio a este proceso, el señor VIRGILIO ORLANDO GUARDIA ESPINOSA, mediante apoderado judicial, presentó el día 2 de julio de 1990 demanda de divorcio en contra de su esposa TERESA LUCIA TORCHIA VELARDO, la cual fue admitida por el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá. La demandada recibió traslado el 28 de agosto de 1991 de dicha demanda y la contestó el día 11 de septiembre de 1991 y, a su vez, promovió demanda de reconvención.

En la demanda presentada por VIRGILIO ORLANDO GUARDIA ESPINOSA se solicita la disolución del vínculo matrimonial, de acuerdo al ordinal séptimo del artículo 114 del Código Civil, esto es, por abandono absoluto de sus deberes de esposa y de madre, igual causal que se alega en la demanda que se promoviera y que es materia del actual proceso. Los hechos de la demanda acogida por el Juzgado Séptimo son similares a los que aparecen en la demanda que se promoviera en el Juzgado Sexto.

Lo anterior determina que se está en presencia de dos demandas que buscan un mismo propósito. La segunda demanda comprende totalmente la primera demanda.

Por otro lado, cabe anotar que la demanda admitida en el Juzgado Séptimo es de fecha, tal cual se expresa anteriormente, 2 de julio de 1990, sin que ella haya pronunciado sentencia, y la demanda materia de este proceso tiene fecha de 16 de abril de 1991.

Se colige, sin lugar a dudas, que estamos en presencia de la excepción que se alega de la llamada figura litis pendencia, contemplada en el artículo 663 del Código Judicial, por lo que debe procederse hacer su declaratoria, en virtud de que de no hacerlo se estaría violentando el mandato expreso de la norma precitada.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada el 28 de octubre de 1991 por el Juez Sexto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil y DECLARA PROBADA la Litis Pendencia invocada por la parte demandada en este proceso.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

THIRSA BEATRIZ GONZÁLEZ DE PITTI, RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A ALEJANDRO PITTI GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada LIA DEL R. PATIÑO DE MARTÍNEZ en su condición de apoderada especial del **THIRSA BEATRIZ GONZÁLEZ DE PITTI**, parte demandante en el proceso de Divorcio seguido contra la Sentencia de 12 de julio de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista a fin que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, término que fue aprovechado por ambas, como consta de fojas 120 a 127 y 128 a 129, respectivamente.

Seguidamente, se corrió traslado del recurso al Procurador General de la Nación, quien emitió concepto (fs.131 y 132), recomendando que el mismo fuera admitido.

Así, una vez examinado el presente recurso de casación, esta Sala de la Corte concluye en igual sentido que el Jefe del Ministerio Público, al considerar que se cumple con los presupuestos determinados por el artículo 1154 del Código de Procedimiento Civil. Es decir:

1.- Que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3.- El escrito de formalización del recurso se ajusta a las exigencias del artículo 1160 ibídem., puesto que se determina en forma correcta una de las causales de fondo, se establecen los motivos que la fundamentan y, las normas de derecho infringidas con la correspondiente explicación.

4.-Finalmente, la causal expresada es de las que señala la ley procesal en su artículo 1154.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación propuesto por THIRSA BEATRIZ GONZÁLEZ DE PITTI contra la Sentencia de 12 de julio de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el proceso de Divorcio seguido contra ALEJANDRO PITTI GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ISABEL FLORES BARBA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE A EDUARDO FLORES BARBA, PEDRO FLORES Y ZOILA FLORES BARBA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **José Luis Varela G.**, actuando en nombre y representación de **ISABEL FLORES BARBA**, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 29 de julio de 1993 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario de oposición que la recurrente le sigue a **EDUARDO FLORES BARBA**, **PEDRO FLORES BARBA Y ZOILA FLORES BARBA.**

Al ingresar el expediente a la Sala de la Corte y por cumplidas las reglas de reparto se fijó en lista a fin de que las partes alegaran por escrito sobre la admisibilidad del recurso, término que ninguna de ellas aprovechó.

El recurso de casación se encuentra en estado de decidir sobre su admisibilidad y a ello procédese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1165 del Código Judicial. Veamos:

En este caso se cumple con tres de los requerimientos de la norma antes citada, estas son: que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; el recurso ha sido interpuesto en tiempo; y, la causal expresada es de las señaladas por la ley.

En cuarto requisito, que no ha sido satisfecho integralmente es el relativo a las exigencias que establece el artículo 1160 ibídem, para el escrito de casación.

Los defectos se perciben en los motivos y en la consignación de las normas consideradas infringidas, puesto que la causal ha sido establecida en forma debida al expresarse una de fondo consistente en la "Infracción de las normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

El examen de los motivos del recurso revela que su contenido no se limita al obligante cargo de injuridicidad contra la sentencia recurrida. El recurrente desarrolla en los mismos diversas apreciaciones subjetivas, lo que resulta más evidente en el tercero y en el cuarto.

En cuanto a las normas consideradas infringidas, a pesar que se alude a las de tipo procesal y las de carácter sustantivo, no se cita en el orden adecuado, es decir, expresando en primer lugar las que establecen los medios probatorios y posteriormente las sustantivas, como lo han reiterado constantemente la jurisprudencia de la Corte en materia de casación civil.

Así las cosas, se concede al recurrente el término que establece el artículo 1166 del Código Judicial para que corrija el recurso de casación, según lo indicado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación propuesto por ISABEL FLORES BARBA contra la sentencia de 29 de julio de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la sala de lo Civil.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PATRICIA LUCIA FLYNN WALKER RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A ENRIQUE OCAMPO SIMONIN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL

VISTOS:

La firma forense **CIGARRUISTA & FLYNN**, **P.C.** en su condición de apoderados especiales de **PATRICIA LUCIA FLYNN WALKER**, parte demandante en el proceso de divorcio seguido contra **ENRIQUE OCAMPO SIMONIN**, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 25 de mayo de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista a fin que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, término que fue aprovechado sólo por el recurrente, como consta de fojas 136 a 142.

Seguidamente, se corrió traslado del recurso al Procurador General de la Nación, quién emitió concepto (fs.131 y 132), recomendando la corrección del recurso. Así, una vez examinado el presente recurso de casación, esta Sala de la Corte difiere de la opinión del Jefe del Ministerio Público, al considerar que, básicamente, se cumple con los presupuestos determinados por el artículo 1154 del código de Procedimiento Civil. Es decir:

1. Que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3. El escrito de formalización del recurso se ajusta a las exigencias del artículo 1160 ibídem., puesto que se determina una de las causales de fondo, se establecen los motivos que la fundamentan y, las normas de derecho infringidas con la correspondiente explicación.

4. Finalmente, la causal expresada es de las que señala la ley procesal en su artículo 1154.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación propuesto por PATRICIA LUCIA FLYNN WALKER contra la Sentencia de 25 de mayo de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el proceso de divorcio seguido contra ENRIQUE OCAMPO SIMONIN.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MODESTO JUSTAVINO CANDANEDO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO PROPUESTO CONJUNTAMENTE CON MARÍA DEL C. MORENO. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), dentro del proceso de divorcio por mutuo consentimiento promovido por MODESTO JUSTAVINO CANDANEDO y MARÍA DEL C. MORENO, el primero mencionado anunció y formalizó oportunamente recurso extraordinario de casación, en el fondo. Mediante auto fechado el seis (6) de julio del año en curso, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial ordenó remitir el expediente a esta Corporación de Justicia.

Ingresado al despacho, y previo el reparto de rigor, fue fijado en lista por el término de seis (6) días para que dentro de los tres primeros días la parte opositora al recurso alegare sobre la admisibilidad y dentro de los tres días siguientes el recurrente replicara. Vencido dicho término sin que fuera aprovechado por las partes interesadas y dada la naturaleza del negocio, se le corrió traslado al Procurador General de la Nación, de conformidad con el artículo 1172 del Código de Procedimiento Civil, cuya vista consta a fojas 50 y 51 del expediente.

La Sala entra a decidir la admisibilidad del recurso interpuesto, en base a lo que establecen los artículos 1160, 1165 y 1166 de la precitada legislación.

La resolución, cuya impugnación aquí se impetra, es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, por cuanto se trata de una sentencia de segunda instancia dictada por un tribunal superior, en un proceso de divorcio. El recurso ha sido interpuesto en tiempo.

El escrito por medio del cual fue formalizado reúne, de manera general los requisitos ordenados por el artículo 1160. La causal invocada, cual es "Infracción de normas sustantivas de derecho, por violación directa de la norma de derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución", está prevista como tal en el artículo 1154 del Código de Procedimiento.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por MODESTO JUSTAVINO CANDANEDO, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

NOVIEMBRE 1993

AUTO CONSULTADO

SUMARIO SEGUIDO A BOLÍVAR ENRIQUE NIETO HERNÁNDEZ, GILBERTO ANTONIO QUIROZ Y AZAEL RIVAS MORALES POR HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALEXANDER PITTY CHANDLER. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Atendiendo a lo establecido en el artículo 2481 del Código Judicial, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial elevó consulta ante la Sala Segunda de la Corte del auto de sobreseimiento definitivo dictado a favor de **BOLÍVAR ENRIQUE NIETO HERNÁNDEZ, GILBERTO ANTONIO QUIROZ SANTANA y AZAEL RIVAS MORALES,** agentes de la Fuerza Pública investigados por el supuesto homicidio cometido en perjuicio de **ALEXANDER PITT CHANDLER.**

En el expediente está acreditada la condición de funcionarios públicos de los investigados (fs.68, 97 y 98), por lo que procede hacer una revisión de los elementos de hecho y de derecho que rodearon los sucesos en los cuales PITT CHANDLER perdió la vida violentamente, a fin de decidir la consulta presentada.

En la parte pertinente el Fiscal Segundo Superior expone en la Vista Fiscal que los imputados actuaron en el cumplimiento de sus deberes, por lo que sus conductas no pueden ser calificadas como delictuosas, al amparo de lo que establece el artículo 19 del Código Penal, y por ello considera que debe ser aplicado el artículo 2210, numeral 2 del Código Judicial (Fs. 69-73 y 99).

En ese mismo sentido resolvió el Segundo Tribunal en el auto de 29 de septiembre de 1993, objeto de la consulta, cuando expuso:

> "Así pues, tenemos que si bien se ha acreditado en autos la muerte violenta de ALEXANDER PITT CHANDLER, ocasionada por el agente de la Fuerza Pública BOLÍVAR ENRIQUE NIETO HERNÁNDEZ, ese acto es descriminalizado por el artículo 19 del Código Penal ya que la misma se verificó cuando éste último, no sólo cumplía con el deber legal de mantener el orden público, sino que se vio precisado a proteger su humanidad y las de sus compañeros (QUIROZ Y RIVAS), pues eran objetos de ataque con disparos de arma de fuego por parte del nombrado PITT y su acompañante
>
> Por ello entonces BOLÍVAR ENRIQUE NIETO debe ser favorecido con una medida liberatoria definitiva, fundada en el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial, la cual debe hacerse extensiva a GILBERTO ANTONIO QUIROZ y AZAEL RIVAS MORALES, pero con fundamento en el numeral 1° de la misma norma legal señalada" (fs. 106 y 107).

Un estudio del expediente permite a la Sala conocer que en la madrugada del 26 de mayo de 1992, en las inmediaciones de una estación de gasolina ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, se produjo un intercambio de disparos entre el hoy occiso y un desconocido que lo acompañaba, y dos de los tres agentes del orden público que hacían ronda en ese momento. Según las declaraciones de los miembros de la Fuerza Pública, momentos en que ejercían sus labores escucharon unos disparos y hacia ellos venían corriendo dos sujetos armados. A la voz de alto que les dio el agente Rivas, los sujetos les dispararon, por lo que Quiroz y Nieto tuvieron que responder con sus armas.

Continúan narrando los sindicados que los disparos alcanzaron a los dos sujetos, uno de los cuales logró darse a la fuga, presumiblemente herido, y el otro falleció en el lugar de los hechos, encontrándose a su lado un arma calibre 38, serie BFA-4385, marca Smith & Wesson, de cacha de madera color chocolate (fs. 22-25, 26-29 y 30-32).

A lo largo de la investigación no se practicaron otras pruebas testimoniales, pues según los indagados no hubo testigos presenciales de los hechos. Solamente consta un "informe de novedad" preparado por el detective Rogelio A. Ortega R., quien anota que cuando se dirigía hacia su casa vio que de un carro tipo camioneta se bajaron dos sujetos con actitud sospechosa, con los cuales tuvo que intercambiar disparos por unos cinco minutos. Debido al volumen de fuego hizo retroceder a los sujetos, quienes a su huída se encontraron con los agentes de la Fuerza Pública que hacían la ronda, produciéndose un intercambio de disparos entre los sujetos y los agentes (f. 15).

El proyectil de bala que fue extraído del cadáver de Pitt Chandler fue sometido a prueba de balística. Según dicho informe, el proyectil "pudo haber sido disparado por armas de fuego tipo fusil, calibre .223 ó 5,56mm, en marcas tales como COLT, VALMET y U.S. MILITARY WEAP" (fs. 40-41). Este informe se adecúa a lo manifestado por el agente Nieto Hernández, quien expresó que el arma que portaba y con la que logró herir al sujeto era una M-16 (f.23).

También hay constancia en el expediente que el auto marca Honda, tipo camioneta, color azul, matrícula No. 8-16515, en el cual, según versión del detective Ortega, se transportaban los referidos sujetos, fue puesto a disposición de la Fiscalía Auxiliar (f.33).

El Protocolo de Necropsia reveló que las causas de la muerte de Pitt Chandler fueron choque hemorrágico y herida penetrante por proyectil de arma de fuego en tórax (f.55).

Ante la ausencia de otros elementos que permitan conocer de manera más completa la realidad de lo acontecido el día de los hechos, la Sala considera que las pruebas practicadas durante el sumario conducen a sostener que Bolívar Enrique Nieto Hernández actuó en cumplimiento de su deber, por lo que la existencia de esta causa de exclusión de antijuridicidad impide considerar que su acción se tenga como delito, debiendo de esta manera, declararse la no existencia del hecho punible.

No obstante, el sobreseimiento definitivo a favor de Nieto Hernández debe dictarse con fundamento en el numeral 3 del artículo 2210 del Código Judicial, ya que en este caso, debido a la existencia de una causa de justificación, el imputado queda exento de responsabilidad penal. En cuanto a las conductas de Alberto Antonio Quiroz y Azael Rivas Morales, debe la Sala confirmar lo resuelto en el auto consultado pues éstos no tuvieron participación en la acción ejecutada por su compañero, o sea que resulta con evidencia que el hecho motivo de la investigación no fue ejecutado por ninguno de los dos.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto consultado, con la salvedad de que a BOLÍVAR ENRIQUE NIETO HERNÁNDEZ se le sobresee definitivamente, al tenor de lo establecido en el artículo 2210, numeral 3 del Código judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIO EN AVERIGUACIÓN DE EL O LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RICARDO ALBERTO COGLEY MOJICA Y GABRIEL SERRANO GARCÍA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Con el objeto de surtir la consulta de rigor, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial envió a la Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia el sumario que se relaciona con la muerte de los señores **RICARDO ALBERTO COGLEY MOJICA y GABRIEL SERRANO GARCÍA**, hecho ocurrido el día 14 de febrero de 1992.

Mediante Auto de 20 de septiembre de 1993, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial dictó sobreseimiento definitivo de manera objetiva e impersonal en el sumario antes mencionado (fs.182-195) y ordenó la consulta de dicha decisión, por tratarse de servidores públicos los beneficiados con tal medida.

Un detallado análisis de las constancias procesales pone en evidencia que los señores Ricardo Alberto Cogley Mojica, Gabriel Serrano García y José Esteban Withingham cometieron un delito de robo en perjuicio de la Sucursal de la Caja de Ahorros que está ubicada en El Ingenio, frente a la Vía Simón Bolívar el día antes señalado y que por aviso de la seguridad de la institución bancaria se alertó a la Policía Nacional.

En la huida del lugar de los acontecimientos los responsables del robo interceptaron un vehículo que transitaba por el lugar y se dieron a la fuga en el mismo, luego de apoderarse de más de diecisiete mil balboas y varias armas de los custodios de la entidad bancaria asaltada.

En la persecución de los asaltantes da cuenta el sumario la actuación del cabo Erick Branca Requinez, quien conducía el patrulla número 82, de regreso de un viaje luego de dejar a unos oficiales en la Estación de Pueblo Nuevo y que se encontraba por los alrededores por venir de regreso a la Estación de Betania, y quien manifiesta haber perseguido a los asaltantes y haber cruzado disparos con los mismos. Su arma de reglamento es calibre 38 y del señor Rogelio A. Harris Cumbertbach, Jefe de Seguridad de la Caja de Ahorros.

También participó en la persecución de los asaltantes el señor Rogelio A. Harris Cumbertbach, Jefe de Seguridad de la Caja de Ahorros, quien se enteró de lo ocurrido en la Sucursal del Ingenio por medio de la comunicación efectuada por la seguridad de la sucursal afectada.

Harris relató los hechos ocurridos, concordando su versión en términos generales con la brindada por el cabo Branca, de forma que se acredita fehacientemente que los asaltantes luego de efectuar disparos contra sus perseguidores trataron de evadirse en un vehículo interceptado en el lugar de los acontecimientos, pero que no tuvieron

mayor éxito en la fuga pues colisionaron en el vehículo utilizado y fueron interceptados por sus perseguidores.

La síntesis de los hechos ocurridos que se ha efectuado pone en evidencia que los fallecidos asaltaron una institución bancaria y que en su desesperada huida fueron perseguidos por agentes de la autoridad y de la seguridad de la Caja de Ahorros, quienes cumplieron con su deber de tratar de evitar la fuga de los asaltantes y lograr recuperar el producto del ilícito perpetrado por quienes trataban de evadirse de sus perseguidores.

La muerte de RICARDO ALBERTO COGLEY MOJICA, sin embargo, se produjo por disparo proveniente del arma que los asaltantes le quitaron a los miembros de la seguridad de la entidad asaltada, por lo que no puede atribuirse su fallecimiento a los agentes que perseguían el vehículo en el cual los malhechores trataban de huir.

En el sumario no ha podido constatarse qué arma de fuego produjo la muerte de Gabriel Serrano García, ya que no se extrajo proyectil alguno de su cadáver, pero es obvio que la misma se produjo en circunstancias en que no puede imputarse su deceso a los agentes de la autoridad o de la seguridad de la institución bancaria pues nada indica que éstos son responsables de su fallecimiento.

Por otra parte, es posible que la misma se haya debido a disparo accidental del arma del otro fallecido, quien pudo haber disparado su arma luego de ser herido mortalmente y antes de que llegaran los agentes al vehículo en el que se encontraban.

La posición de los fallecidos en el vehículo es muy significativa, ya que uno fue encontrado muerto en el asiento que ocupaba y el otro en posición que denota haber intenta salir del automóvil cuando ya estaba herido.

No puede imputarse a los agentes de la seguridad la muerte de los asaltantes, ya que se limitaron a cumplir con su deber en todo momento, al tiempo que uno de los fallecidos no perdió la vida por la actuación de Branca y Harris.

Siendo así las hechos objetivamente comprobados en el sumario, la Sala tiene que arribar a la misma conclusión que el Segundo Tribunal Superior de Justicia y aprobar el auto consultado.

Por las razones antes expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, APRUEBA el auto consultado por el Tribunal Superior en esta causa.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS A BRÍGIDO MIRANDA JURADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JOSÉ ANTONIO JAÉN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial ha remitido a esta Sala, en grado de consulta, auto calendado 5 de octubre de 1993, mediante el cual se sobresee definitivamente a Brígido Miranda Jurado, quien fuera investigado por la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio de José Antonio Jaén Hernández.

La consulta constituye una figura procesal que, en razón de la condición funcional del imputado, otorga competencia al superior a fin de que revise la decisión del juez de instancia (a.2481 C.J).

Según las constancias sumariales, en la tarde del 30 de marzo de 1993 Juan Antonio Jaén se lanzó del primer alto de una casa ubicada en calle 13 y avenida Justo Arosemena de la ciudad de Colón, para evitar ser capturado por el agente de policía Brígido Miranda quien, al ver que el prenombrado Jaén trató de agredir al agente Juan Miguel Cuevas Melgarejo con un arma blanca, desde el primer alto de la casa en mención le efectuó un disparo para detenerlo. Del protocolo de necropsia se desprende que el proyectil ingresó "en la región sacra derecha, con agujero de salida ... en región supra-púbica" (f.14). El dictamen forense concluye afirmando que José Antonio Jaén murió a consecuencia de a) shock hipovolémico; b) laceración arterial; c) herida por arma de fuego (f.22).

Ahora bien, el sobreseimiento definitivo proferido por el a-quo se sustenta en la existencia de la causa de justificación denominada cumplimiento de un deber legal, en atención a que la participación policiva está "fundada en la obligación de garantizar el bienestar, la vida y honra de los asociados en este caso específico para salvaguardar la vida de su compañero al ver la amenaza de agresión física con arma blanca por parte del hoy occiso, a quien estaban intentando requisar por sospechoso e intentó darse a la fuga" (f.121).

Manifiesta el sumariado Miranda que pudo percatarse cuando Jaén portaba una cuchilla en la mano derecha, con la cual se lanzó hacia su compañero Agente Cuevas (f.49). Este relato es corroborado por Juan Miguel Cuevas, quien al respecto menciona que el difunto Jaén "quedó sorprendido cuando me vio por lo que se abalanzó con un objeto en la mano y yo hice un tiro al aire, después lo encañone pero aún así el venía encima con un objeto hacia mi, fue entonces cuando escuché una segunda detonación" (f.84).

Por lo que hace al medio racional para repeler o impedir la agresión, observa la Corte que el sindicado no tenía otros menos nocivos para evitar que el agente Cuevas fuese agredido físicamente con el cuchillo que portaba el occiso. La existencia del arma blanca consta mediante oficio No. 1465 del 10 de agosto de 1993, mediante el cual el Personero Segundo Municipal del Distrito de Colón la remite a la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial (f.24). En cuanto a la exigencia legal de no poder evitar o eludir la agresión de otra manera, resulta importante destacar que, previo al disparo que afectó la anatomía del occiso, el sindicado realizó un disparo al aire para evitar que escapara; no obstante, el occiso no sólo huyó del agente Miranda sino que intentó agredir al agente Cuevas con una cuchilla, por lo que advierte el sumariado Miranda que "viendo la situación del compañero desde arriba yo le hice un segundo disparo para herirlo en el tobillo o en la rodilla, para sacarlo o ponerlo fuera de circulación" (f.49).

Tampoco puede concluirse que el agente realizó alguna conducta que provocara el hecho punible ya que al momento de localizar a José Antonio Jaén en uno de los cuartos de la casa le ordenó que se detuviera; sin embargo Jaén no sólo lanzó un pedazo de plywood desde una ventana, acto que según el imputado le indicó que podía haber algo ilícito, sino que se opuso a ser requisado por el agente y optó por lanzarse desde una ventana, lo que ocasionó que fuese interceptado por el agente Cuevas, a quien trató de agredir. Otro elemento probatorio que favorece los argumentos del sindicado Miranda consiste en que la testigo Francisca Garibaldi Paz señaló que el occiso consumía drogas, ya que observó que los policías bajaron del cuarto "un platito, una gillet y envoltorio de color amarillo" (f.35), deposición que es corroborada por el examen toxicológico, el cual estableció como positiva la presencia de cocaína en la orina del occiso (f.58). De igual forma resulta necesario indicar que el disparo que presentaba el cuerpo de Jaén era de atrás hacia adelante y, según muestra la vista fotográfica No.4 (f.79), la trayectoria del disparo fue de arriba hacia abajo, lo que coincide con el relato del sindicado en el sentido de que realizó el disparo mortal desde el balcón de la casa.

Por todo lo expuesto, esta Sala llega a la conclusión de que **la conducta desplegada por el imputado está amparada en la excepción de defensa necesaria de un tercero (a.21 C.P.)**, sin desestimar que la acción del encartado dio lugar a la excusa del cumplimiento de un deber legal, toda vez que la muerte de José Antonio Jaén tuvo lugar con ocasión del ejercicio de las funciones propias del cargo del cabo Miranda, por lo que se comparte el criterio del a-quo en cuanto estima demostrada la justificante de legítima defensa.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto del 5 de octubre de 1993 proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el cual decreta sobreseimiento definitivo a favor de Brígido Miranda Jurado en esta causa.

Devuélvase y notifíquese.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A ERIDES ALBERTO BARRIOS CEDEÑO (A) "ENANO", JORGE EMILIO BARAHONA BATISTA Y ABDUL BATISTA HUERTAS, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (DROGAS). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Antes de decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación en el fondo, presentado por el licenciado Alcides Gabriel Zambrano González, en representación de ERIDES ALBERTO BARRIOS CEDEÑO y en contra de la sentencia de 13 de mayo de 1993, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 2444 del Código Judicial, pasa la Sala a enunciar los defectos de forma que hasta este momento hacen inadmisible el recurso:

1. Dentro de la causal única a que se refiere el casacionista, no pueden mezclarse otras causales distintas y en este caso, aparecen combinadas las causales de los numerales 1° y 12 del artículo 2434 del Código Judicial.

2. Las disposiciones infringidas no señalan en su totalidad las disposiciones sustantivas que se aplicaron o dejaron de aplicarse en la sentencia de 13 de mayo de

1993. El artículo 56 del Código Penal es el que sirve de guía al juez para fijar la pena base y no es el que se utiliza para establecer la responsabilidad del imputado.

3. Las consideraciones por las cuales se estima infringido el artículo 260 del Código Penal no están debidamente expresadas.

Por lo anterior, la suscrita Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, DISPONE mantener en Secretaría el escrito por el término de cinco (5) días para que el Defensor de Oficio, recurrente, haga las correcciones indicadas.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD FORMULADA POR EL LICENCIADO CARLOS E. CARRILLO GOMILA DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA FELIPE CAMARGO AMAYA SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE CARLOS FERNANDO ALFARO HART, EN EL SENTIDO DE QUE SE LE PERMITA ESTAR PRESENTE EN LA AUDIENCIA DE CASACIÓN A CELEBRARSE EL 1° DE DICIEMBRE DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Carlos Carrillo Gomila, actuando en su condición de apoderado especial de Felipe Camargo Amaya, solicita que a su mandante se le permita estar presente durante la celebración de la audiencia correspondiente al recurso de casación, a celebrarse el día 1 de diciembre de 1993.

Según el licenciado Carrillo, su petición la basa "en el hecho único de la voluntad manifiesta de mi representado de estar presente en el acto de audiencia oral a celebrarse dentro del recurso extraordinario de casación, en virtud de interés por el desarrollo de las acciones en ejercicio de la defensa de sus derechos" (f.616).

La casación es un recurso, técnico y extraordinario, autorizado para casos taxativamente previstos por la ley, cuando en un fallo se haya incurrido en una infracción evidente de la ley o en la omisión de una formalidad esencial del procedimiento. El trámite de la audiencia, establecido para el recurso de casación, tiene como único propósito que el recurrente y el opositor puedan exponer verbalmente sus consideraciones de tipo jurídico, con relación a vicios en que se pudiera haber incurrido la decisión atacada. El desenvolvimiento del debate es tan técnico que "las partes no podrán dar lectura a piezas del proceso" (a.2446 C. J.). Esta limitación, tiene como finalidad evitar que el acto sea utilizado para hacer repeticiones inútiles de circunstancias que, con el solo señalamiento del recurrente, el Tribunal de casación puede corroborar.

Es claro entonces que el debate está establecido, tan solo, para escuchar el discurso sobre posibles errores de carácter técnico y,en consecuencia, sólo admite la participación de quienes por mandato legal en él deben intervenir, previsión en la que no se encuentra comprendido el imputado. Por otra parte, ese acto siempre queda documentado mediante acta, que debe ser levantada conforme lo ordena el artículo 2448 del Código Judicial, documento éste que permitiría al imputado satisfacer cualquier inquietud que tuviera sobre el desarrollo del debate, de donde resulta sin asidero práctico o jurídico la razón invocada en la solicitud que se considera.

En síntesis, la presencia del imputado durante ese acto, por no encontrarse prevista ni autorizada por la ley, no cumple ningún cometido procesal conocido ni se encuentra inscrito dentro de los beneficios que los principios de favorabilidad al reo o "pro libertatis" le reconocen. No se trata en consecuencia de un momento del proceso donde deban atenderse las conveniencias del principio de inmediación, mientras que, por otro lado, acceder a la solicitud introduciría un injustificado e indeseable elemento del distorsión al acontecer procesal.

En razón de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la petición formulada por el licenciado Carlos E. Carrillo Gomila.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) Mariano Herrera
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A RICARDO RAÚL GUERRA POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL EN PERJUICIO DE ALBA ATENCIO GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Juan Antonio Morales Gómez anunció y formalizó recurso de casación en el fondo contra sentencia del 7 de mayo de 1993 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la dictada en primera instancia por el Juzgado Tercero de Circuito de Chiriquí, que condenó a Ricardo Raúl Guerra a la pena de 45 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de la pena principal, como responsable del delito de violación carnal cometido en perjuicio de Alba Aurora Atencio Guerra.

Subsanados los defectos formales de que adolecía el libelo, los que fueron advertidos mediante providencia del 4 de octubre del año en curso, corresponde decidir finalmente sobre la admisibilidad de esta iniciativa procesal. El recurso ha sido interpuesto contra sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por tribunal superior de Distrito Judicial dentro de un proceso por delito de violación carnal que tipifica el artículo 216 del Código Penal, cuya pena es superior a los dos años de prisión, por lo que el recurso interpuesto cumple con lo que establece el artículo 2434 del Código Judicial.

En cuanto al examen de los requisitos que enumera el artículo 2443 del Código Judicial, se comprueba que la resolución es de las que admite el recurso, el cual fue presentado en tiempo oportuno. De igual forma, en el libelo corregido se advierte la presentación de la historia concisa del caso, se invocan dos causales, cada una sustentada con sus respectivas motivaciones y las disposiciones legales que se dicen infringidas. Toda vez que la presentación del recurso cumple con los requisitos previstos en los artículos 2434 y 2443 del Código Judicial, resulta inobjetable su admisión.

En razón de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo instaurado dentro del proceso seguido a Ricardo Raúl Guerra, condenado por el delito de violación carnal y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación por el término de ley.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA TAUFID ROBLEDO CASTRO, SINDICADO POR EL DELITO DE TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor **TAUDFID ROBLEDO CASTRO**, actuando en su propio nombre, solicita que se le permita estar presente durante la celebración de la audiencia correspondiente al Recurso de Casación, a celebrarse el día 17 de noviembre de 1993.

Según lo manifestado por el señor **CASTRO**, "como parte de este proceso penal, solicito con la máxima mesura al señor Magistrado Sustanciador que haga comparecer al suscrito a la celebración de la audiencia pública permitiéndome hacer uso de la palabra." (fojas 638).

La casación es un recurso, técnico y extraordinario, autorizado para casos taxativamente previstos por la ley, cuando en un fallo se haya incurrido en una infracción evidente de la ley o en la omisión de una formalidad esencial del procedimiento. El trámite de la audiencia, establecido para el recurso de casación, tiene como único propósito que el recurrente y el opositor puedan exponer verbalmente sus consideraciones de tipo jurídico, con relación a vicios en que se pudiera haber incurrido la decisión atacada. El desenvolvimiento del debate es tan técnico que "las partes no podrán dar lectura a piezas del proceso" (a.2446 C. J.). Esta limitación, tiene como finalidad evitar que el acto sea utilizado para hacer repeticiones inútiles de circunstancias que, con el solo señalamiento del recurrente, el Tribunal de acechen puede confirmar.

Es claramente observable que el debate está establecido, tan solo, para escuchar el discurso sobre posibles errores de carácter técnico y,en consecuencia, sólo admite la participación de quienes por mandato legal en él deben intervenir, previsión en la que no se encuentra comprendido el imputado. Por otra parte, ese acto siempre queda documentado mediante acta, que debe ser levantada conforme lo ordena el artículo 2448 del Código Judicial, documento éste que permitiría al imputado satisfacer cualquier inquietud que tuviera sobre el desarrollo del debate, de donde resulta sin asidero práctico o jurídico la razón invocada en la solicitud que se considera.

En síntesis, la presencia del imputado durante ese acto, por no encontrarse prevista ni autorizada por la ley, no cumple ningún cometido procesal conocido ni se encuentra inscrito dentro de los beneficios que los principios de favorabilidad al reo o "pro libertatis" le reconocen. No se trata en consecuencia de un momento del proceso donde deban atenderse las conveniencias del principio de inmediación, mientras que,

por otro lado, acceder a la solicitud introduciría un injustificado e indeseable elemento del distorsión al acontecer procesal.

En razón de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la petición formulada por el señor TAUFID ROBLEDO CASTRO.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) Mariano Herrera
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A GILDA VILLARREAL CASTILLO, POR DELITO DE HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS EN PERJUICIO DE NODIER MIRANDA, OLGA ELVIRA CRUZ DE MIRANDA, ANA ELVIRA HEART CRUZ, ANÍBAL MIRANDA CRUZ Y ALVARO VISUETTE (LESIONADO). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL

VISTOS:

Para resolver la admisión del recurso de casación promovido por la defensa de **GILDA VILLARREAL CASTILLO**, quien se encuentra sindicada del delito de homicidio y lesiones culposas en perjuicio de **NODIER MIRANDA MORALES, OLGA ELVIRA CRUZ DE MIRANDA, ANA ELVIRA HEART CRUZ (q.e.p.d.)** y **ALVARO VISUETTI** y **ANÍBAL MIRANDA CRUZ**, respectivamente, le corresponde a la Sala examinar si se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el artículo 2443 del Código Judicial, ya que se han cumplido las etapas previas que para tal efecto se consagran en el ordenamiento procesal penal.

Un detenido examen del escrito de formalización pone en evidencia que estamos en presencia de un recurso de casación promovido en contra de una sentencia de segunda instancia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en una causa por homicidio y lesiones culposos, cuya pena oscila entre dos y cuatro años.

De la misma forma, se observa que el recurso ha sido interpuesto por quien tiene legitimación para recurrir, anunciado oportunamente y formalizado dentro del tiempo especialmente concedido para ello.

En cuanto al escrito de formalización, se observa que el recurrente no menciona que estemos en presencia de un recurso de casación en el fondo, como debió indicar al inicio de su escrito, pero ello no justifica la corrección del escrito toda vez que del mismo se deduce tal extremo sin lugar a dudas.

Los requisitos que establece la parte final del artículo 2443 ya citado están contenidos en el escrito de formalización ya que se hace una historia concisa del caso, se individualiza una causal invocada, se describen los motivos que sirven de fundamento a la causal, se mencionan las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido.

Las consideraciones expuestas conducen a fundar el convencimiento de que el recurso de casación formalizado por la defensa de la prenombrada **VILLARREAL CASTILLO** reúne los requisitos establecidos en la ley procesal vigente, por lo que debe admitirse el mismo y procederse con el trámite de rigor.

En virtud de las razones antes expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por el suscrito Magistrado Sustanciador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación formalizado en esta causa y ORDENA se corra el mismo en traslado al Procurador General de la Nación por el término de cinco días.

DERECHO: artículos 2443 y 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A EDUARDO ENRIQUE SOUSA LENNOX, SINDICADO POR EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA EN PERJUICIO DE EDIXA DEL CARMEN PÉREZ DE SOUSA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, ha ingresado a esta Sala recurso de casación en el fondo presentado por el licenciado Luis Antonio Stamp dentro del proceso seguido a Eduardo Enrique Sousa Lennox, sindicado por el delito de apropiación indebida cometido en perjuicio la empresa Corporación Sope S. A. .

El examen del libelo de formalización del recurso permite advertir que el recurrente no expone la historia concisa del caso, formalidad que resulta esencial toda vez que "es fundamental para la tramitación del proceso y su omisión no puede ser subsanable por la vía de la corrección, porque no se trata de un requisito formal sino de un requisito inexistente en el escrito, pero que es propio de la estructura de la casación" (Auto del 18 de septiembre de 1990 que declara inadmisible recurso de casación interpuesto dentro del juicio seguido a Adán Rodríguez Hernández, sindicado por los delitos de violación carnal y rapto en perjuicio de María Graciela Cedeño Ortega).

Otra deficiencia formal del libelo de casación consiste en que se interpone el recurso de casación "en contra de la resolución dictada el día 22 de febrero de 1991 por el JUZGADO OCTAVO DE CIRCUITO DEL RAMO PENAL" (f.357), cuando debe formularse contra "las sentencias definitivas de segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial", según dispone el artículo 2434 del Código Judicial. Por lo anterior, resulta comprensible determinar porqué el recurrente ha sustentado el recurso extraordinario de casación **con argumentos que guardan relación con la sentencia de primera instancia**, sin formular reclamo alguno contra la sentencia de 30 de julio de 1992 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial (f.340-346). En estas circunstancias, cabe advertir que el recurso de casación es un medio impugnatorio **extraordinario que tiene por objetivo garantizar que las resoluciones judiciales se dicten dentro del marco de la legalidad**, por lo que no debe utilizarse como un medio de impugnación más para proponer reclamos propios de otra etapa procesal.

Siendo que el libelo, como viene dicho, omite presentar la historia concisa del caso (art. 2443 C.J) ello aunado al hecho de que no está dirigido contra sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por tribunal Superior de Distrito Judicial (art.2434 C.J), estas omisiones impiden que esta Sala admita conocer de la pretensión del recurrente.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso extraordinario de casación interpuesto por el licenciado Luis Antonio Stamp.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR EL LIC. CARLOS A. BONILLA, APODERADOS JUDICIAL DE DENYES MARíA GARCÍA CEDEÑO, EDGAR LÓPEZ ESPINOSA, JOSÉ PIQUERAS Y AGRIPINA CERCEÑO, POR EL DELITO GENÉRICO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN PERJUICIO DE ISAAC MORENO LEZCANO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL

VISTOS:

A este despacho ha ingresado el proceso seguido a Denys María Cedeño, Edgar López Espinosa, José Piqueras y Agripina Cerceño, por el delito genérico de falsificación de documentos en perjuicio de Isaac Moreno Lezcano, a efecto de decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación presentado por el licenciado Carlos A. Bonilla. Con tal propósito se advierte que el libelo de formalización adolece de defectos de forma en el sentido de que el recurrente no identifica correctamente la causal, conforme está establecida en el artículo 2435, numeral 2 del Código Judicial" (f.265). Por consiguiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 2444 del Código Judicial, se ORDENA que el escrito de formalización del recurso permanezca en secretaría de la Sala por el término de cinco días, a fin de que el recurrente subsane el defecto indicado, luego de lo cual corresponderá decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE CONTROVERSIA

INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO POR LA FIRMA GUERRA & GUERRA A FAVOR DE LA LCDA. ANA CRISTINA DE LEÓN, FISCAL SEGUNDA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, EN CONTRA DE LA FISCALÍA SEGUNDA SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E.

GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL

VISTOS:

La firma forense **GUERRA Y GUERRA**, defensores de la señora **ANA CRISTINA DE LEÓN**, promovió incidente de controversia en contra del Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial a objeto de que se revoque la decisión del Agente del Ministerio Público por medio de la cual se dispuso recibirle declaración indagatoria a la representada del incidentista.

A juicio de la defensa de la señora DE LEÓN, no existe en el sumario justificación alguna para ordenar la declaración indagatoria de su patrocinada y por tanto no se justifica la misma, ya que no están comprobados los presupuestos procesales que exige el artículo 2115 del Código Judicial.

GUERRA Y GUERRA sostiene en su escrito de interposición del incidente de controversia que no está comprobado el hecho punible que sirva de fundamento para la indagatoria de su representada, por lo que se desconocen aspectos fundamentales del proceso penal que se sigue en contra de su patrocinada, quien se desempeña como Fiscal de Circuito en el Circuito Judicial de Chiriquí.

Al decidir el incidente de controversia planteado, previo traslado al Fiscal Superior demandado, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial acogió los planteamientos del incidentista y revocó la resolución de 20 de abril de 1993 por medio de la cual el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial dispuso la recepción de la declaración indagatoria de la señora ANA CRISTINA DE LEÓN.

En su decisión, de 30 de junio de 1993, visible a fs. 15-27. El Tribunal Superior efectúa una serie de consideraciones que giran en torno a la existencia o no de los presupuestos procesales previstos en el artículo 2115 que según el Fiscal demandado existen en el sumario para justificar la decisión de indagar a la Fiscal DE LEÓN.

Como quiera que se trata de un proceso contra un agente del Ministerio Público con jurisdicción y competencia en la esfera circuital de la Provincia de Chiriquí, la competencia para conocer del incidente se halla atribuida al Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente y la revisión de la decisión de primera instancia compete a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia.

Luego de comprobados dichos extremos, corresponde a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia resolver la impugnación planteada por el Fiscal demandado en contra de la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el pasado 30 de junio del presente año.

En lo medular del auto impugnado, el Tribunal Superior sostuvo lo siguiente:

> "La resolución objeto de la presente incidencia y legible a foja 96 del expediente principal, dispone recibirle declaración indagatoria a la licenciada Ana Cristina De León, anunciando que ésta se encuentra sindicada por el delito contra la libertad individual y por delito contra el patrimonio en perjuicio de la profesora Aura Ureta de Sittón. Al momento de tener por comprobado el hecho punible la resolución comentada cita como elementos para ello los siguientes:
>
> a) Dos providencias legibles a fojas 57 y 58 durante las cuales la funcionaria investigada dispuso en la primera, no la detención preventiva, como se lee en la resolución comentada, sino sancionar la señora Aura Ureta de Sittón, con la pena de arresto por seis días, y la segunda dispone hacer efectivo el arresto ordenado en la resolución primera.
>
> b) La providencia legible a folio 33 que ordena llevar a cabo diligencia de allanamiento a las oficinas de la Dirección General para el Desarrollo Comunal a cargo de la señora Aura Ureta de Sittón con el fin de hacer efectiva su detención.
>
> c) El informe de comisión suscrito por los miembros de la Policía Técnica Judicial, legible a folios 46 a 48 del expediente principal en cuyo contenido en efecto se narra lo sucedido en el acto de allanamiento y detención de la señora Aura Ureta de Sittón.
>
> d) La sentencia penal dictada en esta sede judicial con fecha del 2 de febrero de 1993 que dispuso decretar ilegal la detención preventiva de AURA URETA DE SITTÓN.
>
> Es importante recalcar que por admisión del propio funcionario de instrucción en el punto tercero de su contestación, si bien la sindicada fue denunciada por delitos contra la libertad individual y el patrimonio, no se enumeraron pruebas en la resolución incidentada tendientes a la comprobación de delito contra el patrimonio.

Así las cosas, queda únicamente por determinar si los elementos arriba enumerados y contenidos en la resolución incidentada de por si permiten tener por probado el delito contra la libertad individual.

En vías de resolver y cumplido un análisis crítico de los elementos mencionados por el instructor y arriba reseñados, concluye el tribunal que no resulta adecuadamente comprobada la comisión del hecho punible alguno en los términos de la resolución proferida. Es un hecho cierto -toda vez que no lo disputan ninguna de las parte- que la licenciada Ana Cristina De León ordenó el arresto de la señora Aura Ureta de Sittón y el subsiguiente allanamiento de sus oficinas. No obstante y esto no puede obviarlo el tribunal, ambas actuaciones encuentran por lo menos de manera formal, respaldo legal en el código de procedimiento penal frente a la investidura de agente de instrucción que ostenta la persona sindicada en esta causa. Es decir, a criterio del tribunal la mera existencia objetiva de las resoluciones comentadas no permiten de por si tener por probado hecho punible alguno toda vez que no es materia de discusión si un fiscal de circuito está investido legalmente de la posibilidad de arrestar por razones disciplinarias a un particular y allanar un local o una oficina. Adoptar un criterio como el plasmado en la resolución incidentada es decir estrictamente formalista, sentaría un precedente un tanto peligroso para el conglomerado de funcionarios investidos con potestades similares a las de la señora Ana Cristina De León, quienes se encontrarían en la difícil coyuntura de saber que los tribunales de justicia admitirían como prueba de hecho punible la mera constatación escrita de diligencias emitidas por ellos en ejercicio de sus funciones; posibilidad que resulta a todas luces inaceptable.

Lo anterior no implica que la presente investigación carezca de objeto o justificación legal, sino que la resolución incidentada no puede sostenerse sobre la base únicamente de criterios formales para concluir que un funcionario de instrucción en ejercicio de sus cargos comete infracción penal alguna. Resulta necesario que el agente instructor, si ese fin pretende, incorpore al expediente elementos que de manera material ilustre la comisión del hecho punible. Dicho sea de paso, este tribunal no descarta la posibilidad de que un funcionario, en abuso de sus funciones incurra en infracciones penales; no obstante, este abuso debe ser adecuadamente demostrado, no debe el instructor limitarse en esta tarea a la simple y formalista labor de incorporar en el expediente documentos que de por si no dan luces en torno a la existencia material de los elementos, tanto objetivos como subjetivos requeridos para tener por probado una infracción a la ley penal.

Así las cosas, el tribunal debe concederle razón al incidentista y debe en consecuencia concluir que en efecto no se pueden tener por probados en la presente causa los presupuestos plasmados en el artículo 2115 del Código Judicial particularmente en lo atinente a la plena prueba del hecho punible para justificar en derecho la emisión de la resolución que dispone la recepción de una declaración indagatoria.

Al respecto debe acotarse por último que las exigencias del artículo 2115, entre otras cosas persiguen garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa del imputado en la medida en que este conozca claramente las infracciones al derecho penal que se le imputan y los elementos acreditados en el expediente para tener este por probado. Es decir, en la medida que no se le pueda explicar claramente al imputado las infracciones penales que se le endilgan y los elementos de prueba incorporados al expediente para tener estas por probadas, pero se pretenda no obstante, adelantar un sumario con esta omisiones, se estaría vulnerando la garantía del debido proceso que incluye el derecho de la adecuada defensa del sujeto pasivo de la acción penal.

Así las cosas, debe tener por probado el incidente, concediéndosele razón al incidentista, por lo que este tribunal no puede sino revocar la resolución incidentada, para que el funcionario de instrucción si así lo estima conveniente proceda a su corrección incorporando en el contenido de la resolución corregida un detalle razonado de los elementos materiales incorporados al expediente que tienen por probado la infracción punible".

Al sustentar su recurso de apelación contra el auto de 30 de junio de 1993, el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial, entre otras consideraciones, argumentó lo siguiente:

"Estamos en desacuerdo con la Resolución apelada porque en ella el Tribunal Superior sostiene que no se ha comprobado que la licenciada Ana Cristina De León, como Fiscal Segunda del Circuito de Chiriquí, ordenara ilegalmente la detención de la señora Sittón. Sin embargo, ese mismo Tribunal declaró ilegal esa detención, mediante Sentencia Penal del 2 de febrero del presente año (1993), resolviendo acción de Habeas Corpus a favor de Aura Ureta de Sittón.

En la Sentencia antes mencionada, el Tribunal resumió la cuestión planteada en los siguientes términos:

"En resumidas cuentas en el proceso disciplinario instruido por la señora Fiscal Segunda del Circuito de Chiriquí a la señora Aura Ureta de Sittón no se ha comprobado el irrespeto alegado, lo que hace ilegal la orden de arresto emitida mediante la resolución de 5 de agosto de 1992 y reiterada en la resolución fechada 1 de febrero de 1993".

En consecuencia, el Tribunal declaró ilegal la detención de Aura Ureta de Sittón, cuando en la parte resolutiva de la Sentencia Penal aludida manifestó lo que textualmente transcribimos:

"En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL, la detención decretada en contra de la señora AURA URETA DE SITTÓN y ORDENA que sea puesta en inmediata libertad siempre y cuando no tenga ninguna otra causa pendiente".

Si el Tribunal declaró ilegal la detención ordenada por la Fiscal Ana Cristina De León, en perjuicio de la señora Aura Ureta de Sittón, dejó a salvo los derechos de la agraviada para denunciar o acusar a la funcionario que la privó ilegalmente de su sagrada libertad ambulatoria, de acuerdo al artículo 2572 del Código Judicial que reza:

"ARTICULO 2572. El procedimiento de Habeas Corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado, por cualquier causa, su libertad corporal, pero podrá el agraviado denunciar o acusar a la autoridad o funcionario que ordenó la detención o prisión arbitraria". (Subrayamos)

En ese mismo orden de ideas el artículo 1974 ibídem dispone que los procesos que se sigan sin observar las reglas del debido proceso, acarrean responsabilidad contra el funcionario instructor, el cual deberá asumir los daños y los perjuicios que emanen de su ilegal tramitar.

También es motivo de nuestra inconformidad con la Sentencia de la cual recurrimos, el hecho de que en ella el tribunal manifiesta que la providencia incidentada no llena las exigencias del artículo 2115 del Código Judicial. Sostenemos que sí los satisface porque ella da como elementos allegados al negocio para comprobar el cuerpo del delito: la Providencia con la que la imputada sancionó a la ofendida y le hizo efectivo seis días de arresto; providencia mediante la cual la imputada ordenó allanar las oficinas a cargo de la ofendida, para hacer efectiva su detención y un informe de miembros de la Policía Técnica Judicial que asistieron a la diligencia de allanamiento. En cuanto a las providencias citadas, todas ellas tienen la conocida firma de la imputada, lo cual la vincula a esa detención que el Tribunal ha declarado ilegal".
...
"El Artículo 2115 del Código de Procedimiento establece los requisitos que debe estatuir la Resolución que ordena la diligencia indagatoria, que básicamente son los siguientes:

a) Resolución razonada: Es decir, una Resolución que motiva los aspectos probatorios esenciales o mínimos allegados al proceso, que llevan como consecuencia la probable vinculación del imputado con el hecho punible atribuido;

b) Prueba indiciaria del hecho punible: La Resolución que determina la evacuación de la diligencia indagatoria debe indicar el caudal probatorio que vincula a la imputada al hecho punible, bastando al efecto al menos prueba indiciaria.

Como se puede observar, basta y sobra que en el sumario repose prueba indiciaria para decidir la recepción de indagatoria, por lo que la Sentencia Penal ejecutoriada aportada en el mismo, que declaró ilegal en cuanto al fondo la detención de AURA URETA DE SITTÓN, constituye prueba irrefutable y válida del hecho punible imputado. De allí que no hay óbice para Revocar la diligencia de 20 de abril de 1993 dictada por este Despacho, pues jurídicamente es improcedente, amén de que los primeros en cumplir la Ley debemos ser los propios servidores públicos, toda vez que la posición pública no exime al agente instructor del cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico".

Para resolver la Sala considera efectuar las siguientes consideraciones.

En el caso que nos ocupa, se trata de un sumario seguido en contra de un agente del Ministerio Público al que se le declaró, mediante proceso constitucional de habeas corpus, ilegal la detención de una ciudadana que luego ha promovido un proceso penal para exigir la responsabilidad a que alude el artículo 1974 del Código Judicial como consecuencia de una actuación ilegal del funcionario de instrucción sujeto pasivo de la pretensión punitiva en este caso.

El Tribunal Superior del tercer Distrito Judicial declaró ilegal la detención de la señora AURA URETA DE SITTÓN, quien fue sancionada y privada de su libertad por orden de la Fiscal DE LEÓN, situación que ha motivado el proceso penal que se adelanta en la Fiscalía Segunda Superior del tercer Distrito Judicial en contra de la Fiscal ANA CRISTINA DE LEÓN.

Qué elementos probatorios deben comprobarse para justificar recibirle declaración indagatoria a la Fiscal es el punto a dilucidar en esta ocasión.

¿Basta nada más aportar copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior que declaró ilegal la detención de la señora URETA DE SITTÓN para recibirle declaración indagatoria a la Fiscal por supuesto delito contra la libertad individual?

A juicio del Fiscal Superior demandado en este incidente de controversia basta y sobra que esté acreditado que la Fiscal De León ordenó la detención de la señor Aura Ureta de Sittón junto al fallo del Tribunal Superior que declaró ilegal tal detención, para que estemos en presencia de los presupuestos procesales a que alude el artículo 2115 del Código Judicial para justificar la indagatoria de la Fiscal investigada.

La Sala comparte los señalamientos del recurrente, ya que una vez acreditados dichos extremos en el sumario correspondiente está comprobado la existencia del hecho punible. La fiscal De León ordenó una privación de libertad que luego fue declarada ilegal, hecho que objetivamente puede constituir una infracción contra la libertad individual de la señora Aura Ureta de Sittón. Ello, sin embargo, no es materia que deba resolverse en esta etapa procesal.

Cuando se trata de hacer exigible la responsabilidad de los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público por actuaciones que se han desarrollado en contravención con los principios y postulados consagrados en el Código Judicial, no se puede ser más que formalista en esta etapa inicial del proceso y a lo largo del mismo también, ya que ello es garantía de objetividad y apego a las palabras de la Ley.

No se puede pretender que el funcionario de instrucción, como pretende el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, "incorpore al expediente elementos que de manera material ilustren la comisión del hecho punible" (fs.24-25), ya que los mismos que se arguyen para recibir la indagatoria son suficientes en esta etapa del proceso.

Que dichos elementos sean suficientes para enjuiciar o condenar a la Fiscal es un aspecto que no puede la Sala entrar a considerar en esta ocasión, pero son suficientes para recibirle declaración indagatoria.

Si el Tribunal Superior concedió la acción de habeas corpus promovida en favor de la señora Ureta de Sittón lo menos que puede hacer, para ser congruente con su defensa del ordenamiento jurídico, es permitir la indagatoria de la Fiscal objeto de investigación sumarial, ya que ello dará más luces al tribunal de la causa para luego tomar una decisión sobre el mérito del sumario.

La Sala tiene que recordar que la declaración indagatoria es un medio de defensa que tiene el imputado para efectuar los descargos que considere conveniente en su favor, pero el imputado tiene derecho a no declarar si así lo considera conveniente en virtud del derecho constitucional consagrado en el artículo 25 de la Constitución Nacional.

Vistas así las cosas, debe revocarse el auto de 30 de junio de 1993 y declararse no probado el incidente de controversia promovido por la defensa de la señora Ana Cristina De León en contra del Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial.

Por las razones antes expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el auto de 30 de junio de 1993, proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial y AUTORIZA al Fiscal Segundo Superior de dicho distrito judicial a que reciba declaración indagatoria a la señora ANA CRISTINA DE LEÓN si todavía considera necesaria y conveniente dicha declaración en las sumarias correspondientes, toda vez que por el transcurso del tiempo entre dicha decisión y esta actuación pueden haber surgido nuevos elementos que hagan innecesaria dicha indagatoria.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA

QUEJA PRESENTADA CONTRA RICARDO NAVARRO JURADO, MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En la Secretaria de la Sala Penal el licenciado ALEXIS RICARDO JAÉN RIVERA interpuso formal queja contra el Magistrado del Primer Tribunal Superior de Justicia, licenciado RICARDO NAVARRO JURADO.

Cabe señalar que cuando una acción, petición o recurso ingresa a un tribunal para su consideración, el mismo debe verificar si es competente para conocerlo.

El cargo que se le imputa al licenciado Navarro está consagrado en el Código Judicial, dentro del capítulo identificado como "De las correcciones disciplinarias".

Por su parte, el artículo 285 del Código Judicial consagra los motivos que dan lugar aun proceso disciplinario contra los "servidores públicos del Escalafón Judicial y los del Ministerio Público de igual categoría". Por su lado el artículo 277 de la misma excerta legal "el Escalafón comprende las categorías que van de Jueces Municipales de 2ª categoría, a Magistrados de Distrito Judicial". De lo anterior podemos deducir que el licenciado Navarro es funcionario del escalafón judicial por su condición de Magistrado del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial y que la jurisdicción disciplinaria sobre él será ejercida por el respectivo superior jerárquico, tal como lo establece el artículo 288 del Código Judicial.

En reciente fallo de 14 de junio de 1993, la Sala estableció lo siguiente:

> "... el artículo 288 del Código Judicial establece que la "jurisdicción disciplinaria sobre Jueces y Magistrados (entiéndase aquellos que pertenecen al escalafón judicial) será ejercida por el respectivo superior jerárquico".
>
> Ello significa que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como superior jerárquico de los Magistrados de Distrito Judicial -a quienes nombra de conformidad con el numeral 2 del artículo 88 ibidem-, conocer los procesos disciplinarios que se promuevan en su contra, y no a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
>
> Si bien el artículo 95 del Código Judicial dispone que la Sala Segunda conocerá de "las causas por delitos o **faltas** cometidas por los Magistrados y los Fiscales de Distrito Judicial ..." (el énfasis es de la Corte), el artículo 288 ibidem es una norma con sustrato normativo especial y, por tanto, desde este punto de vista, es obligatoria su aplicación.
>
> En efecto, el concepto de falta a que alude el artículo 95 antes citado, incluye no sólo las causas disciplinarias sino aquellas causas que, tras lesionar el ordenamiento jurídico, no constituyen delito, como sería, por ejemplo, los trámites a que dan lugar las colisiones vehiculares.
>
> De donde resulta que el vocablo "faltas" alude a un concepto mas abarcador. En esa perspectiva, no cabe la menor duda que el artículo 288 del Código Judicial es de preferible aplicación".

Desde ese punto de vista, y al analizar la solicitud del recurrente observa la Sala que carece de competencia para conocer y decidir la queja interpuesta.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE en el conocimiento de la presente queja y DECLINA COMPETENCIA ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. MUÑOZ POPE (fdo.) CARLOS H. CUESTAS

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO PRESENTADO POR EUGENIO NELSON MAGALLÓN, DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE POR LA DESAPARICIÓN DE HÉCTOR GALLEGO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Moisés Espino Bravo, actuando en su calidad de defensor de Eugenio Nelson Magallón, quien esta encausado por la desaparición y homicidio de Jesús Héctor Gallego, ha interpuesto ante esta Sala recurso de hecho contra resolución proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, de 25 de octubre de 1993, mediante la cual se le niega el recurso de apelación anunciado contra la resolución que no le acepta a su defendido la petición de ser juzgado por jurados de conciencia.

Durante el trámite de fijación del negocio en lista tan solo hizo uso del derecho de alegar por escrito el recurrente. Sostiene que su defendido, con base en el artículo 2321 del Código Judicial, renunció expresamente "a ser juzgado ante jurado de conciencia, mediante memorial cuya firma fue reconocida ante Notario Público, cumpliendo con los requisitos del Artículo 614, Ordinal 3ro., del Código Judicial y fue presentado por este servidor" (f.11), empero que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial no le aceptó la petición fundamentándose "en que la no presencia de MAGALLÓN en el proceso le impide hacer la renuncia comentada". Para fundamentar su

disconformidad el recurrente hace un planteamiento inexplicable por contradictorio, y es que inicialmente indica que "el Artículo 614 del Código Judicial nos ofrece la posibilidad de otorgar un Poder, que es un acto tan importante, sin tener el Poderdante que presentarse ante el Tribunal de la causa" (f.11), para posteriormente afirmar que "no estamos hablando del otorgamiento de un poder sino de la manifestación de indicar como desea sea su audiencia" (f.12). En abono de esas contradicciones admite que su defendido se encuentra prófugo, para finalmente acusar de injusta la postura del Tribunal Superior, en razón de que "el Código sí dice que puede renunciar y el imputado lo hizo ante Notario Público, que da fe que la persona que firmó es EUGENIO NELSON MAGALLÓN, por lo que el Tribunal debe aceptarlo." (f.12).

Corresponde a esta superioridad pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso. A tales efectos "**se necesita que la respectiva resolución sea recurrible**, que el recurso se haya interpuesto oportunamente y lo haya negado expresa o tácitamente el Juez, que la copia se pida y retire en los términos señalados y se ocurra con ella ante el superior con la debida oportunidad" (a.1141 C. J.). En cuanto al primer requisito, debemos advertir que la apelación, como medio de impugnación en los procesos penales, se encuentra regulada en el Título VII, Capítulo II del Libro Tercero del Código Judicial. Específicamente el artículo 2429 establece un catálogo de resoluciones contra las cuales se puede dar la apelación. Según el numeral 7 de la comentada disposición legal, también pueden ser objeto de apelación "**Las demás que la ley expresamente establezca**". Es evidente que este último inciso plantea una taxatividad de las resoluciones que pueden ser objeto de apelación, o sea que establece una limitación de carácter imperativo. La resolución que ahora es objeto del pretendido recurso de hecho no esta incluida en ninguno de los supuestos a que se refiere la norma en comento, de modo que el recurso resulta improcedente y debe rechazarse sin tener que entrar a examinar los demás requisitos de admisibilidad.

Por otra parte, llama la atención el hecho de que el Magistrado Kel H. Arosemena, en salvamento de voto diga que esta de acuerdo con la resolución "en cuanto no acepta la petición de Eugenio Nelson Magallón Romero de acogerse a ser juzgado ante Tribunal de Derecho", empero considera que debe advertir que "en nuestro país no pueden realizarse este tipo de juicio con reo ausente o reo rebelde" ya que existen varias disposiciones del Código Judicial que suponen la intervención del acusado, entre las que menciona los artículos 2239, 2240, 2241 y 2242, además de que el artículo 1991, al referirse a la acción civil dimanante del delito, dice que "en los casos en que el ejercicio de la acción penal no pueda proseguirse por rebeldía del imputado o por una causa ...". A su vez plantea que "también debemos indicar que en este Tribunal existen varios procesos penales de primera instancia que no se han adelantado por encontrarse prófugos los imputados, procesos que no hemos concluido porque consideramos que continuar con las audiencias de dichos procesos sin los acusados viola el principio del debido proceso y normas aceptadas en la Convención de los Derechos Humanos".

Ante tales consideraciones, resulta necesario que esta Sala haga algunas aclaraciones. El contenido de los artículos 1991, 2239, 2240, 2241 y 2242 del Código Judicial pareciera plantear la necesaria presencia del imputado en el debate oral, empero no debe perderse de vista que esa interpretación era correcta en cuanto armonizaba con el artículo 2314 ibidem según el cual, el imputado ausente "será juzgado en proceso aparte tan pronto como sea aprehendido". Resulta que esa última disposición fue derogada posteriormente por el artículo 63 de la ley 3 de 22 de enero de 1991, y como adición, el artículo 74 de la mencionada ley también estableció que "**Con respecto a los reos rebeldes, la notificación de la sentencia se hará en la forma prevista en el Capítulo XII, Título III, para el auto de enjuiciamiento**" (a.74). Quiere decir entonces que, a partir de la ley 3 de 1991, el Edicto emplazatorio además de constituir una citación especial, también tiene efectos de una notificación legal que permite continuar el juicio sin la intervención del imputado rebelde, siempre y cuando se respete la garantía de estar representado por un defensor técnico. Ese procedimiento de ninguna forma viola el debido proceso ni las cinco garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de modo que es incorrecta la interpretación que al respecto hace el disidente, con lo cual solo demuestra un grave desconocimiento de la hermenéutica jurídica que se traduce en una inexcusable morosidad sobre negocios que, según el mismo admite, se mantienen paralizados en ese Tribunal.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho presentado contra el auto de 26 de octubre de 1993 que no admite el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Moisés Espino contra la resolución de 25 de octubre de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ DE AGUILERA
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

JUICIO SEGUIDO A EDUARDO MONTEZA ATENCIO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RIGOBERTO JARAMILLO REYNA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia del 10 de marzo de 1993, condenó a Eduardo Antonio Monteza Atencio a cumplir la pena de 12 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 2 años, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de Rigoberto Jaramillo Reyna. Contra esta decisión jurisdiccional interpuso recurso de apelación la defensa técnica del reo.

Según se expresa en el libelo de la alzada, la disconformidad con el fallo que se impugna consiste básicamente en que Monteza fue condenado por el delito de homicidio calificado, siendo que su conducta encuentra adecuación típica en la figura del homicidio simple. Sostiene el recurrente que en este caso no prospera el supuesto previsto en el numeral 6 del artículo 132 del Código Penal, toda vez que no se ha probado que su patrocinado causara la muerte de Jaramillo con posterioridad a la comisión de otro delito, en este caso el que guarda relación con la venta de sustancias alucinógenas. Considera así el recurrente que no hay evidencia del elemento pre-delictual consistente en la comprobación del componente del delito contra la salud pública (f.735).

Otra censura que formula el recurrente radica en que la conducta de su patrocinado tampoco se adecúa al numeral 8 del artículo 132 del Código Penal, puesto que "es indiscutible que la víctima al momento del suceso no se encontraba en servicio, no estaba uniformado, es más, procedía de un espectáculo bailable (f.735).

Finalmente, la defensa técnica concluye con la petición de que se sancione su patrocinado por el delito de homicidio simple, lo que redundaría en una disminución de la pena impuesta.

La acusación particular, mediante escrito de objeciones al sustento de la apelación, considera que la sentencia condenatoria debe confirmarse en razón de que el tribunal a-quo dosificó la pena dentro de las facultades discrecionales que le concede el artículo 56 del Código Penal. Sostiene además que se encuentran configurados los supuestos 6 y 8 previstos en el artículo 132 del Código Judicial, puesto que el reo le causó la muerte al agente Jaramillo "después de haberle ofrecido droga en venta (HAY VOLTIOS) y frente a semejante proposición el hoy occiso se identificó como agente de la Fuerza Pública ... lo mató porque se da cuenta en ese momento que se la ofreció a un agente de la fuerza pública" (f.742).

La Sala pasa a decidir el recurso formulado exclusivamente sobre los puntos de la resolución a que se refiere el recurrente, en cumplimiento del mandato del artículo 2428 del Código Judicial.

Las piezas procesales permiten determinar que el agente Rigoberto Jaramillo Reyna murió a consecuencia de un "choque hemorrágico por instrumento cortante penetrante en el tórax" (f.73), herida mortal inferida por Eduardo Antonio Monteza Reyna, la noche del 27 de mayo de 1990, en los predios del mini-super 24 horas ubicado frente a la barriada los Andes No.2, Distrito de San Miguelito, ciudad de Panamá.

La culpabilidad del sentenciado fue declarada por jurados de conciencia, conforme lo establecido en el artículo 2320 del Código Judicial, decisión registrado a folio 506, por lo que no es materia de discusión.

El tribunal a-quo determinó que la conducta del reo encuentra adecuación típica en la figura del homicidio calificado, de conformidad con los numerales 6 y 8 del artículo 132 del Código Penal, en atención a que "la acción de causar la muerte a otro fue perpetrada después de haber cometido el delito de proponer la venta de droga en la persona de un servidor público con motivo del ejercicio de sus funciones" (f.725).

La agravante específica establecida en el numeral 6 del artículo 132 del Código Penal consiste en que el homicidio se haya ejecutado "Inmediatamente después de haberse cometido otro delito, para asegurar su ocultación, su ventaja, o la impunidad para sí o para un tercero o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto". De acuerdo con el sumariado José de los Santos Bellido, el reo fue quien le manifestó a los acompañantes del occiso que "había voltio, dándoles a entender con esto que él **podía** venderle droga" (f.82). Por su parte, Manuel Humberto Córdoba Ríos (f.103) y Simón de León Arrastre (f.128), compañeros de Jaramillo, quienes estuvieron presentes la noche del los hechos, coinciden en que escucharon la expresión de que había "voltios". Si bien los testimonios indicados destacan que ocurrió una proposición para la venta de drogas, lo cierto es que la investigación no da cuenta de que antes o después de haberse perpetrado el homicidio se le hubiera ocupado droga al reo, como tampoco dan cuenta los testigos de que el reo les haya mostrado la droga. En tal sentido el también sumariado José de los Santos Bellido Schartz manifestó, con relación a la supuesta venta de droga, "yo sólo se que Eduardo Monteza expresó eso, **no se sí fue verdad o por tomarles el tiempo lo único que se que el dijo eso**" (f.301). En tales circunstancias, frente a la comprobación de que se utilizó un lenguaje críptico supuestamente implicatorio de una oferta de venta de drogas, no confirmado con elementos exteriores o materiales propios del delito de tráfico, la Sala considera necesario atender el reclamo que formula la defensa técnica, en el sentido de la eliminación de la agravante específica del numeral 6 del artículo 132 del Código Penal.

En relación con el segundo reclamo del recurrente, se advierte que en autos se encuentra demostrado que el occiso Rigoberto Jaramillo Reyna tenía la calidad de

servidor público, como miembro que era de la Fuerza Pública (f.438). Sin embargo, esa circunstancia no implica que el procesado debiera presumir tal calidad funcional, cuando del contenido de la nota del 28 de mayo de 1990, suscrita por el Mayor Daniel Poveda Arrocha, Jefe del Area H de Policía, dirigida al Director de la Policía Metropolitana, se desprende que "Al momento del hecho, el agente Jaramillo se encontraba de franquicia ..." (f.418). Es fácil colegir entonces, que la noche en que murió el agente Jaramillo no se encontraba de servicio, hecho que también es corroborado por el propio agente Simón de León Arrastre, quien afirma que tanto el occiso como él "no estábamos trabajando" (f.130), de modo que también resulta improcedente la aplicación de la agravante específica prevista en el numeral 8 del artículo 132 del Código Penal. Con base en lo expuesto hasta ahora, la Sala concluye que la conducta del procesado ciertamente encuentra adecuación típica en el artículo 131 del Código Penal, que establece una pena que va de 5 a 12 años de prisión. A los efectos de la individualización de la pena aplicable deben ser considerados los factores previstos en el artículo 56 del Código Penal. Con tal fundamento se considera prudente señalar como pena base 10 años de prisión, resultando en esa misma cuantía la líquida a imponer ya que del proceso no se desprende la concurrencia de alguna circunstancia modificativa.

En razón de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia del 10 de marzo de 1993 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de CONDENAR a Eduardo Antonio Monteza Atencio a la pena de diez (10) años de prisión y la CONFIRMA en lo demás.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSE M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO CONTRA CEFERINO BARBA RODRÍGUEZ Y BENIGNO ANTONIO UREÑA BARBA, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y ROBO EN PERJUICIO DE TOMAS ADÁN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. REPARTIDO EL 2 DE JULIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, 11 DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresa a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el expediente relacionado con la muerte de **TOMAS SÁNCHEZ**, suceso trágico ocurrido el tres (3) de noviembre de 1989 en el Distrito de La Chorrera y en el que aparecen como sindicados **CEFERINO BARBA RODRÍGUEZ** y **BENIGNO ANTONIO UREÑA BARBA.**

La apelación la interponen los imputados contra la sentencia dictada el 12 de noviembre de 1992 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y el recurso es sustentado por el licenciado **RAFAEL RODRÍGUEZ**, en su condición de abogado defensor de **BENIGNO ANTONIO UREÑA** y **CEFERINO BARBA RODRÍGUEZ.**

BREVE RELATO DE LOS HECHOS

El señor Antonio de la Rosa Guerra denunció el 4 de noviembre de 1989 ante el extinto Departamento de Investigaciones (D.E.N.I) que el vehículo de su propiedad marca Datsun, color rojo, con matrícula de circulación N° 4137, en el que se prestaba el servicio de taxi, había desaparecido, al igual que su conductor (el palanca) señor TOMAS SÁNCHEZ, desde el 3 de noviembre de ese año, sin que hasta el momento en que se presentaba la denuncia se supiera del paradero del vehículo ni de su conductor.

Consta en el expediente que un grupo de taxistas se organizaron para tratar de dar con el paradero del auto y de su conductor, y que en horas de la tarde del día 4 de noviembre se encontró el citado vehículo, no así a su conductor, quien fue encontrado con posterioridad flotando en las aguas del río que va desde Peña Blanca hasta la Baldeza.

Las pesquisas lograron determinar la identidad de las personas que participaron en el homicidio del señor TOMAS SÁNCHEZ, recayendo tal responsabilidad en el menor de 17 años de nombre **GREGORIO GÓMEZ**, (a) **"PEPITO"**, y en los adultos **CEFERINO BARBA RODRÍGUEZ** y **BENIGNO ANTONIO UREÑA BARBA.**

Todo parece indicar que los implicados tenían la intención de disfrutar de una actividad bailable pero que carecían de dinero, motivo por el cual **CEFERINO BARBA RODRÍGUEZ** propuso hacerle un "trance" a un taxista, es decir, parar un taxi, atacar a su conductor y desembolsarlo. Para tales propósitos se tenía diseñado la forma en que cada uno de los partícipes se debía ubicar dentro del vehículo que fuese escogido para realizar tal fechoría.

Las sumarias ponen en evidencia que el vehículo conducido por el infortunado TOMAS SÁNCHEZ fue detenido por los sindicados quienes, tan pronto como se introdujeron en el mismo, pusieron en ejecución el plan que previamente habían organizado.

Es así como al cabo de haber recorrido el carro escasos metros, el imputado CEFERINO BARBA, quien se había posicionado en el asiento justamente detrás del

conductor, le pone a éste un cuchillo en el cuello. Acto seguido el menor GREGORIO GÓMEZ, quien se encontraba sentado en el asiento del copiloto, procedió a ponerle un cuchillo al conductor a la altura del pecho.

El conductor del taxi le entregó al menor el dinero que había recolectado durante su faena, y fue en ese momento en que los antisociales deciden tomar el control del vehículo, sentando al conductor del taxi en el asiento del copiloto y procediendo GREGORIO GÓMEZ a conducir el auto hasta el lugar conocido como Peña Blanca, donde a iniciativa de CEFERINO BARBA RODRÍGUEZ se decide ultimar al taxista, porque el occiso conocía de vista al promotor de semejante idea.

Según se deduce de los elementos probatorios allegados al proceso, CEFERINO le dijo a GREGORIO que matara al conductor con un cuchillo que este último ya tenía en su poder. De acuerdo a la versión de GREGORIO en un principio él no se decidía a cometer el homicidio, pero finalmente lo cometió porque tanto CEFERINO como BENIGNO le insistían en la necesidad que había de matar al conductor porque si lo dejaban con vida los podrían reconocer con posterioridad.

De acuerdo a la evidencia que recoge el proceso, los sindicados bajaron al ahora occiso del taxi, y mientras CEFERINO y BENIGNO lo sujetaban por ambos brazos, GREGORIO procedía a asestarle una puñalada a la altura del pecho, lado izquierdo. No contento con esto, y como quiera que el infortunado aún permanecía con vida (porque respiraba), GREGORIO volvió en dos ocasiones a apuñalar a TOMAS SÁNCHEZ en el área donde con anterioridad lo había herido, pero como éste todavía respiraba, GREGORIO lo sujetó por los pies y le introdujo la cabeza en el agua del río hasta ahogarlo.

Luego de haber cometido este lamentable hecho los homicidas abordaron el carro y, tras dar algunas vueltas en el mismo, lo dejaron abandonado en el primer puente que queda en dirección de Capira a Lídice, no sin antes haber sacado el radio del vehículo. Posteriormente, se dirigieron a la actividad bailable que se celebraba en Capira, en donde repartieron el dinero -tocándole a cada uno la suma de catorce dólares-, tomaron cerveza y hasta comieron pollo asado.

Ahora bien, en su debida oportunidad, la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial recomendó el llamamiento a juicio de los sindicados, y el Segundo Tribunal Superior de Justicia los llamó a juicio mediante auto de 26 de julio de 1991 (fojas 268-272). La audiencia tuvo lugar el 30 de junio de 1992 con intervención de Jurados de Conciencia, quienes declararon **CULPABLES** a los sindicados tanto de la muerte de **TOMAS SÁNCHEZ** como del delito de robo.

El Segundo Tribunal Superior procedió a dictar la sentencia el día 12 de noviembre de 1992 (fojas 407-415), imponiendo a **CEFERINO BARBA GARCÍA** y a **BENIGNO ANTONIO UREÑA** la siguiente condena: por el delito de homicidio agravado la pena en 17 años de prisión. Por el delito de robo 20 meses. Todo ello da como resultado una pena líquida de 18 años, 8 meses de prisión que deben cumplir los procesados.

ASPECTOS DE FONDO

El licenciado Rafael Rodríguez, abogado de **BENIGNO ANTONIO UREÑA y de CEFERINO BARBA RODRÍGUEZ**, al sustentar, en extenso escrito de 38 páginas, el recurso de apelación interpuesto por sus patrocinados, llega a la conclusión de que la forma cómo sus representados fueron sancionados es injurídica, porque el delito de homicidio es el que sirve de agravante al delito de robo y no a la inversa, como hizo el tribunal a quo.

La Corte tras estudiar detenidamente los hechos que componen la causa y los argumentos presentados por la defensa, advierte que no existe injuridicidad alguna en la dosificación de la pena.

En efecto, el Segundo Tribunal Superior de Justicia llamó a juicio a los defendidos del recurrente por los delitos genéricos de homicidio y de robo. Al jurado de conciencia se le sometieron dos cuestionarios para que decidieran la culpabilidad o inocencia de los procesados con relación a estos delitos. Ambos cuestionarios fueron respondidos con el veredicto de culpabilidad, lo cual significa que los procesados fueron declarados culpables tanto del delito de homicidio como del delito de robo.

Ahora bien, es sabido que la sentencia debe recaer sobre los cargos por los cuales se decretó el juzgamiento de los procesados, según se deduce del artículo 2412 del Código Judicial. También es sabido que en los juicios por jurado de conciencia la sentencia debe estar en consonancia con el veredicto dado por la mayoría de los miembros que conforman ese jurado. Al respecto, son elocuentes las palabras del autor colombiano Antonio Vicente Arenas, quien dicho sea de paso fue citado por el recurrente a fojas 458 del expediente:

> "... La sentencia debe estar en consonancia con los cargos formulados en el auto de proceder, y en los juicios que se tramitan con intervención del jurado debe estar de acuerdo con el veredicto ..."

Luego entonces, si lo anterior es así, como en efecto lo es, carecen de toda relevancia jurídica los argumentos de la defensa dirigidos a lograr la absolución de los procesados por el delito de homicidio. En efecto, la defensa ha tratado de argumentar que sus defendidos no tuvieron participación en el homicidio, pues su conducta no estaba precedida de dolo. Pero resulta que el análisis de si hubo dolo o no, ya no es susceptible de ponderación en estos momentos, porque esa cuestión debió haber formado parte del debate en la audiencia. De manera que si el jurado de conciencia consideró que los procesados eran culpables del delito de homicidio

cometido en perjuicio de TOMAS SÁNCHEZ, los jueces de derecho deben limitarse a imponer la sanción que corresponde a los enjuiciados, con vista en el caudal probatorio que exista en autos y bajo la directrices señaladas por el artículo 56 del Código Penal y demás disposiciones concordantes de dicha excerta legal.

En ese sentido, si los procesados fueron declarados culpables de los delitos de homicidio y de robo, para sancionar a los implicados la sentencia debió haber tomado en consideración lo normado por el literal "A" del artículo 64 del Código Penal, que a la letra dice:

> "Artículo 64: Si hubiere de juzgarse a la vez a un individuo por dos o más hechos punibles que tengan una misma clase de pena, se le sancionará así:
>
> a) si son dos los hechos punibles, se le impondrá la pena por el más grave, con un aumento de hasta la tercera parte de la pena que le correspondería por el otro" (la subraya es de la Sala).

Al estudiar el negocio que nos ocupa, observa la Sala que el tribunal de la causa ciertamente aplicó el precepto antes transcrito; pero no sólo se evidencia que la norma fue aplicada al caso que nos ocupa, sino que la misma fue aplicada correctamente por el tribunal a quo, pues dicho tribunal impuso a los procesados la pena de 17 años de prisión, por el delito de homicidio (**que es el más grave**) y la pena de 20 meses de prisión por el de robo (**que es el menos grave**), todo lo cual da como resultado una pena líquida de 18 años, 8 meses de prisión.

Es importante señalar que la tesis esgrimida por el defensor no tiene sustento lógico, doctrinario, ni jurídico, porque bajo ninguna circunstancia se podría decir, como afirma el recurrente, que el delito de homicidio sirve como agravante al delito de robo, porque ello sería tanto como decir que el homicidio es un delito menos grave que el robo, lo cual es un gran absurdo.

Como quiera que no existe otro argumento de disconformidad que haya que estudiar, lo procedente es confirmar la resolución recurrida.

Por ello, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

SOLICITUD DE FIANZA: APELACIÓN EN LA FIANZA DE EXCARCELACIÓN SOLICITADA POR EL LIC. LUIS CARLOS AROSEMENA A FAVOR DE FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA, SINDICADO DE DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ERICK ROLANDO GARCÍA BARSALLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL

VISTOS:

En grado de apelación ingresó ante la Sala Penal de la Corte el auto de 22 de septiembre de 1993, dictado por el Segundo Tribunal Superior, el cual denegó la solicitud de fianza de excarcelación solicitada a favor de FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA, sindicado por el supuesto delito de homicidio en perjuicio de ERIC ROLANDO GARCÍA BARSALLO.

La fianza fue negada debido a que el delito investigado, el cual provisionalmente fue calificado por el Tribunal como homicidio doloso, tiene impuesto en la ley pena mínima de cinco años de prisión, por lo que queda excluido de los delitos que pueden beneficiarse con dicha caución.

El licenciado LUIS CARLOS AROSEMENA RAMOS, Defensor de Oficio de FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA, sustentó la apelación anunciada expresando que su defendido no está vinculado directo ni indirectamente en la comisión del hecho delictivo. Fundamenta su solicitud citando un fallo dictado por esta Sala en el cual se concedió fianza de excarcelación en un delito de homicidio cuya investigación adolecía de "visibles insuficiencias e imperfecciones" que impedían fundar la incriminación de los imputados.

Por otra parte, señala el defensor del detenido DE LA GUARDIA, que en la Vista Fiscal emitida por el Fiscal Segundo Superior, éste solicita se dicte el sobreseimiento provisional a favor de su defendido.

El 21 de abril de 1993, la Sala resolvió una apelación de fianza que había sido denegada a FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA y a EULISES GUIZADO RODRÍGUEZ, confirmando el auto de denegatoria del Segundo Tribunal Superior.

A partir de esa fecha se realizaron muchas diligencias tendientes a perfeccionar el sumario, sin embargo, a criterio de la Sala, la situación del imputado DE LA GUARDIA no ha variado con relación a la primera revisión que de la situación de éste se hizo en abril de 1993.

Las anotaciones que hace el defensor de oficio en el escrito en que sustenta la apelación, no son suficientemente convincentes para que este tribunal acceda a la solicitud de fianza de excarcelación a favor de FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA.

En virtud de lo anotado, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 22 de septiembre de 1993, dictado por el Segundo Tribunal Superior, el cual denegó fianza de excarcelación a FERNANDO BOSCO DE LA GUARDIA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL PARA LA LIBERACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO SEGUIDO A ORLANDO ANTONIO GARCÍA UGARTE POR PRESUNTA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Con la solicitud de que se liberen las medidas cautelares que pesan sobre el vehículo con matrícula 4T-412, el licenciado **EDRULFO ESPINALES MIRANDA**, haciendo uso del poder que le confirió **CARLOS ALBERTO GARCÍA CEDEÑO**, compareció ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, para presentar una solicitud de suspensión de la aprehensión provisional que existe sobre dicho bien.

En ocho hechos el solicitante expone que GARCÍA CEDEÑO es el dueño del vehículo que fue aprehendido por el agente de instrucción, debido a que en el momento en que era conducido por CARLOS ALBERTO GARCÍA UGARTE (hijo de aquél), se descubrió en el interior del vehículo cierta cantidad de droga, que estaba en posesión de otra persona.

Señala el apoderado judicial que a favor de GARCÍA UGARTE fue dictada una sentencia absolutoria, pues se comprobó que no tuvo nada que ver con el ilícito y el día de los hechos sólo era el conductor del vehículo de propiedad de su padre. Sin embargo, el tribunal de instancia no se pronunció en la sentencia con relación al bien cautelado, por lo que comparece ante la Sala a formular su solicitud, dado que ese es el único medio de subsistencia con que cuenta GARCÍA CEDEÑO y su familia.

A folio 6 reposa la prueba de que CARLOS A. GARCÍA es el propietario del vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, color blanco, del año 1982, con capacidad para cinco pasajeros y con placa #4T-412.

El solicitante adujo como fuente de prueba el expediente penal del proceso que le fue seguido a ORLANDO ANTONIO GARCÍA UGARTE, el cual se encuentra radicado en el Juzgado Tercero de Circuito de Chiriquí, Ramo Penal.

La solicitud presentada le fue corrida en traslado al Procurador General de la Nación, quien manifestó que le era imposible externar mayor consideración al respecto, ya que el solicitante no presentó como prueba el fallo de primera instancia que contiene la absolución mencionada por el solicitante. No obstante, expresa el Procurador que acogerá el criterio que al respecto dicte esta Corte.

Antes de resolver la petición presentada, la Sala dispuso solicitar ante el Juzgado Tercero de Circuito de Chiriquí copia de la sentencia de primera instancia, a efectos de conocer la situación real de los hechos relacionados con la cautelación del vehículo de propiedad de GARCÍA CEDEÑO.

De esta forma, el mismo día que se dispuso solicitar copia de la sentencia, ésta fue recibida mediante el sistema de fax.

En dicha resolución se absuelve a ORLANDO ANTONIO GARCÍA UGARTE de los cargos formulados y con relación al vehículo no se menciona descautelación alguna.

La Sala no tiene objeción en acceder a la solicitud presentada. La razón de la cautelación del vehículo de propiedad de GARCÍA CEDEÑO fue precisamente el hecho de que en dicho transporte fue encontrada la droga que motivó la instrucción. Si la detención de GARCÍA UGARTE (hijo del dueño del vehículo) se llevó a cabo para deslindar la responsabilidad del delito y ha sido declarado sin cargo alguno por el tribunal de primera instancia, considera la Sala que procede desaprehender el

vehículo, ya que dicho bien, al no estar vinculado con el delito, debe ser devuelto a su legal tenedor o propietario.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACCEDE a la solicitud formulada y CONCEDE la tenencia del vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, color blanco, del año 1982, con capacidad para cinco pasajeros y con placa #4T-412.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE TERCERÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL, EN EL SUMARIO SEGUIDO A RAFAEL ÁNGEL VEGA BLANCO, GUSTAVO LEÓN MEDINA CASTILLO Y BLADIMIR ISAAC MORENO BATISTA, POR SUPUESTA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE. FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Miguel González Carrasco, actuando en representación de la sociedad Empresa de Alquileres de Automóviles, S. A., ha comparecido ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a objeto de que se levante la aprehensión provisional del vehículo Nissan, Modelo Bluebird, Tipo Sedan, Color Rojo, Motor CA18915471, Chasis YU12104715, Placa 8-128846, de propiedad de su mandante, el cual se encuentra aprehendido provisionalmente a órdenes de la Procuraduría General de la Nación en relación con sumarias que se instruyen contra Rafael Ángel Vega Blanco y otros, por delito contra la Salud Pública.

Según expone el peticionario, "mi representada, EMPRESA DE ALQUILERES DE AUTOMÓVILES, S. A., al igual que otras empresas, ejercen legalmente el negocio de alquiler de automóviles al público en general, por un precio cierto, para gestiones personales y lícitas, por lo que no puede considerarse solidaria de cualquier delito que cometan sus arrendatarios" (f.2). Que en virtud de esa actividad el vehículo, al momento se ser aprehendido, "se encontraba arrendado al señor RAFAEL ÁNGEL VEGA BLANCO, colombiano, con pasaporte AD235904, bajo contrato de arrendamiento N°7303822 el día 2 de Julio de 1993 a las 3:38 p. m.".

Puntualiza el peticionario que la aprehensión del vehículo es ilegal, por lo que impetra se "ordene la Entrega Inmediata a su legítima propietaria que es EMPRESA DE ALQUILERES DE AUTOMÓVILES, S. A., por no estar vinculado directamente con el ilícito que se investiga, y que además mi representada no puede ser solidaria del mismo" (f.3).

En opinión del Procurador General de la Nación, es a la Sala Segunda de la Corte Suprema a quien corresponde determinar si concurren o no las condiciones legales necesarias para acceder a lo pedido (fs.18-20).

Según destaca el Procurador General, encargado, "esta Procuraduría en providencia de 12 de julio de 1993, por considerar que el bien en mención era usado por los antisociales para realizar sus **actividades de narcotráfico**, optó por aprehenderlo provisionalmente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 de la ley 23 de 30 de diciembre de 1986" (f.19). Por mandato legal esta Sala sólo puede disponer sobre la **tenencia provisional** de bienes en los casos a que se refiere el artículo 24 de la ley 23 de 1986, o sea de aquellos "que estuvieren aprehendidos provisionalmente a órdenes de la Procuraduría General de la Nación", lo que evidentemente es el caso que nos ocupa.

La empresa de Alquileres de Automóvil es la propietaria del vehículo reclamado, según consta en certificación del Municipio de Panamá (f.4). Por otra parte, según el contrato visible a folio 6, la mencionada compañía arrendó el vehículo a Rafael Ángel Vega Blanco, quien, según expresa el Procurador, "es responsable del recibo, manejo y despacho de la carga ilícita, teniendo a sus servicios a varias personas que conforman la organización criminal en Panamá" (fs.18-19).

El hecho de que el vehículo reclamado haya sido utilizado para la comisión de un delito relacionado con droga no quiere decir que la compañía propietaria haya tenido algún grado de participación en el hecho, salvo prueba en contrario. En tales circunstancias, resulta atendible la petición de desaprensión formulada, con la restricción que esta medida provisional amerita.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el levantamiento de la aprehensión provisional que pesa sobre el vehículo marca Nissan, Tipo Sedan, Motor CA18915471, Placa N°8-128846-93, y DISPONE otorgarle la tenencia provisional a su propietaria, la empresa de Alquileres de Automóvil, S. A., inscrita en el Registro Público en el Tomo 446, Folio 504, Asiento 97250, actualizada en la Ficha 10928, Rollo 447, Imagen 80, de la Sección de Personas Mercantil, con la advertencia de que no

podrá ser comprometido o enajenado a ningún título, hasta tanto la causa sea decidida en forma definitiva. A tales efectos, ofíciese a la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá, con el objeto de que lo mantenga fuera del comercio hasta nueva orden judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE DESAPREHENSIÓN PRESENTADA POR EL LICENCIADO JOAQUÍN ROGER PÉREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE EUGENIO CEDEÑO RIVERA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ESTE POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA (DROGAS). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Eugenio Cedeño Rivera otorgó poder a la Firma Forense Ramsey, Pérez y Asociados para que, en su nombre y representación, gestione "todo lo concerniente a la DEVOLUCIÓN de mi auto, Marca DATSUN, año 1983, modelo 120,color verde, Pick-Up, de dos (2) puertas, con número de motor N°A12164923, con placa de circulación vehícular N°8C-1755-93, el cual en la actualidad esta a órdenes de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Secretaría de Drogas".

El licenciado Joaquín Roger Pérez, integrante de la mencionada firma forense, en uso del poder conferido plantea que su poderdante se dedica al negocio del transporte, en razón de lo cual fue contratado para trasportar una mercancía hasta la provincia de Colón. Como la referida mercancía resultó ser sustancia narcótica, su cliente fue detenido por unidades del Departamento de Investigaciones de la Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Alega su inocencia por cuanto su participación fue la de mero transportista, circunstancia que a su juicio quedó demostrada con fallo emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 15 de septiembre de 1993, mediante el cual se declaró ilegal su detención. Por esas razones y con base en el artículo 1992 del Código Judicial, se solicita la devolución del vehículo.

En opinión del Procurador General de la Nación la versión de que el sumariado Eugenio Cedeño se desempeña como transportista esta confirmada, en parte, por los señores Ramón Carrión, Lawson Edgard Yearwood Valdivieso, Osvaldo Ariel Aranda Delgado y José Del Carmen Ríos. Por otra parte expresa que, con vista del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que liberó al justiciable, comparte la tesis de que Cedeño Rivera resultó vinculado en forma fortuita al hecho delictivo. En consideración a que el vehículo es de propiedad del sumariado y que es ése el único medio de subsistencia del que dependen él y su familia, es a esta Sala a quien corresponde determinar si concurren o no las condiciones legales para que se acceda a lo pedido o se mantenga la aprehensión provisional que pesa sobre el vehículo reclamado.

Para resolver la solicitud planteada resulta oportuno destacar que esta Corporación, en Pleno, mediante sentencia de 15 de septiembre de 1993, declaró ilegal la detención preventiva de Eugenio Cedeño Rivera en relación con tales hechos y ordenó su libertad. En la motivación de ese fallo se expuso, que "el Pleno de la Corte consideró oportuno y necesario recibir al detenido en Audiencia, la cual fue celebrada el día de ayer 14 de septiembre en horas de la tarde. Durante su comparecencia los Magistrados que integran el Pleno tuvieron la oportunidad de interrogar exhaustivamente a Cedeño Rivera, llegando a la conclusión de que su participación en los hechos fue la de un simple transportista, y de que no existe en autos ningún indicio que lo vincule a la carga que transportaba ni al cliente o dueño de la misma y probable autor del ilícito detectado por las Autoridades de Aduana del Puerto de Coco Solo".

De la opinión externada por el Procurador General de la Nación se infiere que después de esa sentencia a la investigación no se han incorporado nuevos elementos probatorios que pudieran comprometer la situación jurídica del Cedeño. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 24 de la ley 23 de 1986, **la Sala Segunda de la Corte Suprema puede disponer sobre la tenencia provisional de bienes "que estuvieren aprehendidos provisionalmente a órdenes de la Procuraduría General de la Nación"**, situación en la que se encuentra este caso, por cuanto el propio Procurador admite que "comprobado que el vehículo antes citado, fue utilizado para transportar la droga, esta Procuraduría con fundamento en el artículo 22 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1996, procedió en providencia del 7 de septiembre de 1993 a aprehender provisionalmente dicho bien" (f.15).

La propiedad del vehículo reclamado fue debidamente comprobada con certificación expedida por el Municipio de Panamá (f.7). Con base en ello y habida consideración de que hasta ahora no existe prueba que vincule a Eugenio Cedeño con el delito investigado -contra la Salud Pública-, es del caso acceder a la solicitud de desaprensión provisional del vehículo reclamado.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el levantamiento

de la aprehensión provisional que pesa sobre el vehículo marca Datsun, año 1983, modelo 120, color verde, pick-Up, de dos puertas, motor N°A12164923, con placa de circulación N°8C-1755-93, y DISPONE otorgarle la tenencia provisional a Eugenio Cedeño Rivera, con cédula de identidad personal N°4-160-897, con la advertencia de que no puede enajenarlo ni comprometerlo a ningún título, hasta tanto la causa sea decidida en forma definitiva. A tales efectos, ofíciese a la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá, donde actualmente se encuentra registrado el bien, con el objeto de que lo mantenga fuera del comercio hasta nueva orden judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL INTERPUESTA A FAVOR DE LA SOCIEDAD INTERSPACE CLEARANCE, INC. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **FRANCISCO JAVIER MATA**, en representación de la Sociedad **INTERSPACE CLEARANCE, INC.** presentó solicitud de levantamiento de aprehensión provisional de los fondos y valores de la cuenta N°21-006681 que dicha empresa mantiene en el **BANCO GANADERO, S. A.**

Sometido a las reglas de reparto, se le corrió traslado del negocio al Procurador General de la Nación, de conformidad al artículo 24 de la ley 23 de 1986, para que emitiera concepto. Dicho traslado se hizo mediante proveído de trámite, fechado el 10 de marzo de 1993.

El 5 de noviembre del año en curso, se recibió en la Secretaría de la Sala Segunda un escrito procedente de la Procuraduría General de la Nación en la que se contesta el traslado del presente negocio y se informa que la aprehensión provisional de los dineros y valores que se encontraban depositados en el BANCO GANADERO, S. A. a nombre de la empresa solicitante, se hizo con motivo de la implementación de la Operación POLAR CAP y que de acuerdo con las constancias de la investigación adelantada en este caso, se pudo establecer que la cuenta 21-006681 no tiene fondos ni valores depositados en la actualidad pero sí registra un movimiento de más de 18 millones durante los años 1987, 1988 y 1989, que no han podido ser debidamente clarificado en cuanto a su origen y destino.

En el lapso comprendido de marzo hasta la fecha, el apoderado de la empresa solicitante ha presentado varios escritos en el sentido de que se reitere al Procurador General de la Nación la necesidad de que envíe el concepto para el cual se le dio traslado del expediente desde el mes de marzo del año en curso.

Con relación a la solicitud de levantamiento de aprehensión provisional, esta Sala en diferentes pronunciamientos ha señalado que cuando la aprehensión provisional se refiere a dineros o valores, llevados a cabo por la Procuraduría General de la Nación a través de la Secretaría Especializada en Delitos relacionados con drogas, tales dineros y valores al tenor del artículo 22 de la Ley 23 de 1986, que regula esta materia, deben ser mantenidas a órdenes de la Procuraduría General hasta que la causa se decida de manera definitiva por el tribunal jurisdiccional competente y, cuando se trata de otros bienes la petición de levantamiento de aprehensión provisional, sean estos instrumentos, valores y demás bienes empleados en la comisión de los delitos relacionados con drogas y los productos derivados de dicha comisión, es de conocimiento exclusivo de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En el presente caso, lo que se ha cautelado provisionalmente es una cuenta que no tiene ni fondos de dinero, ni valores de ninguna naturaleza. Según la Procuraduría General de la Nación este caso está vinculado a una gran operación antidroga conocida como POLAR CAP, la cual todavía no se ha pasado a los tribunales jurisdiccionales competentes para su decisión definitiva y por ello, en cumplimiento de lo que establece la ley, es al tribunal jurisdiccional competente al que le cabe la responsabilidad de decidir sobre el levantamiento de aprehensión provisional a que se refiere este negocio.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE del conocimiento de la presente solicitud por cuanto la misma corresponde a los tribunales de la instancia circuital.

Notifíquese y Envíese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE PARA EL LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN DENTRO DEL SUMARIO SEGUIDO A PROSPERO MARGFOY MARGFOY Y ELIZARDE ALFONSO VIRUET RENTERÍA, POR PRESUNTA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL

VISTOS:

El licenciado Miguel González Carrasco, actuando como apoderado judicial de la Empresa de Alquileres de Automóviles, S. A., compareció ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte para solicitar, mediante escrito, el levantamiento de la Aprehensión Provisional del vehículo Nissan, Modelo Sentra, tipo Sedán, color rojo, motor E16444350M, Chasis 2PB12M004604, placa 8-112545.

En seis hechos el solicitante expone que el vehículo aprehendido por el Procurador General de la Nación el 28 de junio de 1993, es de propiedad de la Empresa de Alquileres de Automóviles, S. A., la cual el día 3 de junio de 1993, a las once y veintiséis de la mañana se lo arrendó al señor Próspero Margfoy Margfoy, de nacionalidad colombiana. A quien al día siguiente le fue allanada su residencia, encontrándose en ella sustancias ilícitas o droga.

Expresa el licenciado González que en el vehículo arrendado no se encontró ninguna mercancía o artículos que lo relacionen con la comisión del delito, por lo que no es instrumento de dicha comisión. Y sostiene que el hecho de que los delincuentes hayan sido encontrados en el vehículo alquilado, no significa que en él se transportó la droga.

Con la solicitud se presentaron como pruebas la certificación del Registro Público donde consta la personería jurídica de la empresa rentadora de vehículos; el registro único de vehículo según el cual el auto cautelado es de propiedad de la Empresa de Alquileres de Automóviles, S. A.; copia autenticada del contrato de alquiler celebrado entre la empresa que solicita la desaprehensión y el señor Margfoy Margfoy, celebrado el 3 de junio de 1993, y copia del informe de comisión de fecha 4 de junio de 1993, en el cual se deja constancia que en el vehículo en que se transportaban Próspero Margfoy Margfoy y Alizarde Alfonso Viruet Rentería no se encontró nada ilícito.

El Procurador General de la Nación, Segundo Suplente encargado, en su Vista N°41 del 28 de octubre de 1993, sin llegar a exponer el concepto o la recomendación que por ley le corresponde, se concretó a hacer mención de las constancias aportadas y opina que corresponde a esta Sala determinar "si convergen o no las condiciones legales necesarias para que acceda a lo pedido o se mantenga la aprehensión provisional que pesa sobre el vehículo".

En reciente fallo de 18 de octubre de 1993, la Sala se pronunció de la siguiente manera:

> "La medida de aprehensión provisional sólo tiene por efecto retener el bien que pueda estar vinculado directamente con el delito o que pueda ser traspuesto fácilmente por el imputado, por lo que se justifica la aprehensión provisional de dineros y otros valores que, si recae la pena de comiso sobre ellos, pueden ser hallados o ubicados sin mayores dificultades con posterioridad.
>
> La situación de los vehículos, por el contrario, representa una problemática distinta, ya que dichos bienes pueden ser objeto de ciertas medidas provisionales sin que sea necesario en todos los casos una medida de retención o aprehensión, ya que en algunos casos es evidente que el afectado con la medida no tiene responsabilidad alguna en la investigación penal que se adelanta por los funcionarios del Ministerio Público.
> ...
> No todos los vehículos deben ser objeto de aprehensión provisional, ya que cuando se trata de aquellos de propiedad de empresas arrendadoras de autos se afecta innecesariamente a la empresa propietaria del mismo, que por razón de la actividad comercial que realice queda expuesta con mucha facilidad y frecuencia al uso ilícito del vehículo, sin que haya tenido conocimiento previo del propósito que pretendía quien arrendaba el bien en cuestión.
>
> Por otra parte, el funcionario de instrucción debe tomar las medidas precautorias que la ley le autoriza imponer cuando tenga fundados elementos de convicción que le permitan deducir que el vehículo está siendo utilizado en el tráfico ilícito de drogas, hecho que sólo ocurre cuando se halla la droga en el mismo o cuando otros elementos se permiten llegar a tal ineludible conclusión". (Solicitud de levantamiento de aprehensión provisional -sumarias seguidas contra Catalino Abrego Ortega)

En el presente caso se probó que la droga incautada no fue encontrada en el vehículo que había sido alquilado por el imputado Margfoy. La presunción de que dicho vehículo "pudo ser utilizado para realizar actividades ilícitas relacionadas con drogas", como se anotó en la providencia de 28 de junio de 1993 (f.7), a criterio de la Sala no es suficiente para ordenar la aprehensión de dicho auto, máxime cuando éste es de propiedad de una empresa que tiene como propósito comercial alquilar carros y

sobre la cual no recae indicio de participación alguna en el delito contra la salud pública motivo de la aprehensión.

Por ello, la Sala considera que le asiste razón al solicitante, puesto que con la orden de aprehensión del vehículo se le están causando perjuicios a un tercero distinto de los que cometieron el supuesto delito contra la salud pública y no hay constancia de que el bien cautelado esté relacionado con dicho ilícito.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACCEDE a la solicitud formulada y CONCEDE la tenencia del vehículo Nissan, modelo Sentra, tipo sedán, color rojo, con placa N°8-A112545, a su propietaria, la Empresa de Alquileres de Automóviles, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL INTERPUESTA DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA ALBERTO ANTONIO VARGAS WARD, JOSÉ UBALDINO CERVANTES VEGA, EDWIN GESTEÉ CERVANTES CUBILLA, JAIRO HERNÁN PAZA GUERRERO Y JARIO ALFONSO GÓMEZ ARMEILLA, SINDICADOS POR EL DELITO DE TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Daysi Sánchez, actuando en nombre y representación del señor ELIO SARTI, interpuso ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia solicitud de levantamiento de la aprehensión provisional decretada por la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial sobre un bien inmueble de propiedad del poderdante.

La solicitud se basa en el hecho de que el señor ELIO SARTI se vio involucrado en un caso penal por haber sido sorprendido en su buena fe, al creer que celebraba un acto de comercio con el señor JOSÉ UBALDINO CERVANTES, con quien había tenido anteriormente diversas relaciones comerciales, sin tener conocimiento de las actividades ilícitas a que se dedicaba este último señor.

Como consecuencia de lo anterior, sostiene la recurrente, contra su representado se instruyó un sumario por el supuesto delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, dentro del cual se aprehendió el bien inmueble cuya desaprehensión se solicita. Sin embargo, añade, en su debida oportunidad, el Juzgado Primero del Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó la resolución de 14 de noviembre de 1988, mediante la cual se llamó a juicio a un número plural de personas y se sobreseyó provisionalmente, entre otros, a ELIO SARTI. Esa resolución fue apelada y confirmada por el respectivo Tribunal Superior.

Finalmente expresa la recurrente que como quiera que los bienes aprehendidos durante la investigación nunca fueron puestos a disposición del Juez Primero del Circuito de Panamá, pues aún forman parte del Fondo de Custodia de la Procuraduría General de la Nación, resulta necesario que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordene la liberación del bien que fue cautelado por la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial.

La solicitud que nos ocupa fue corrida en traslado al Procurador General de la Nación quien, en la Vista N° 26 de 30 de agosto de 1993, sugirió que la Corte se inhiba de conocer el fondo de la pretensión y decline competencia al Juzgado Primero de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Entre las razones que invoca el Procurador para sustentar esta postura se tiene: 1) que la recurrente no identifica el bien inmueble objeto de la pretensión ni presenta certificado del Registro Público que señale el dueño del mismo; y 2) que el proceso se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de recurso extraordinario de casación, motivo por el cual correspondería al juez de la causa pronunciarse sobre la pretensión del recurrente, una vez el expediente principal sea devuelto por la Corte a dicho juzgado.

Ahora bien, tras haberse cumplido con los trámites de sustanciación de la presente solicitud, y encontrándose el negocio para fallar, el magistrado sustanciador expidió un auto para mejor proveer con el objeto de que la parte interesada presentara un certificado del Registro Público que describiera la finca aprehendida, así como quién era su propietario, desde cuándo estaba aprehendida y a órdenes de qué autoridad se encontraba. También se dispuso que el registrador certificara si sobre dicha finca pesaba algún otro gravamen.

A fojas 54 del expediente se observa un certificado del Registro Público en donde se hace constar que el señor ELIO SARTI es propietario de la Finca 1342, inscrita al folio 304 del tomo 121 de la sección de propiedad de la Provincia de Chiriquí. A renglón seguido se dice que en el Asiento del Diario identificado como:

Tomo 191, Asiento 11826, se encuentra pendiente de inscripción, entre otros, el oficio 137 de 20 de abril de 1988 de la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial, por el cual se decreta secuestro de todos los bienes inscritos a nombre del señor Elio Sarti en Chiriquí.

Como se puede apreciar, la medida cautelar impugnada aún no ha sido inscrita en el Registro Público, no obstante sí aparece registrada en el Diario, lo cual hace necesario un pronunciamiento de la Corte que resuelva la solicitud que nos ocupa, la cual consiste, dicho sea de paso, en que se levante **definitivamente** la medida cautelar adoptada por la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial.

La Sala estima que le asiste razón al Procurador cuando señala que la pretensión de la licenciada Sánchez no es viable porque es al juez de la causa a quien compete levantar o no definitivamente las medidas cautelares que se adopten en los procesos relacionados con droga, según se deduce del artículo 22 de la Ley 23 de 1986, que a la letra dice:

> "Los instrumentos, dineros, valores y demás bienes empleados en la comisión de delitos relacionados con droga y los productos derivados de dicha comisión, serán aprehendidos provisionalmente por el funcionario instructor, quedando fuera del comercio y serán puestos a órdenes de la Procuraduría General de la Nación, hasta tanto la causa sea decidida en forma definitiva por el tribunal jurisdiccional competente ..." (la subraya es de la Sala).

Sin embargo, a pesar de que, como se ha visto, la Sala Penal no tiene facultad para levantar definitivamente una medida cautelar adoptada en un proceso relacionado con droga, esta Corporación de Justicia considera que el recurrente pudiera ser favorecido con el otorgamiento de la "tenencia provisional" del bien inmueble aprehendido, pues la Corte sí está autorizada para tales menesteres, según el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes mencionada.

La razón fundamental que ampara esta postura viene sustentada en el hecho de que el señor ELIO SARTI ha sido sobreseído provisionalmente tanto en primera instancia como en segunda y, aunque en estos momentos la Sala Penal conoce un recurso de casación, la decisión que esta Corporación de Justicia adopte al decidir dicho recurso en nada afectaría la posición jurídica del mencionado imputado, habida consideración de que, al ser otros sujetos procesales quienes han recurrido en casación, no se podría extender los efectos jurídicos desfavorables de la decisión que resuelve ese recurso, a las partes que no lo han ejercitado.

Lo anterior tiene que ver con el tema del efecto extensivo de los recursos. El licenciado Jerónimo Emilio Mejía al tratar este tema, señala que el efecto extensivo de la apelación consiste en que:

> "... frente a la impugnación de un sólo sujeto procesal, la sentencia dictada a su favor puede ser aplicada a los otros sujetos procesales que no apelaron y que se encuentran con el apelante en una relación inescindible, siempre que les sea beneficiosa.
>
> Es decir, se presentan casos en los que varios imputados están vinculados con determinado hecho punible y han sido sancionados de manera tal que si uno se beneficia los otros deben beneficiarse. Pero también puede ocurrir que el beneficio de uno -del apelante- vaya en desmedro de los demás que no apelaron, entonces, en este caso, se le reconoce el beneficio al apelante pero no se le traslada a los demás los efectos perniciosos de la decisión" ("Límites de los Poderes de Decisión del Tribunal de Segunda Instancia en el Derecho Procesal Penal Panameño", en Lex, revista del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, abril-agosto de 1993, p 363-364).

Si bien el citado autor explica el tema del efecto extensivo a propósito del recurso de apelación, sus enseñanzas pueden ser aplicadas, por analogía, al caso del recurso de casación. Si alguna duda existiera al respecto, tan sólo basta echar un vistazo a lo que expresa Miguel Fenech:

> "La sentencia tiene efecto extensivo cuando el recurrente sea uno de los imputados, ya que la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y les fueran aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere adverso" (Derecho Procesal Penal, Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1960, Vol 2°, 3ª edición, p. 759, la subraya es de la Sala).

Como la Corte en la decisión que adopte al resolver el recurso de casación antes mencionado, no podría revocar el sobreseimiento provisional decretado en favor del señor SARTI, hay que concluir que, en lo que a este sindicado respecta, el auto de sobreseimiento se encuentra ejecutoriado, por lo que, en consecuencia, procede la concesión que anteriormente se ha hecho referencia.

Por las razones que anteceden, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que el señor ELIO SARTI tiene derecho a gozar de la tenencia provisional del bien inmueble identificado como Finca N°1342, inscrita al folio 304 del tomo 121 de la Sección de Propiedad del Registro Público de la Provincia de Chiriquí. El derecho que se concede estará vigente hasta tanto el tribunal de la causa levante definitivamente la aprehensión o disponga otra cosa.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) CARLOS H. CUESTAS

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL, INTERPUESTA DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA OMAR GONZÁLEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **GUILLERMO DARIO CEDEÑO** presentó el 9 de noviembre pasado escrito en el que solicita la reconsideración del auto de 18 de octubre de 1993, por medio de la cual esta Sala negó entrega provisional de los bienes que se hayan fuera de comercio por razón de la investigación penal que el Ministerio Público adelanta en contra de **OMAR GONZÁLEZ.**

En su escrito de reconsideración el recurrente, quien actúa en nombre y representación de NARCISO AYALA CALVO sostiene lo siguiente:

> "El Bar Colonial fue alquilado al señor OMAR GONZÁLEZ y dicho establecimiento comercial forma parte de uno de los locales ubicados en el Hotel Iris propiedad de mi representado.
>
> Dicho Hotel está construido sobre la finca N°603 inscrita al folio N°420, tomo 82, Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí la cual es propiedad de NARCISO AYALA CALVO.
>
> Como ya habíamos señalado en el Incidente presentado que mi representado no tiene ninguna participación en el ilícito investigado es por lo que les estoy pidiendo que se levante la Aprehensión ordenada de los bienes de propiedad de mi representado y que fuera ordenado por el Fiscal Primero del Circuito de Chiriquí.
>
> Estoy aportando Certificaciones donde constan que mi representado es el propietario de la finca N°603, del Hotel Iris y que la patente del Bar Colonial estaba a nombre de NARCISO AYALA CALVO y dicho local estaba alquilado a OMAR GONZÁLEZ según Contrato de Arrendamiento que ya se aportó".

Para decidir debiera la Sala enviar el expediente al Procurador General de la Nación para que emita su opinión sobre el particular. Sin embargo, a juicio de la Sala esta reconsideración es improcedente toda vez que dicho recurso no está previsto en el artículo 2427 del Código Judicial para el proceso penal de modo general, ya que excepcionalmente se permite el mismo sólo contra los autos de enjuiciamiento y de sobreseimiento que se dicten por la Sala Penal o el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

La razones antes expuestas, ponen en evidencia que debe rechazarse la reconsideración solicitada por improcedente, sin perjuicio de que el interesado presente nueva solicitud de entrega provisional en los términos previstos por el ordenamiento procesal vigente.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA por improcedente el recurso de reconsideración propuesto por el licenciado GUILLERMO DARIO CEDEÑO el pasado 9 de noviembre de 1993.

Notifíquese y archívese.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DECLINATORIA DE COMPETENCIA. QUERELLA PRESENTADA CONTRA EL LICENCIADO RODRIGO HERNÁN AROSEMENA, DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, POR DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA, QUERELLA FORMULADA POR EL LEGISLADOR MIGUEL BUSH RÍOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de querella presentada por el legislador Miguel Bush Ríos contra Rodrigo Hernán Arosemena, por los delitos calumnia e injuria, con fundamento en el artículo 95 del Código Judicial. El precepto en mención confiere competencia a la Sala Penal para conocer de las causas por delitos o faltas en que incurrieran los Directores y Gerentes de Instituciones Autónomas y Semiautónomas. En tal virtud, mediante auto de 21 de julio de 1993 se ordenó la ampliación de las sumarias con la finalidad de que se efectuaran algunas diligencias indispensables para la calificación de su mérito.

Cumplida la ampliación ordenada, la Sala advierte un hecho -público- sobreviniente que modifica la competencia de esta causa penal. consistente en la renuncia presentada por Arosemena del cargo que ejercía de Director de Aduanas. Esta circunstancia hace desaparecer la competencia funcional antes indicada, por lo que resulta pertinente la aplicación del artículo 15 de la ley N° 1 de 5 de enero de 1988, mediante la cual se dictan disposiciones referentes a los delitos de calumnia e injuria. Según el precepto citado, por desaparecida la competencia por razón de las funciones que ejercía el imputado, la competencia para conocer de los delitos contra el honor le corresponde a los jueces de circuito, cuando el ilícito se cometiere a través de un medio de comunicación social, tal como ocurre en esta causa.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA el conocimiento de este negocio penal incoado contra Rodrigo Hernán Arosemena ante la esfera de circuito de lo penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO CONTRA MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Y REGINO GRAJALES GONZÁLEZ, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y ROBO EN PERJUICIO DE LIBERATO CERRUD CEDEÑO Y AMINTA ESPINO DE DELGADO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante escrito presentado ante el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el licenciado **MOISÉS ESPINO BRAVO**, en su condición de Defensor de Oficio de **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ** y **REGINO GRAJALES GONZÁLEZ**, quienes se encuentran sindicados por el delito de homicidio cometido en perjuicio de **LIBERATO CERRUD CEDEÑO** y **AMINTA ESPINO DE DELGADO**, solicitó que el juicio que se realizará a sus defendidos sea trasladado "al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial o en su defecto, que los jurados sean integrados por personas que no sean de la Provincia de Los Santos."

Para fundamentar su petición, el recurrente señala lo siguiente: "en el proceso existen constancias del racismo que muchos coprovincianos tienen y que se dirige contra **REGINO GRAJALES**, por su color, amén de que este caso recibió una publicidad enorme por parte de los medios de comunicación, lo cual creó una imagen negativa de mis defendidos, dando como resultado que los posibles jurados estén prejuiciados, como lo demuestra el estudio psicológico que llevé como prueba en el proceso".

Conforme al artículo 264 del Código Judicial, la Corte puede disponer que conozca de determinado asunto penal un Tribunal distinto de aquel al cual está atribuido el proceso por razón del lugar donde debe ventilarse el juicio, siempre que sea de igual categoría. Es por esa razón que el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dispuso remitir el negocio a esta Corporación de Justicia "para los fines legales consiguientes".

Pues bien, el licenciado Espino Bravo acompaña su solicitud con un escrito identificado como "INFORME DE ENCUESTA", el cual es suscrito por la psicóloga Xiomara de Solís. En ese informe se dice que quien lo suscribe realizó una encuesta a personas residentes en el Distrito de Las Tablas y áreas de Los Santos, dando como resultado que la mayoría de esas personas tiene conocimiento de los hechos materia de este proceso.

Igualmente se dice en el informe que tales personas coinciden en que se debe castigar enérgicamente a los sindicados, para que en el futuro no se repitan situaciones similares. Finalmente señala el informe que el presente caso ha causado un gran impacto social, al punto de que el mismo es casi de conocimiento general, y que la opinión de la ciudadanía en general parece ser similar a las expuestas anteriormente.

La Sala ha hecho un estudio de los hechos que fundamentan la presente solicitud, y ha llegado a la conclusión de que debe accederse a la misma.

En efecto, si bien el documento aportado como prueba por la defensa de los imputados no hace plena prueba de las afirmaciones que en él se hacen, lo cierto es

que del mismo surgen fuertes indicios en cuanto a que la opinión pública pudiera estar prejuiciada en lo que respecta a cuál debe ser el desenlace del juicio penal.

El proceso debe garantizarle al imputado y a las demás partes un procedimiento que se desarrolle de manera imparcial, así como la garantía de una adecuada defensa de sus derechos. Evidentemente, estas garantías, que forman parte de los elementos que integran el principio constitucional del debido proceso legal, se ven mediatizadas cuando están prejuiciadas las personas que pudieran pertenecer al jurado de conciencia que debe decidir acerca de la inocencia o culpabilidad de los procesados. Y ello, a no dudarlo, repercute de manera negativa contra los intereses de las personas que, constitucionalmente, son consideradas inocentes en tanto no se demuestre su culpabilidad en un juicio público, dice el artículo 22 de la Carta Magna, "que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa".

Lo anterior no significa que siempre que los asociados hayan tenido conocimiento a través de los medios de comunicación social de algunas de las interioridades de un proceso -en su gran mayoría amañadas- haya que accederse a peticiones como las que nos ocupa, porque en una nación como la nuestra se hace casi que imposible controlar a tales medios, en lo que respecta al deber que tienen de abstenerse de dar información relacionada con los procesos penales que se tramitan en los estrados judiciales, pues esto es parte de nuestra idiosincrasia.

Lo que ocurre es que en el presente negocio existen particularidades excepcionales que aconsejan que la sede donde deba desarrollarse el acto de audiencia sea trasladada, así como que los miembros que han de integrar el honorable jurado de conciencia sean personas de una provincia distinta a aquella donde se escenificaron los lamentables hechos de sangre.

La cultura nacional nos enseña que en la provincia de Los Santos existe una creciente tendencia al racismo, que opera sobre todo en las personas de color (entiéndase en los negros). Esta circunstancia, unida al hecho de que uno de los sindicados es negro, así como a que el mismo no es nativo de esa provincia, y al hecho de que todo parece indicar que los miembros de esa población están prejuiciados, hacen que la petición formulada en esta instancia tenga positiva acogida.

La Sala estima que la sede donde funciona el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial es propicia para que la audiencia de este proceso penal tenga lugar. No obstante debe quedar claro que el tribunal de derecho estará conformado por los magistrados del Cuarto Distrito Judicial, y que los miembros del jurado de conciencia deben ser residentes de la jurisdicción dentro de la cual tiene mando el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención a la facultad que le confiere el artículo 264 del Código Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que la audiencia oral que ha de realizarse dentro del proceso penal que se sigue contra MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, REGINO GRAJALES GONZÁLEZ y MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, por el homicidio de LIBERATO CERRUD CEDEÑO y AMINTA ESPINO DE DELGADO, SEA TRASLADADA a la sede donde funciona el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) CARLOS H. CUESTAS

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

NOVIEMBRE 1993

CONSULTA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN, PROMOVIDA POR EL LICENCIADO FRANCISCO VÁSQUEZ QUINTERO, EN REPRESENTACIÓN DEL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA VALIDEZ LEGAL DE CIERTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Francisco Vásquez Quintero, actuando en nombre y representación del Banco Nacional de Panamá, con fundamento en el numeral 11 del artículo 98 del Código Judicial, ha promovido solicitud para que esta Sala interprete prejudicialmente la validez legal de ciertos actos administrativos dictados y ejecutados por el Director de la Caja de Seguro Social, mediante los cuales se retiene el 1.5% de los descuentos que esa entidad le efectúa a sus pensionados y jubilados para el pago de préstamos personales y comerciales al Banco Nacional de Panamá, y solicita que se declaren ilegales dichos actos administrativos, por ser violatorios del ordinal 12 del artículo 1o. de la Ley 15 de 13 de julio de 1992, y en consecuencia, se declare que el Banco Nacional de Panamá no está obligado a absorber o a asumir, ni puede transferir, el costo de la retención del 1.5% que la Caja de Seguro Social efectúa a los pensionados o jubilados en concepto de comisión de servicio por descuento ni ninguna otra suma por concepto de esos descuentos, y que la Caja de Seguro Social está obligada a devolver al Banco Nacional de Panamá las sumas que haya retenido de los descuentos de sus pensionados y jubilados, para el pago de préstamos personales y comerciales al Banco Nacional de Panamá, y a suspender tales retenciones a partir de la fecha en que se dicte la resolución que decida esta solicitud.

Manifiesta la parte actora en los hechos de su pretensión que en el ordinal 12 del artículo 1o. de la Ley 15 de 13 de julio de 1992, por medio de la cual se modificaron y adicionaron varios artículos a la Ley 6 de 6 de junio de 1987, reformada por la Ley No. 18 de 7 de agosto de 1989 (leyes que adoptan medidas en beneficio de los ciudadanos jubilados, pensionados, de la tercera y cuarta edad y reglamentan el impuesto de timbre denominado paz y seguridad), se señala "que ninguna entidad pública o privada podrá cobrar 'suma alguna', en concepto de servicios de descuentos, ni a los propietarios beneficiados con la presente ley, ni a los bancos, financieras, cooperativas e instituciones de crédito en las transacciones de préstamos personales y comerciales que las personas favorecidas con dicha ley efectúen a su nombre" (fs. 31).

Sin embargo, en septiembre de 1992, la Caja de Seguro Social informó al Banco Nacional de Panamá que haría una retención del 1.5% de los descuentos de préstamos otorgados por esa entidad bancaria a los jubilados y pensionados, motivo por el cual el Banco solicitó verbalmente que se le enviara el fundamento jurídico en el cual se sustentaba dicha retención.

Señala el demandante que mediante nota de 11 de septiembre de 1992, la Directora Nacional de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social remitió al Banco Nacional de Panamá, copia de la Nota No. D.DAL.M.69.92 de 2 de septiembre de 1992 del Director General de Asesoría Legal de la Caja de Seguro Social, en la que se señala que la retención del 1.5% sobre los descuentos para préstamos personales y comerciales correspondía a una instrucción emanada de la Dirección General de la Caja, y que la misma no vulnera el ordinal 12 del artículo 1o. de la Ley 15 de 13 de julio de 1992, ya que tiene como propósito cubrir los gastos que demanda el servicio de contabilidad que la Caja de Seguro Social brinda a los prestamistas.

Mediante Nota No. 92(13000-01)2061 de 22 de septiembre de 1992, el Sub-Gerente General de Operaciones del Banco Nacional solicitó al Director General de la Caja que revocara dicha decisión, ya que ésta equivalía al cobro de una comisión de manejo y la misma estaba expresamente prohibida por la Ley 15 de 1992. En respuesta de esta nota, el Director General de la Caja en Nota No. D.G.-N-194-92 de 7 de octubre de 1992, reiteró el criterio expresado por la Dirección de Asesoría Legal de esa institución.

En virtud de lo anterior, el Gerente General del Banco Nacional de Panamá, mediante oficio No. 92(3000-01)61 de 24 de 24 de noviembre de 1992, solicitó a la Caja de Seguro Social que le remitiera las planillas correspondientes a los descuentos efectuados a los pensionados y jubilados y la facturación correspondiente al 1.5% que efectuaría la Caja, a fin de solicitar la nulidad de esta medida ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y el reembolso al Banco Nacional de Panamá.

No obstante, la Caja de Seguro Social remitió en enero de 1993 los cheques correspondientes a los descuentos efectuados a los pensionados y jubilados para el pago de los préstamos personales y comerciales convenidos con esa entidad bancaria, y al ser procesados por el Departamento de Contabilidad Centralizada de Préstamos del Banco se "dictaminó que los cheques correspondientes a préstamos personales, a excepción de los préstamos hipotecarios, ... habían sido enviados ... con una reducción del 1.5% del monto del descuento efectuado a cada pensionado o jubilado" (fs. 34).

Según el demandante, la comisión del 1.5% mensual de los descuentos que se hacen a cada pensionado o jubilado, representan anualmente un "18% del monto de los descuentos anuales que se le harán a partir de la fecha de la planilla en que la Caja de Seguro Social ejecutó dicho acto administrativo".

Manifiesta el Banco Nacional de Panamá que en virtud de lo establecido en el ordinal 14 de la Ley 15 de 13 de julio de 1992, le concede a los pensionados y jubilados un descuento del 15% en la tasa de interés máximo que la Ley permita cobrar en los préstamos personales y comerciales, y con base en esto, los pensionados y jubilados pagan al Banco Nacional de Panamá un interés del 10% anual.

La retención del 18% anual que efectúa la Caja de Seguro Social supera la tasa de interés del 10% anual que cobra el Banco Nacional a los jubilados y pensionados, motivo por el cual el Banco no puede absorberla o asumirla. Tampoco puede el Banco transferirle el costo de esta retención o comisión de descuento a los pensionados o jubilados, por ser ilegal, y además porque de transferirla, los planes de pago fijados a éstos arrojarían una morosidad por capital e intereses, los que tendrían que ser pagados al vencimiento del plazo.

Fundamentado en lo anterior, el Banco Nacional de Panamá estima que "los descuentos efectuados a todos los pensionados y jubilados para el pago de préstamos personales y comerciales han sido afectados o reducidos en la suma de Diecisiete Mil Ochenta y Cuatro Balboas con Setenta centésimos (B/.17,084.70) por la Caja de Seguro Social, de las planillas recibidas por el Banco en el mes de enero de 1993"; y asimismo "la Caja de Seguro Social remitió al Banco Nacional de Panamá, ... los descuentos correspondientes a la primera quincena de Febrero de 1993, de pensionados y jubilados para el pago de préstamos personales, con una retención de NUEVE MIL VEINTIOCHO BALBOAS (B/.9,028.00) equivalente al 1.5% del monto de los descuentos efectuados", y señala finalmente el Banco que ha consignado en una cuenta por cobrar las retenciones efectuadas por la Caja de Seguro Social, hasta tanto esta Sala dictamine sobre la ilegalidad de las mismas.

Admitida la solicitud de interpretación, se corrió en traslado al Procurador de la Administración, quien en su Vista Fiscal No. 273 de 3 de junio de 1993, luego analizar el sentido y alcance de la norma que se estima violada, expuso lo siguiente:

"...

> En la Ley 15 de 1992, se establecen beneficios y prerrogativas a quienes se encuentran bajo su tutela, ya que por su condición de asegurados, pensionados y jubilados se les rinde un trato que por demás decirlo, es especial. Y así justificados, se les concede el beneficio del numeral 12, del artículo 1 de esta ley, que es específica cuando afirma que ninguna entidad pública como lo es la Caja de Seguro Social o privada, podrá cobrar suma alguna en concepto de servicios de descuento, ni a los prestatarios beneficiados con ella, ni a los bancos, financieras, cooperativas e instituciones de crédito, en las transacciones de préstamos comerciales y personales que efectúen a su nombre.
>
> Por todo lo anterior, opinamos que la Caja de Seguro Social debe suspender las retenciones que efectúa en contravención del artículo 1, numeral 12 de la Ley 15 de 1992, y por consiguiente devolver al Banco Nacional de Panamá, las sumas que haya retenido en los descuentos de los pensionados y jubilados, para el pago de préstamos personales y comerciales, para con esa entidad bancaria y así lo solicitamos a la Honorable Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, lo declare en su debida oportunidad" (fs. 44-45).

Evacuados los trámites de Ley, la Sala procede a resolver el presente negocio previas las siguientes consideraciones.

De conformidad con lo establecido en el ordinal 11 del artículo 98 del Código Judicial, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo conoce de la interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los **actos administrativos** cuando la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o **la administrativa encargada de su ejecución**, lo solicite de oficio **antes** de resolver el fondo del negocio o **de ejecutar el acto**, según corresponda.

En este sentido, la Sala sólo debe resolver sobre el sentido y alcance de los actos administrativos que debe ejecutar el Banco Nacional de Panamá en virtud de los actos proferidos por la Caja de Seguro Social, y abstenerse de decidir si la Caja de Seguro Social está obligada a devolver las sumas retenidas en calidad de descuento, por no ser ésta una decisión propia del recurso contencioso de interpretación promovido, sino del contencioso de plena jurisdicción.

A fojas 20 del presente expediente se lee una certificación del Departamento de Contabilidad Centralizada de Préstamos del Banco Nacional de Panamá, en la que se certifica que la planilla de descuento de pensionados y jubilados de la Caja de Seguro Social para el pago de préstamos personales al Banco Nacional de Panamá, ha sido elaborada con una reducción o retención a favor de la Caja de Seguro Social del 1.5%, durante la primera y segunda quincena del mes de enero de 1993 y la primera quincena del mes de febrero de 1993.

Esta reducción o retención se explica en la Nota No. D.G.-N-194-92 de 7 de octubre de 1992 dirigida por el Director General de la Caja de Seguro Social al Subgerente General del Banco Nacional de Panamá, en respuesta a nota remitida por el Banco manifestando su inconformidad por el cobro del servicio de descuento por el otorgamiento de la Clave de Descuento. En la nota comentada, la Caja de Seguro Social aclara que no cobra "suma alguna por el otorgamiento de las Claves de Descuento que concede a las instituciones de créditos, bancos y financieras en general", y justifica este descuento en los siguientes términos:

"...

> Cosa distinta es y así lo hemos manifestado, que adicionalmente al otorgamiento de la Clave de Descuento, la Caja de Seguro Social está dispuesta a ofrecer y dispensar un complejo y detallado servicio de contabilidad sobre todas las operaciones de financiamientos o créditos que ustedes otorguen y que implica la disposición exclusiva de una estructura administrativa especializada (personal), equipo, espacio, etc.), dedicada a esta labor y que, ningún precepto legal nos obliga a realizar.
>
> Asimismo, discrepamos de la cita que usted exterioriza del artículo 6o. de la Ley No. 20 de 22 de abril de 1975, orgánica del Banco Nacional de Panamá, como una excepción legal al cobro por parte de la Caja de Seguro Social del "Servicio de Contabilidad", por cuanto que es obvio que se trata de supuestos distintos al expresado en la norma enunciada.
>
> Lo anterior es así, ya que el ordenamiento jurídico de la Caja de Seguro Social (Ley Orgánica), tipifica una norma similar a la citada por ustedes (Artículo 64- Decreto Ley No. 14 de 1954), que nos otorga los mismos privilegios que las Leyes del país conceden a la nación y, a pesar de ello, ustedes pretenden cobrarle a la Caja de Seguro Social una tarifa o precio de un balboa cincuenta, por cada recibo que se expida por el pago de cuotas obrero-patronales en las instalaciones del Banco, justificado como "Comisión de Servicios".
> ...
> Es necesario reiterar que la Caja de Seguro Social no está realizando un cobro por un servicio de descuento como ustedes parecen haber interpretado, toda vez que el otorgamiento de la clave de descuento y el servicio que implicaría la remisión de las sumas descontadas no se traduce en la obligación o imposición a la Caja de Seguro Social de llevar a cabo, a su vez, una labor contable en forma gratuita y de naturaleza compleja, en favor de persona alguna" (fs. 4-5).

La Ley 6 de 16 de junio de 1987 estableció una serie de medidas en beneficio de los jubilados, los pensionados, las personas de la tercera y cuarta edad y creó y reglamentó el impuesto de timbre denominado Paz y Seguridad Social. Esta Ley fue modificada por las Leyes No. 18 de 7 de agosto de 1989 y 15 de 13 de julio de 1992.

El ordinal 12 del artículo 1o. de la Ley 15 de 13 de julio de 1992 establece claramente que los panameños o extranjeros residentes en el territorio nacional que tengan cincuenta y cinco (55) años o más, si son mujeres; o sesenta (60) años o más, si son varones; y **todos los jubilados y pensionados** gozarán del beneficio de descuento de 50% de los gastos o comisión de cierre en las transacciones de préstamos personales y comerciales que efectúen a su nombre en los bancos, financieras e instituciones de crédito, y **ninguna entidad pública o privada podrá cobrar suma alguna en concepto de servicios de descuento**, ni a los prestatarios beneficiados con la presente Ley, **ni a los bancos**, financieras, cooperativas e instituciones de crédito **en las transacciones de préstamos personales y comerciales que efectúen a su nombre.**

En consideración a lo anterior, esta Sala estima que la Caja de Seguro Social no puede hacer descuentos por servicios de contabilidad o de otra naturaleza ni a los prestatarios beneficiados con las referidas disposiciones legales, ni al Banco Nacional de Panamá, en razón de las transacciones de préstamos personales y comerciales que efectúen a su nombre. De manera que si los actos administrativos dictados y ejecutados por el Director de la Caja de Seguro Social, mediante los cuales se retiene el 1.5% al mes de los descuentos que esa entidad le hace a sus pensionados y jubilados para el pago de préstamos personales y comerciales al Banco Nacional de Panamá, son contrarios a lo establecido en el ordinal 12 del artículo 1o. de la Ley 15 de 13 de julio de 1992, debe estimarse que el Banco Nacional de Panamá no está obligado a absorber o a asumir, ni puede transferir, el costo de dicha retención.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA, en interpretación prejudicial, que el Banco Nacional de Panamá no está obligado a absorber o a asumir, ni puede transferir, el costo de la retención del 1.5% de los descuentos que la Caja de Seguro Social hace cada mes a los pensionados o jubilados en concepto de comisión de servicio ni gastos de contabilidad por descuentos, ni ninguna otra suma con motivo de esos descuentos, porque los actos administrativos por medio de los cuales el Director General de la Caja de Seguro Social ha retenido el 1.5% de los descuentos que esa entidad le hace a sus pensionados y jubilados para el pago de préstamos personales y comerciales al Banco Nacional de Panamá, son ilegales por ser contrarios a lo preceptuado en el ordinal 12 del artículo 1o. de la Ley 15 de 13 de julio de 1992.

SE NIEGAN las demás declaraciones solicitadas, por improcedentes en un recurso contencioso administrativo de interpretación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN, INTERPUESTA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL ALCANCE Y LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LAS CIRCULARES NO. 001-92-SIT Y NO. 002-92-SIT DE 13 DE ENERO DE 1992, EMITIDAS POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y LA NOTA NO. 3703-LEG DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1991, EMITIDA POR EL SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Gerente General del Banco Nacional de Panamá, con fundamento en el ordinal 11 del artículo 98 del Código Judicial, ha interpuesto solicitud de interpretación prejudicial sobre el sentido y alcance de las circulares No. 001-92-SIST y No. 002-92-SIST de 13 de enero de 1992, ambas dictadas por el Contralor General de la República, y sobre la Nota No. 3703-LEG de 23 de septiembre de 1991, dictada por el Subcontralor General de la República.

Mediante Sentencia de 13 de octubre de 1993 dictada dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad promovido por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E.), se declararon ilegales, y por tanto nulas, las circulares No. 001-92-SIST y 002-92-SIST de 13 de enero de 1992 emitidas por el señor Contralor General de la República, motivo por el cual esta la Sala estima que con relación a la interpretación de dichas circulares, ha dejado de existir el objeto de la pretensión, y por tanto, sólo debe interpretarse el sentido y valor legal de la Nota No. 3703-LEG de 23 de septiembre de 1991 expedida por el señor Subcontralor General de la República, mediante la cual el señor Sub-Contralor General de la República contestó la Nota No. 91(31200-01)169 de 5 de julio de 1991 del Gerente Funcional de Servicios Generales del Banco Nacional de Panamá, con la cual se remitió a la Contraloría el Proyecto de Contrato a celebrarse entre el Banco Nacional de Panamá y la sociedad DATACOM, S. A., para el mantenimiento de equipo de procesamiento de datos, del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1991, por la suma de B/.20,688.00.

Con la referida nota, el señor Subcontralor devuelve el mencionado proyecto de contrato sin el refrendo respectivo, y le solicita al funcionario del Banco que le adjunte la documentación que acredite que dicha contratación fue exceptuada de la licitación por resolución del Ministerio de Hacienda y Tesoro, ya que si bien es cierto que el Banco Nacional de Panamá -de acuerdo a la Ley especial que lo organiza- está autorizado para contratar directamente, el Código Fiscal establece en sus artículos 58 y 59 "que los contratos autorizados por Ley especial (art. 21 del Decreto de Gabinete 45 de 1990), en los que no se requiere licitación", son contratos leyes, o sea, leyes que regulan contratos particulares y no cualquier tipo de contratos. Por tanto, dicho contrato debe ser exceptuado mediante acuerdo del Consejo de Gabinete (art. 22 del Decreto de Gabinete No. 45 de 1990) o del Ministerio de Hacienda y Tesoro, según la cuantía normal del contrato. (Conf. fs. 12)

Agregó el señor Subcontralor, que la Ley del Banco Nacional de Panamá no establece un procedimiento diferente o excepcional al establecido en el Código Fiscal para la contratación directa, "por lo que cuando opera este procedimiento, el mismo no se concreta de manera directa, o de pleno derecho, sino que requiere declararse, y las autoridades instituidas por Ley para hacerlo, lo son el Consejo de Gabinete y el Ministerio de Hacienda y Tesoro, según el caso" (fs. 13).

Con relación es este acto administrativo el señor Gerente General del Banco Nacional de Panamá manifiesta, en su solicitud de interpretación, que la nota sobre la cual recae su consulta impone al Banco Nacional de Panamá limitaciones contrarias a las que preceptúa la Ley Orgánica del Banco Nacional (Ley 20 de 22 de abril de 1975). En consecuencia, solicita a la Sala que se declare que, contrario a lo expresado por el señor Sub-Contralor, "la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá cuenta con suficiente capacidad legal y discrecional para autorizar la celebración de contratos concernientes a la ejecución o reparación de obras, las compras y las ventas, o arrendamientos de bienes pertenecientes al Banco, sin Licitación Pública, cuando a juicio de dicha Junta, los intereses del Banco así lo ameriten, y en consecuencia, el Banco Nacional no está en la obligación de acudir al Consejo de Gabinete ni al Ministerio de Hacienda y Tesoro para obtener autorización, exceptuando una determinada contratación del requisito de la licitación Pública o del Concurso de Precios" (25-26).

Admitido el presente negocio se corrió en traslado al Contralor General de República y al Procurador de la Administración por el término de Ley.

El licenciado Amilcar E. Bonilla M., en representación del señor Contralor General de la República, contestó el traslado solicitando se mantuviera la validez de la nota cuyo sentido y alcance se consulta, e indicó que dicho acto está fundamentado en el ordinal 2 del artículo 276 de la Constitución Política, en la Ley 22 de 9 de abril de 1976 y en la Ley 32 de 1984, en función del control previo ejercido por parte de esa dependencia estatal. Agrega que el literal g) del artículo 13 de la Ley 20 de 22 de abril de 1975, que otorga facultades a la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá, debe entenderse relacionado con las actividades normales de banca, pero de ninguna manera en forma absoluta, por no ser una empresa privada sino una entidad pública sujeta a las normas de general aplicación. Además, la Contraloría tiene facultades a nivel constitucional como organismo estatal independiente, para exigir el cumplimiento de la Constitución y la Ley.

Mediante Vista Fiscal No. 650 de 16 de diciembre de 1992 la Procuradora Suplente de la Administración, licenciada Janina Small, se manifestó de acuerdo con la petición de la parte actora.

Evacuados los trámites de Ley, la Sala procede a resolver el presente negocio, previas las siguientes consideraciones.

La nota cuyo sentido y alcance se pide interpretar, se refiere a la devolución sin refrendo de la Contraloría, de la documentación relacionada con un proyecto de contrato a celebrarse entre el Banco Nacional de Panamá y una empresa privada, para el mantenimiento de equipo de procesamiento de datos, por la suma de B/.20,688.00. De acuerdo con lo señalado por el Sub-Contralor General de la República, **para que se refrende dicha contratación debe adjuntarse la documentación sustentatoria de que dicho acto ha sido exceptuado de la licitación pública, mediante resolución del Consejo de Gabinete o del Ministerio de Hacienda y Tesoro, según la cuantía normal del contrato.**

De acuerdo a lo previsto en el artículo 263 de la Constitución Política, la ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los Municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán, **salvo las excepciones que determine la Ley**, mediante licitación pública.

El literal g) del artículo 13 de la Ley 20 de 22 de abril de 1975, por la cual se reorganiza el Banco Nacional de Panamá, establece que es función de la Junta Directiva del Banco facultar al Gerente General para que a nombre de la institución contrate la ejecución o reparación de obras, las compras y las ventas o arrendamiento de bienes pertenecientes al Banco **sin licitación pública, cuando a juicio de dicha Junta, los intereses del Banco así lo ameriten.**

Del estudio de las anteriores disposiciones, puede concluirse que el Banco Nacional de Panamá está facultado por su Ley especial para celebrar, por vía de excepción, contratos como al que se refiere el presente negocio -para el mantenimiento de equipo de procesamiento de datos-, cuando a juicio de la Junta Directiva **los intereses del Banco así lo ameriten.**

A juicio de la Sala, no le asiste razón al señor Sub-Contralor General de la República cuando señala en el acto administrativo que se pide interpretar, que para que el Banco Nacional de Panamá lleve a cabo la contratación directa que autoriza su Ley especial, es necesaria la declaratoria de excepción del procedimiento de licitación pública expedida por el Consejo de Gabinete o del Ministerio de Hacienda y Tesoro, según el caso.

La Sala considera, tal como lo afirma la parte actora y la señora Procuradora de la Administración, Suplente, que la declaratoria de excepción al procedimiento de licitación corresponde en este caso a la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá, de acuerdo a lo previsto en el literal g) del artículo 13 de la Ley 20 de 1975, ya que este es el ente facultado para estimar si los intereses del Banco ameritan la contratación que se autoriza.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el acto administrativo expedido por el señor Sub-Contralor General de la República viola el literal g) del artículo 13 de la Ley 20 de 1975, y en consecuencia, debe interpretarse dicho acto en el sentido solicitado por el Banco Nacional de Panamá, advirtiendo que la contratación a la que se hace referencia en autos, como cualesquiera otras contrataciones celebradas por las entidades públicas que impliquen erogación de fondos o afectación de sus patrimonios, debe someterse al refrendo del señor Contralor General de la República, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 32 de 1984.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE HAY SUSTRACCIÓN DE MATERIA en la solicitud de interpretación prejudicial sobre el sentido y alcance de las circulares Nos. 001-92-SIST y 002-92-SIST de 13 de enero de 1992, ambas dictadas por el Contralor General de la República; y DECLARA en interpretación prejudicial que la Nota No. 3703-LEG de 23 de septiembre de 1991 expedida por el Sub-Contralor General de la República VIOLA el literal g) del artículo 13 de la Ley 20 de 22 de abril de 1975, el cual establece que la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá está facultada para autorizar al Gerente General para que a nombre de la institución contrate la ejecución o reparación de obras, las compras y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes al Banco, sin licitación pública, cuando a juicio de dicha Junta, los intereses del Banco así lo ameriten.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. NELSON ROVETTO, EN REPRESENTACIÓN DE EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A. PARA

QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.8 DE 9 DE OCTUBRE DE 1992, EMITIDA POR LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El señor Procurador de la Administración ha presentado recurso de reconsideración contra la resolución de 20 de julio de 1993, que previa revocatoria del auto fechado 22 de abril de 1993, decidió admitir la demanda Contencioso administrativa de plena jurisdicción instaurada por el licenciado **NELSON ROVETTO** en representación de **EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A.**, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No.8 de 9 de octubre de 1991, emitida por la Junta de Control de Juegos.

La demanda que nos ocupa había sido inadmitida por el Magistrado Sustanciador del caso, al considerar que por una parte, no se había constatado el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, y por razón de que la copia del acto acusado que se acompañó con la demanda, no contenía el respectivo sello de notificación.

Al surtirse la alzada, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera, una vez verificadas las constancias del negocio, pudieron percatarse que las deficiencias señaladas al libelo no eran imputables al demandante, y que la demanda incoada había sido presentada en tiempo oportuno, por la verificación de la ocurrencia del silencio administrativo, tal como se dejó claramente expuesto en el examen suscinto de los hechos acaecidos, que se plasmaron en la resolución de 20 de julio de 1993, razones por las que la demanda presentada fue admitida.

El señor Procurador de la Administración estima sin embargo, que la resolución precitada debe revocarse, toda vez que el acto administrativo acusado "no constituye un acto definitivo, sino de trámite y por tanto no es atacable en la vía gubernativa" (cfr. foja 66 del expediente).

Este Tribunal ad-quem observa en primera instancia, que cuando la demanda en comento fue inadmitida, y el auto que así lo declaraba apelado, el Señor Procurador de la Administración se opuso a la apelación presentada esgrimiendo cuatro argumentos básicos: 1. que no constaba el sello de notificación del acto acusado, por lo que la presentación de la demanda podía ser extemporánea; 2. que al no haber constancias de notificación "no podía comprobarse si fue agotada la vía gubernativa"; 3. que la presentación de un recurso de apelación en la instancia gubernativa no podía hacer las veces de notificación para el afectado; y 4. que no podía accederse a solicitudes previas, puesto que la demanda no cumplía con los requisitos mínimos señalados, para que procediera su admisión.

Curiosamente el Señor Procurador de la Administración en ningún momento arguyó la deficiencia que ahora anota en el recurso de reconsideración presentado, sobre la supuesta imposibilidad de revisar el acto administrativo expedido por la Junta de Control de Juegos, por considerarlo un acto de trámite y no definitivo. Este es un nuevo defecto que se ha imputado a la demanda, y que por ende no fue considerado por el resto de los Magistrados en la alzada resuelta; mal podrían entonces reconsiderar su criterio en cuanto a un punto que no fue tratado, ni analizado en la resolución ahora objeto de reconsideración.

Pese a lo anterior, y al hecho cierto de que el propósito del recurso de reconsideración es que se revise lo **actuado** por quien expide la resolución judicial objeto del recurso, el resto de la Sala estima que el acto recurrido no es de aquellos que son considerados actos preparatorios, accesorios o de trámites, definidos a nivel doctrinal por notables tratadistas como **LIBARDO RODRÍGUEZ R.** quien les define como "aquellos que se expiden como parte de un procedimiento administrativo que se encamina a adoptar una decisión o que cumplen un requisito posterior a ella. Por ejemplo, el acto por el cual se solicita un concepto a otra autoridad antes de tomar la decisión"... (**RODRÍGUEZ R., Libardo**; Derecho Administrativo General y Colombiano. Sexta Edición. Editorial Temis. Bogotá, Colombia 1990: pág. 204) (Subrayado es nuestro).

En efecto, el acto administrativo demandado acogía una recomendación elevada por la Comisión Evaluadora de la Licitación No.3-91, a raíz de la cual se declararía desierta la Licitación Pública y se procedía a una nueva Licitación para la adquisición de máquinas tragamonedas.

Esta resolución, al proceder a convocar a una nueva licitación, causó estado para los intervinientes en la Licitación No.3-91, para quienes la misma devino desierta, y este acto administrativo tiene valor ejecutorio, por lo que no puede considerarse como preparatorio o de trámite, dado que la determinación que en él se adopta, no hace tránsito a la adopción de una decisión, sino que de hecho asume una resolución poniendo **fin** a la Licitación No.3-91. La empresa **EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A.**, como participante de la misma, se considera afectada de manera directa por tal decisión, que hubiese quedado en firme de no ser por la impugnación de la resolución de la Junta de Control de Juegos ante la instancia Contencioso Administrativa.

En vista de que este Tribunal ad-quem estima que no existen razones jurídicas que ameriten reformar la resolución expedida el 20 de julio de 1993, en el sentido de

que la demanda en estudio debe ser admitida, deben rechazarse los argumentos del Señor Procurador de la Administración, y procede confirmar la decisión adoptada en grado de apelación, por quienes suscriben.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN en todas sus partes, la resolución fechada 20 de julio de 1993, que ADMITIÓ la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado NELSON ROVETTO en representación de EUROPEAN INTERCONTINENTAL ENTERPRISES, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PEDRESCHI Y PEDRESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE TELESISTEMAS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.40 DE 3 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **PEDRESCHI Y PEDRESCHI**, actuando en representación de **TELESISTEMAS, S. A.**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N°40 de 3 de agosto de 1993, emitido por el Ministro de Educación.

El Magistrado Sustanciador procede al análisis del libelo incoado, y en este punto se percata que el actor ha incluido en su demanda, una solicitud previa a la admisión de la misma, para que se suspendan provisionalmente los efectos del acto administrativo acusado.

En efecto, el recurrente al fundamentar la solicitud especial incoada, ha señalado:

> "Respetuosamente solicitamos en esta Sala, que ordene la suspensión temporal de los efectos de la adjudicación definitiva de la licitación Pública 1-93 hecha por el Ministerio de Educación a favor de GALERÍAS FOTOKINA, S. A., mediante los actos que se impugnan en este proceso contencioso-administrativo, hasta tanto se emita el pronunciamiento de fondo, habida cuenta de que, de no hacerlo, el trámite de compra seguiría su curso y la anulación futura del acto administrativo tendría graves consecuencias para el Estado".

En relación a la petición presentada la Sala Tercera debe destacar que en reiteradas ocasiones (v.g. Resoluciones de 30 de septiembre y de 13 de octubre de 1993), este Tribunal ha señalado lo trascendente que para evaluar estas solicitudes resulta, que la parte actora no sólo enuncie el daño grave e inminente que alega, sino también que este daño sea probado y presentado diáfanamente, y que se deduzca de tales planteamientos, la necesidad de adoptar la medida cautelar urgente impetrada, en vías de evitar un daño o perjuicio grave o irreparable.

Así lo ha contemplado la legislación Contencioso Administrativa, específicamente en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, cuyo tenor literal reproducimos a continuación:

> "ARTICULO 73. El Tribunal de lo Contencioso-administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, sí, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave".

Se infiere pues, de la excerta legal precitada, que es requisito indispensable para que este Tribunal acceda a la suspensión de los efectos de un acto administrativo, que a su criterio, el perjuicio alegado y probado sea notorio y grave, justificándose la adopción de tal medida.

En el caso que nos ocupa el peticionista se limita a invocar la posible ocurrencia de perjuicios graves para el Estado sin entrar en el detalle de cuáles son y cómo se producen. Este simple enunciamiento no puede ameritar la medida solicitada, puesto que el Tribunal no puede apreciar las circunstancias alegadas sino se acompañan estas alegaciones de un razonamiento intelegible, concreto y fundado, y por esta omisión no puede ser acogida la petición previa del actor.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de Suspensión Provisional de los efectos de la Resolución N°40 de 3 de agosto de 1993 emitida por el Ministro de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DANIEL RAMÍREZ LASSO, EN REPRESENTACIÓN DE EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. DG-45 DE 15 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA.

VISTOS:

El Lcdo. Daniel Ramírez Lasso, quien actúa en representación de Edilberto Vásquez Atencio, ha presentado recurso de apelación contra la resolución de 21 de septiembre de 1993, que no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N°. DG-45 de 15 de marzo de 1993, emitida por el Director de la Policía Técnica Judicial, mediante la cual se niega la solicitud de portar armas N°. 15727; y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda que nos ocupa debido a que, a su juicio, la misma no reúne todos los requisitos necesarios para su admisión.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) proceden a examinar los argumentos del apelante y la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos por ley para su admisión.

Sostiene el apelante, en primer término, que si bien la demanda no fue dirigida al Presidente de la Sala Tercera, tal y como lo señala el artículo 102 del Código Judicial, ésta fue dirigida al órgano respectivo de la Corte Suprema según lo establece el artículo 98 del mismo código, que hace referencia a la competencia privativa de la Sala Tercera. En cuanto a la designación del Procurador de la Administración, sostiene que en el libelo de la demanda, se solicita a esta Sala, que con audiencia del Procurador de la Administración se acceda a la declaratoria de ilegalidad. Por último, indica el apelante, no presentó copia autenticada del acto impugnado con constancia de su notificación, pero que entre las pruebas oficiosas solicitadas a la Sala Tercera está la solicitud de obtener la Resolución DG-45 de 15 de marzo de 1993, a la Dirección de la Policía Técnica Judicial, que es el acto que se impugna, de forma tal de cumplir con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943.

El resto de la Sala coincide con los criterios vertidos por la Magistrada Sustanciadora, en virtud de que, efectivamente la demanda no fue dirigida al Presidente de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) tal y como lo ordena el artículo 102 del Código Judicial.

Por otro lado, el apoderado judicial de la parte actora, incumple el requisito señalado en el numeral 1 de artículo 43 de la Ley 135 de 1943 modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, según el cual es necesario señalar las partes de la demanda y sus respectivos representantes; en este caso omite señalar al Procurador de la Administración como el funcionario a quien corresponde la defensa del acto impugnado en representación de la Administración.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 27 de septiembre de 1993, mediante la cual NO SE ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el Lcdo. Daniel Ramírez Lasso, actuando en representación de Edilberto Vásquez Atencio, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N°. DG-45 de 15 de marzo de 1993, emitida por el Director de la Policía Técnica Judicial, mediante la cual se niega la solicitud de portar armas N°. 15727; y para se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ANTONIO RUIZ GARRIDO Y OTRO, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS III Y IV DEL DECRETO EJECUTIVO No.18 DE 19 DE MARZO DE 1976, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha interpuesto Recurso de Apelación contra la resolución expedida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema el 2 de abril de 1991 mediante la cual la Magistrada Sustanciadora admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Galindo, Arias y López, actuando en representación de **JOSÉ ANTONIO RUIZ GARRIDO, CAMILO RAFAEL RUIZ GARRIDO, CARMEN RUIZ DE AÑORBES, ANA RUIZ DE LA GUARDIA Y JUDITH RUIZ DE DROHAN**, en la cual se solicita que se declaren nulos por ilegales, los artículos III y IV del DECRETO EJECUTIVO No.18 de 19 de marzo de 1976, expedido por el Órgano Ejecutivo.

En el presente negocio se impugnan los artículos III y IV del Decreto Ejecutivo No.18, ya que el Órgano Ejecutivo, fijó de manera unilateral y arbitraria el monto de la indemnización en la suma de quince mil balboas (B/.15,000.00), la cual debía ser pagada con bonos de la Deuda Pública redimibles en 20 años, con interés anual del 6 por ciento. Dicha suma nunca fue recibida por los copropietarios.

Según el Procurador de la Administración, la expropiación es un acto de gobierno y por lo tanto no es demandable por la vía contencioso administrativa.

Los proponentes de la demanda interpusieron a su vez una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos III y VI del Ejecutivo No.18 de 19 de marzo de 1976. La Corte Suprema decidió el recurso mediante sentencia fechada el 23 de noviembre de 1992, que declaró inconstitucionales los artículos anteriormente mencionados.

El resto de la sala considera que al ser declarados inconstitucionales los artículos III y IV del Decreto Ejecutivo 18 de 19 de marzo de 1976, resulta evidente que los mismos han quedado sin efectos, es decir, la inconstitucionalidad causa la nulidad y desaparece el objeto litigioso.

Dado lo anteriormente expuesto se colige que el acto impugnado ha dejado de existir o cesado en su vigencia por lo cual lo procedente es, pues, declarar que en el presente negocio ha operado el fenómeno jurídico de sustracción de materia.

En consecuencia, el resto de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley, DECLARA que se ha producido el fenómeno jurídico de sustracción de materia y en consecuencia se ordena el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA DUDLEY Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MORENO AROSEMENA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 1 DE 5 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL CONSEJO TÉCNICO DE SALUD Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La firma Dudley y Asociados, en representación de José Moreno Arosemena ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 1 de 5 de marzo de 1993, emitida por el CONSEJO TÉCNICO DE SALUD y para que se hagan otras declaraciones.

Encontrándose el proceso en estado de admisión, observa la Sala se ha incorporado, a foja 24 del expediente, escrito de desistimiento del Recurso Contencioso Administrativo en relación al caso que nos ocupa. Al respecto, señala el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, la parte demandante está facultada para desistir en cualquier momento del proceso interpuesto, produciéndose entonces la terminación del mismo.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por la firma Dudley y Asociados, DECLARA que ha terminado el presente proceso Contencioso Administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SANJUR, PRIMOLA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE RESERMA, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES NO.4686-93-SUB-DG DE 14 DE MAYO DE 1993, EXPEDIDA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y LA RESOLUCIÓN NO.7943-93 JD DE 13 DE MAYO DE 1993, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **SANJUR, PRIMOLA Y ASOCIADOS**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en representación de **RESERMA, S. A.**, para que se declaren nulas por ilegales, las Resoluciones N°4686-93-SUB-DG de 14 de mayo de 1993 expedida por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, y la Resolución N°7943-93 JD de 13 de mayo de 1993, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Observa el Magistrado Sustanciador que el actor ha incluido en el libelo de la demanda, una petición previa que debe ser atendida antes del trámite de admisión de la misma, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley 135 de 1943.

Sin embargo, se percata quien suscribe que el recurrente al solicitarle a esta Corporación que ordene a la Caja de Seguro Social expida copia del acto acusado, no específica qué documentos requieren la autenticación, con constancia de sus respectivas notificaciones, requerimiento éste que se deduce del texto del artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que dice:

> "ARTICULO 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda".

Se percata quien suscribe, que el peticionario no solicita a esta Corporación que requiera de la Caja de Seguro Social, certificación en la que conste si ha recaído o no, decisión alguna por parte de la antes dicha institución sobre el Recurso de Apelación presentado por el recurrente y si el mismo se presentó en tiempo oportuno, requisito indispensable que permite comprobar en forma fehaciente que se agotó la vía gubernativa, tal como lo establece el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 que reza textualmente:

> "ARTICULO 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación".

En virtud de las deficiencias señaladas debe negarse curso legal a la demanda instaurada, tal como prevé el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

Por todas estas consideraciones, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma forense SANJUR, PRIMOLA Y ASOCIADOS, en representación de RESERMA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO Y VISUETTI EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ALBERTO VALLARINO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL RESUELTO NO.198 DE 28 DE MAYO DE 1991, DICTADO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **TROYANO Y VISUETTI**, en representación de **CARLOS ALBERTO VALLARINO**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal el Resuelto N°198 de 28 de mayo de 1991, dictado por el

Contralor General de la República, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

De inmediato observa la Sala, que la demanda propuesta no debió ser admitida, por las siguientes razones:

En primer lugar consta dentro del expediente, dos (2) actos distintos proferidos por el Contralor General de la República, uno trata del Resuelto N°198 de 28 de mayo de 1991, que revoca el Resuelto N°385 de 12 de noviembre de 1990; y el Decreto N°216 de 3 de diciembre de 1991, por medio del cual se declara vacante el cargo del señor **VALLARINO**, los cuales debieron ser individualizados y solicitarse la nulidad de ambos de manera separada en demandas distintas.

En segundo término, estudiadas las piezas procesales que obran en el cuadernillo contentivo de este proceso de plena jurisdicción, advierte este Tribunal que el acto impugnado, es decir, el Resuelto N°198 de 28 de mayo de 1991, fue notificado al afectado el 3 de junio de 1991 (ver foja 27, parte atrás), y no fue hasta el 15 de noviembre del mismo año, que interpone recurso de reconsideración contra el Resuelto aludido. A todas luces, la actuación del exfuncionario, CARLOS ALBERTO VALLARINO, fue extemporáneo, tal como lo hizo notar el Contralor General de la República, en los considerando de la Resolución N°52 de 6 de enero de 1992.

Lo anterior nos conduce a afirmar que el actor no utilizó los recursos que prevé la Legislación Contenciosa Administrativa en tiempo oportuno, por lo que no se considera agotada la vía gubernativa.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO VIABLE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, propuesta por la firma TROYANO Y VISUETTI, en representación de CARLOS ALBERTO VALLARINO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO J. FÁBREGA III, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PANAVISIÓN DEL ISTMO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.94 DE 26 DE FEBRERO DE 1988, DICTADO POR EL MINISTRO ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **Arias, Fábrega y Fábrega** en representación de la **Sociedad de Panavisión del Istmo, S. A.** ha solicitado aclaración de la sentencia de 21 de octubre de 1993, emitida por el Pleno de la Sala Tercera, la cual declaró lo siguiente:

> "Por todo lo expuesto, los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **DECLARAN** la **SUSTRACCIÓN DE MATERIA** en este proceso incoado por **PANAVISIÓN DEL ISTMO, S. A.**, contra de la decisión del **MINISTRO ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA.**"

Del examen realizado a la solicitud presentada, esta Sala observa que en este caso la sentencia emitida es clara, y no hay punto oscuros en la misma que ameriten aclaración. Más que esto, el demandante alega que no se señaló nada al respecto de la indemnización a que tiene derecho la **Sociedad Panavisión del Istmo, S. A.**, y de la ilegalidad del acto emitido por el Ministro Encargado de la Presidencia de la República de Panamá.

Debemos manifestarle a la parte actora que en primer lugar, al declararse la sustracción de materia dentro de este proceso, no es viable declarar la legalidad o no del acto impugnado, puesto que desapareció el objeto de la reclamación, lo cual inhibe a este Tribunal conocer el fondo de la controversia planteada; y en segundo lugar, además de las razones expuestas, esta Sala no podía manifestarse en ningún momento sobre la indemnización a que hace alusión el afectado, dado que la misma no se solicitó en la pretensión.

La Sala en su parte motiva fundamentó su decisión en la declaratoria de sustracción de materia, por tanto considera que no es viable la aclaración solicitada.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA POR IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de sentencia interpuesta por la firma Arias, Fábrega y Fábrega, en representación de la Sociedad Panavisión del Istmo, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. CELIA JEAN-FRANCOIS DE MÚÑOZ, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.210 DE 4 DE AGOSTO DE 1993 Y EL MEMORÁNDUM DAYF-DP-NO.292 DE 6 DE AGOSTO DE 1993, AMBOS DICTADOS POR EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Dentro de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta en contra del Resuelto N°210 de 4 de agosto de 1993, y del Memorándum DAyF-DP-No.292 de 6 de agosto de 1993, emitidos por el Ministro de Planificación y Política Económica, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones, la licenciada **CELIA JEAN-FRANCOIS DE MUÑOZ**, actuando en su nombre y representación, ha solicitado la suspensión de los efectos del citado Resuelto N°210 de 4 de agosto de 1993, y de la Resolución N°012-93-AL de 20 de septiembre de 1993, confirmatoria de la anterior.

Observa la Sala que la peticionista no aporta con el libelo de la demanda, la copia autenticada del Decreto que la nombró inicialmente en la Comisión Bancaria Nacional. Esta prueba preconstituida es indispensable, para que este Tribunal Colegiado pueda amparada en la misma, constatar la modalidad en la que dicha funcionaria ha sido nombrada ante dicha institución gubernamental, y en consecuencia, si le asiste el derecho, suspender el acto endilgado de acuerdo a lo que establezca la ley, y siempre y cuando dicho pronunciamiento no implique un adelanto de sentencia.

Por otro lado, debemos destacar que la petente requirió de manera innecesaria la suspensión de un acto disímil a los impugnados en el acápite "Lo que se demanda", dado que al ser ésta la Resolución que confirmaba el Resuelto original como indicamos ut supra, (No.210 de 4 de agosto de 1993) el mismo seguía la suerte del acto principal.

En esta línea de pensamientos, se pone de relieve que la Ley 135 de 1943 en el texto del numeral primero de su artículo 74, claramente estatuye que no habrá lugar a Suspensión Provisional del acto administrativo impugnado, en "las acciones referente a cambios, remociones, suspensión o retiro en el personal administrativo, salvo los casos de empleados nombrados para períodos fijos; ..." entre otras situaciones.

Así las cosas, debemos igualmente destacar el hecho que la Suspensión Provisional de los efectos de una resolución determinada procede a discrecionalidad de esta máxima Corporación de Justicia, siempre y cuando la ley lo permita y sea a su vez manifiesta la transgresión del ordenamiento jurídico o los perjuicios graves y notorios señalados a cargo del solicitante, quien debe comprobar estas situaciones fehacientemente. En otras palabras, no es posible acudir al **fumus boni iuris**, invocado en este negocio en particular por la interesada, para obtener la suspensión de los efectos de una resolución no sujeta a tal prerrogativa, ya que en principio ello desvirtuaría la esencia de dicho principio de la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, dado que debemos aclarar, que el **fumus boni iuris** procede solamente cuando la ilegalidad impetrada es ostensiblemente manifiesta, clara y notoria, y no cuando por el contrario la situación planteada ni siquiera es suspendible de acuerdo con las leyes aplicables.

La forma que revistió el nombramiento de la licenciada **CELIA JEAN FRANCOIS DE MUÑOZ** es por demás desconocida por este Tribunal Colegiado, lo cual nos conduce a la invariable conclusión, que la interesada no ha comprobado que el acto administrativo contentivo de su traslado y sometido a su consideración, sea suspendible de acuerdo a parámetros legales precitados. El desear simplemente una posición como fervientemente argumenta la demandante en su escrito de Solicitud de Suspensión, visible a página 24 del presente negocio administrativo, no es suficiente motivo para invocar un derecho, ya que al mismo debe accederse en propiedad y no ilusoriamente. Es pertinente recordar que los funcionarios públicos en general, salvo excepciones, no están sujetos a los beneficios de la carrera administrativa y por lo tanto, no pueden elegir o decidir su suerte ante una institución gubernamental.

En mérito de lo expuesto los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDEN a la Solicitud de Suspensión Provisional de los efectos de las Resoluciones N°210 de 4 de agosto de 1993 y N°012-93-AL de 20 de septiembre de 1993 emitidas por la Comisión Bancaria Nacional, incoada por la licenciada **CELIA JEAN FRANCOIS DE MUÑOZ** en su nombre y representación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN & MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE "TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., (TECNASA), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN No.370 DE 21 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GABINETE, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Honorable Magistrado **CARLOS LUCAS LÓPEZ T.** solicita se le declare impedido para conocer del recurso de apelación interpuesto por la sociedad **TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., (TECNASA)** contra la resolución de 5 de octubre de 1993, dictada dentro del proceso contencioso administrativo de Plena Jurisdicción que dicha sociedad propuso contra la Resolución No.370 de 21 de julio de 1993, emitida por el Consejo de Gabinete.

El escrito de impedimento es del tenor siguiente:
"...
La sociedad **TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., (TECNASA)** ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 5 de octubre de 1993, dictada dentro del proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, incoado por la sociedad recurrente contra la Resolución No.370 de 21 de julio de 1993, emitida por el Consejo de Gabinete.

El acto administrativo impugnado exime a la Corte Suprema de Justicia del procedimiento de Licitación Pública, y le permite la contratación de trabajo (micro-computadoras), hasta por la suma de doscientos mil balboas (B/.200,000.00).

Como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, podría pensarse que tengo interés en el resultado de este proceso y por tal razón, solicito respetuosamente que se me separe del conocimiento del mismo, en base al numeral 4 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943.
...".

Se observa que la circunstancia anotada por el Magistrado **CARLOS LUCAS LÓPEZ T.**, para que se le separe del conocimiento de este negocio está contenida en la causal invocada y en consecuencia la Sala accede a lo dispuesto por el artículo 78 (numeral 4) de la Ley 135 de 1943.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado CARLOS LUCAS LÓPEZ T., lo separa del conocimiento del negocio y para reemplazarlo designa al Magistrado RAÚL TRUJILLO MIRANDA de la Sala Civil, quien sigue en turno.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ANA LORENA BRENES, EN REPRESENTACIÓN DE FLORY DAISY PINCAY MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 4-93 V DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1993, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licda. Ana Lorena Brenes, quien actúa en representación de la señora Flory Daysi Pincay Morales, ha pedido a la Sala que suspenda provisionalmente los efectos de la Resolución No.4-93 V del 8 de septiembre de 1993, dictada por la Dirección General de Arrendamientos, dentro del proceso de plena jurisdicción promovido por la señora Pincay Morales contra dicha dependencia del Ministerio de Vivienda.

Estima la Sala que la petición de la parte demandante tiene fundamento ya que, en principio, pareciera que ésta intentó depositar sumas atrasadas en concepto de canon de arrendamiento y que por la mora del Ministerio de Vivienda no lo pudo hacer, tal como lo reconoce el mismo Ministerio en la Resolución No. 19-92V (a foja 6 del expediente). Si bien esta resolución fue revocada mediante el acto administrativo impugnado en este proceso lo cierto es que si se procede al lanzamiento el resultado

del presente proceso contencioso administrativo sería ineficaz en caso de que se accediera a la pretensión de la demandante. De allí que parezca prudente acceder a la petición de suspensión.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de la Resolución No.4-93 V de 8 de septiembre de 1993, expedida por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE ENRIQUE CARRERA CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ODILIO SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3511-91-D.G. DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1991, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera, de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado JORGE ENRIQUE CARRERA CARRILLO, en representación de JORGE ODILIO SÁNCHEZ, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 3511-91-d.g. de 26 de noviembre de 1991, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social por medio de la cual se destituye al demandante del cargo de Auxiliar de Enfermería, y para que se decrete el reintegro con el pago de salarios.

El Magistrado Sustanciador estimó pertinente no admitir la demanda interpuesta por considerar que el recurrente no había comprobado el agotamiento de la vía gubernativa, pues aunque acompañó copia del acto acusado, la misma no estaba debidamente autenticada, aunado al hecho que la notificación del acto impugnado no aparece firmada, ni autenticada, lo que no permite establecer si la demanda fue presentada en tiempo oportuno. Además, otra razón esbozada por el Sustanciador que la omisión de exponer el concepto de la violación del artículo 6 de la Ley N° 2 de 1962.

Por su parte, el apelante, en la sustentación de su alzada, reconoce que la copia de la Resolución N° 7841-93-J.D., de 1° de abril de 1993 no estaba autenticada al momento de presentar su demanda ante esta Sala y trata de corregir su error al señalar: "pero ya hemos subsanado esta anomalía de forma, y hemos autenticado dicho documento". (foja 13)

Cabe señalar, que es requisito indispensable, para acudir ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se comprueba con copia autenticada del acto acusado, con sus respectivas notificaciones. Dicha copia autenticada deberá presentarse conjuntamente con la demanda, tal como lo expresa el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 que transcribimos a continuación:

> "ARTÍCULO 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos".

En este sentido, este Tribunal, ha manifestado en innumerables ocasiones, que no es viable la admisión de la demanda que no se presente acompañada de la copia debidamente autenticada del acto acusado con la constancia de su notificación (v.g. Auto de 31 de agosto de 1982).

En el caso en estudio, el apelante argumenta haber autenticado la copia del documento en cuestión, no obstante, dicha copia autenticada no consta en el expediente.

Es pertinente señalar que el recurso de apelación tiene por objeto revisar la actuación del Tribunal a quo, por tanto, no le es permisible al acto en esta etapa del proceso subsanar los defectos incurridos con la presentación de la demanda.

Se aprecia también, que tal y como lo esgrime el Magistrado de primera instancia, el actor no enuncia a cuál de los motivos de ilegalidad, señalados en el artículo 26 de la Ley 133 de 1943 modificado por la Ley 33 de 1946, se ajusta la disposición que estima infringida y el concepto de la violación, pues dicho precepto no ha sido concretamente individualizado.

Aunado a lo anterior, este Tribunal ad-quem se percata que el libelo de la demanda incoada por el recurrente, es inadecuadamente dirigida a los Magistrados de la Sala Tercera en conjunto, cuando la misma debió ser anunciada a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Magistrado Presidente, como lo establece el artículo 102 del Código Judicial.

Como se observa, la decisión de inadmisibilidad de la demanda, se ajusta a lo dispuesto por las leyes rectoras de los procesos Contencioso Administrativo, por lo tanto, se hace procedente confirmar la Resolución recurrida.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran el resto de la SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el auto de 27 de julio de 1993, emitido por el Magistrado de primera instancia, que decidió NO ADMITIR la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el licenciado JORGE ENRIQUE CARRERA CARRILLO, en representación de JORGE ODILIO SÁNCHEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MIREYA URIBE PRADA, EN REPRESENTACIÓN DE ROSA JURADO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 22-92 DE 2 DE DICIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA NO. 4, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Mireya Uribe Prada, actuando en nombre y representación de ROSA JURADO, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Resolución de Lanzamiento No. 22-92 de 2 de diciembre de 1992 expedida por la Comisión de Vivienda No. 4 del Ministerio de Vivienda, el acto confirmatorio y ha solicitado que se haga unas declaraciones.

Al examinar la demanda para resolver sobre su admisibilidad, se observa que la misma no cumple con los requisitos exigidos por la ley, ya que no se dirigió al Magistrado Presidente de la Sala, conforme lo establecido en el artículo 102 del Código Judicial; no se designó a las partes de la demanda y sus representantes (ord. 1o., art. 28 de la Ley 33 de 1946); se pidió la revocatoria y no la declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos impugnados conforme lo dispuesto en el ordinal 1o. del artículo 98 del Código Judicial; no se señaló el concepto de las infracciones legales el cual, como lo ha indicado esta Sala, está íntimamente ligado a los motivos de ilegalidad a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 33 de 1946, que son: la infracción literal de los preceptos legales, la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que haya dictado el acto administrativo, el quebrantamiento de las formalidades que deban cumplirse y la desviación de poder; y por último no se señaló la forma en que se produjo la infracción de los preceptos legales, ya sea por violación directa, omisión, interpretación errónea o indebida aplicación.

Por tanto, no debe dársele curso a la presente demanda, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por ROSA JURADO contra la Resolución No. 22-92 de 2 de diciembre de 1992, emitida por la Comisión de Vivienda No. 4 del Ministerio de Vivienda, el acto confirmatorio, y pide que se haga unas declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE TROYANO Y VISUETTI, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO A. BOYD ARIAS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Troyano & Visuetti** ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en representación de **ALBERTO A. BOYD ARIAS**, para que se declare nula por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo

incurrida por el Contralor General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Observa este Tribunal, que el actor ha incluido en el libelo de la demanda, una petición especial que debe ser atendida previo al trámite de admisión de la misma.

En efecto, el actor ha solicitado que se requiera del señor Contralor General de la República lo siguiente:

> "1. Copia autenticada de la solicitud presentada por el señor Alberto A. Boyd A. al señor Contralor General de la República el día 21 de julio de 1993, cuya copia sin autenticar acompañamos a la presente demanda para su autenticación.
>
> 2. Certificación en la que consta si al día 21 de septiembre de 1993, había o no recaído decisión alguna sobre la solicitud antes mencionada presentada por el señor Alberto A. Boyd Arias."

Se percata quien suscribe que el actor en su petición especial previa, pretende que esta Corporación de Justicia ordene a la Contraloría General de la República, nos remita copia autenticada de la solicitud presentada por el Sr. Boyd el 21 de julio de 1993, y que nos certifique si a esa fecha existe o no decisión sobre la solicitud antes mencionada. Sin embargo, cabe señalar que el recurrente no presenta con la demanda incoada, documento alguno en el que conste que por sus propios medios requirió se certificara que la negativa tácita por silencio administrativo se hubiese verificado,ni ha comprobado el actor que realizó diligencias tendientes a la consecución de la copia debidamente autenticada del documento original en el que plasma su pretensión ante la Contraloría General de la República y que la misma fue negada, omitiéndose con tal proceder lo previsto en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943 que señala textualmente:

> "Artículo 46: cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiese publicado a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda". (El subrayado es nuestro)

En atención a lo anterior se concluye, que el libelo presentado no ha cumplido con las formalidades previstas en las leyes rectoras de los procesos contencioso administrativos, dado que no se acompañó la copia debidamente autenticada de la solicitud presentada ante el Señor Contralor General de la República, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, y porque al no solicitarse que se certificara que sobre la petición elevada ante la Contraloría General había recaído pronunciamiento alguno, no puede quien sustancia, constatar si efectivamente se ha producido negativa tácita por silencio administrativo, y si la demanda instaurada fue presentada en tiempo oportuno, requisitos éstos indispensables para recurrir ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo al artículo 42 de la Ley 135 de 1943.

Por las anteriores consideraciones el Magistrado que suscribe, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de plena jurisdicción presentada por la firma forense Troyano y Visuetti, en representación de ALBERTO A. BOYD ARIAS.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ANÍBAL HERRERA PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN PAULINO RODRÍGUEZ BEITÍA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.12 DE 29 DE JUNIO DE 1993, EMITIDA POR EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

El Lcdo. **ANÍBAL HERRERA PEÑA** ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en representación de **JUAN PAULINO RODRÍGUEZ BEITÍA**, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No.12 de 29 de junio de 1993, emitida por el Fiscal Auxiliar de la República mediante la cual se declara insubsistente el nombramiento del demandante como Secretario de la Fiscalía Auxiliar de la República y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos establecidos por la ley, para el trámite de admisión de la misma.

Observa quien suscribe, que el recurrente en su acción incoada no ha comprobado el agotamiento de la vía gubernativa, puesto que no consta en la copia auténtica del acto acusado la respectiva notificación, lo que no permite determinar con exactitud el término legal dentro del cual el recurrente podía acudir ante la Sala Tercera. La determinación de tal situación es condición indispensable para recurrir ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, tal como está previsto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1946, que dice:

> "Artículo 42: Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, se estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación".

Cabe señalar que el demandante presentó copia, con sello de recibido de la Fiscalía Auxiliar de la República, de fecha 29 de octubre de 1993, en el que se solicita pronunciamiento sobre un Recurso de Reconsideración, sin embargo, no se presenta constancia que dicho recurso efectivamente se haya presentado y si el mismo fue presentado en tiempo oportuno.

En atención a lo anterior, se concluye que el libelo de la demanda presentada no ha cumplido con las formalidades previstas en las leyes rectoras de los procesos contencioso administrativos, dado que no se ha probado el agotamiento de la vía gubernativa.

Finalmente, este tribunal hace la observación que el actor debió dirigir su demanda al Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, según lo estipulado en el artículo 102 del Código Judicial, que dice:

> "Artículo 102: Las demandas, recursos, peticiones e instancias formuladas ante la Corte Suprema de Justicia y los negocios que se hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de Negocios Generales y a los Presidentes de las Salas Primera, Segunda y Tercera, si se tratare, respectivamente, de negocios civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales y se hará la presentación ante el Secretario General o de la Sala correspondiente, quien debe dejar constancia de ese acto".

Por las anteriores consideraciones, el Magistrado que suscribe, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de Plena Jurisdicción presentada por el Lcdo. ANÍBAL HERRERA PEÑA, en representación de JUAN PAULINO RODRÍGUEZ BEITÍA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANTONIO GONZÁLEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 581 DE 1 DE JUNIO DE 1993, EMITIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Antonio González, actuando en nombre propio, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 581 de 1o. de junio de 1993 emitida por el Procurador General de la Nación, por la cual se declara insubsistente el nombramiento del Licenciado Antonio González Quintero como Fiscal Segundo Delegado de la Procuraduría General de la Nación; el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

El demandante solicita que se suspendan los efectos del acto originario impugnado, toda vez que el mismo le causa daños "tanto patrimoniales como morales". Advierte que su nombramiento "al tenor de lo dispuesto en el artículo 331 del Código Judicial, es por un período fijo de 6 años", y solicita que como consecuencia de la suspensión se ordene su reintegro al cargo y el pago de los salarios y gastos de representación dejados de pagar como consecuencia del despido, desde el 1o. de junio de 1993 hasta la fecha en que se efectúe el reintegro.

La medida cautelar solicitada constituye una facultad discrecional del Pleno de esta Sala, y conforme lo dispone el ordinal 1o. del artículo 74 de la Ley 135 de 1943, no habrá lugar a decretarla en las acciones referentes a cambios, remociones,

suspensión o retiro en el personal administrativo, salvo los casos de empleados para períodos fijos.

En el presente caso se trata de un funcionario nombrado para período fijo de acuerdo a lo previsto en el artículo 331 del Código Judicial, por lo que la Sala procede a examinar la solicitud presentada.

De acuerdo a los considerandos del acto administrativo impugnado, se declaró insubsistente el nombramiento del demandante porque "durante los últimos años ha reflejado un alto grado de retardo o morosidad procesal en los negocios jurídicos que se tramitan en ese despacho de instrucción sumarial", lo que "afecta en gran proporción los derechos y garantías procesales de las partes dentro del proceso penal y en última instancia el normal desenvolvimiento de la correcta administración de Justicia", y que "de acuerdo a los parámetros establecidos en los artículos 2060 y 2061 del Código de Procedimiento Penal, impone a los funcionarios de instrucción la obligación de remitir el sumario en el estado en que se encuentre al Juez competente, conforme lo preceptuado en el artículo 2201, una vez haya transcurrido el término de Ley (dos meses) para la conclusión del mismo". Agregan los considerandos de la resolución impugnada que dicho funcionario no se encuentra amparado por el fuero de la carrera judicial, por lo que su cargo es de libre nombramiento y remoción por parte del Procurador General de la Nación.

A juicio de la Sala la medida cautelar pedida debe negarse porque no existe, a prima facie, la apariencia de un buen derecho a favor del demandante que amerite la suspensión provisional del acto administrativo impugnado, ya que los cargos que se le imputan al demandante para declarar insubsistente su nombramiento como Fiscal Segundo Delegado constituyen violación al ordenamiento jurídico vigente. En cuanto a las razones de hecho y de derecho que la parte actora expone en su demanda deberán ser oportunamente analizados en el fallo de fondo de la controversia, y no en esta etapa inicial del proceso.

Por consiguiente, el Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 581 de 1o. de junio de 1993 emitida por el Procurador General de la Nación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS J. GEORGE, EN REPRESENTACIÓN DE NILDA ELENA ABREGO DE GALAGARZA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 51 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos J. George B., actuando en nombre y representación de NILDA ELENA ABREGO DE GALAGARZA, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se formulen las siguientes declaraciones:

> "II.1. Que es nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en el resuelto en trámite, cuya fecha y número no podemos precisar, porque la Dirección Nacional de Asesoría Legal se ha negado a suministrarlo, no obstante haberlo solicitado.
>
> II.2. Que es nulo, por ilegal, el acto contenido en la resolución, identificada con el número cincuenta y uno (51), calendada el siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993), mediante la cual resuelve "Rechazar por improcedente el Recursos de Reintegro interpuesto por la profesora NILDA ELENA ABREGO DE GALAGARZA a través de su apoderado judicial".
>
> II.3. Que son nulas, por ilegal, cualesquiera otras resoluciones, decretos o resueltos que se desconocen en la actualidad, por falta de notificación, y que guarden relación con la declaratoria de vacante o insubsistencia del cargo de mi representada.
>
> II.4. Que es nulo, por ilegal, el Decreto o Resolución Ministerial, por medio del cual se nombró al profesor ALBERTO SÁNCHEZ, en reemplazo de la profesora NILDA ELENA ABREGO DE GALAGARZA, ya que dicha cátedra había sido asignada a mi mandante, con anterioridad, y la misma fue producto de un concurso realizado por el Ministerio de Educación.
>
> II.5. Previa declaratoria de las nulidades, por ilegalidad, pedidas anteriormente contra los actos y resoluciones impugnadas y ya designados,

solicito que se declare, en consecuencia, la obligación del Ministerio de educación, por conducto del Señor Ministro del Ramo, a lo siguiente:

II.5.1. Al reintegro y retorno efectivo de mi representada a su cátedra de Inglés, en el Primer Ciclo de La Chorrera.

II.5.2. Que, como consecuencia de dicho reintegro y retorno efectivo de mi representada, de dejarse sin efecto el resuelto ilegal que la desplazó de su cátedra y la resolución que rechazó el Recurso de Apelación interpuesto, se le devuelvan todos los derechos inherentes al cargo al que se reintegra, y se ordene el pago de los salarios caídos" (fs. 25-26).

La demandante solicita que se requiera a la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Educación, copia debidamente autenticada del "Resuelto mediante el cual se declaró vacante el cargo de la Profesora NILDA ELENA ABREGO DE GALAGARZA", y del "Resuelto, Decreto o Resolución Ministerial, por medio de la cual se nombró al Profesor ALBERTO SÁNCHEZ, en reemplazo de la Profesora NILDA ELENA ABREGO DE GALAGARZA, y la fecha de inicio de labores" (fs. 37), ya que le fue denegada la copia de estos documentos por ella solicitada, tal como consta en autos.

Como dicha documentación es necesaria para decidir sobre la admisión de la presente demanda, la misma debe requerirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por la Secretaria de la Sala se requiera al Director de Asesoría Legal del Ministerio de Educación, que en el término de cinco (5) días, remita copia autenticada de los siguientes actos administrativos y sus notificaciones:

1. Acto mediante el cual se dejó sin efecto el Decreto No. 190 de 21 de marzo de 1993, mediante el cual se asignó funciones a Nilda Elena Abrego de Galagarza como Educador D-2 de Inglés;

1. Acto mediante el cual se declaró vacante el cargo de la profesora Nilda Elena Abrego de Galagarza;

2. Acto por medio del cual se nombró al profesor Alberto Sánchez, en reemplazo de la profesora Nilda Elena Abrego de Galagarza.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA KENIA JAÉN RIVERA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSEFINA MARÍN HERNÁNDEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. ALP-022-RA DE 10 DE MAYO DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Kenia Jaén Rivera, actuando en nombre y representación de Josefina Marín Hernández, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. ALP-022-RA de 10 de mayo de 1993, emitida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario. Mediante memorial presentado el dos (2) de noviembre de 1993, se corrigió la demanda promovida.

Al resolver sobre la admisibilidad, la Sustanciadora observa que la demanda corregida no cumple con los requisitos necesarios para ser admitida, ya que no dirigió la misma al Magistrado Presidente de la Sala (artículo 102, Código Judicial); acompañó con la demanda copia simple del acto impugnado, pero no aportó prueba de que solicitó y se le negó la autenticación de dicho documento, ni solicitó a la sustanciadora que requiera al funcionario demandado la expedición de copia autenticada del documento denegado (artículo 46 de la Ley 135 de 1943).

Como la demanda presentada no cumple con los requisitos de Ley, no debe dársele curso, de acuerdo a lo indicado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción (corregida) promovida por la licenciada Kenia Jaén Rivera, en representación de Josefina Marín Hernández, para que se declare nula, por ilegal, la resolución No. ALP-022-RA de 10 de mayo de 1993, emitida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ANÍBAL TEJEIRA ARAÚZ, EN REPRESENTACIÓN DE CELMIRA MALEK DE PARADA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE GERENCIA GENERAL NO.93(32010-1830)16 DE 10 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDO POR EL SUBGERENTE GENERAL DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado **Aníbal Tejeira Araúz**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en representación de **CELMIRA MALEK DE PARADA**, para que se declare nulo por ilegal el Decreto de Gerencia General No.93(32010-1830)16 de 10 de agosto de 1993, emitido por el Subgerente General de Operaciones del Banco Nacional, por medio del cual se declara insubsistente el nombramiento de la demandante y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado sustanciador procede a examinar la demanda a fin de verificar si la misma cumple con los requisitos establecidos por la ley, para el trámite que permita su admisión.

Se percata quien suscribe que el actor ha incluido en el libelo de su acción incoada, una solicitud previa, que debe ser atendida antes del trámite de admisión de la misma, en la que solicita al sustanciador que requiera del Licenciado Camilo Agrazales, Gerente Ejecutivo de Recursos Humanos del Banco Nacional de Panamá, nos remita a la brevedad posible, copia autenticada de la Resolución No.07-93 de 1° de septiembre de 1993, expedida por la Junta Directiva de la antes mencionada institución bancaria, con los respectivos sellos de su notificación.

Este tribunal estima que el recurrente realizó los trámites y diligencias tendientes a la consecución de los documentos necesarios para darle curso legal a la demanda incoada, conforme a los requisitos exigidos por las leyes rectoras de los procesos contencioso-administrativos. En efecto, se observa que a foja 7 del expediente, el demandante ha incluido copia con constancia que se recibió la solicitud para que el Banco Nacional expidiera copia autenticada con inclusión del sello de notificación de la Resolución expedida por la Junta Directiva de dicho banco mediante la cual se confirma la insubsistencia del nombramiento de la Sra. Malek de Parada. Por lo que el sustanciador puede hacer uso de la facultad conferida en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, cuyo texto legal preceptúa:

> "ARTICULO 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

Para determinar la viabilidad o no de la acción presentada se requiere examinar si la misma fue presentada dentro del plazo legal previsto en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, y tal situación sólo puede constatarse adjuntando con la demanda copia autenticada de la confirmación del acto impugnado con su correspondiente notificación, que en este caso en particular comprobaría el agotamiento de la vía gubernativa; por lo que es pertinente acceder a la petición previa del actor.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que antes de admitir la demanda en estudio se solicite al Gerente Ejecutivo de Recursos Humanos del Banco Nacional de Panamá, que remita a esta Superioridad copia autenticada de la Resolución de la Junta Directiva 07-93 del 1° de septiembre de 1993, conteniendo los sellos de su notificación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE PAULINO VILLARREAL, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN PERSONAL NO. 00002 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDO POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA)

VISTOS:

La firma Villalaz y Asociados, actuando en representación de Paulino Villarreal, ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. En la demanda se formula una petición dirigida a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para que ésta declare nula por ilegal la Acción de Personal No. 00002 de 4 de enero de 1991, mediante la cual el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, destituyeron al demandante de la posición que ocupaba en la entidad demandada, y además, que ésta sea condenada a reintegrar al demandante a su cargo original y al pago de los salarios caídos que dejó de percibir desde el momento del despido hasta la fecha de su restitución.

El Procurador de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 59 de 7 de febrero de 1992. Este funcionario se opone a las pretensiones de la parte demandante por considerar que las mismas carecen de fundamento, en vista de que la destitución se ajusta a derecho.

La Sala pasa a examinar las infracciones que la parte demandante imputa al acto administrativo cuya declaratoria de nulidad se demanda.

El apoderado judicial del demandante sostiene que el acto impugnado ha infringido los artículos 29 de la Ley 135 de 1943, el artículo 4 y el 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, el artículo 5to. literal A, del reglamento interno de la institución, los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946 por la cual se reforma la Ley 135 de 1943 y los artículos 1 y 2 de la Ley N° 25 de 14 de diciembre de 1990.

La parte demandante en su escrito sostiene que la resolución impugnada, viola el artículo 29 de la Ley 135 de 1943, que establece por regla general la notificación personal de las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa. Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto no hubo notificaciones personales ni por edicto, el demandante hizo uso de los recursos legales que la ley le permite, pues, a pesar de que no presentó copia de los mismos, constan en el expediente las resoluciones emitidas por el INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, que resuelven dichas peticiones, lo cual demuestra que el demandante agotó la vía gubernativa, por lo que a la luz de lo establecido en el artículo 32 de la citada ley se entiende por notificado. Se desestima, pues, este cargo.

En cuanto a las infracciones de los artículos 4 y 18 de la Ley 29 de diciembre de 1961 y el artículo 5to. del reglamento interno de la institución, la Sala debe dejar sentado que el demandante no era un funcionario público con el beneficio de la inamovilidad ya que, al momento de su destitución, no existía una carrera administrativa que le brindara ese beneficio. Por esta razón la potestad del Instituto de Alcantarillados y Acueductos Nacionales de destituir al demandante era de carácter discrecional y no de carácter reglado. En este caso se observa que el jefe de personal de la mencionada institución, actuó motivado por fines tendientes a proteger el interés público, por ello aún si no existiere prueba fehaciente de que el demandante formó parte de los grupos que lesionaron gravemente las instituciones democráticas, lo cierto es que la potestad de la Administración Pública para destituirlo, como queda dicho, es discrecional. Por ello no era necesario invocar una justa causa para destituir al demandante y éste, por no ser un servidor público amparado por la estabilidad que le otorgara la carrera administrativa , no tiene derecho a ser reintegrado a su posición ni tampoco al pago de los salarios que solicita. Opina la Sala que las violaciones alegadas por la parte actora carecen de fundamento por cuanto ha sido jurisprudencia de esta Sala que en los que se refiere a estos cargos es menester aplicar la Ley 25 de 1990, ya que como aquélla de orden público y posterior, prevalece sobre el reglamento interno y la Ley Orgánica de la institución, durante su tiempo de duración que expiró el 31 de diciembre de 1991, y esto es así, pues ella regula de manera especialísima la materia en conflicto. No se produce, pues, la violación alegada.

La parte actora señala como violado los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 1946 que modifica la Ley 135 de 1943, alegando que dado que el recurso de apelación en subsidio fue presentado oportunamente el 21 de marzo de 1990 y que la Junta Directiva resolvió en un término superior a los dos meses dicho recurso por lo cual la Resolución de Junta Directiva No. 41-91 de 12 de junio de 1991 es extemporánea y no debe ser tomada en cuenta, considerándose agotada la vía gubernativa, por silencio administrativo, a los dos meses de interpuesto el recurso, es decir el 21 de mayo de 1990, lo cual produce, a juicio de la parte actora, la violación directa de las normas antes mencionadas. La Sala no está de acuerdo con las apreciaciones de la parte actora dado que, en primer lugar, no hay constancia en el expediente del escrito contentivo del recurso de reconsideración con apelación en subsidio, por lo cual, mal podría afirmarse, ni tomarse en cuenta, la supuesta fecha de interposición del mismo. Por otro lado, consta a foja 5 del expediente, la notificación personal del apoderado judicial de la parte actora de la resolución que éste último alega extemporánea, con fecha de 10 de septiembre de 1991. El demandante presentó su demanda el 8 de noviembre de 1991, es decir, dos días antes de que se vencieran los dos meses que el artículo 27 de la Ley 33 de 1946 señala para la interposición de la demanda. Si la resolución emitida por la Junta Directiva del IDAAN y por ende, la notificación de la misma, careciere de validez, la demanda interpuesta por la parte actora sería a todas luces extemporánea. Se desestima, pues, el presente cargo.

Finalmente, el demandante afirma que también se infringen los artículos 1 y 2 de la ley 25 de 14 de diciembre de 1990, donde se hace referencia a las causales de declaratoria de insubsistencia de los funcionarios públicos dado que en el resuelto impugnado no se especifica la causal. La Sala no coincide con los criterios vertidos por la parte actora, ya que, aunado a las consideraciones anteriormente expuestas, se observa claramente la parte motiva de la Resolución No. 9-91 que a su vez es confirmatoria de la Resolución No.00002, invoca como causal de despido su participación en actividades antidemocráticas. Dicho supuesto se ajusta a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley N°25 de 14 de diciembre de 1990. Se desestima, pues, este cargo.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la pretensión formalizada mediante demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada por la firma Villalaz y Asociados, en representación de Paulino Villarreal y DECLARA que el Resuelto No.00002 de dos de enero de 1991 expedido por el citado funcionario NO ES ILEGAL e igualmente NIEGA las peticiones de reintegro y paga de salarios a partir de su destitución.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBERTO E. SIERRA, EN REPRESENTACIÓN DE EDGAR URRIOLA ESPINO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.3108 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1992, EL RESUELTO NO.3276 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1992, LA RESOLUCIÓN NO.3 DE 15 DE FEBRERO DE 1993, Y LA RESOLUCIÓN NO.2 DE 25 DE MARZO DE 1993, EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado **ROBERTO E. SIERRA** en representación de **EDGAR URRIOLA ESPINO**, para que se declaren nulos, por ilegales los Resueltos No.3108 de 6 de noviembre de 1992, Resuelto No.3276 de 24 de noviembre de 1992, la Resolución No.3 de 15 de febrero de 1993 y la Resolución No.2 de 25 de marzo de 1993, emitidas por el Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador estimó pertinente no admitir la demanda interpuesta por considerar que la misma adolece de los siguientes defectos:

1. El Resuelto No.3108 de 6 de noviembre de 1992, que es el acto acusado, mediante el cual se traslada al Profesor **EDGAR URRIOLA ESPINO** del Centro de Arte y Cultura al Centro de Tecnología Educativa, fue dejado sin efecto por el Resuelto No.3276 de 24 de noviembre de 1992, en el que se ordena el traslado a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero; dicha Resolución es confirmada por la Resolución N°3 de 15 de febrero de 1992.

Observó el Tribunal a-quo que el acto impugnado contenido en el Resuelto N°3276 de 24 de noviembre de 1992 expedido por el Ministerio de Educación, fue notificado el 26 de noviembre de 1992, y contra el mismo se presentó y sustentó Recurso de Reconsideración, en tiempo oportuno. Mediante Resolución N°3 de 15 de febrero de 1992, se resolvió el precitado Resuelto, confirmando la resolución recurrida.

A este respecto, consideró el Sustanciador en su oportunidad que quedó agotada la vía gubernativa, contando así el demandante con un término de dos meses para ocurrir ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, había prescrito el derecho del mismo para interponer esta acción legal.

2. En relación al acto impugnado contenido en la Resolución N°3 de 1° de marzo de 1993, mediante el cual, se solicita al Órgano Ejecutivo se declare insubsistente el nombramiento del Profesor **EDGAR URRIOLA ESPINO**, confirmada por la Resolución N°2 de 25 de marzo de 1993, estimó el Ponente que se trataba de un mero acto preparatorio y no un acto administrativo definitivo.

Por su parte, el recurrente en la sustentación de su alzada, reconoce que el Resuelto N°3108 de 6 de noviembre de 1992, fue dejado sin efecto por el Resuelto N°3276 de 26 de noviembre de 1992, más sin embargo, anota que dicho Resuelto constituye la base legal para que el Ministerio de Educación, solicitara al Órgano Ejecutivo que declarara la insubsistencia del nombramiento del Profesor **URRIOLA.**

Añade además el actor que disiente de la opinión externada por el Tribunal de Primera Instancia, dado que esgrime que la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en cuestión, no fue presentada extemporáneamente, pues aduce que esperó el término de operación del silencio administrativo, ya que ante la Resolución N°2 de

25 de marzo de 1993, mediante la cual se solicita al Órgano Ejecutivo declare insubsistente el nombramiento del Profesor **EDGAR URRIOLA**, se presentó Recurso de Apelación y sobre el mismo no ha recaído decisión alguna.

Encontrándose la alzada en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a dilucidar la controversia planteada.

Observa el Tribunal ad-quem que el recurrente en el libelo de la demanda, solicita que se declaren nulos por ilegales, una serie de Resueltos emitidos por el Ministerio de Educación. Cabe señalar aquí, que el actor no ha cumplido con lo preceptuado en el artículo 43a de la Ley 135 de 1943 que estipula claramente que los actos administrativos impugnados deben individualizarse con toda precisión. Esto es así, puesto que como se aprecia, el actor no indica cuál es el acto administrativo que pretende se declare nulo.

Este Tribunal de Apelaciones estima acertada la aseveración vertida por el Tribunal de Primera Instancia, que determinó que la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, no fue presentada en tiempo oportuno, tal como resalta a fojas 22 y 23 del expediente contentivo de la Resolución N°3 de 15 de febrero de 1993, en la que claramente se anuncia el agotamiento de la vía gubernativa, cuando expresa: "Contra esta Resolución no procede recurso alguno, por cuanto se ha agotado la vía gubernativa" (Cfr. foja 23).

A partir del 15 de febrero de 1993, el demandante debió empezar a contar el término de dos meses señalado por la ley para concurrir ante esta Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo establece el artículo 43a de la Ley 135 de 1943 que preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 43a. Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda.
> ...".

Con relación al silencio administrativo que argumenta el actor en su apelación, en este caso en particular, no opera como medio para considerar agotada la vía gubernativa, debido a que para que esto ocurra, deben transcurrir dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier recurso o petición que se dirija a un funcionario o entidad pública, y como se observa, sobre el Recurso de Reconsideración con apelación en subsidio presentado por el licenciado **ROBERTO E. SIERRA** en representación del Profesor **EDGAR URRIOLA**, contra el Resuelto N°3276 de 24 de noviembre de 1992, el Ministerio de Educación, a través de su Ministro, resolvió mantener la decisión contenida en el mencionado Resuelto, agotándose así la vía gubernativa el 15 de febrero de 1993 (Cfr. fojas 20-21 del expediente).

Se aprecia igualmente, tal como lo señala el Magistrado de primera instancia, que el acto que se impugna contenido en la Resolución N°1 de 1 de marzo de 1993, para que se solicite la insubsistencia del nombramiento del Profesor **EDGAR URRIOLA ESPINO**, por incurrir en abandono del cargo, confirmada por la Resolución N°2 de 25 de marzo de 1993, no se trata de un acto administrativo definitivo, sino que constituye un acto preparatorio.

Parece ser que el recurrente en el libelo de la demanda confunde el acto administrativo definitivo con los actos preparatorios.

La doctrina denomina acto preparatorios, accesorios o de trámite, a los que según **LIBARDO RODRÍGUEZ R.** "son aquellos que se expiden como parte de un procedimiento administrativo que se encamina a adoptar una decisión o que cumplen un requisito posterior a ella. Por ejemplo, el acto por el cual se solicita un concepto a otra autoridad antes de tomar la decisión" (Rodríguez R. Libardo. Derecho Administrativo General y colombiano. Sexta Edición. Editorial Temis. Bogotá, Colombia, 1990, pág.204).

Como se observa, en la Resolución N°1 de 1 de marzo de 1993, confirmada por la Resolución N°2 de 25 de marzo de 1992, el Ministerio de Educación eleva una solicitud ante el Órgano Ejecutivo para que declare insubsistente el nombramiento del Profesor **URRIOLA**, lo que implica que no nos estamos refiriendo a un acto definitivo, y por tanto, concordamos al igual que el Tribunal a-quo, que la interposición de una demanda de plena jurisdicción contra estos actos es prematura, puesto que estas demandas sólo caben contra actos administrativos definitivos y no contra meros actos preparatorios (v.g. sentencia de 13 de octubre de 1993 y sentencia de 5 de noviembre de 1993).

Concluye el resto de la Sala, en virtud de lo anotado, que la decisión de inadmisibilidad de la demanda, se ajusta a lo dispuesto por las leyes rectoras de los procesos Contencioso Administrativo, y por ende, es procedente confirmar la Resolución recurrida.

Por todas las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran el resto de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el Auto de 30 de septiembre de 1993, emitido por el Magistrado de Primera Instancia, que decidió NO ADMITIR la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el licenciado ROBERTO E. SIERRA, en representación del Profesor EDGAR URRIOLA ESPINO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA, NORIEGA Y CONTRERAS EN REPRESENTACIÓN DE JEAN VUARNET, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN No. 47 DE 18 DE MARZO DE 1991, DICTADA POR EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense MELÉNDEZ-CRUZ Y ASOCIADOS, en representación de **INDUSTRIA DE CALZADOS PANAMÁ, S. A.**, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Resolución de 1o. de noviembre de 1993, que admitió todas las pruebas en la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense AROSEMENA, NORIEGA Y CONTRERAS en representación **JEAN VUARNET**, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 47 de 18 de marzo de 1991, mediante la cual se ordena REVOCAR la Resolución 244 de 24 de noviembre de 1989.

El artículo 1116 del Código Judicial preceptúa el objeto del recurso de apelación y señala las resoluciones susceptibles de este recurso y entre ellas no está incluida la Resolución que admite pruebas.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE el Recurso de Apelación promovido por la firma forense MELÉNDEZ-CRUZ Y ASOCIADOS, apoderados de INDUSTRIA DE CALZADOS PANAMÁ, S. A., contra la Resolución de 1o. de noviembre de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD POR ILEGITIMIDAD DE LA PERSONERÍA DE LA PARTE DEMANDANTE, INTERPUESTO POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GIGANTE, S. A., DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, PROMOVIDA POR COTTER & COMPANY, MEDIANTE APODERADO JUDICIAL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 261 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1990, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Vásquez y Vásquez, en su condición de apoderada judicial de GIGANTE, S. A., ha promovido incidente de nulidad por ilegitimidad de la personería de la parte demandante, dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción presentado por COTTER & COMPANY, para que se declare nulas, por ilegales, las resoluciones No. 261 de 13 de septiembre de 1990 de la Dirección de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias, y la No. 124 de 4 de septiembre de 1991 del Ministerio de Comercio e Industrias.

Al resolver sobre la admisibilidad del presente incidente, la Magistrada sustanciadora estima que el mismo debe ser rechazado de plano por ser manifiestamente improcedente, por las siguientes razones de derecho.

Aún cuando se plantea la existencia de un vicio que anula el proceso, que puede promoverse en cualquier estado del juicio (artículo 96 de la Ley 135 de 1943), el mismo se refiere a puntos ya decididos mediante la resolución confirmatoria dictada el 16 de abril de 1993 por el resto de los Magistrados de la Sala, al resolver el recurso de apelación, promovido por la ahora incidentista, contra la Resolución de 26 de noviembre de 1991, que admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por Arias, Fábrega y Fábrega en representación de COTTER & COMPANY (Conf. fs. 86 y 87 del proceso contencioso administrativo). Por tanto, habiéndose reconocido en el proceso la legitimidad de la personería que se impugna, la misma ha dejado de ser causal de nulidad, ya que así lo dispone el artículo 724 ordinal 4 del Código Judicial, que derogó el artículo 608 del Código Judicial de 1917, al cual se refiere el artículo 92 de la Ley 135 de 1943.

Además, el incidentista pudo alegar al sustentar el recurso de apelación al que nos hemos referido, la causa distinta de nulidad que ahora alega, que consiste en que

la certificación expedida por el Secretario de Estado de Delaware, de los Estados Unidos de América, no fue expedida de acuerdo con las formalidades señaladas en el "CONVENIO POR EL QUE SE SUPRIME LA EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN PARA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS", concertado el 5 de octubre de 1961, del cual la República de Panamá y los Estados Unidos de Norte América son signatarios. Todo lo anterior determina que debe rechazarse de plano el incidente promovido, por ser manifiestamente improcedente, al tenor de los artículos 690, párrafo tercero y 697 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, representada por la Magistrada sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de nulidad por ilegitimidad de personería de la parte demandante, promovido por GIGANTE, S. A., dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por COTTER & COMPANY contra la Dirección de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OMAR AUGUSTO RODRÍGUEZ GALLARDO, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO HUGHES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR LA COORDINADORA GENERAL DE ÁREAS REVERTIDAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Omar Augusto Rodríguez Gallardo, actuando en nombre y representación de AUGUSTO HUGHES R., ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el "acto administrativo de la Coordinadora General de Auras Revertidas del Ministerio de Vivienda mediante el cual se ordena reducir el lote No. 57 de la Barriada Nueva Primavera del Corregimiento de Cristóbal en el Distrito y Provincia de Colón, de 1,300 metros cuadrados que fueron asignados, hasta 600 metros cuadrados", y para que se haga otras declaraciones.

Al resolver sobre al admisibilidad de la demanda presentada, la Magistrada Sustanciadora observa que la parte actora no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley, ya que no acompañó a la demanda la copia autenticada del acto administrativo impugnado como lo exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 y 820 del Código Judicial, esto es, la copia autenticada del "acto administrativo mediante el cual la Coordinadora General de Áreas Revertidas del Ministerio de Vivienda" reduce la dimensión del Lote No. 57 ubicado en la Barriada Nueva Primavera, Cristóbal, Colón.

Sólo acompañó a su demanda una copia de la nota No. DJ-1500-299-93 de 16 de abril de 1993, que dirige la Dirección Jurídica del Ministro de Vivienda a la Coordinadora General de Áreas Revertidas Panamá/Colón, en la que se refiere al litigio del lote No. 57 entre CLEVELAND ALEXANDER JAMES y AUGUSTO HUGHES R., y el original de la Nota DMS/1601/93 de 5 de octubre de 1993, por la cual el Ministro de Vivienda comunica al señor AUGUSTO HUGHES "que para los efectos del derecho a compra como tenedor de lote se le asigna únicamente la cantidad de 987.18 mts2, los cuales para los efectos de las asignaciones definitivas quedará sujeto a los demás criterios y requisitos, que para los efectos exige el Ministerio de Vivienda" (fs. 3); actos que no son objeto de la presente demanda.

Además, si el acto administrativo impugnado fue emitido por la Coordinadora General de Áreas Revertidas del Ministro de Vivienda, la demandante debió acompañar a la demanda copia autenticada de los actos que agotan la vía gubernativa con la constancia de su notificación, para los efectos de los artículos 25 y 27 de la Ley 33 de 1946 y 44 de la Ley 135 de 1943.

Como la presente demanda no cumple con los requisitos de Ley, no debe dársele curso a la misma, conforme lo ordene el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, representada por la Magistrada que Suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Omar Augusto Rodríguez Gallardo, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo emitido por la COORDINADORA GENERAL DE ÁREAS REVERTIDAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SANTIAGO SANFORD, EN REPRESENTACIÓN DE GREGORIO APARICIO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.13 DE 15 DE ENERO DE 1992, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **SANTIAGO SANFORD**, actuando en nombre y representación de **GREGORIO APARICIO**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto No.13 de 15 de enero de 1992 expedido por el Director General del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Considera el recurrente que el acto administrativo impugnado, ha infringido el artículo 9 literal h de la Ley No.70 de 15 de diciembre de 1975; los artículos II y III del Capítulo XIV del Reglamento Disciplinario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; los artículos I del Capítulo XI y IX del Capítulo XIII; todos del citado Reglamento Disciplinario; y del artículo 29 de la Ley 135 de 1943.

De la demanda instaurada se corrió traslado al funcionario responsable del acto acusado para que rindiese un informe explicativo de su actuación, encontrándose el mismo en el expediente contentivo de este negocio.

De igual forma se dio traslado al Señor Procurador de la Administración, que procedió a oponerse a las pretensiones del actor.

Una vez surtidos todos los trámites establecidos para estos procesos, procede la Sala Tercera a desatar la controversia instaurada.

El negocio en estudio tuvo su origen a raíz de la destitución del señor **GREGORIO APARICIO** del cargo que ocupaba como Jefe de Auditoría en el Instituto de Mercadeo Agropecuario, medida adoptada en atención a supuestas violaciones al Reglamento Disciplinario aplicable a la Institución.

El primer cargo de ilegalidad aducido por el recurrente, descansa en el artículo 9 literal h de la ley No.70 de 1975, cuyo texto legal reproducimos a continuación:

> "ARTICULO 9.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones:
> ...
> h) Nombrar, promover, sancionar y destituir el personal del Instituto según la reglamentación que apruebe el Ministro de Desarrollo Agropecuario;"

Al motivar el concepto de la violación endilgada el recurrente indicó:

> "De acuerdo con esta disposición, el Director del I.M.A. tiene atribución para nombrar y para destituir el personal del Instituto, pero al hacerlo deberá ceñirse a la reglamentación que apruebe el Ministro de Desarrollo Agropecuario, además la aplicación de la reglamentación no puede ni debe ser una aplicación caprichosa, es decir, que al aplicarse cualquier norma debe ser tomando en cuenta las normas complementarias."

Observa el Tribunal, que el actor impetra la transgresión de un artículo de la Ley Orgánica del Instituto de Mercadeo Agropecuario, que confiere al Director General de dicha entidad estatal, la atribución de destituir personal del Instituto, de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Esta situación obedece a que el I.M.A. no posee un Régimen Disciplinario propio, y se rige por el Reglamento del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La ley 70 de 1976, en el artículo en comento, remite a la reglamentación disciplinaria del M.I.D.A. para el procedimiento a seguir en aquellas decisiones relacionadas con cambios o movimientos de personal. Cabe destacar que esta ley no le concede estabilidad ni carrera administrativa a los funcionarios del I.M.A., sino que establece la forma en que debe procederse al momento de asumir una decisión de personal, por lo que no se evidencia transgresión alguna a la norma invocada y descartamos el cargo de ilegalidad aducido.

Corresponde al Tribunal, analizar en conjunto, las disposiciones reglamentarias invocadas como fundamento legal por el Instituto de Mercadeo Agropecuario al proceder a la destitución del señor **APARICIO** y que fueron supuestamente transgredidas.

En el informe rendido por el Director General del I.M.A. ante la Sala Tercera se expuso de manera específica, las razones que motivaron la destitución del ex-funcionario **APARICIO**, y al respecto se señaló:

> "Bajo la Administración del Ingeniero LUIS E. CHANDECK, ex-Director General del I.M.A., se produjo un escándalo de proporciones notoriamente públicas, por supuesta irregular Acreditación de Cuotas de Cebollas y Compra de Cebolla Nacional, mediante facturas supuestamente falsificadas en todo o parte. Estas circunstancias, provocaron la Investigación por parte de una Comisión Ad-hoc, integrada por funcionarios del Ministerio

de Hacienda y Tesoro y la Contraloría General de la República, terminando la Investigación con un Informe de Auditoría, determinándose irregularidades de orden administrativo. Este hecho, parece origina la salida del Señor LUIS E. CHANDECK de la Dirección General del INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO, sustituyéndolo el Señor BERNARDO DÍAZ DE ICAZA, como Director General. El Informe de Auditoría involucró con responsabilidad Administrativa a varios ex-funcionarios, entre los cuales se encontraban, dos personas del personal subalterno del DEPTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA.

Una de las primeras medidas administrativas, del Señor BERNARDO DÍAZ DE ICAZA en función de Director General del I.M.A., fue aplicar SANCIONES DISCIPLINARIAS de Destitución al Personal Administrativo involucrado en el Informe de Auditoría.

El señor GREGORIO APARICIO CARRERA, como ex-jefe del DEPTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, ocupaba un cargo de libre remoción y confianza para el Director General, para ese entonces el LIC. BERNARDO DÍAZ DE ICAZA."

Del informe de actuación remitido a esta Superioridad, se colige que las faltas incurridas por negligencia que se atribuían al ex-funcionario **APARICIO**, eran sancionables en base al Reglamento Disciplinario del M.I.D.A.

El artículo I del Capítulo XIII del citado reglamento, establece que aquellos funcionarios que falten a sus deberes o ejecutasen actos incompatibles con el decoro y dignidad de su cargo, pueden ser sancionados, entre otras medidas, y según la gravedad de la falta, con la destitución del cargo. El artículo IX del referido capítulo XIII contiene las llamadas "faltas muy graves" y que son sancionables con la destitución del cargo.

La falta imputada al señor **GREGORIO APARICIO** está precisamente recogida entre las faltas muy graves contenidas en el reglamento, dado que bajo su jefatura en el departamento de Auditoría Interna del I.M.A., se suscitaron los hechos relacionados con acreditaciones indebidas en la compra de cebollas para el año de 1991, así como las anomalías en las cuotas de importación de las mismas, involucrando estos hechos las falsificaciones de facturas de compra y la pérdida de ingresos para el Estado.

Las irregularidades anotadas se producen bajo la complicidad de un número plural de funcionarios de la Institución, tal como se aprecia en el informe de auditoría procedente de la Contraloría General de la República (cfr. fojas 40ss del expediente administrativo remitido por el I.M.A.), y particularmente de auditores internos de la entidad (subalternos del señor **APARICIO**), y personal a nivel directivo de la misma.

El jefe de auditoría interna tenía el deber inmediato de vigilar el cumplimiento de los procedimientos que se realizan en las actividades financieras y técnicas del Instituto; fiscalizar la utilización de los recursos financieros y la conservación de los bienes patrimoniales; realizar las auditorías para proteger los bienes del Instituto, y presentar informes sobre irregularidades o malos manejos detectados en la Institución.

Resulta palmario que como responsable inmediato del departamento a través del cual perfeccionaron las actividades fraudulentas comentadas, tenía el deber de denunciar tales irregularidades, y que con su silencio, faltas de prestancia y de supervisión o fiscalización a las actividades de sus subalternos en el departamento bajo su directa responsabilidad, permitió que tales situaciones acaeciesen.

La negligencia en el cumplimiento de sus deberes fueron la causa invocada para atribuirle responsabilidad al señor **GREGORIO APARICIO** en los hechos ilícitos y escandalosos ocurridos en el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Incumplió este ex-funcionario por lo anterior, lo preceptuado en el artículo I del Capítulo XI del Reglamento Disciplinario del M.I.D.A., cuando señala:

"ARTICULO I:
Los empleados de la Institución tendrán los siguientes deberes:

a. Cumplir y hacer cumplir en asuntos de su competencia la Constitución y las disposiciones legales y reglamentarias de la Institución."
... (subrayado es nuestro)

En cuanto a las normas reglamentarias aducidas como violadas, la Sala Tercera procede a su examen y a externar lo siguiente:

El segundo cargo de ilegalidad aducido, descansa en el artículo III del Capítulo XIV del Reglamento Disciplinario del M.I.D.A., que preceptúa:

"ARTICULO III:
ESTABILIDAD DEL PERSONAL:
Todo empleado que ocupe un cargo permanente al entrar a regir el presente Reglamento de Personal, gozará de estabilidad en el cargo, siempre que sus servicios hayan sido calificados satisfactoriamente.

Igualmente, tendrán derecho a estabilidad todos los empleados que sean nombrados a partir de la vigencia del presente Reglamento, de conformidad con el mismo, siempre que ocupen cargos permanentes y terminen satisfactoriamente el período de prueba."

El actor, al fundamentar la transgresión acusada, escasamente indicó:

"Esta disposición tampoco fue tomada en consideración al momento de aplicar la sanción disciplinaria por la supuesta infracción que cometió."

Este Tribunal ha sido reiterativo en el sentido de que el régimen de estabilidad de los funcionarios públicos debe ser establecido a través de una ley formal, tal como preceptúa la Constitución Nacional, y que el reglamento disciplinario de una Institución, por ser un conjunto normativo con rango inferior a la Ley, no puede conceder estabilidad de un funcionario público (v.g. sentencia de 10 de octubre de 1992 y de 11 de noviembre de 1992). Por lo anterior se desprende que el señor GREGORIO APARICIO no estaba protegido por la inamovilidad que una Ley sí puede otorgar, y por ende, la disposición precitada no ha sido vulnerada.

La Sala Tercera al insistir jurisprudencialmente sobre este particular, ha aplicado concordantemente lo preceptuado en el artículo 15 del Código Civil y 757 del Código Administrativo, en cuanto a la preminencia de la Ley sobre las normas expedidas en ejercicio de la potestad reglamentaria. Las normas citadas preceptúan:

"Artículo 15. Las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tiene fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución o a las leyes".

"Artículo 757. El orden de preferencia de disposiciones contradictorias en asuntos nacionales, será el siguiente: la ley, el reglamento del Poder Ejecutivo yla orden superior. ...".

Debe descartarse en consecuencia el cargo de ilegalidad propuesto.

El tercer cargo de violación aducido tiene relación con el artículo II del Capítulo XIV del Reglamento Disciplinario del M.I.D.A., que puntualiza:

"ARTICULO II:

COMUNICACIÓN:
La renuncia o destitución del funcionario, deberá ser comunicada por la parte correspondiente, por escrito y por conducto regular con 15 días de anticipación, a la fecha de su efectividad.

Previa a la separación del empleado, el Jefe inmediato, deberá constar por escrito que dejó su trabajo al día y que no tiene documentos de la Institución en su poder."

Estima el actor que esta disposición ha sido transgredida, toda vez que la comunicación que le participó su destitución no le fue puesta en su conocimiento con los 15 días de anticipación previstos en la norma precitada.

La Sala observa que efectivamente, la comunicación procedente del Departamento de Personal del I.M.A. estaba fechada 15 de enero de 1992 y la misma se hacía efectiva a partir del 16 de enero de 1992.

Para los efectos fiscales sin embargo, la destitución se hacía efectiva a partir del 16 de marzo de 1992 por el pago de 2 meses de vacaciones al ex-funcionario **APARICIO.**

Es innegable que no se apegó la comunicación en mención, al lapso previsto en el artículo II del Capítulo XIV, pero la condición especial de que el I.M.A. adeudaba al señor **APARICIO** dos meses de vacaciones, haciendo efectiva la destitución dos meses después, le concedió al mismo la oportunidad de asumir las medidas necesarias ante la resolución adoptada por la autoridad superior de la Institución, minimizando los efectos que hubiese podido tener una decisión abrupta. Se cumplió al menos, indirectamente, la intención de la norma reglamentaria, la cual redunda en brindar cierta protección a los funcionarios que serán objeto de una medida de personal definitiva, como la destitución.

En adición a lo expresado, las causales para la destitución del señor **APARICIO** han quedado evidenciadas, así como la procedencia y la autoridad del ente nominador para la adopción de tal medida, máxime cuando este funcionario, tal como hemos recalcado, no estaba protegido por una ley de carrera administrativa, por lo que su cargo estaba sujeto a libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad superior de la entidad, tal como ha dispuesto el artículo 9° literal h de la ley 70 de 1976, y la omisión acusada por el recurrente es insubstancial para desmeritar la competencia que tenía el Director General del I.M.A. para proceder a la destitución del señor **APARICIO**, máxime cuando este tipo de disposición reglamentaria tiene real prestancia es en los casos en que se trate de empleados sometidos a un régimen de estabilidad, por lo que descartamos el cargo de ilegalidad endilgado por el recurrente.

Finalmente, el actor aduce la violación del artículo 29 de la ley 135 de 1943, cuyo texto legal reproducimos a continuación:

"ARTICULO 29.
Las resoluciones que ponen término aun negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado, o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recursos que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente."

La transgresión acusada se fundamenta según el demandante, en que la destitución del señor **APARICIO** no se le notificó personalmente, sino mediante una nota fuera de los 5 días previstos, y en la misma no se le puso en conocimiento de los recursos que en la vía gubernativa le correspondían para impugnar este acto administrativo.

En relación a lo aducido, se percata este Tribunal, que a pesar de que no consta la notificación personal al interesado, éste conocía del acto de su destitución, por la nota girada a su persona el 15 de enero de 1992, y aunque en la misma tampoco se expresaron los recursos a los que el señor APARICIO tenía derecho, hizo uso de los mismos, tal como se aprecia a fojas 3-6 del expediente contentivo de este negocio, subsanándose con tal proceder, la omisión incurrida por parte de la Dirección General del I.M.A., tal como prevé el artículo 32 de la Ley 135 de 1943, a saber:

> "ARTICULO 32. Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales."

Estima la Sala por consiguiente, que el interesado no estuvo en indefensión ante el acto de la administración, y este es el presupuesto sustancial de las normas en estudio, por lo que la deficiencia indicada no implica un vicio que anule la actuación administrativa.

En resolución de 3 de agosto de 1992, la Sala Tercera, en una situación similar a la que nos ocupa, señaló:

> "La notificación se realizó, y el afectado pudo accionar contra el acto administrativo, por lo cual se cumplió el presupuesto procesal de la norma cual era permitir al afectado enervarlo, lo cual verificó mediante la Reconsideración que en tiempo oportuno promovió"

En atención a las razones expuestas, debe descartarse este último cargo de violación propuesto en relación al artículo 29 de la Ley 135 de 1943.

Del examen íntegro de las constancias aportadas, y de las situaciones que han concurrido en este negocio, la Sala Tercera concluye, que el Director General del I.M.A. estaba facultado legalmente para proceder a la destitución del señor **APARICIO** en virtud de los hechos irregulares acaecidos en el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que involucraron a diversos funcionarios de la entidad, y de los cuales por omisión y negligencia también resultó responsable el señor **GREGORIO APARICIO**, quien además, no se encuentra protegido por un régimen de estabilidad, por lo que estaba sujeto a la remoción del cargo por parte de la autoridad superior del I.M.A., sin que con este proceder se haya incurrido en las violaciones legales impetradas.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Resuelto No.13 de 15 de enero de 1992, emitido por el Director General del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARCENIO GARCÍA VALDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NIXON GUERRA Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL MEMORANDO DP-DOPA-8084 DE 4 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PERSONAL A.I. DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Lcdo. Arcenio García Valdez, actuando en representación de Nixon Guerra y otros, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto que se declare nulo por ilegal el Memorando N°. DP-DOPA-8084 de 4 de agosto de 1993, emitido por el Director de Personal a.i. del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si se cumplen todos los presupuestos procesales para que aquélla pueda ser admitida.

Al examinar la demanda encontramos, que la misma fue dirigida contra el Memorando N°. DP-DOPA-8084 de 4 de agosto de 1993, remitido al Director de Personal en el cual se le informa de la destitución de la parte actora, mas este no es el acto administrativo por medio del cual se despide a los demandantes. El acto por medio del cual se hace efectiva su destitución es el Decreto de Personal N°. 134 de 5 de mayo de 1993, el cual es realmente el acto contra el cual debió dirigirse la demanda.

La demanda no cumple con el requisito establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, debido a que no está debidamente acreditada su notificación. La notificación de un acto impugnado es un requisito de importancia exigido por ley. Todo acto administrativo impugnado requiere no sólo su autenticación sino la constancia de la notificación del mismo para probar si la demanda fue puesta en término.

El Magistrado Sustanciador observa que en el libelo no se cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que requiere que en aquélla se exprese el concepto de la violación. En este caso el demandante no expone las modalidades en que se ha producido la infracción; la cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación. La ley exige este requisito, ya que al dar una explicación del mismo le permite al Tribunal evaluar el fondo de la violación que se invoca.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Arcenio García Valdéz.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RENÉ MOUTRAN A., EN REPRESENTACIÓN DE INGENIERÍA, DESARROLLO Y ELECTRICIDAD, S. A. (INDELSA), PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.D.G.295-93 DE 9 DE MARZO DE 1993, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES.MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **René Moutran A.**, actuando en representación de **INGENIERÍA, DESARROLLO Y ELECTRICIDAD, S. A. (INDELSA)**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto No.D.G. 295-93 de 9 de marzo de 1993, emitido por el Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

El Magistrado Sustanciador procede al análisis del libelo incoado, en vías de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos formales que permitan su admisión.

En este punto se observa que el actor ha incluido en su libelo, una solicitud especial que debe ser atendida previo el trámite de admisión de la misma, para que se suspendan provisionalmente, los efectos del acto administrativo impugnado.

En efecto, el recurrente al motivar conceptualmente las razones en que fundamenta la adopción de la medida cautelar urgente impetrada, ha señalado:

> "Con base a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 solicitamos respetuosamente sean suspendidos los efectos de las resoluciones acusadas en este proceso, porque su cumplimiento ha acarreado y lo seguirá haciendo, perjuicios notoriamente graves, tanto para INGENIERÍA, DESARROLLO Y ELECTRICIDAD, S. A. (INDELSA), como al propio INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I.R.H.E.) y los intereses económicos del Estado.
>
> Estos perjuicios podemos resumirlos de la siguiente manera:
>
> A. A nuestro mandante se le ha privado de celebrar el contrato respectivo, no obstante que es evidente que formuló una propuesta beneficiosa para una contratación directa, con lo cual se les ha conculcado un derecho claramente reconocido por nuestras normas sustantivas.
>
> B. Nuestra mandante incurrió en elevados gastos para la consecución de los suministros objeto del contrato, lo que representa una pérdida económica cuando además INDELSA ha sido lesionada en su patrimonio por el orden de los B/.18,534.61 que constituyen la fianza de cumplimiento que Aseguradora Mundial, S. A. le ha hecho efectiva al I.R.H.E.
>
> C. El I.R.H.E. tendría que celebrar nuevamente la contratación directa, con los consecuentes perjuicios y las demoras a la institución.
>
> D. Es importante señalar que INDELSA es en estos momentos la empresa indicada para cumplir con el suministro objeto del contrato.
>
> Apelamos al buen criterio de los Honorables Magistrados, a fin de que se evite ocasionar mayores perjuicios públicos y privados, para lo cual debe

> accederse a nuestra solicitud de suspensión a los efectos de las citadas resoluciones y que se señale una nueva fecha para la entrega de los materiales objeto del suministro previa la aprobación del I.R.H.E. de los mismos"

La Sala Tercera procede al análisis de los argumentos esgrimidos por el actor, y sobre el particular desea externar lo siguiente:

La controversia sujeta al conocimiento de este Tribunal tiene su origen en el resarcimiento de un contrato administrativo distinguido con el No.DG-001-92 celebrado entre la empresa INDELSA y el I.R.H.E., para el suministro de transformadores y equipos electromecánicos.

El referido contrato entró en vigencia el 14 de enero de 1992 y tenía un término de ejecución de 180 días calendario, que se cumplieron el día hábil siguiente al 3 de noviembre de 1992.

A través de los documentos allegados al proceso se puede inferir que **INDELSA** afrontó problemas para proceder al suministro de los equipos convenidos y al cumplimiento del contrato celebrado, y el I.R.H.E. manifestó en reiteradas ocasiones su anuencia a aceptar cambios a los suministros propuestos, siempre que éstos fuesen de igual o superior calidad a los contratados (cfr. foja 3 del expediente).

A partir de la presentación de la propuesta original, hasta la fecha pactada de cumplimiento del contrato, **INDELSA** había variado su oferta 3 veces, y a la fecha de ejecución no se había cumplido con la entrega de ninguno de los puntos acordados, tal como expresara el I.R.H.E. a foja 4 del expediente.

Esta situación acarreó que la entidad del Estado conceptuara como negligente e ineficiente la capacidad comercial de **INDELSA**, quien en dos ocasiones más, adicionales a las comentadas en el párrafo precedente, (nota recibida el 8 de noviembre de 1992 y de 26 de noviembre de ese año), solicita nuevas prórrogas para el cumplimiento del contrato suscrito. Lo anterior resultaba a juicio del I.R.H.E., inadmisible, puesto que no sólo implicaba una irresponsabilidad adicional, sino que además tales peticiones fueron presentadas cuando había excedido en demasía el término de cumplimiento, y la nueva promesa de cumplimiento se perpetuaba más allá del tiempo de duración del contrato suscrito.

Los hechos comentados determinaron en el I.R.H.E. la decisión de rescindir el contrato celebrado, previo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 del Código Fiscal, con arreglo a la causal No.5 de la cláusula décima cuarta del contrato (cfr. foja 4 del expediente).

El demandante ha señalado al presentar los motivos que ameritan la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que rescindía el contrato, que se ocasionan graves perjuicios a la empresa, tanto por la adquisición innecesaria de ciertos suministros del contrato, y porque se les ha cargado el pago de la fianza de cumplimiento que la empresa aseguradora hizo efectiva al I.R.H.E.

Asegura el recurrente que celebrar un nuevo contrato acarrea perjuicios a la Institución del Estado, y que **INDELSA** es la empresa indicada para el suministro que requiere el I.R.H.E.

La Sala Tercera considera, en esta etapa incipiente del proceso, y sin entrar a conocer sobre el fundamento legal de la actuación del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, que los perjuicios aducidos por la parte, en primer término no se han comprobado, pues no basta con el señalamiento de que el perjuicio existe.

Es evidente que para poder apreciar si la ejecución del acto acusado conlleva un perjuicio notoriamente grave es indispensable que se acompañen las pruebas convenientes a tal efecto, y la empresa **INDELSA** no ha demostrado la incurrencia en gastos patrimoniales para la consecución del material de suministro.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha podido apreciar que más afectado por la relación contractual ha resultado el **I.R.H.E.**, quien a más de 1 año y 11 meses de la fecha de entrada en vigencia del contrato suscrito, aún no ha podido abastecerse de los equipos electromecánicos que requiere para la línea de distribución y conversión para un sector de la ciudad capital, lo que implica perjuicios también para los usuarios, y ello debido al alto grado de incumplimiento del contratista **INDELSA**, quien a la fecha de rescisión del contrato no había cumplido con ninguno de los ítems pactados. Este incumplimiento no ha sido desvirtuado por la empresa contratista.

Lo expuesto pone de manifiesto a criterio del Tribunal, que los perjuicios aducidos por el peticionario no han sido probados, y que en todo caso es la Administración quien hasta el momento ha afrontado los mayores perjuicios e inconvenientes, por lo que en esta etapa procesal no existe fundamento para acceder a la medida cautelar impetrada, y esta decisión es asumida por la Sala Tercera en virtud de la potestad discrecional que para tales efectos le confiere el artículo 73 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Resuelto No.D.G. 295-93 de 9 de marzo de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE DECLARATORIA DE DESACATO, INTERPUESTA POR EL LCDO. JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE LILLIAN HILL DE VELÁSQUEZ, CONTRA EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, POR INCUMPLIR LA ORDEN IMPARTIDA POR LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN FALLO DE 4 DE AGOSTO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Julio F. Barba**, en representación de **LILLIAN HILL DE VELÁSQUEZ** ha interpuesto Solicitud de Declaratoria de Desacato contra el Ministro de Educación por incumplir la orden impartida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 4 de agosto de 1993.

El peticionario fundamenta su solicitud de esta manera:

...

"2°) Por sentencia de 4 de agosto de 1993, ya ejecutoriada, esa Sala Tercera declaró que "es ilegal el Resuelto N°175 de 31 de enero de 1992 emitido por el Ministerio de Educación, en el cual se traslada a la Señora Lillian Hill de Velásquez".

3°) De conformidad con lo ordenado por el artículo 68 de la Ley 33 de 1946, al quedar ejecutoriado dicho fallo y comunicado con la remisión de la copia íntegra de su texto al Ministerio de Educación para su ejecución y cumplimiento.

4°) No obstante este mandato legal, el Ministerio de Educación ha hecho caso omiso del mismo, por lo que la Señora Lillian de Velásquez se halla separada de su posición de Secretaria III con funciones en el Consejo Nacional de Educación.

...

6°) El artículo 10 de la Ley 33 de 1946, considera como desacato la desobediencia o incumplimiento de las órdenes de ese Tribunal y señala las sanciones correspondiente."

De la referida solicitud, se le corrió traslado al Ministro de Educación, quien mediante Nota de 14 de septiembre de 1993, contestó lo siguiente:

"PRIMERO: La señora LILIAN HILL DE VELÁSQUEZ fue trasladada mediante Resuelto 175 del 31 de enero de 1992 hacia la provincia de Darién.

...

TERCERO: Posterior a que el Procurador Judicial de la señora de Velásquez interpone proceso Contencioso de Plena Jurisdicción presenta solicitud para que se ordene la suspensión provisional de los efectos del Resuelto 175 de enero de 1992, es decir que la Honorable Corte Suprema de Justicia ordenara que la señora Hill de Velásquez permaneciera en su posición hasta tanto se resolviera el proceso. No obstante, mediante fallo del 27 de noviembre de 1992 la Corte deniega la solicitud impetrada por el defensor, por lo que se desprende claramente que la señora Hill de Velásquez debió trasladarse hacia el lugar indicado, toda vez que no hubo una suspensión de los efectos del Resuelto, la orden se mantenía y como funcionaria de esta Institución estaba sometida al cumplimiento de las instrucciones impartidas por sus superiores.

CUARTO: En vista de que el traslado de la funcionario (sic) debió hacerse efectivo, ya que la Corte no admite la suspensión de los efectos del traslado y que el proceso se estaba resolviendo en la vía administrativa, y que la señora de Velásquez no se trasladó, procedimos a declarar insubsistente su nombramiento conforme al artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación y bajo Decreto 368 del 30 de julio de 1993."

En virtud de que el Ministro de Educación argumentó que la señora **HILL DE VELÁSQUEZ** había sido despedida mediante Decreto 368 de 1993, pero no constaba en Autos la notificación de dicho acto administrativo a la afectada, este Tribunal consideró de suma importancia conocer si el Decreto en cuestión se le había dado a conocer a la precitada. Por ende esta Sala dictó Auto para Mejor Proveer de 18 de octubre de 1993, el cual le solicitaba al Ministro de Educación remitiera a esta Corporación Judicial copia autenticada de la notificación del Decreto de Personal No.368 del 30 de julio de 1993, a la señora **LILLIAN HILL DE VELÁSQUEZ.**

El Ministro de Educación contestó dicha Resolución, aportando el Decreto precitado, pero sin certificar si la misma había sido notificada o no. Esto es, que no consta en el Decreto autenticado la constancia de la notificación a la señora **LILLIAN HILL DE VELÁSQUEZ**, de su destitución tal como lo ordena el artículo 133 de la Ley 47 de 1946, de lo contrario dicho acto no tiene eficacia. Veamos que contempla la norma en cuestión:

> "Artículo 133. Toda sanción dispuesta en contra de un miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación, será dictada por escrito en forma de resolución, y deberá expresar claramente los motivos de ella, los fundamentos legales y su carácter específico. Tal resolución deberá ser comunicada al interesado por el funcionario que la dicta, por el órgano regular. Al interesado se le conceden veinticuatro (24) horas desde el momento de la notificación para que apele, si lo desea, ante el superior respectivo. Contado desde la fecha de la notificación, el interesado dispone de ocho (8) días para sustentar su apelación."

Entonces, al no estar notificada el acto de destitución emitido por el Ministro de Educación a la señora **LILLIAN HILL DE VELÁSQUEZ**, el mismo no es obstáculo para que sea reintegrada a su puesto de trabajo, cumpliéndose así lo ordenado por esta Sala en sentencia de 4 de agosto de 1993, la cual declaró ilegal el Resuelto N°175 de 31 de enero de 1992 y actos confirmatorios, que trasladaban a la precitada al Primer Ciclo de Yaviza, Darién.

En lo que respecta a la existencia o no del desacato, en que según la parte afectada incurrió el Ministro de Educación, cabe advertir que tal conducta de resistencia no se ha verificado, ya que el funcionario precitado utilizó como argumento para no reintegrar a la señora **LILLIAN HILL DE VELÁSQUEZ** un acto de destitución, que era anterior al que este Tribunal Colegiado emitió, que aunque conocemos que aquel es ineficaz, en principio era razón suficiente para el Ministro el no acceder a reintegrar a la funcionaria demandante.

Por ende el fallo de 4 de agosto de 1993 proferido por esta Corporación Judicial, debe ser acatado por el Ministro de Educación, ya que los fallos de los Tribunales deben ser cumplidos, respetados y observados de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Ley 135 de 1943 y reformado por el artículo 44 de la Ley 33 de 1946 que dice:

> "ARTICULO 99. Las autoridades, corporaciones o funcionarios de todo orden a los cuales corresponda la ejecución de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, dictarán cuando sea el caso, dentro del término de cinco días, contados desde la fecha en que el Tribunal se la comunique, las medidas necesarias para el debido cumplimiento de lo resuelto."

Por todo lo expuesto, los Magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN que no es viable la Declaratoria de Desacato; y en consecuencia ORDENAN al Ministro de Educación reintegrar a su puesto de trabajo a la señora LILLIAN HILL DE VELÁSQUEZ dentro de los cinco días hábiles siguiente a la notificación de esta Resolución.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARISTIDES FIGUEROA EN REPRESENTACIÓN DE SIMÓN WIERZBICKI, CLAUDINA VÁSQUEZ DE MARTÍNEZ Y DIANA GABRIELA BOYD DE MORGAN, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN NO. 286 DE 28 DE DICIEMBRE DE 1987, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Aristides Figueroa en representación de **SIMÓN WIERZBICKI, CLAUDINA VÁSQUEZ DE MARTÍNEZ Y DIANA GABRIELA BOYD DE MORGAN**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 286 de 28 de diciembre de 1987 dictada por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, mediante la cual se resuelve "aprobar el cambio solicitado de RM1 a C2 con un retiro lateral de 1.50 mts. hacia calle Santa Rita e igual con el posterior que colinda con la residencia unifamiliar".

Mediante resolución de dieciocho (18) de febrero de 1991 se admitió la presente demanda solicitándose el informe de conducta al funcionario demandado, según lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, además se le corrió traslado de la demanda al Señor Procurador de la Administración y se abrió el negocio a prueba por el término de ley.

En la etapa de alegatos fue admitida como parte interesada para coadyuvar en la demanda a SARI-SARI, S. A. y como su apoderada a la firma forense Galindo, Arias y López por estimarse que tiene interés directo en el resultado del juicio, ya que en defensa de sus intereses promovió recurso de reconsideración y apelación contra el acto administrativo que se impugna ante esta jurisdicción, los cuales fueron oportunamente resueltos por la administración.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 348, numeral 3, parte final del Código Judicial, en los procesos contencioso administrativos de plena jurisdicción, en los que se impugne una resolución que haya decidido procesos en vía gubernativa, en los cuales haya habido controversia entre particulares en razón de sus propios intereses "deberá darse audiencia a la contraparte de la que ha recurrido ante la Sala Tercera de la Corte".

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA CORRERLE TRASLADO a la sociedad SARI-SARI, S. A., por el término de cinco (5) días de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por SIMÓN WIERZBICKI y otros, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 286 de 28 de diciembre de 1987 del Ministerio de Vivienda; y ORDENA NOTIFICAR a la firma forense GALINDO, ARIAS y LÓPEZ, apoderados judiciales de la Sociedad SARI-SARI, S. A. la resolución de 18 de febrero de 1991.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR SUCRE Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE GILBERTO SUCRE CAMARANO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA NO. 5034-LEG DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Sucre y Asociados en representación de GILBERTO SUCRE CAMARANO, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la nota No. 5034-Leg de 5 de noviembre de 1992, emitida por el Contralor General de la República, mediante la cual se niega el pago de dos meses de gastos de representación al demandante, y para que se haga otras declaraciones.

Acogida la demanda se le corrió traslado de la misma al señor Procurador de la Administración, por el término de ley, y se solicitó al funcionario demandado que rindiera un informe de su actuación en el término de cinco días.

El señor Procurador de la Administración al contestar la demanda, mediante Vista Fiscal No. 368 de 10 de agosto de 1993 (fs. 32-39) se opuso a las pretensiones del recurrente. Por su parte el funcionario demandado en cumplimiento de lo solicitado rindió informe explicativo de su actuación en este asunto jurídico (fs. 14-17), exponiendo en lo medular "que el artículo 5 de la Ley 46 de 1952 establece el principio general de que todo empleado público puede devengar Gastos de Representación fuera de sueldo, siempre que así esté establecido por la Ley. No obstante, el legislador ha querido en determinados casos dejar bien integrado este derecho, como lo es el supuesto contemplado en el Decreto Ley 24 de 3 de septiembre de 1959, el cual preceptúa que los jefes de misión y demás funcionarios diplomáticos se les pagarán Gastos de Representación durante el período de vacaciones o de ausencias autorizadas. El Decreto Ley No. 36 del 10 de agosto de 1953, que modifica la Ley 46 de 1952 indica que los empleados públicos separados definitivamente de su empleo no tienen derecho a que se le paguen Gastos de Representación. Por tanto, los separados temporalmente sí tienen este derecho, interpretándose a contrario sensu la norma. En igual sentido el artículo 20 del Decreto de Gabinete No. 411 de 30 de septiembre de 1970, por medio del cual se dicta el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1971, dispone que el Estado no pagará Gastos de Representación a personas que hayan cesado en sus funciones, incluso en el caso de funcionarios que se rijan por leyes especiales. El funcionario demandado concluye exponiendo que el señor GILBERTO SUCRE sólo tiene derecho a que se le pague el salario que devengaba al momento de su separación y no así, a los Gastos de Representación por el hecho de que él dejó de ejercer el cargo de Viceministro de Trabajo y Bienestar Social".

El demandante alega que el acto administrativo impugnado ha infringido el artículo 147 del Código de Trabajo, el Decreto de Gabinete No. 22 de 5 de febrero de 1990, y los artículos 109 y 118 de la Ley 32 de 31 de diciembre de 1991.

En cuanto a la alegada violación del artículo 147 del Código de Trabajo, la Sala opina que no se ha producido tal violación, pues el recurrente era un empleado público y el artículo 2 del Código de Trabajo dispone que "los empleados públicos se regirán por las normas de la carrera administrativa, salvo en los casos en que expresamente se determine para ellos la aplicación de algún precepto en este Código".

Como no se ha establecido por ley que la norma del Código de Trabajo que se alega violada es aplicable a los servidores públicos, en este caso no es aplicable al recurrente, quien desempeñaba un cargo público.

En lo que se refiere a la violación del Decreto de Gabinete No. 22 de 1990, en el libelo de la demanda el actor no señaló el precepto legal que estima violado, ni el concepto de su infracción.

Por lo expuesto, debe desestimarse los cargos de violación del artículo 147 del Código de Trabajo y el Decreto de Gabinete No. 22 de 5 de febrero de 1990 que se le endilga al acto administrativo impugnado.

Por último, el recurrente estima infringidos los artículos 109 y 118 de la Ley 32 de 31 de diciembre de 1991, pues "el acto acusado de ilegal desconoce el derecho al pago de gastos de representación a que tiene derecho nuestro poderdante durante los dos (2) meses de vacaciones acumulados, quien al fungir como Viceministro de Trabajo y Bienestar Social adquirió, ya que los fondos para tal pago fueron previstos en la partida 0.13.0.20.01.01-022, vigencia fiscal 1991" (fs. 9).

La Sala sobre estos dos cargos de ilegalidad estima que le asiste la razón al recurrente, pues el artículo 109 de la Ley 32 de 1991 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1992", preceptúa que **la renuncia o destitución de un funcionario no afectará su derecho por las vacaciones acumuladas pendientes**, las cuales le serán pagadas de conformidad con las disposiciones vigentes.

El artículo 118 de la ley 32 antes mencionada preceptúa que los viceministros tendrán derecho a gastos de representación.

Además, el artículo 3, literal b del Decreto de Gabinete No. 22 de 5 de febrero de 1990 "Por el cual se establece la escala salarial para altos funcionarios públicos", establece que los viceministros de Estado devengarán mensualmente la suma de B/.2,000.00 en concepto de salarios y B/.1,500.00 en gastos de representación. Como la renuncia o destitución de un funcionario no puede afectar su derecho a las vacaciones acumuladas pendientes, y los viceministros de Estado reciben como emolumentos un salario y gastos de representación, debe pagarse al recurrente el total de la suma que, de conformidad con la ley, devengan mensualmente los viceministros de Estado, la cual incluye gastos de representación.

De consiguiente, la Sala estima que el acto impugnado infringe los artículos 109 y 118 de la Ley 32 de 1991, porque desconoce el derecho del recurrente a percibir los gastos de representación, como parte de la remuneración que debe recibir por las vacaciones acumuladas pendientes al presentar su renuncia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL el acto administrativo contenido en la Nota No. 5034-Leg de 5 de noviembre de 1992, emitida por el Contralor General de la República y se ORDENA el pago de la suma de dinero que se le adeuda a GILBERTO SUCRE CAMARANO en concepto de gastos de representación correspondientes a parte de la remuneración que debe recibir por el derecho a las vacaciones acumuladas pendientes de pago al presentar su renuncia del cargo de Viceministro de Trabajo y Bienestar Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA Y RIVERA, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLON, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.03-91 DE 29 DE JULIO DE 1991, EXPEDIDA POR LA JUNTA DE LA ZONA LIBRE DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO MOLINO MALA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **Rivera y Rivera**, en representación de la **Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón** han interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.03-91 de 29 de julio de 1991, expedido por la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón.

La parte actora sustenta su pretensión en los siguientes hechos:

> **"PRIMERO:** La Junta Directiva de la Zona Libre de Colón, dictó la Resolución N°03-91 de 29 de julio de 1991, publicada en la Gaceta Oficial N°21.945 de 3 de enero de 1992, mediante la cual en su artículo PRIMERO (1°) ordena que a partir de enero de 1992, todas las personas que arrienden locales de propiedad de la Zona Libre de Colón deberán asumir los costos de mantenimiento, reparación, pintura interior y exterior del inmueble y de los seguros contra incendio y extensión de cubierta. (destacado nuestro)

> **SEGUNDO:** El acto acusado, cuya nulidad se solicita es de carácter general, impersonal y objetivo."

Adicionalmente señala que la Resolución antes citada, viola los artículos 7 y 29 del Decreto Ley N°18 de 17 de junio de 1948; y artículo 40 del Decreto N°428 de 7 de septiembre de 1953:

Posteriormente el Magistrado Sustanciador le solicitó al Presidente de la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón rindiera informe de conducta en relación a la Resolución acusada de ilegal, y el precitado Dignatario señaló lo siguiente:

> "De acuerdo al artículo XIX del Decreto Ley N.18 de 1948 le corresponde a la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón dictar las pautas y políticas administrativas que regirán dicha Institución.
>
> En base a dicha norma y tomando en consideración que desde 1985 no se aumentan los canones de arrendamiento de los locales comerciales de propiedad de la Zona Libre de Colón, la Junta Directiva dispuso **girar instrucciones a los departamentos administrativos pertinentes**, a efectos de que se incluyera en los contratos de arrendamiento de local, una cláusula que obligara a los arrendatarios a asumir los costos de mantenimiento, reparación, pintura interior y exterior del inmueble así como de los seguros contra incendio y extensión de cubierta.
>
> La idea fundamental era producirle un ahorro sustancial a la Institución, trasladándole a los arrendatarios unos gastos que resultan mínimos, si los consideramos desde una perspectiva individual en cada uno de ellos. De esta manera se evitaba el tener que hacer un aumento en los canones de arrendamiento, cosa de la que la Institución se jacta tanto localmente como internacionalmente y que le sirve de promoción por ser uno de sus atractivos (El tener los canones de arrendamiento más bajos a nivel comparativo internacional y el que desde hace ocho años no se han aumentado los mismos. Esto último da imagen de estabilidad). En busca de una alternativa que representara ingresos a la Institución, sin tener que alterar uno de sus atractivos e instrumentos de mercadeo, se pensó en trasladar los costos antes aludidos a los usuarios arrendatarios de la Zona Libre de Colón."

De igual forma se le corrió traslado al Procurador de la Administración quien apoyó la pretensión de la parte actora.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados de la Sala Tercera entran a resolver la presente controversia. Antes de estudiar las violaciones alegadas por la parte demandante, deseamos señalar que el artículo 7 del Decreto Ley N°18 de 17 de junio de 1948 no está relacionado con la pretensión, tal como lo considera el Procurador de la Administración por lo que esta Corporación Judicial no entrará a conocerlo.

La primera norma que se estima conculcada por la Resolución N°03-91 de 29 de julio de 1991, es el artículo 29 del Decreto Ley N°18 de 17 de junio de 1948, y los afectados explican la infracción así:

> "Tal como se observa a prima facie, la disposición transcrita viola flagrantemente el artículo 29 de la Ley Orgánica, ya que como hemos señalado, esta norma es clara al imponerle a los propietarios de construcciones y edificaciones, sin hacer distinción entre particulares y la Zona Libre, la obligación de contratar los seguros contra incendio. En consecuencia, al estar la Administración obligada por Ley en este sentido, no tiene ella facultad para trasladar esta responsabilidad a sus arrendatarios, constituyéndose este acto administrativo a todas luces conculcatorio al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Institución."

Frente a lo argüido por la parte afectada, debemos indicar que le asiste razón, en virtud de que el artículo 29 del Decreto Ley N°18 de 17 de junio de 1948 es claro al prever quien asumirá los costos de seguro de incendio, y es precisamente los propietarios de las construcciones y edificaciones que se encuentra operando dentro del área de Zona Libre. Cae de su peso que estos bienes inmuebles forman parte del patrimonio de la Zona Libre de Colón, tal como lo contempla el artículo XXXVIII, del Decreto Ley previamente citado. Además la propia Resolución N°03-91 de 29 de julio de 1991, en el artículo primero reafirma que esos locales arrendadas son de propiedad de la Zona Libre de Colón.

Desde el momento que la compañía de seguro al contratar para el mencionado seguro de incendio debe satisfacer las condiciones que establezca la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón, se confirma que la norma alude directamente a la Zona Libre de Colón como la propietaria de las construcciones y edificaciones arrendadas que operan dentro del área asignada para dicha Zona, y es quien mediante su Junta directiva debe asumir el costo de un seguro contra incendio y extensión de cubierta, para proteger los locales comerciales.

El artículo 29 del Decreto Ley N°18 de 17 de junio de 1948 dice:

> "Toda construcción o edificación que se haga dentro de las áreas de comercio libre que posea u opere la Zona Libre de Colón, deberán ser asegurados contra incendio por su propietario, en una Institución aseguradora que esté autorizada para operar en la República, a satisfacción de la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón."

Claramente la Resolución N°03-91 de 29 de julio de 1991, ha violado el artículo 29 del Decreto Ley N°18 de 1948, por lo que prospera el cargo incoado.

Por último se considera que de igual forma el acto administrativo emitido por la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón, vulnera el artículo 40 del Decreto N°428 de 7 de septiembre de 1953, y sustentan dicha infracción así:

> "Como se observa en el artículo 40 del Decreto 428 ... la obligación establecida por Ley radica en la **conservación y limpieza de los locales arrendados y sus alrededores**.
>
> Consideramos que la **conservación** para el propósito del contrato de arrendamiento, y tomando como base lo establecido en el Código Civil, en sus artículos 1306 numeral "2", 1332 y 1307 numeral "2", **debe interpretarse estrictamente como el uso de la cosa arrendada con la diligencia del padre de familia**, es decir, darle el uso pactado, además de la limpieza usual del inmueble. Lo relativo a las reparaciones, pintura interior y exterior de dichos inmuebles es responsabilidad exclusiva del arrendador. De lo contrario se estaría más allá de la letra y espíritu de la norma"

Coincidimos una vez más con lo expresado por el demandante, ya que el precepto legal comentado es claro; el mismo no da lugar a que se incluya dentro de lo que se denomina "conservación del bien", que el arrendador debe asumir el costo del seguro de incendio y extensión de cubierta. La norma está a encaminada a que el arrendador se haga responsable de la limpieza y reparaciones de estos inmuebles, y estas responsabilidades están inmersas en lo que se conoce como "las obligaciones de un buen padre de familia", como atinadamente lo insinúa el actor.

Según CABANELLAS, Padre de Familia "es el arquetipo de la persona diligente en el cuidado, custodia y administración de las cosas" ... (CABANELLAS, GUILLERMO; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VI, P-9 16ª Edición, Editorial Heliasta S.R. L., Buenos Aires, Argentina, 1981. pág.30).

Se infiere de la definición que el arrendador debe comportarse de tal forma frente al inmueble, que impida el deterioro del mismo, con excepción de las que se verifiquen por el paso del tiempo. En este mismo sentido el Procurador de la Administración planteó un argumento parecido al expuesto, cuando dice:

> ... "la responsabilidad que tiene los arrendatarios con respecto a los locales comerciales que le arrienda la Institución de la Zona Libre de Colón; la responsabilidad de realizar el mantenimiento, reparación, pintura interior y exterior del inmueble son acciones concretas a través de las cuales se materializa, se verifica la responsabilidad de los arrendatarios en el uso, disfrute, conservación y limpieza de la cosa arrendada."

El artículo 40 a que hemos hecho alusión, no contempla la posibilidad de endosar el pago de un seguro de incendio a los arrendadores, cuando la ley es clara al prever que el mismo es por cuenta de los propietarios de los locales comerciales y como ya hemos acotado, sólo uno es el propietario: la Zona Libre de Colón.

Por las anteriores consideraciones los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución N°03-91 de julio de 1991, expedido por la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA GÓMEZ, GIRALDO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE KAROLCO CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.02/JD-92 DE 30 DE ABRIL DE 1992, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE ASEO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha presentado recurso de apelación contra la providencia de 13 de agosto de 1993, mediante la cual la Honorable Magistrada Sustanciadora admitió la demanda presentada por la firma Gómez, Giraldo y Asociados en representación de KAROLCO CORPORATION contra la Resolución N°. 02/JD-92 de 30 de abril de 1992, emitida por la Dirección Metropolitana de Aseo.

El Procurador de la Administración sostiene en su Vista N° 437 de 29 de septiembre de 1993, que la demanda adolece de dos defectos a saber: que en el punto tercero de la demanda, donde debe indicarse los hechos u omisiones fundamentales de la acción, la parte actora lo titula "III Fundamentos de la Acción"; y omite expresar en forma adecuada las disposiciones legales que se estiman violadas según con lo requerido en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943.

La firma Gómez, Giraldo y Asociados se opuso al recurso de apelación mediante escrito que fue presentado ante esta Sala el 25 de octubre de 1993.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, estima que le asiste razón al Procurador de la Administración, puesto que el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, es claro al señalar que toda demanda presentada ante la jurisdicción contencioso administrativa debe cumplir con ciertos requisitos entre los que se destaca en el numeral 3° "Los Hechos y Omisiones Fundamentales de la Acción". La parte actora denomina erróneamente el punto tercero de la demanda como "Fundamentos de la Acción".

En segundo término, al examinar la demanda se observa que la misma no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que requiere que en aquélla se expresen las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación. Para cumplir con este requisito se requiere que el demandante enuncie formalmente cuál es la norma que se estima infringida y cuál es el concepto de la violación. Este último debe relacionarse con los motivos de ilegalidad previstos en el artículo 16 de la Ley 33 de 1946. Además, el demandante puede exponer las modalidades en que se haya producido la infracción literal de los preceptos legales lo cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación según se ha señalado en reiterada jurisprudencia de esta Sala.

En virtud de lo antes expuesto, lo procedente es, pues, revocar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA del auto de 13 de agosto de 1993, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la firma Gómez, Giraldo y Asociados en representación de KAROLCO CORPORATION para que se declare nula por ilegal, la Resolución N°. 02/JD-92 de 30 de abril de 1992, emitida por la Dirección Metropolitana de Aseo

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD, INCOADA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A., PARA QUE SE INTIME A LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS, A ACATAR LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN CALENDADA 16 DE ABRIL DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El señor Procurador de la Administración ha presentado solicitud para que se declare Sustracción de Materia, dentro de la Solicitud de Desacato presentada por la firma **ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE**, en representación de la **COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A.**, para que se intime a la Directora General de Industrias al cumplimiento de la decisión adoptada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución calendada 16 de abril de 1993.

Esta solicitud fue presentada en momentos en que la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad incoada por la firma forense **ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE** en representación de la **COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A.**, había sido inadmitida, en virtud de apelación presentada contra la Resolución de 27 de abril de 1993, que en principio, había admitido la demanda.

El auto fechado 12 de julio de 1993, que en segunda instancia había declarado no admisible el libelo, nunca se ejecutorió, toda vez que los apoderados legales de la **COMPAÑÍA PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A.**, presentaron reconsideración de tal resolución, y el Tribunal ad-quem, mediante Resolución de 22 de septiembre de 1993, **CONFIRMO** la providencia de 27 de abril de 1993 que **ADMITIÓ** la demanda presentada. Esta situación es constatable en el expediente principal contentivo de la demanda Contencioso Administrativo de Nulidad incoada.

No cabe por lo anterior, considerar de ninguna manera que ha operado en el negocio sub-júdice, el fenómeno de Sustracción de Materia, toda vez que la materia justiciable sujeta a decisión no se ha extinguido; no ha desaparecido el objeto jurídico litigioso (la pretensión), ni el medio a través del cual se reclama el derecho (la demanda). El caso en estudio, en virtud de lo anterior, se mantiene en desarrollo de sus correspondientes etapas procesales.

Estima quien suscribe por ende, que debe negarse la solicitud de Sustracción de Materia presentada por el señor Procurador de la Administración, y correrse traslado al citado funcionario para que conteste en el término de 3 días, el incidente de desacato propuesto por la firma **ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE** en representación de la **COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A.**

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud para que se declare Sustracción de Materia en el incidente de desacato presentado por la firma ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE en representación de la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A., contra la Directora General de Industrias.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDRULFO ESPINALES EN REPRESENTACIÓN DE ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO NÚMERO 6 DE 4 DE ABRIL DE 1991, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ GRANDE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Licdo. Edrulfo Espinales Miranda, apoderado judicial de la empresa ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad con el objeto de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declare que es nulo el artículo primero del Acuerdo No.6 de 4 de abril de 1991, expedido por el Consejo Municipal de Chiriquí Grande, mediante el cual se grava con un impuesto municipal el valor del pasaje que paga "cada vehículo a motor, remolque mesa, etc., que embarque o desembarque en el Municipio de Chiriquí Grande".

A solicitud de la parte demandante, la Sala procedió a suspender provisionalmente los efectos del artículo primero del Acuerdo No.6 de 4 de abril de 1991, mediante auto de 28 de enero de 1992, visible de fojas 27 a 32 del expediente, por considerar que de no hacerlo se ocasionaría un perjuicio "notorio y grave" al recurrente.

El Procurador de la Administración mediante la Vista No. 194 de 15 de abril de 1993 promovió y sustentó el recurso de apelación en contra de la resolución fechada 10 de febrero de 1992, mediante la cual se admite la presente demanda contencioso administrativa de nulidad visible de fojas 50 a 52 del expediente.

El Licdo. Edrulfo Espinales Miranda, presentó escrito de oposición al recurso de apelación incoado por el Procurador de la Administración que obra de fojas 57 a 61 del expediente.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera denegaron el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de la Administración y por consiguiente, confirmaron la resolución de 10 de febrero de 1992 que admite la demanda de nulidad.

El Procurador de la Administración mediante la Vista No. 282 de 8 de junio de 1993, contestó la demanda. Dicho funcionario considera que le asiste razón al demandante en sus pretensiones y solicita a la Sala Tercera acceder a la declaratoria de ilegalidad del artículo primero del Acuerdo No.6 de 14 de abril de 1991, emitido por el Consejo Municipal de Chiriquí Grande ya que, según aquél, dicho artículo atenta contra un principio del Derecho Tributario cual es el de la doble imposición, toda vez que mediante el mismo se pretende gravar una actividad que se encuentra previamente regulada en el Título III del Capítulo V del Libro III del Código Fiscal, en los artículo 343, 344 y 345". Además agrega que si el Estado cobra una tasa por el uso de los muelles, entre los que se encuentra el de Chiriquí Grande no le es permitido al Consejo Municipal de Chiriquí Grande emitir un Acuerdo en donde crea un gravamen ya impuesto por el Estado y máxime cuando según los artículos 21, numeral 6 y 79 de la Ley 106 de 1973 reformada por la Ley 52 de diciembre de 1984, establecen lo siguiente:

> "Artículo 21: Es prohibido a los Concejos:
> ...
> 6. Gravar con impuesto lo que ya ha sido gravado por la nación."
>
> Artículo 79: Las cosas, objetos y servicios ya gravados por la nación no pueden ser materia de impuestos, derechos y tasas municipales sin que la ley autorice especialmente su establecimiento."

La Sala Tercera coincide con los fundamentos expuestos por el Procurador de la Administración, toda vez que resulta evidente el hecho de que el artículo primero del Acuerdo No.6 de 4 de abril de 1991, establece un impuesto municipal sobre aprovechamiento por el uso de la infraestructura municipal portuaria fijándolo en el cinco por ciento (5%) del valor del pasaje que pague cada vehículo a motor, remolque, mesa, etc., que embarque o desembarque en el Municipio de Chiriquí Grande, constituyendo este acto administrativo una manifiesta violación a lo previsto en la Ley 106 de 1973.

Los impuestos se establecen a través de leyes, como lo exige el principio de legalidad, por ello escapa dentro de las atribuciones del Consejo Municipal de

Chiriquí Grande el imponer algún tipo de gravamen a una actividad ya gravada por una ley, con un tributo nacional.

Se observa de fojas 1 a 11 del expediente las facturas correspondientes a los pagos efectuados por la empresa Atlantic Tourist Investment, S. A., de la nave Ferry Palanga a la Autoridad Portuaria Nacional, lo cual hace constar que dicha empresa cumple con la obligación tributaria por la utilización de la infraestructura Municipal Portuaria gravada por la Nación, cuyo fundamento jurídico son los artículos 343 y 1028 (parágrafo) del Código Fiscal:

> "Artículo 343: El servicio de muellaje causará la tasa correspondiente por el recibo y manejo de la carga que se embarque o desembarque de las naves que usen los muelles del Estado.
>
> También causará la tasa correspondiente al atraque de las naves a esos muelles.
>
> Artículo 1028: ...
>
> Parágrafo: El impuesto de Muellaje se hará efectivo aún cuando se usen otros muelles o se hagan los transportes de carga por las rampas o embarcaderos del puerto.
>
> Exceptúanse los casos en que el servicio de muellaje se preste por concesionarios en virtud de contratos administrativos celebrados con el Gobierno Nacional."

La Sala estima, por todo lo expuesto, y al quedar establecido de forma palmaria, que el Consejo Municipal de Chiriquí Grande emitió un acto administrativo contrario a la ley, lo procedente es declarar ilegal el artículo primero del Acuerdo No.6 de 4 de abril de 1991.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es NULO por ilegal el artículo primero del Acuerdo No.6 de 4 de abril de 1991, dictado por el Consejo Municipal de Chiriquí Grande.

Notifíquese, Cúmplase y Publíquese en La Gaceta Oficial.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAÚL J. OSSA, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.28 DE 27 DE ABRIL DE 1993, DICTADA POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Milson Cornejo** en representación de la sociedad **PETROLERA NACIONAL, S. A.**, actuando en su calidad de interesado en el presente litigio, ha solicitado dentro del proceso Contencioso Administrativo de Nulidad propuesto por el Licenciado Raúl Ossa en contra de la Resolución N°28 de 27 de abril de 1993, emitida por el Alcalde del Distrito de Chorrera, el levantamiento de la suspensión de la precitada resolución alcaldicia, ordenada el pasado 12 de agosto de 1993, mediante auto de 12 de agosto del mismo año por parte de esta Corporación de Justicia, argumentando el cese de las circunstancias que la propiciaron.

El actor fundamenta su petición, básicamente en los resultados que arrojó la diligencia de aseguramiento de pruebas (inspección judicial), requerida por la **PETROLERA NACIONAL, S. A.**, visible de foja 20 a la 22 del legajo contentivo de dicha medida cautelar.

Inicialmente este Tribunal Colegiado ordenó la suspensión de los efectos de la Resolución N°28 de 27 de abril de 1993, expedida por el Alcalde de la Chorrera, dado a que las deficiencias e irregularidades en las que incurrió la construcción de la estación de Gasolina Accel propiedad de la Sociedad Inversiones Lee y Lee, S. A., prima facie representaba un alto riesgo y peligro para la ciudadanía en general; y además, debido a que el ordenamiento jurídico estaba siendo ostensiblemente transgredido.

Dicha situación se verificó puesto que los concesionarios inobservaron las medidas de construcción mínimas para asegurar el bienestar de los colindantes y usuarios, toda vez que las máquinas surtidoras de gasolina y los tanques de depósito de combustible que deben estar ubicados a una distancia mínima de 6 metros de acuerdo con el texto del artículo 28-6 del Reglamento de seguridad de los cuerpos de Bomberos de la República de Panamá, en aquella oportunidad solamente guardaban entre si, un perímetro de tan solo 5.70 metros. Aunado a este planteamiento, era igualmente evidente que se incumplió con el texto de la norma precitada, ya que los tanques de

combustibles se encontraban a 5.60 metros de la línea de propiedad del lindero sur-este, cuando la distancia mínima debía ser por razones de seguridad, de por lo menos 7.50 metros a tenor de la norma supraindicada.

Finalmente, se destacó como punto relevante en el auto de 12 de agosto de 1993, que suspendió la mencionada Resolución N°28 de 27 de abril del año en curso, que no constaba en el expediente bajo estudio las correcciones aprobadas por Ingeniería Municipal del plano original distinguido bajo la numeración A68-92. Sin embargo, y de acuerdo con la Inspección judicial efectuada el 20 de septiembre de 1993, llevada a cabo por los peritos Gabriel Ángel Castillo, Hermes Antonio Carrizo M., Baudilio Alvarez Morales y Jorge Vladimir Puente González, en presencia del señor Juez Primero del Tercer Circuito Judicial Licdo. Bernardo Díaz, y de la secretaría del citado tribunal Lic. Lourdes Amores de Sandoval, se puso de relieve tanto la existencia de un nuevo plano registrado bajo la denominación 089-93 que reconsideró y reformó el controvertido plano A-068-92 constando el mismo como documento auténtico, aprobado por el citado departamento de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de la Chorrera, a foja 19 del expediente contentivo de la presente inspección judicial.

En esta diligencia los peritos determinaron, que las distancias entre las máquinas surtidoras de gasolina y los tanques de almacenaje, aumentó a 6.70 metros y, que la distancia entre los referidos tanques y la línea de propiedad del lindero sur-este se fijó en 7.80 metros; con lo cual pausiblemente se subsana los defectos en los cuales incurrió en un principio la construcción de la estación Accel en cuestión.

En esta línea de pensamientos, es notoria la inexistencia de los graves perjuicios que pudiera causar la construcción, en litigio, así como prima facie y a propósito del último peritaje de 20 de septiembre de 1993, no se aprecia la eventual infracción a la invocada excerta legal por parte del licenciado Raúl Ossa, al corregirse las deficiencias incoadas debidamente. Por el contrario, estimamos que el perjuicio económico lo está sufriendo actualmente la sociedad Lee y Lee, S. A.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, LEVANTAN LA SUSPENSIÓN de los efectos de la Resolución N°28 de 27 de abril de 1993 expedida por el Alcalde de la Chorrera, ordenada mediante auto de 12 de agosto de 1993 por este Tribunal de justicia, dentro del proceso Contencioso Administrativo de Nulidad promovido por el licenciado Raúl Ossa en su nombre y representación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUILLERMO BENÍTEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SABAS ROSALES DOGIRAMA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACTA NO. 5 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1974, DONDE SE AUTORIZA LA REVÁLIDA DE 21 DE DICIEMBRE DE 1978 Y EL ACUERDO NO. 5 DE 19 DE ENERO DE 1979, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante escrito fechado el 25 de octubre de 1993, el licenciado Guillermo Benítez, actuando en nombre y representación de SABAS ROSALES DOGIRAMA, ha desistido del recurso de apelación promovido contra el auto de 18 de octubre de 1993, por el cual no se admite la corrección de la demanda contencioso administrativa de nulidad, promovida con el fin de que se declaren nulas, por ilegales, el Acta No. 5 de 11 de septiembre de 1974 de la Junta de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y el Certificado de Reválida de 21 de diciembre de 1978 refrendado por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Rector de la Universidad de Panamá. Solicita además que se desglose algunos documentos que acompañó a su demanda.

A juicio de la Magistrada Sustanciadora, las solicitudes presentadas por el demandante son procedentes, conforme lo indicado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 y 520 del Código Judicial.

Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO del Recurso de Apelación promovido por el licenciado Guillermo Benítez, en representación de SABAS ROSALES DOGIRAMA, contra el Auto de 18 de octubre de 1993, y ORDENA el desglose de los documentos indicados en su solicitud.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VIRGILIO VÁSQUEZ PINTO, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS IVÁN ZÚÑIGA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 308 DE 2 DE JUNIO DE 1993, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE SALUD. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista Fiscal No. 428 de 21 de septiembre de 1993, el Procurador de la Administración solicita que se declare la sustracción de materia en el proceso contencioso administrativo de nulidad promovido por el licenciado Virgilio Vásquez Pinto, actuando en nombre y representación de la Universidad de Panamá, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo No. 308 de 2 de junio de 1993, expedido por el Presidente de la República y el Viceministro de Salud, por el cual se adiciona dos parágrafos al artículo 5 del Decreto No. 93 de 16 de febrero de 1962 y se derogan los Decretos No. 320 de 30 de septiembre de 1963 y 191 de 12 de junio de 1962.

Manifiesta el señor Procurador de la Administración que este decreto ejecutivo fue derogado expresamente por el artículo 18 del Decreto Ejecutivo No. 665 de 25 de agosto de 1993, publicado en la Gaceta Oficial No. 22.370 de 10 de septiembre de 1993, por medio del cual se modifica la denominación del Capítulo I, y los artículos 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y se adicionan los artículos 1a, 2a, 2b, 2c, 2ch, 7a, 15a, del Decreto No. 93 de 16 de febrero de 1962 y se deroga el Decreto No. 308 de 2 de junio de 1993 y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

El apoderado judicial de la Universidad de Panamá se opuso a la solicitud del señor Procurador de la Administración, y requirió a la Sala "un pronunciamiento de fondo, y que a tal efecto tome en cuenta las disposiciones contenidas en el Decreto No. 665 de 25 de agosto de 1993, publicado en la Gaceta Oficial No. 22.370 de 10 de septiembre 1993, ya que en el mismo implícitamente se reproducen en otro lenguaje las mismas situaciones que contemplan el Decreto Ejecutivo No. 308 de 2 de junio de 1993, expedido por el Presidente de la República por conducto del Ministro de Salud, cuya suspensión fue decretada por esa Superioridad".

A juicio de la Sala, la solicitud presentada por el señor Procurador de la Administración se ajusta a derecho, ya que conforme el artículo 18 del Decreto Ejecutivo No. 665 de 25 de agosto de 1993 que establece nuevas disposiciones en materia de Registro y Control de las especialidades farmacéuticas y productos similares, se "deroga el Decreto No. 308 de 2 de junio de 1993", cuya ilegalidad se solicita en la presente demanda.

Por tanto, esta Sala estima que en el presente negocio opera el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, y en consecuencia, debe ordenarse el cese del procedimiento.

Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA, en el proceso contencioso administrativo de nulidad promovido por el licenciado Virgilio Vásquez Pinto, en representación de Carlos Iván Zúñiga, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo No. 308 de 2 de junio de 1993, expedido por el Presidente de la República por conducto del Ministro de Salud; y LEVANTA la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, decretada mediante la resolución fechada el 6 de agosto de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUILLERMO A. DE LEÓN LEE, EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES NO. 62-91 DE 20 DE JUNIO DE 1991, LA NO. 72-93 DE 1o. DE ABRIL DE 1993, LA NO. 142-93 DE 28 DE MAYO DE 1993 Y LA NO. 167-93 DE 24 DE JUNIO DE 1993, EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICAS Y ELECTRIFICACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante resolución de 30 de septiembre de 1993, esta Sala negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones No. 62-91 de 20 de junio de 1991, la No. 72-93 del 1 de abril de 1993, la No. 142-93 del 28 de mayo de 1993 y 167-93 de 24 de junio de 1993, emitidas por la Junta Directiva del Instituto de Recursos

Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E.), en la demanda contencioso administrativa de nulidad propuesta por el licenciado Guillermo De León Lee.

Contra esta resolución, el apoderado judicial de la parte actora, Guillermo De León Lee, ha promovido y sustentado recurso de reconsideración, a fin de que, previa su revocatoria, se decrete la suspensión provisional pedida.

Como lo ha señalado esta Sala en varias ocasiones el recurso promovido es improcedente, porque siendo la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado una potestad discrecional que le otorga al Pleno de la Sala el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, las decisiones sobre esta materia sólo pueden ser revocados por la Sala y no mediante la interposición de recursos.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO, por improcedente, el recurso de reconsideración propuesto por el licenciado Guillermo De León Lee, contra la Resolución de 30 de septiembre de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LIC. JOEL C. LUQUE F., EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ACUICULTORES (ASPAC), PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO NO.2DO. CÓDIGO 1.1.2.6.99, DEL ACUERDO NO.8 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1992, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAME, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Joel C. Luque F.** en representación de la **ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ACUICULTORES (ASPAC)** ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad en contra del artículo N°2, Código 1.1.2.6.99 del Acuerdo Municipal N°8 de 24 de noviembre de 1992, emitido por el Consejo Municipal del Distrito de Chame.

La controversia incoada por el licenciado **Luque** ante este ente corporativo, se verifica debido a que la cría de camarones en estanques naturales o artificiales, ha sido gravada con un tributo que asciende a B/.3.50 por hectárea de dicho cultivo por parte del Consejo Municipal de Chame, situación ésta que a su parecer implica la imposición de una doble tributación al respecto; transgrediéndose en consecuencia, el texto de los artículos 21 y 79 de la ley 106 del 8 de octubre de 1973.

Por su parte el Consejo Municipal de Chame en su informe explicativo de conducta argumentó básicamente lo siguiente:

> "SÉPTIMO: Como es conocido por todos la ley 106 de 1973 fué (sic) modificada por varias leyes entre ellas la ley 52 del 1984 que a su vez fué (sic) modificada por el decreto ley 21 de 1989, derogando en su totalidad el artículo 21 de la ley 106 de 1973 y que aduce al Demandante a violado esta Corporación Edilicia, mediante el Acuerdo N°8 del 24 de Nov. de 1992.
>
> OCTAVO: Este Consejo Municipal mediante el Acuerdo N°8 de Noviembre de 1992, gravó mediante un impuesto de B. 3.50 (sic) la actividad de la Cría de Camarones en estanques naturales, ó artificiales, actividad lucrativa que se explota en tierras que pertenecen al ejido Municipal del Distrito de Chame.
>
> NOVENO: Dicho impuesto fué (sic) creado porque la ley 106 y la Constitución Nacional faculta al Municipio para crearlo. Además este impuesto solo cubre las hectáreas utilizadas por la Empresa AQUA= CHAME S. A. y RIVOFLAVIA INC., para la cría de Camarones en estanques naturales ó artificiales. El Municipio no le tiene gravado ningúna (sic) hectarea (sic) que no este utilizando para la cría de Camarones más la Nación si le grava todas las hectareas (sic) concedidas, las esté o no utilizando. Desde el año 1983 dichas empresas estan (sic) pagando el impuesto mencionado por la suma de B./2.50 (sic) por hectareas (sic) utilizadas y éste año que se incrementó a B./3.50 (sic) se han molestado."

Finalmente, el señor Procurador de la Administración al contestar la demanda bajo estudio en interés de la ley, coincidió con el planteamiento del actor, esgrimiendo que la actividad de cría de camarones había sido gravada previamente por la Nación.

Encontrándose el proceso en este estado, los magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la controversia incoada.

Estima el demandante que Artículo N°2 Código 1.1.2.6.99, del Acuerdo N°8 de 24 de noviembre de 1992, infringe los artículos 21 y 79 de la ley 106 de 8 de octubre de 1973, explicando el concepto de la violación en ambos casos de la subsiguiente manera:

> "Los estanques naturales o artificiales (sic) para la cría de camarones es un bien de dominio público, que para ser explotado, conforme lo prevé el artículo 264 del Código Fiscal, por un particular requiere que se le otorgue un Contrato de Concesión, que obliga al consencionario (sic) a pagar por el uso de las albinas para desarrollar dicha actividad una carga tributaria o monetaria, y esta carga económica que pesa sobre las concesiones que otorgan el uso y explotación de las albinas dedicadas a la cría y ceba de camarones, constituye un gravamen u obligación fiscal.
>
> A todas luces, al imponerse un gravamen de B/.3.50 por hectáreas a las empresas que se dedican a la cría de camarones en estanques naturales o artificiales, (sic) a través del Código 1.1.2.6.99, en su artículo N° 2° del Acuerdo N°8 de 24 de noviembre de 1992, dictado por el Honorable Consejo Municipal del Distrito de Chame, se está violando el numeral 6° del artículo 21 y el artículo 79 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, que le impiden a los Municipios gravar con impuestos municipales lo que ya ha sido gravado por la Nación, y en ello consiste la violación, es decir, en gravar algo que ya está gravado, lo cula (sic) constituye un doble gravamen.
>
> Por lo anterior, ruégoles declarar NULO POR SER ILEGAL, el Código 1.1.2.6.99, del artículo N° 2° del Acuerdo N°8 de 24 de Noviembre de 1992, dictado por el Honorable Consejo Municipal del Distrito de Chame, y que aparece publicado en la página 18 a la 32 de la Gaceta Oficial N° 22.207 de 19 de enero de 1993."

Al respecto, es importante determinar la doble tributación a la cual hace referencia el recurrente en el concepto de la violación pretranscrito en párrafos anteriores, de las normas impetradas de ilegal. El artículo 1.1.2.6.99 del acuerdo N°8 de 1992, impugnado por la **ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ACUICULTORES (ASPAC)**, modifica el régimen impositivo del Municipio de Chame y específicamente grava a las empresas dedicadas a la cría de camarones en estanques naturales o artificiales con un impuesto de B/.3.50 por hectárea.

En lo concerniente al desarrollo de esta actividad, el Código Fiscal consagra las siguientes disposiciones aplicables directamente al caso, tal como se observa a continuación:

> "ARTICULO 14. Los bienes nacionales consistentes en minas, salinas y fuentes de sal, de hidrocarburos, aguas minerales naturales, productos naturales análogos, huacas indígenas, baldíos y bosques, bienes inadjudicables y de uso o dominio público se sujetarán en cuanto a su utilización, conservación y explotación a las leyes especiales que rigen la materia y, en su defecto, a disposiciones especiales contenidas en los Títulos o Capítulos respectivos de este Libro."
>
> "ARTICULO 64. Los contratos administrativos, tales como los de ejecución de obra pública por cualquier modalidad, la gestión de una función administrativa, cuando proceda o de servicios públicos, los de suministro, los de explotación de bienes inadjudicables o de dominio público, así como aquellos cuyo objeto sea complementario a los de gestión de funciones administrativas o de servicios públicos y aquellos en los cuales se haya convenido la resolución administrativa del mismo prevista en el artículo 68, se sujetarán a las disposiciones del presente Título y, en su defecto, a las normas de derecho común, siempre que no quede afectado el interés público.
>
> Los contratos que no se encuentren en el supuesto anterior se regirán:
>
> a. En cuanto a su preparación y celebración, por las normas contenidas en sus leyes orgánicas, las disposiciones en materia de licitaciones públicas, concurso de precios o solicitud de precios, cuando procediere, y las normas sobre aprobación u otorgamiento de concepto favorable que determinen las leyes especiales por el Consejo de Gabinete u otro organismo o entidad, los que tendrán la naturaleza de actos reparables sujetos a su anulación, conforme el derecho administrativo.
>
> b. Por las normas de derecho privado que no se opongan al interés público y que le sean aplicables en cada caso, salvo que exista una disposición legal especial, y supletoriamente por las disposiciones del presente Título.
>
> Parágrafo: Los términos de días y horas en las licitaciones y en los concursos se contarán en la forma que establece el Código Administrativo."
>
> "ARTICULO 264. El Estado conserva la propiedad exclusiva de las salinas y de las minas de sal descubiertas o que se descubran en su territorio y las explotará directamente o por sus concesionarios mediante licencias o contratos que al efecto otorgue o celebre."

El negocio bajo análisis implica en su casuística, un bien de dominio público, cuáles son las denominadas albinas, que para ser explotadas por un particular requieren como requisito indispensable, que las mismas sean otorgadas a través de un contrato de concesión, que obliga al concesionario a pagar una suma de dinero anual por el uso de éstas; constituyéndose dicha carga económica que pesa sobre las indicadas concesiones, en un gravamen o tributo.

Los artículos 21 y 79 de la Ley 106 de 1973, indican claramente que le es prohibido a los Municipios gravar a través de impuestos, actividades que con anterioridad lo hayan sido por parte de la Nación, dado que como principio sine qua non, se persigue primordialmente evitar el fenómeno de la doble tributación, como se observa seguidamente, para mayor ilustración, en el contexto de las disposiciones antes señaladas:

"ARTICULO 21. Es prohibido a los Concejos:
...
6. Gravar con impuestos los que ya ha sido gravado por la Nación."

"ARTICULO 79. Las cosas, objetos y servicios ya gravados por la Nación no pueden ser materia de impuestos, derechos y tasas municipales sin que la Ley autorice especialmente su establecimiento."

Es notoria la aludida doble tributación a la cual venimos haciendo referencia, en virtud de que los afectados tendrán que pagar tanto al fisco nacional, como al Tesoro Municipal, sumas de dinero producto del impuesto atribuido por el Estado a las concesiones de las albinas, y del tributo que les impuso como obligación el Municipio de Chame a los criadores de camarones a través del Artículo 2 Código 1.1.2.6.99 del Acuerdo N°8 de 24 de noviembre de 1992, recurrido por la Asociación de Acuicultores demandante; procediendo en consecuencia los cargos endilgados.

Con relación a esta situación, se pronunció esta Sala de la Corte en reciente fallo de 27 de noviembre de 1992, a propósito del caso instaurado por la **ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ACUICULTORES (ASPAC) -vs- EL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUADULCE**; fallo éste que en su parte esencial, determinó lo siguiente:

"Tal como lo indican el artículo 21, numeral 6 y el artículo 79 de la Ley 106 de 1973, no se puede gravar con impuestos municipales lo que ya ha sido gravado por la Nación.

Como puede observarse el impuesto creado por el Consejo Municipal de Aguadulce grava el número de hectáreas o sea, el terreno, que según el plano de ubicación, se utilice para el desarrollo del proyecto de cría y ceba de camarones en cautiverio, estén o no estos proyectos en producción. Tal como lo afirma el actor, las albinas son un bien de dominio público que pertenece al Estado, y éste al darle en concesión, su uso, para un fin determinado, a cambio le impone una carga al concesionario, y por tanto el gravamen municipal creado por los artículos 1, 2 y 3 del acto impugnado, constituyen un doble gravamen sobre el mismo bien, cuyo uso fue concedido para el desarrollo de una determinada actividad.

En cuanto al gravamen establecido en el parágrafo de ese acuerdo, sobre guía de transporte la cría comercial de camarones, la parte no ha señalado las normas que viola, ni el concepto de las infracciones, por lo que la Sala estima que no puede resolver sobre su ilegalidad en este proceso.

En consideración a lo expuesto, la Sala estima que prosperan los cargos de violación de los artículos 21 ordinal 6 y 79 de la Ley 106 de 1973."
(el subrayado es nuestro)

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES ILEGAL, el artículo 1.1.2.6.99 del Acuerdo N°8 de 24 de noviembre de 1992 que reforma el régimen de cría de ceba de camarones emitido por el Consejo Municipal del Distrito de Chame.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA XIOMARA RÍOS DE VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE ALCIBIADES GONZÁLEZ (ALCALDE DEL DISTRITO DE COLON), PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO No. 101-40-17 DE 4 DE JUNIO DE 1992, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE COLON. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista Fiscal No. 163 de 25 de marzo de 1993, el señor Procurador de la Administración solicita se declare que se ha producido la sustracción de materia en el proceso contencioso administrativo de nulidad promovido por la Licenciada XIOMARA RÍOS DE VALLARINO, actuando en nombre y representación de **ALCIBIADES GONZÁLEZ (Ex-Alcalde del Distrito de Colón)**, para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo No. 101-40-17 de 4 de junio de 1992, expedido por el Consejo Municipal de Colón, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el período fiscal del 1 de Enero al 31 de diciembre de 1992.

Manifiesta el señor Procurador de la Administración que este Acuerdo Municipal No. 101-40-17 de 4 de junio de 1992, fue derogado tácitamente por el Acuerdo Municipal No. 101-40-3 de 14 de enero de 1993 por medio del cual se aprueba en todas sus partes el Presupuesto para Ingresos y Egresos por el período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993, y que en consecuencia se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

El apoderado judicial del Presidente del Consejo Municipal de Colón, al presentar su informe de conducta expresó lo siguiente:

> "PRIMERO: El Consejo Municipal de Colón, aprobó por insistencia el Acuerdo 101-40-17 de 1992 conforme a la facultad señalada en el acápite c) del Artículo 41-A de la Ley 106 de 1973, reformada por la Ley 52 de 1984.
>
> SEGUNDO: Ante las objeciones del Alcalde y exigencias del Consejo Municipal para la ejecución del mencionado Acuerdo, se solicitó la mediación de la Asociación Nacional de Abogados, Capítulo de Colón, llegándose al acuerdo de derogar el Acuerdo 101-40-17 y finalizar el año con el Presupuesto de 1991, ajustándose algunos renglones.
>
> TERCERO: El Acuerdo 101-40-17 fue derogado mediante el Acuerdo 101-40-23 de 27 de Agosto de 1992."(fs. 82-83)

A juicio de la Sala, la solicitud presentada por el señor Procurador de la Administración procede, aunque no por los hechos por él expuestos sino porque, tal como lo afirma el apoderado judicial del Consejo Municipal del Distrito de Colón, el Acuerdo Municipal No. 101-40-23 de 27 de agosto de 1992, resuelve en su artículo único, derogar, conforme la facultad que le otorga al Consejo Municipal el Artículo 15 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973 reformada por la Ley 52 de 1984, el Acuerdo No. 101-40-17, acto que se impugna en este proceso.

Procede, por tanto, declarar en el presente negocio, que se ha producido el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, y en consecuencia, ordenar el cese del procedimiento.

Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA, en el proceso contencioso administrativo de nulidad promovido por la Licenciada XIOMARA RÍOS DE VALLARINO en representación de ALCIBIADES GONZÁLEZ (Ex-Alcalde del Distrito de Colón), para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo No. 101-40-17 de 4 de junio de 1992, expedido por el Consejo Municipal de Colón.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO CONTENCIOSO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS (RESIDENCIA Y PROPIEDAD) INTERPUESTO POR EL LICENCIADO IVÁN TEJEIRA QUIROZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS QUINTERO POVEDA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DM-1106 DE 25 DE MAYO DE 1992, EMITIDA POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución expedida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema el 6 de agosto de 1992 mediante la cual la Magistrada Sustanciadora admite la demanda contencioso administrativo de protección a los derechos humanos, interpuesta por el Lcdo. Iván Tejeira Quiroz en representación de Luis Quintero Poveda.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda mediante Auto de 6 de agosto de 1992 visible a foja 67 del expediente, por considerar que la misma cumple, a su juicio, con todos los requisitos necesarios para su admisión.

El Procurador de la Administración sustenta su recurso mediante Vista número 111 de 5 de marzo de 1993 mediante la cual considera que la demanda no debió ser admitida por cuanto la misma adolece de ciertas deficiencias. En primer lugar, señala el Procurador de la Administración, el Lcdo. Luis Marcial Quintero Poveda carece de título de propiedad sobre la faja de terreno, pues el mismo demandante acepta tener solamente derechos posesorios por lo cual carece de personería sustantiva, es decir, no tiene un derecho subjetivo lesionado, habida consideración de que éste sólo tiene una expectativa de derecho, supuestamente desconocida por la administración. En segundo lugar, alega el Procurador, la demanda adolece de deficiencias que impiden su admisibilidad tales como que el que, tratándose de una demanda de protección a los derechos humanos, no se aduce como violada ninguna ley que consagre los derechos humanos que se estiman lesionados. Aunado a lo anterior, agrega este funcionario, no se señala en forma clara el concepto de la violación de las disposiciones legales que se dicen infringidas y se postula como violados los artículos 32, 26, 17, 18 y 41 de la Constitución Nacional. Finalmente, señala el Procurador, el Ministerio de Obras Públicas carece de competencia para acceder a la petición de nulidad impetrada por el actor puesto que no le es dable al Ministerio de Obras Públicas volver sobre sus propios actos en virtud del principio de irrevocabilidad de los actos administrativos.

El resto de los Magistrados que integran la Sala observan que, efectivamente, la demanda adolece de una serie de deficiencias que hacen imposible su admisión. Por un lado, el apoderado judicial de la parte actora confunde en un solo escrito dos tipos de demanda pues interpone su demanda bajo la denominación de demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para, posteriormente, solicitar dentro de sus pretensiones que se declaren desprotegidos los derechos humanos justiciables de residencia y de propiedad, fundiendo en un solo escrito la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con la demanda contencioso administrativa de protección a los derechos humanos. Por otro lado, los artículos que se señalan infringidos no corresponden a los derechos humanos que se dicen desprotegidos. Aunado a lo anterior, se señalan varias normas supuestamente infringidas a las cuales se les otorga un mismo concepto de la infracción y la explicación correspondiente, lo cual constituye un defecto grave pues las normas supuestamente infringidas deben individualizarse, señalando y explicando por separado a cada una, el concepto de la infracción. También se observa, en ciertos casos, la omisión del concepto de la infracción. Finalmente, se demandan tres diferentes actos administrativos: en primer lugar, la negativa expresa producida mediante Nota DM-1106 del 25 de mayo de 1992; en segundo lugar, la negativa tácita producida por silencio administrativo en la demanda de revisión del plano 44-90 y, por último, la supuesta desprotección de los derechos humanos justiciables de residencia y de propiedad del demandante. Al respecto, ya la Sala ha señalado con anterioridad que los actos administrativos que no sean confirmatorios o reformatorios uno del otro, deben impugnarse separadamente y que solo a esta Sala le corresponde la potestad de decidir, de existir un elemento en común, la acumulación de dos o más demandas.

En vista de que la demanda no cumple con los requisitos necesarios para su admisión, lo procedente es, pues, no admitir la demanda en estudio.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera(Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de protección a los derechos humanos, interpuesta por el Lcdo. Iván Tejeira Quiroz, en representación de Luis Quintero Poveda y en contra del Ministro de Obras Públicas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDA RODRÍGUEZ H., EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO, QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (CASA MATRIZ), SIGUE A CRISTELA HERRERA DE BRAVO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **Eda Rodríguez** en representación de la Caja de Seguro Social, ha interpuesto Tercería Excluyente dentro del juicio ejecutivo que por cobro coactivo le sigue el Banco Nacional a los señores **EDGAR MANUEL BRAVO DÍAZ** y **CRISTELA HERRERA DE BRAVO**, dentro del juicio ejecutivo que por cobro coactivo les sigue el Banco Nacional de Panamá.

La Tercerista esgrime fundamentalmente, que los demandados adeudan a la Institución de Seguridad Social la suma de B/.37,472.26, dada la morosidad en la que incurrieron los señores **Bravo** en lo concerniente al contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética que celebraran con la entidad ejecutante; gravámenes estos que constan en la Escritura Pública No.11273 de 24 de octubre de 1987, la cual está a

su vez inscrita a ficha 88484, Rollo complementario N°7909, documento N°7 de la Sección de hipotecas y anticresis del Registro Público.

La licenciada **Rodríguez** añade además, que la finca N°112,719 en referencia, ha sido secuestrada por el juzgado ejecutor del Banco Nacional de Panamá, mediante auto N°876 de 26 de diciembre de 1990, debido a las sumas de dinero que le adeudan los señores **BRAVO DÍAZ** y **HERRERA DE BRAVO** a la citada la entidad bancaria; cuantía esta que asciende a mil novecientos noventa y uno con 03/100 en concepto de intereses, capital y gastos de cobranzas.

Por su parte la Procuraduría de la Administración se manifiesta a favor de las pretensiones del actor, aseverando esencialmente lo siguiente:

> "Ahora bien, esta Procuraduría considera que a la Caja de Seguro Social le asiste la razón, al interponer la Tercería Excluyente, por las siguientes razones:
>
> 1. Existe en la actualidad, un bien inmueble o finca que pertenece a la Caja de Seguro Social y, a la fecha está siendo objeto de persecución, secuestro y embargo.
>
> 2. La Caja de Seguro Social ha aportado el correspondiente certificado de Registro Público, donde hace constar su **derecho real de crédito con garantía hipotecaria y anticrética**, sobre la finca embargada.
>
> 3. El punto 2, se rige por lo estatuido en el artículo 1788, numeral 2 del Código Judicial.
>
> 4. A la Caja de Seguro Social, le asiste el derecho del "crédito preferencial."
>
> 5. La parte que decretó el ambargo (sic) (Banco Nacional), sobre la finca en mención, no posee ni el título de dominio o un derecho real sobre la propiedad.
>
> 6. Al Banco Nacional, sólo le asiste un derecho personal de crédito hacia los demandados en concepto de una deuda pendiente, por la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON TRES CENTÉSIMOS (B/.1,991.03).
> ...
> Esta Procuraduría considera que la Caja de Seguro Social, tiene los méritos suficientes para interponer Tercería Excluyente en el caso que nos ocupa, pero a su vez **coincide** con la opinión señalada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en la Tercería excluyente promovida por la Caja de Seguro Social, dentro del Juicio Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a María Esther Caballero de Campos y Alexis Campos Avila, fechado once (11) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993).
>
> Al igual que en el fallo mencionado, esta Tercería adolece del auto que decrete el embargo sobre la finca que se pide liberar.
>
> De igual manera, es importante advertir a la Sala de lo Contencioso Administrativo como de manera acertada, el Tercerista (Caja de Seguro Social), aporta dentro de este proceso, los requisitos o documentos requeridos en el ordinal 2 del artículo 549 del Código Judicial, para promover un incidente de rescisión de secuestro.
>
> En virtud que el tercerista ha presentado copia autenticada de un auto de embargo de los bienes despositados, (sic) dictado en proceso ejecutivo hipotecario, hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha de secuestro con la certificación autorizada por el respectivo Juez y su Secretario, con la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el proceso ejecutivo, la fecha del auto de embargo y que dicho embargo está vigente; solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, promueve a favor de la Caja de Seguro Social un incidente de rescisión de secuestro, a fin de resolver sobre el fondo de la controversia." (el subrayado es nuestro)

Finalmente, la Caja del Seguro Social mediante su escrito de alegatos finales, concordó con el representante del Ministerio Público, en el sentido que solicita a este Tribunal colegiado que declare a tenor del texto del artículo 549 numeral 2do. del Código Judicial, la rescisión del secuestro existente sobre la finca N°112719 en cuestión, el cual fue ordenado por la institución ejecutante a través del auto N°876 de 26 de diciembre de 1990, en el evento que no se admita la Tercería excluyente propuesta; debido a que el levantamiento del secuestro constituía en principio su exacta intención, pero que evidentemente equivocó al enunciar el incidente, bajo la denominación de Tercería excluyente.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver el fondo de la litis instaurada.

Al respecto deseamos señalar, que aunque sea evidente que el tercerista posee un derecho real preferencial sobre el bien inmueble en litigio, no le asiste la razón debido a que en este caso en particular para acceder a la exclusión de la finca N°112719 de la ejecución del Banco Nacional de Panamá, es necesario que el interesado cumpla con una serie de requisitos que consagra y estatuye la ley adjetiva para tales

efectos. En atención a esta situación, debemos primeramente puntualizar, que la Tercería en referencia no puede ser admitida como acotamos anteriormente, dado que es necesario e indispensable que el proponente suministre a esta Sala de la Corte la copia debidamente autenticada del auto de embargo que profiriera el Banco Nacional de Panamá sobre la finca en cuestión, ya que el derecho real en el cual fundamenta la Caja de Ahorros su petición, debe preceder al auto de secuestro que a su vez haya sido elevado a la categoría de embargo. Por parte del Banco Nacional de Panamá en otras palabras, es esencial que conste en el expediente dicho auto de embargo si el incidentista aspira a obtener un pronunciamiento a su favor, tal como se desprende del contenido del numeral segundo del artículo 1782 del Código Judicial; resolución esta que aparentemente no ha sido expedida hasta el momento aun por el Banco Nacional de Panamá, ya que lo contrario no consta en el expediente bajo estudio.

En lo que respecta a la intención del actor y de la Procuraduría de la Administración, en cuanto a que este Tribunal ordene la rescisión del secuestro efectuado por el Banco Nacional de Panamá, sobre la citada finca es preciso resaltar, que efectivamente reposa en el negocio bajo análisis, los siguientes documentos que permiten su reconocimiento expreso por parte de los Magistrados que suscriben:

1. Copia auténtica del auto de embargo emitido por la Caja de Seguro Social sobre la finca N112719 en controversia,

2. La certificación suscrita tanto por el juez ejecutor de la Caja de Seguro Social como por el correspondiente secretario del mencionado juzgado ejecutor, en donde consta la fecha de inscripción de la hipoteca en la cual fundamenta la Caja de Seguro Social su pretensión, así como la fecha del auto de embargo N°092-91 y además la ratificación consistente en el hecho de que el embargo en cuestión, permanece vigente en la actualidad.

En este punto se pone de relieve el hecho que el auto de embargo emitido por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social sobre el referido inmueble, es producto del proceso ejecutivo que le sigue esta entidad de seguridad social a los señores **EDGAR MANUEL BRAVO DÍAZ** y **CRISTELA HERRERA DE BRAVO**, en virtud de los derechos reales de hipoteca y anticresis
inscritos con anterioridad al secuestro decretado por el juez ejecutor del Banco Nacional de Panamá.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESCINDE el Secuestro decretado por el juzgado ejecutor del Banco Nacional de Panamá, mediante auto de N°876 de 26 de diciembre de 1990, sobre la finca N°112719 inscrita al rollo 7909, asiento 01, documento N°7 de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá del Registro Público, Propiedad de Cristela Herrera de Bravo y Edgar Manuel Bravo Díaz y se ORDENA que el citado bien inmueble se ponga a órdenes del Juzgado Ejecutor de la Caja del Seguro Social, conforme al texto del artículo 549 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA EXCLUYENTE INTERPUESTA POR LA FIRMA AHUMADA Y SALAS, EN REPRESENTACIÓN DE DAYSI PANIZA LARA (EL MENOR RODRIGO GONZÁLEZ PANIZA) DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (IFARHU) A MANUEL GUERRA Y RODRIGO GONZÁLEZ JURADO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA.

VISTOS:

Mediante resolución de 5 de junio de 1992, este despacho sustanciador, de conformidad con los artículos 709, 710 y 711 del Código Judicial, y por razones de economía procesal, procedió a ordenar la acumulación de las tercerías excluyentes interpuestas por la firma forense Ahumada y Salas, en ejercicio de los poderes que le otorgaron **ILEANA GISELA JIMÉNEZ AGUILERA**, **LOLITIN DEL CARMEN PAREDES DE GONZÁLEZ Y DAYSI PANIZA LARA**, para representar a sus menores hijos **FRANKLIN ENRIQUE GONZÁLEZ JIMÉNEZ**, **GABRIEL ALBERTO GONZÁLEZ PAREDES**, **RODRIGO ALONSO DÍAZ PAREDES Y RODRIGO GONZÁLEZ PANIZA**.

Estas tercerías fueron propuestas dentro de los juicios ejecutivos por cobro coactivo que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) le sigue a **MANUEL GUERRA**, **ZURDO CARRERA Y RODRIGO GONZÁLEZ JURADO.**

Mediante dichas tercerías se solicita que la Sala deje sin efecto el embargo decretado sobre dineros depositados en el Banco General S. A., en depositados a plazo fijo (Plan Futuro), cuyos certificados se distinguen con los números 037, 038, 039 y 040, todos con fecha de emisión de 4 de mayo de 1990 y fecha de vencimiento el 6 de mayo de 1996, y que, a juicio de la parte actora, pertenecen de manera íntegra y

exclusiva a los terceristas. Además señalan los terceristas que las ejecuciones promovidas no han sido sometidas a los trámites de Ley, particularmente en lo relativo a la notificación de la demanda y a las formalidades del embargo.

Admitidas las tercerías excluyentes, se corrieron en traslado al Juez Ejecutor del IFARHU, a los ejecutados y al Procurador de la Administración, por el término de la Ley. Oportunamente fueron contestadas por el Juez Ejecutor del IFARHU y por el Procurador de la Administración.

Cumplidos los trámites de Ley, la Sala procede a resolver los negocios acumulados, previo el estudio de los actos procesales ejecutados dentro de los procesos en los cuales se promovieron estas tercerías.

Las tercerías excluyentes o de dominio, como las denomina la doctrina, constituyen el medio por el cual un tercero, distinto al acreedor y al deudor, demanda la reivindicación de bienes embargados en una ejecución como propiedad del ejecutado, demostrando que posee a su favor un título de dominio o derecho real cuya fecha sea anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya precedido al embargo. El numeral 4 del artículo 1788 del Código Judicial señala que si se trata de bienes muebles, como en el presente caso, la anterioridad del título debe referirse a la fecha del auto ejecutivo o de secuestro, y para probar este hecho son admisibles todas las pruebas con que puedan acreditarse los derechos reales sobre estos bienes.

En el presente negocio, los terceristas manifiestan que son propietarios, de manera íntegra y exclusiva, de los certificados de depósito a plazo fijo (Plan Futuro) del Banco General S. A., numerados 037, 038, 039 y 040. Dichos documentos son de fecha anterior a los autos de secuestro dictados en los respectivos procesos ejecutivos por cobro coactivo promovidos por el IFARHU, en contra de los señores **MANUEL GUERRA, ZURDO CARRERA Y RODRIGO GONZÁLEZ JURADO.**

En estas ejecuciones se libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de los deudores principales de las obligaciones dimanantes de contratos de préstamos suscritos con la institución, y en contra de RODRIGO GONZÁLEZ JURADO, quien se obligó como deudor solidario al pago de las referidas obligaciones.

Mediante Nota No. 93(225-01)325 de 12 de mayo de 1993, la Gerencia del Banco General, S. A. informó "que el embargo decretado por el IFARHU contra RODRIGO GONZÁLEZ JURADO únicamente ha recaído sobre la cuenta de depósito a Plazo Fijo No. 322-269526-00, que dicho señor mantiene en esta institución distinguido con el Certificado No. 038, constituido el 4 de mayo de 1990, con vencimiento el 4 de mayo de 1996, y cuyos titulares **(no beneficiarios)** son las siguientes personas: **FRANKLIN ENRIQUE GONZÁLEZ JIMÉNEZ** (menor de edad) o **LOLITIN PAREDES DE GONZÁLEZ o RODRIGO GONZÁLEZ JURADO".**

Agrega el Banco que la medida cautelar solicitada por el IFARHU no ha afectado los depósitos a Plazo Fijo numerados 322-269525-00, 322-269527-00 y 322-269528-00, que distinguen los Certificados de Depósito No. 037, 039 y 040, constituidos el 4 de mayo de 1990, con fecha de vencimiento el 4 de mayo de 1996.

En base a lo anteriormente expuesto, deben declararse no probadas las tercerías en las que se pide el desembargo de los certificados de depósitos numerados 037, 039 y 040, ya que sobre éstos no ha recaído la orden de embargo.

En el caso del Certificado de Depósito No. 038 expedido a nombre de **"FRANKLIN ENRIQUE GONZÁLEZ JIMÉNEZ (menor) o LOLITIN PAREDES DE GONZÁLEZ O RODRIGO GONZÁLEZ JURADO"**, la Sala debe reiterar el criterio de que, de acuerdo al numeral 3 del artículo 3 de la Ley 42 de 8 de noviembre de 1984, por el cual se regulan las 'y', 'y/o' y 'o' en las cuentas bancarias de depósitos de dinero a nombre de dos o más personas y se dictan otras disposiciones, la expresión 'o' en las cuentas bancarias de depósitos de dinero, para designar la relación entre las personas a cuyo nombre está la cuenta, hará entender que cada una de ellas es dueña de la totalidad de la cuenta, y en consecuencia, la orden de embargo, secuestro, suspensión o retención de pagos decretada por la autoridad competente sobre los fondos de cualquiera de los cuentahabientes recae sobre la totalidad de la cuenta hasta la concurrencia de la suma indicada en la orden.

Por tanto, la Sala no puede levantar el embargo decretado sobre el depósito a plazo fijo distinguido en el Certificado de Depósito No. 038, ya que con fundamento en la referida norma, el señor RODRIGO GONZÁLEZ JURADO es propietario de la totalidad de dicho depósito, y la orden de embargo recae sobre la totalidad de los fondos depositados hasta la cuantía indicada. Por ende, los terceristas no pueden oponer su derecho a la entidad ejecutante y las declaraciones pedidas deben negarse.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADAS las Tercerías Excluyentes promovidas por la firma Ahumada y Salas, en ejercicio de los poderes otorgados por ILEANA GISELA JIMÉNEZ AGUILERA, LOLITIN DEL CARMEN PAREDES DE GONZÁLEZ Y DAYSI PANIZA LARA, para representar a sus menores hijos FRANKLIN ENRIQUE GONZÁLEZ JIMÉNEZ, GABRIEL ALBERTO GONZÁLEZ PAREDES, RODRIGO ALONSO DÍAZ PAREDES Y RODRIGO GONZÁLEZ PANIZA, dentro de los Procesos Ejecutivos por Cobro Coactivo que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) le sigue a MANUEL GUERRA, ZURDO CARRERA Y RODRIGO GONZÁLEZ JURADO.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LCDO. ANTONIO RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DE BREDIO A. MENÉNDEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL A FABRICA DE BLOQUES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Antonio Ríos Ruiz**, en representación del señor **BREDIO A. MENÉNDEZ**, ha interpuesto recurso de apelación contra el auto s/n de 31 de marzo de 1993, dentro del juicio ejecutivo que por cobro coactivo le sigue la Caja de Seguro Social al señor Menéndez.

El recurrente sustenta su pretensión fundamentándose básicamente en el hecho de que el acuerdo amigable de 13 de junio de 1991, que firmara con el señor Leandro Montenegro Martínez en presencia del señor Gonzalo Ortiz, quien fungía como conciliador destinado para tales efectos por la Dirección General de Trabajo de la provincia de Chiriquí, carece de completa validez, toda vez que realmente el patrono del señor Montenegro es la empresa **YEN AGRÍCOLA Y COMERCIAL, S. A.** y el señor Menéndez es simplemente un trabajador que labora en la mencionada empresa. El licenciado Ríos argumenta además, que dicho error es precisamente la coyuntura que propició la expedición de la resolución impugnada, la cual lo condena al Pago de la suma que asciende a cinco mil cinco balboas con 14/100 (B/.5,005.14) en concepto de cuotas obrero patronal riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas, seguro educativo, recargos e intereses en lo concerniente al caso del señor Leandro Montenegro. Cabe resaltar que el impugnante pone de relieve el hecho de haber sido adicionalmente condenado al pago de costas (10% de la cuantía), en completa contradicción a su parecer con el texto del artículo 1805 del Código Judicial.

Por su parte, la Caja del Seguro Social por conducto del juez ejecutor de dicha institución de seguridad social, se opuso a las pretensiones del actor, aduciendo que en "los archivos de LA CAJA DE SEGURO SOCIAL AGENCIA DE BOQUETE, el señor LEANDRO MONTENEGRO, aparece como empleado de FABRICA DE BLOQUES cuyo representante legal es el señor **BREDIO MENÉNDEZ**" esgrimiendo además que tal hecho se acentúa "con más exactitud en el comprobante de Caja Crédito N°45 con fecha 30 de abril de 1992 que textualmente dice: `Patrono FABRICA DE BLOQUES, N° Patronal 43-339-0001, se confecciona éste comprobante para cancelar las planillas adicionales complementarias a favor de LEANDRO MONTENEGRO por el período 1987 a marzo de 1989, por SEISCIENTOSNOVENTA (SIC) Y CINCO BALBOAS CON TREINTA Y OCHO CENTÉSIMOS'. El mencionado recibo aparece en el juicio ejecutivo por cobro coactivo que actualmente reposa en la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual insistimos en la morosidad (sic) **BREDIO MENÉNDEZ** con LA CAJA DE SEGURO SOCIAL". Ahora bien, en el mencionado escrito de objeción, la Caja de Seguro Social acepta el error del cobro de costas al ejecutado dado que el nuevo Código Judicial excluye estos gastos a cargo del demandado.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, entran a resolver la controversia incoada.

En lo atinente a este conflicto en particular, debemos puntualizar, que se desprende tanto del estudio del expediente contentivo de la alzada, como del negocio coactivo administrativo proveniente de la Caja del Seguro Social, dos hechos que inclusive son admitidos por la entidad ejecutante en diversos documentos que reposan en dichos legajos, así como a tenor de la anterior transcripción.

En esta línea de pensamientos, se observa en primer lugar, que el patrono del señor Leandro Montenegro es realmente la sociedad **YEN AGRÍCOLA Y COMERCIAL, S. A.** cuyo número de empleador es 43-339-0001 la cual opera bajo la denominación de Fábrica de Bloques Volcancito, ubicada en la Calle 1ra Sur Boquete, Provincia de Chiriquí, según la copia debidamente autenticada de la Licencia Industrial expedida por la Dirección General de Comercio de la Provincia de Chiriquí, del Ministerio de Comercio e Industrias; visible a foja 33 del expediente coactivo en cuestión; al igual que de acuerdo con la opinión vertida por la entidad de seguridad social en su escrito sustentatorio de la apelación, en el cual acepta claramente que el señor **BREDIO MENÉNDEZ** no es el empleador. Por otro lado, el hecho que el representante legal de la Compañía **YEN AGRÍCOLA Y COMERCIAL, S. A.**, según los documentos tramitados ante el Ministerio de Hacienda y Tesoro, tal como se aprecia de la foja 35 a la 74 del precitado negocio de la ejecución era el señor Máximo Menéndez Caballero y no el señor **BREDIO MELÉNDEZ** como erróneamente indica la Caja del Seguro Social.

Es evidente del producto de las anteriores premisas, que el señor **BREDIO MELÉNDEZ** no tiene responsabilidad alguna para con la institución gubernamental de seguridad social, dado que el único obligado a saldar esta deuda de acuerdo con el texto de los artículos 35b en concordancia con el artículo 31 del Decreto Ley 14 de 1954, Orgánico de la Caja del Seguro Social, es quien ostente la calidad de empleador o patrón, el cual en este caso específico es **YEN AGRÍCOLA Y COMERCIAL, S. A.**, sociedad ésta que opera bajo la denominación comercial de Fábrica de Bloques Volcancito, como mencionamos anteriormente. Dicho empleador tiene la obligación de pagar a la Caja del Seguro Social en concepto de cuotas obrero patronales, el 10.75% del total del salario del trabajador, y este último el 7.25% del mismo, en las fechas establecidas dentro del mes siguiente al que correspondan de acuerdo con el calendario confeccionado por

la Caja del Seguro Social. Para estos efectos, la entidad determinará el sistema de recaudación aplicable a las cuotas tanto de los empleadores como de los trabajadores, reglamentando igualmente las sanciones en las que incurrirán los obligados para con la Institución de Seguridad Social, en caso de incumplimiento.

También es notorio la profunda confusión de la Caja de Seguro Social en lo concerniente al papel que desarrolla el señor **BREDIO MENÉNDEZ** en la empresa **YEN AGRÍCOLA Y COMERCIAL, S. A.** como se observa a foja 5 del expediente de la alzada y 4, 5 y 18 del expediente administrativo, ya que indistintamente le confiere al ejecutado la calidad de patrono y de representante legal de dicha empresa, aceptando de igual manera que el empleador es la Fábrica de Bloques Volcancito, la cual como hemos dicho anteriormente es el nombre comercial de la precitada empresa **YEN AGRÍCOLA Y COMERCIAL, S. A.** Todo lo anterior pone de manifiesto las contradicciones en las que incurre la entidad ejecutante a lo largo del desenvolvimiento de este proceso, y la inexistencia de la obligación del recurrente.

Así las cosas, es plausible la imposibilidad del cobro al señor **BREDIO MENÉNDEZ** de los B/.5,005.14 adeudados por **YEN AGRÍCOLA Y COMERCIAL, S. A.** a la Caja del Seguro Social, y tanto menos de las costas a la que injustificadamente fue condenado, debido a que carecía de toda legitimidad para suscribir el acuerdo amigable de 13 de junio de 1991, legible a foja 2 del expediente administrativo.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCAN el auto s/n de 31 de marzo de 1993 emitido en contra de BREDIO A. MENÉNDEZ dentro del juicio ejecutivo que por cobro coactivo le sigue la Caja del Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JULIO ELÍAS PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE PROMOVENTAS JADE, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA CAJA DE AHORROS SIGUE CONTRA PROMOVENTAS JADE, S. A. Y DIONISIA LAFFO DE LUM. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

El Licdo. Julio Elías Pérez, actuando en representación de Promoventas Jade, S. A., ha interpuesto recurso de apelación en contra de los Autos No.65 y 70 de 9 y 10 de marzo de 1993, dictados por el Juez Ejecutor de La Caja de Ahorros dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que La Caja de Ahorros sigue contra Promoventas Jade, S. A. y Dionisia Laffo de Lum.

Se trata de dos autos mediante los cuales se libra mandamiento de pago contra los ejecutados (Promoventas Jade, S. A. y Dionisia Laffo de Lum) decretando embargo sobre la finca gravada No.18553, inscrita a tomo 499, folio 424, en La Sección de La Propiedad en El Registro Público, por el monto de doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y siete balboas con cuarenta y ocho centésimos (B/.258,697.48). La pretensión de la parte actora consiste en que se revoquen las resoluciones recurridas porque, en su opinión, los títulos de que se sirve la ejecución no prestan mérito ejecutivo, imprescindible para las ejecuciones. Al respecto, señala la parte demandante, el ordinal 1o. del artículo 1640 del Código Judicial, establece que para que los instrumentos especificados como títulos que prestan mérito ejecutivo presentan esa calidad jurídica es necesario que aparezcan extendidos en la forma y con los requisitos de la Ley coetánea con su expedición, según su clase y naturaleza. Por otro lado, agrega, el numeral 15 del artículo 1639 estipula que las certificaciones expedidas por bancos, cajas de ahorros y asociaciones de ahorros y préstamos, debidamente autorizados para explotar sus actividades económicas de conformidad con la ley, en las cuales hagan constar los saldos acreedores que arrojen sus libros de contabilidad contra los ejecutados han de aparecer revisados por Contador Público Autorizado (C.P.A.). A este respecto, señala el demandante, el formulario del Departamento de Crédito Hipotecario de La Caja de Ahorros acompañado como recaudo ejecutivo para preestablecer el saldo acreedor que se ejecuta, no acredita que la revisión haya sido confrontada por profesional de la contabilidad que acredite tal título (C.P.A.) sino simplemente por un oficial de la cuenta, que ni siquiera estampó su firma sino simplemente siglas, en enero 17 de 1992, sin señalar la cantidad líquida ni como deduce tan elevados intereses bancarios que lindan en usura. Por esta razón, señala la parte actora, no se concreta legalmente el mérito ejecutivo de la escritura o instrumento que le sirve de asidero legal a la ejecución que nos ocupa por lo que siendo éste una regla general aplicable a toda clase de ejecuciones, específicamente para La Caja de Ahorros, solicita la revocatoria de los autos recurridos en apelación, porque el instrumento alegado como título principal de la ejecución, no cumple como tal.

La Caja de Ahorros se opone el recurso de apelación que nos ocupa mediante escrito fechado el 4 de mayo de 1993 visible a fojas 10 y 11 alegando que se trata de

una medida dilatoria bajo la cual el recurrente sostiene la tesis de que los únicos documentos que pueden los bancos aportar como títulos ejecutivos los constituyen las certificaciones a las que alude el numeral 15 del artículo 1639 del Código Judicial otorgando erróneamente a dicho numeral un carácter exclusivo. Por otro lado, señala dicha entidad, la acción ejecutiva hipotecaria por cobro coactivo incoada por La Caja de Ahorros contra Promoventas Jade, S. A. y Dionisia Laffo de Lum se fundamenta no solo en el artículo 1639 para lo cual aportó la escritura pública a que alude el numeral cuarto de la mencionada disposición, sino también el artículo 1758, el cual exige que cuando se establezca un proceso ejecutivo por virtud del título hipotecario y se persiga el bien hipotecado, con la demanda ejecutiva debe acompañarse la escritura de hipoteca y un certificado del Registro Público en que consta que la hipoteca está vigente, si hay o no otros gravámenes sobre el mismo bien y quien es el actual propietario del bien inmueble, requisitos éstos a los cuales, alega La Caja de Ahorros, se le dio cumplimiento.

El Procurador de la Administración contesta el Recurso de Apelación mediante Vista No.279 del 7 de junio de 1993 señalando que el auto ejecutivo no tiene respaldo en la certificación antes aludido, sino que tiene como recaudo ejecutivo una escritura pública, en la cual se contiene una garantía real cual es la hipoteca, elemento realmente vinculante, viable y justificante de la ejecución coactiva en estudio. Por otro lado, alega, se ha producido el fenómeno de cosa juzgada puesto que se pretende una apelación sobre tópicos que fueron decididos por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en atención a excepciones invocadas por la demandada, por lo cual la presente apelación es dilatoria e improcedente. A lo anteriormente expuesto agrega el Procurador el hecho de que ya el propio recurrente, al enunciar su recurso, en el marginal superior izquierdo, reconoce que se trata de un proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo, es decir, está consciente que el proceso ejecutivo por cobro coactivo ha sido incoado en virtud de una garantía hipotecaria. También reconoce, a foja dos del recurso, que se sirve como título ejecutivo en este proceso de una escritura pública, que contenía un convenio de préstamos cuya obligación principal fue garantizada con una hipoteca y anticresis. Por todo lo anteriormente expuesto, considera el Procurador, es incuestionable la ejecución porque tiene respaldo en un documento al que la Ley otorga mérito ejecutivo, distinto del documento de que trata el artículo 1639 numeral 15 del Código Judicial.

Esta Sala concuerda con la tesis del Procurador puesto que resulta claro del estudio del expediente contentivo del presente negocio, que se trata de un proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo que tiene como título ejecutivo una escritura pública, la cual, a la luz del numeral 4 del artículo 1639 del Código Judicial, presta mérito ejecutivo. No es necesario, pues, que las certificaciones aludidas por la parte demandante contengan las formalidades exigidas por el numeral 1 del artículo 1640 del Código Judicial, puesto que no constituyen el instrumento alegado como título principal de la ejecución.

Por otro lado, observa la Sala, La Caja de Ahorros cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 1758 del Código Judicial, puesto que, tratándose de un proceso ejecutivo en virtud de un título hipotecario, se adjuntó a la demanda ejecutiva la Escritura No.12685 de 3 de julio de 1987 (visible de fojas 1 a 7 del expediente anexo) en la cual la parte demandante celebra contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética con La Caja de Ahorros y, a foja 29 del expediente anexo, el certificado del Registro Público de 26 de enero de 1993, en el cual consta la vigencia de la hipoteca y anticresis a favor de La Caja de Ahorros sobre la finca No.18,553 inscrita al tomo 449, folio 224 de La Sección de La Propiedad, Provincia de Panamá, así como la vigencia de otros gravámenes sobre la mencionada finca y el nombre de su propietario.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto No.65 de 9 de marzo de 1993 y el Auto No.70 de 10 de marzo de 1993 dictados por el Juez Ejecutor de La Caja de Ahorros dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que La Caja de Ahorros sigue contra Promoventas Jade, S. A. y Dionisia Laffo de Lum.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LA LCDA. INÉS YEE DE CARRERA, EN REPRESENTACIÓN DE ECKO PLAZA, S. A. Y/O MIRZAGHA DANIEL LEVY, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **INÉS YEE DE CARRERA**, en representación de la Sociedad **ECKO PLAZA, S. A.**, ha interpuesto Recurso de Apelación en contra de los Autos N°42 de 21 de julio de 1993, adicionado por el Auto N°45 de 9 de agosto del mismo año, emitidos por el

Juez Ejecutor del **INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO**, en virtud de los cuales se decreta formal secuestro sobre los bienes del Hotel Ecko Plaza, S. A.

El recurrente argumenta los siguientes planteamientos:

"Mi inconformidad con los autos recurridos se debe a que el Juez Ejecutor del Instituto Panameño de Turismo, paralelamente con el Proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva promovidos contra mis representados practicó una medida accesoria al proceso, cual es el secuestro de bienes de mis representados.

Ahora bien, como quiera que el Proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva no debe prosperar ya que se fundamenta en un documento que por si solo la Ley no le atribuye mérito ejecutivo, y como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, al revocarse el auto de mandamiento de pago, éstos autos de secuestros, accesorios al proceso principal, deberán también ser revocados.

Por lo antes expuesto, respetuosamente solicito a esta Honorable Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que revoque los autos apelado, ya que como lo expresamos en líneas anteriores lo accesorio sigue la suerte de lo principal".

Por su parte, el INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO debidamente representado por la licenciada MARÍA INMACULADA CORREA VEGA, se opuso a las pretensiones del actor calificando de novedosa la tesis del impugnante. Agrega además, que el juicio por cobro coactivo se fundamenta en un Título Ejecutivo idóneo y auténtico cual es el certificado de alcance líquido definitivo preceptuado para estos efectos en el texto del artículo 1803 numeral 3° del Código Judicial, expedido debido a la morosidad del ejecutado en lo concerniente al pago de las tasas de servicio de hospedaje.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la controversia incoada.

Al respecto debemos indicarle al actor, que la situación planteada no se encuentra enmarcada dentro de los parámetros de competencia estatuidos en lo que respecta a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Afirmamos lo anterior, debido a que la jurisdicción coactiva creada a favor del IPAT, a través del Decreto de Gabinete N° 36 de 1970 en su artículo 30, derogado mediante Decreto Ley 22 de 21 de noviembre de 1989, y éste a su vez a través de la ley 19 de 3 de agosto de 1992, se eliminó del ordenamiento positivo vigente, específicamente por el texto del artículo primero de la inmediatamente precitada excerta legal.

La ley 135 de 1943 reformada por la ley 33 de 1946, prevé expresamente la falta de jurisdicción como causal de nulidad del proceso, en sus artículos 90 numeral 1° y 91 numeral 1°, lo cual se verifica claramente en esta particular situación. En esta línea de pensamientos, observa la Sala que evidentemente el mencionado ente gubernativo carece de facultades de ejecución coactiva; y por lo tanto, dicho negocio no puede ser ventilado bajo ninguna circunstancia ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, al no ser subsanable la nulidad en referencia, en modo alguno. En otras palabras, la vía idónea con la cual cuenta el INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO para reclamar y lograr el resarcimiento de su acreencia, es la jurisdicción ordinaria. De igual forma se pronunció recientemente este Tribunal colegiado, mediante auto de 20 de septiembre de 1993, en el caso de ALEJANDRO ALONSO GONZÁLEZ Y DE ALEYMAN -vs- EL IPAT.

Cabe destacar que el texto del artículo 722 del Código Judicial, establece en el su artículo 1°, que el juez de oficio puede declarar la Nulidad advertida, lo cual significa que el no es necesario que la misma sea expresa y formalmente solicitada por alguna de las partes integrantes en el litigio, para que sea declarada.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NULO todo lo actuado en el proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO a la Sociedad ECKO PLAZA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO PRÁXEDES PALMA C., EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A AGENCIAS ACRIDU, S. A., RICARDO ALBERTO ACRICH, NEREIDA RAQUEL DE GRACIA RUIZ Y FRANCISCO ALBERTO DUTARI BLOISE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Práxedes Palma, actuando en nombre y representación de la Caja de Seguro Social, ha interpuesto Tercería Coadyuvante dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a **AGENCIAS ACRIDU, S. A., RICARDO ALBERTO ACRICH, NEREIDA RAQUEL DE GRACIA RUIZ y JUAN FRANCISCO DUTARI BLOISE,** para que con el producto de la venta en pública subasta de los bienes perseguidos en esa ejecución, se pague a su representada, con la preferencia correspondiente, la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS BALBOAS CON SETENTA Y SIETE CENTÉSIMOS (B/.342.77)** en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de Ley, más costas, gastos e intereses, que la ejecutada **AGENCIAS ACRIDU, S. A.** adeuda a la institución.

La Caja de Seguro Social fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

"PRIMERO: **AGENCIAS ACRIDU, S. A.** está inscrita en la Caja de Seguro Social, como patrono número 82-203-0001, según consta en los registros de esta Institución.

SEGUNDO: **AGENCIAS ACRIDU, S. A.,** adeuda a la Caja de Seguro Social la suma de B/.342.77 en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de Ley, más las costas, gastos e intereses legales.

TERCERO: Desde su inscripción como patrono, **AGENCIAS ACRIDU, S. A.,** se obligó a pagar las cuotas obrero patronales, tal como lo establece el Artículo 66A del Decreto Ley número 14 del 27 de agosto de 1954, que constituye la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

CUARTO: **AGENCIAS ACRIDU** ha incumplido la obligación contraída al omitir el pago de las cotizaciones ordenadas por Ley.

QUINTO: El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá ha señalado el día 10 de junio de 1993, como fecha para el Remate de los bienes embargados en este Juicio.

SEXTO: La Caja de Seguro Social goza de preferencia respecto de cualesquiera otros acreedores en relación con los créditos por aportes obrero patronales y otros recargos **legales, tal como lo señala el Artículo 77** del Decreto Ley número 14 de 27 de agosto de 1954 Orgánico de la Institución" (fs.4-5).

La tercerista aporta como prueba de su pretensión, copia autenticada de la ficha de inscripción patronal de **AGENCIAS ACRIDU, S. A.;** certificación de la deuda social expedida por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social, en concepto de aportaciones y descuentos de Ley, por la suma de B/.342.77, correspondientes a 2 meses morosos calculados desde agosto de 1987 hasta septiembre de 1987.

Admitida la tercería, se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, al Procurador de la Administración y a los ejecutados por el término de Ley.

Mediante Vista Fiscal No.405 de 2 de septiembre de 1993, el Procurador de la Administración contestó la tercería, y solicitó que se accediera a la pretensión del tercerista.

De acuerdo a las constancias procesales, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, mediante Auto No.221 de 17 de mayo de 1990 dictado dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por esa institución bancaria contra **AGENCIAS ACRIDU, S. A., RICARDO ALBERTO ACRICH, NEREIDA RAQUEL DE GRACIA RUIZ y JUAN FRANCISCO DUTARI BLOISE,** libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra LOS EJECUTADOS, hasta la concurrencia de B/.463,090.21 en concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza, sin perjuicio de los intereses que se sigan causando hasta el completo pago de la obligación, y ordenó el embargo sobre bienes muebles e inmuebles de los ejecutados, gravados con hipoteca a favor del Banco.

El segundo inciso del artículo 1766 del Código Judicial, señala que "las tercerías en las ejecuciones hipotecarias sólo son admisibles en el caso de que los terceristas la introduzcan en virtud de la citación de que trata en este artículo, o por tener algún crédito que reúna las condiciones del artículo 1639" (Subraya la Sala).

El tercerista presentó con su demanda una certificación expedida por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social, en la que consta que **AGENCIAS ACRIDU, S. A.** adeuda a la Caja de Seguro Social, la suma de B/.342.77 en concepto de aportaciones y descuentos de ley correspondientes a 2 meses morosos calculados de agosto a septiembre de 1987.

Este documento presta mérito ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2 del artículo 1803, en concordancia con el ordinal 14 del artículo 1639, ambos del Código Judicial.

Por tanto, debe declararse probada la presente tercería, y ordenarse que con la venta de los bienes perseguidos en esta ejecución, se pague a la tercerista el crédito reconocido a su favor, en el orden que se determine en el auto de prelación correspondiente, conforme lo ordena el artículo 1800 numeral 4 del Código Judicial.

Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA la Tercería Coadyuvante propuesta por el Licenciado Práxedes

Palma, en representación de la Caja de Seguro Social, dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario por Cobro Coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue a AGENCIAS ACRIDU, S. A., RICARDO ALBERTO ACRICH, NEREIDA RAQUEL DE GRACIA RUIZ y JUAN FRANCISCO DUTARI BLOISE; y en consecuencia, ORDENA que con el producto de la venta de los bienes perseguidos en el Proceso Ejecutivo Hipotecario por Cobro Coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue a AGENCIAS ACRIDU, S. A. y a OTROS, se le pague a la Caja de Seguro Social la suma de B/.342.77 en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de ley, más intereses y gastos, en el orden de prelación correspondiente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA EXCLUYENTE,INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME JOVANÉ, EN REPRESENTACIÓN DE RAMÓN CRISTÓBAL ARAÚZ ARANGO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO A CARL FRANKLIN CARDOZE. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **JAIME JOVANÉ** en representación de **RAMÓN CRISTÓBAL ARAÚZ ARANGO**, ha interpuesto Tercería Excluyente dentro del juicio ejecutivo que por cobro coactivo le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a **CARL FRANKLIN CARDOZE.**

El negocio sometido a nuestra consideración, se origina debido a que el tercerista argumenta en su memorial contentivo de su petición, que las 70 hectáreas de terreno supuestamente adjudicadas al señor **CARL FRANKLIN CARDOZE** por parte de la Reforma Agraria, las cuales fueron embargadas por el Banco de Desarrollo Agropecuario producto del incumplimiento del contrato de préstamo que suscribiera dicha institución ejecutante con el señor **CARDOZE** (legible a foja 3 del primer antecedente administrativo del presente proceso), de acuerdo con la afirmación vertida por el licenciado **JOVANÉ**, constituyen la mitad del globo de terreno propiedad de su mandante.

El actor esgrime además, que las referidas 70 hectáreas de terreno dados en garantía del citado préstamo N°42-86 a favor del Desarrollo Agropecuario, ni pertenecen, ni fueron adjudicadas por la Reforma Agraria al señor **CARDOZE**, ya que la solicitud para tales efectos inclusive caducó, en virtud de que el petente no le imprimió el impulso requerido al trámite de adjudicación. No obstante, aun así el Banco de Desarrollo Agropecuario le otorgó al señor **CARDOZE** el préstamo antes señalado, aceptando las 70 hectáreas de terreno ofrecidas en garantía del contrato en cuestión, acerca de las cuales no tenía real conocimiento de su propietario.

El Banco de Desarrollo Agropecuario, entidad ejecutante en este proceso, debidamente representado por el licenciado **MANUEL SALVADOR VÁSQUEZ FERNÁNDEZ**, se limitó a manifestar su opinión en lo que respecta a la improcedencia de la admisión de la corrección de la tercería bajo estudio, y de las pruebas que acompaña y aduce en dicho escrito.

Finalmente, la Procuraduría de la Administración en su memorial de contestación de la corrección del incidente sujeto a análisis, se opuso a las pretensiones del recurrente, esgrimiendo que el impugnado no ha comprobado la veracidad de lo que afirma, aludiendo específicamente a la titularidad del bien inmueble en litigio y a la preexistencia del auto de embargo.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver el conflicto incoado.

Al respecto deseamos manifestar, que coincidimos con la opinión vertida por el representante del Ministerio Público, en el sentido que ni en el negocio principal, ni en los cuatro antecedentes del mismo, reposa el auto de embargo que asegura el tercerista que consta actualmente en uno de dichos expedientes. El auto de embargo en referencia, es indispensable para acceder a la petición del incidentista, a tenor del texto del artículo 1788 numeral segundo (2) del Código Judicial. Igualmente se pronunció recientemente esta Sala de la Corte, en reciente fallo de 26 de mayo de 1992, como observamos a continuación:

> "Efectivamente a foja 17 del expediente se aprecia el auto de secuestro, así como a fojas 19-23 consta la Diligencia de Secuestro Avalúo y Depósito Judicial realizado el día 11 de septiembre de 1991, en virtud de la orden de cautelación emanada del Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario.
>
> De lo que no hay constancia en el expediente, es que el secuestro se haya convertido en embargo, puesto que en ningún momento se aprecia que éste último se haya verificado.
>
> Definitivamente que esta situación hace inadmisible la acción del supuesto tercerista, dado que aún éste no posee legitimación para ocurrir

al Tribunal Contencioso Administrativo; legitimación que obtendría si se hubiera efectuado el embargo, puesto que la tercería excluyente, tal como lo concebía el Código Judicial de 1917, busca un medio de desembargar bienes, y no de levantar secuestros; en este negocio está claro que la misma fue interpuesta de manera anticipada, y a tenor de lo que preceptúa el artículo 1788 del Código Judicial no debe acogerse.

En consecuencia, el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, previa **REVOCATORIA** de la providencia de 5 de noviembre de 1991 que acogió la demanda, **DECIDE NO ADMITIR** la Tercería Excluyente interpuesta por **CECILIA LAMELA DE BRIN** dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el **BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO** a **PEDRO BRIN MARTÍNEZ".**

Por otro lado, aprecia la Corte que si bien es cierto a foja N° 1 del expediente principal, se encuentra la certificación expedida por el Registro Público en cual se le atribuye al señor **RAMÓN ARAÚZ ARANGO** la propiedad sobre la finca N°150 inscrita al tomo 13, folio 182 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Bocas del Toro, ello no acredita fehacientemente la titularidad del dominio de tercerista sobre las 70 hectáreas de terreno en litigio, ya que dicha certificación no alude a los linderos que delimitan el referido inmueble y en consecuencia, no podemos afirmar que el propietario del mencionada finca sea realmente el señor **RAMÓN ARAÚZ ARANGO.**

Así las cosas, se pone de relieve que el interesado no ha cumplido con los requisitos que preceptúa el texto del artículo 1788 del Código Judicial, para poder acceder a las pretensiones del incidentista.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO PROBADA la Tercería Excluyente presentada por el licenciado JAIME JOVANÉ en representación de RAMÓN CRISTÓBAL ARAÚZ ARANGO dentro del juicio que por cobro coactivo le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ELIECER IZQUIERDO EN REPRESENTACIÓN DE SILVIA ROSA PORTILLO DE CORTEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Eliécer Izquierdo Padilla** en representación de **SILVIA ROSA PORTILLO DE CORTEZ,** ha interpuesto excepción de despojo de bien inmueble sin el debido proceso, dentro del juicio ejecutivo que por cobro coactivo le sigue el Banco Hipotecario Nacional.

El licenciado **Eliécer Izquierdo Padilla** en el escrito sustentatorio de su pretensión, argumentó básicamente que la ejecución llevada a cabo por el Banco Hipotecario Nacional, se desenvolvió en medio de una serie de irregularidades que inclusive desembocaron en su opinión, en el desalojo de su propiedad y en la consecuente imposibilidad de posteriormente entrar en posición de la misma, dado que ésta era ocupada por la señora Ilka Nieto con la aquiescencia de la institución bancaria. La parte actora considera que el litigio incoado en su contra, es injustificado debido a que había tratado de cancelar la morosidad existente para con el ente gubernamental, sin poder efectuarlo por la renuencia del Banco Hipotecario Nacional de aceptar los pagos. Por otro lado, el incidentista niega los cargos de abandono del inmueble, arguyendo que por motivos personales lo dejó bajo el cuidado de un vecino.

Por su parte, el licenciado Agustín Best en su calidad de apoderado judicial de la entidad ejecutante, se opuso a las peticiones del excepcionante, alegando principalmente las siguientes situaciones:

1° El abandono y deterioro de la finca el litigio, así como la utilización de ésta por terceras personas, para la realización de actos inmorales.

2° El arrendamiento del inmueble sin el consentimiento del acreedor hipotecario, en contravención al acuerdo de compra venta suscrito al respecto entre las partes intervinientes en este proceso.

3° La morosidad en la que incurrió la deudora y el aumento de ésta por la suspensión de los pagos.

4° Finalmente, el hecho que el proceso en cuestión se refiere a un juicio hipotecario con renuncia de trámites que solo admite a tenor del artículo 1768 del

Código Judicial, las excepciones de pago y prescripción y no otra disímil. Por lo tanto, considera la institución de crédito que el incidente tendiente a enervar la pretensión del Banco Hipotecario Nacional es improcedente, y por lo tanto, solicita que le neguemos la eficacia pretendida por el actor.

Por último, la Procuraduría de la Administración coincidió con el criterio vertido por el ejecutante, alegando esencialmente el incumplimiento del contrato celebrado entre el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL y SILVIA ROSA PORTILLO DE CORTEZ por parte de esta última, así como la particular circunstancia que se deriva de los juicios ejecutivos con renuncia de trámite, que hace permisible solamente la exclusión en la ejecución instaurada, de las excepciones de prescripción o pago.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver el conflicto sometido a su consideración.

En atención a los planteamientos sujeto a nuestro análisis, la Corte desea puntualizar que efectivamente nos encontramos inmersos dentro de una controversia jurídica fundamentada en la renuncia de los trámites del juicio ejecutivo hipotecario, adelantado por el Banco Hipotecario Nacional. Ello consta en la cláusula décimo segunda de la escritura pública N°1024-BIS de 23 de octubre de 1978, mediante la cual, la institución bancaria vendió a la excepcionante la finca N°66.865 en cuestión, y a su vez constituyó primera hipoteca y anticresis a su favor. Ello implica indubitablemente que a la luz del contenido del artículo 1768 del Código Judicial, únicamente los afectados pueden proponer excepciones de pago ó prescripción. Lo anterior restringe el ámbito procesal que pueda ejercer el demandado, una vez que esta coyuntura se acuerde en una convención específica, no pudiendo el contratante-deudor obviar o restarle el valor legal a la misma.

Veamos a continuación, la inteligencia del artículo 1768 del Código Judicial en referencia:

> "ARTICULO 1768. Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez con vista de la demanda y de los documentos que habla el Artículo 1758, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción. El pago puede efectuarse y comprobarse en cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditare haber pagado antes de la interposición de la demanda no será condenado a pagar costas causadas. La prueba ha de consistir en documento auténtico, en documento privado o en actuación judicial de los cuales aparezca de manera clara que se ha efectuado el pago.
>
> Servirá de base para el remate, la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca. Si no se hubiere fijado precio al inmueble se aplicará lo dispuesto en el Artículo 1681."(El subrayado es nuestro.)

Similar criterio fue sostenido en la sentencia de amparo de 7 de diciembre de 1992, en el negocio verificado entre las sociedades **Medea Business Corporation, S. A. Colain, S. A. e Inversiones Myn, S.A -vs- Banco Interoceánico de Panamá** la cual en su parte pertinente esgrimió lo subsiguiente:

> "Considera el Pleno de la Corte que le asiste razón al Juez Tercero del Circuito cuando expresa que en los procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámites **únicamente se admite como defensa del ejecutado las excepciones de pago y prescripción y en el presente caso no se han alegado ni la una ni la otra.**"(El resaltado es nuestro.)

Si el ejecutado estima que sus derechos han sido lesionados por causa de la estipulación de la renuncia de trámites, los mismos pueden hacerse valer posteriormente ante la justicia ordinaria, mediante juicio sumario de acuerdo al artículo 1772 del Código Judicial. En esta línea de pensamientos, es pausible que a esta Sala de la Corte no le es dable acceder a la solicitud del impugnante por manifiestamente improcedente.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO PROBADA la excepción de desalojo de bien inmueble por falta de debido proceso interpuesta por el licenciado Eliécer Izquierdo en representación de SILVIA ROSA PORTILLO DE CORTEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA INÉS YEE DE CARRERA, EN REPRESENTACIÓN DE ECKO PLAZA, S. A. Y MIRZAGHA DANIEL LEVY, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Sala en grado de apelación, el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que el Instituto Panameño de Turismo le sigue a ECKO PLAZA, S. A. y MIRZAGHA DANIEL LEVY.

En dicho proceso la licenciada Inés Yee de Carrera, en representación de ECKO PLAZA, S. A. y MIRZAGHA DANIEL LEVY, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra el auto No. 31 de 21 de julio de 1993 del Juez Ejecutor del Instituto Panameño de Turismo, en virtud del cual se libra mandamiento de pago contra ECKO PLAZA, S. A. y MIRZAGHA DANIEL LEVY, por la suma de B/.13,074.01, en concepto de tasa de servicio de hospedaje, más los gastos judiciales de cobranza que se fijan en el 10% de la suma adeudada, o sea, la cantidad de B/.1,307.40.

La recurrente alega que el Juzgado Ejecutor del Instituto Panameño de Turismo libró mandamiento de pago con base al alcance definitivo que obra en autos a foja 1 del expediente; sin embargo, dicho documento por sí solo no cumple con las exigencias del numeral 3 del artículo 1803 del Código Judicial, el cual dispone que prestan mérito los alcances líquidos definitivos deducidos contra los responsables por la oficina encargada de examinar y fenecer dichos estados de cuenta, acompañados en todo caso del documento público o privado legalmente constitutivo de la obligación por la cual se deducen.

Adicionalmente, la apelante considera que el auto recurrido condena en costas los cuales denomina gastos judiciales de cobranza, a pesar de que el artículo 1801 del Código Judicial, reformado por la ley 15 de 1991, dispone que en estos procesos no habrá condena en costas, sólo los relativos a gastos que hayan sido estrictamente necesarios para la tramitación.

El Juez Ejecutor del Instituto Panameño de Turismo, al presentar sus objeciones al recurso de apelación interpuesto, manifestó que el "El Instituto Panameño de Turismo aportó al proceso ejecutivo por cobro coactivo certificado de alcance definitivo, el cual es un documento público, que según el artículo 1803, numeral 3 del Código Judicial, constituye título ejecutivo.

En cuanto al cobro de costas el mencionado funcionario indicó, que el cobro de las mismas en esta clase de procesos está autorizado por los artículos 1649 numeral 2, 1253, 1057 y 1181 del Código Judicial.

Evacuados los trámites de ley, la Sala procede a resolver la alzada, previas las siguientes consideraciones.

Al examinar el presente negocio jurídico, esta superioridad observa que el Instituto Panameño de Turismo no tiene atribuido el ejercicio de la jurisdicción coactiva, porque la Ley 19 de 3 de agosto de 1992 derogó el Decreto Ley No. 22 de 1989, que en el artículo 10 otorgaba el ejercicio de la jurisdicción coactiva al IPAT.

Como el IPAT no puede ejercer la jurisdicción coactiva, para hacer efectivos sus créditos debe acudir a la jurisdicción ordinaria.

El artículo 722 ordinal 1 del Código Judicial preceptúa que la falta de jurisdicción es causal de nulidad absoluta en todos los procesos, y debe ser declarada de oficio por el Juzgador en el momento en que la advierta. Por tanto, procede en el negocio en estudio declarar la nulidad de lo actuado en cumplimiento al precepto citado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULO todo lo actuado en el proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Instituto Panameño de Turismo a ECKO PLAZA, S. A. y MIRZAGHA DANIEL LEVY.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JACINTO A. CÁRDENAS, EN REPRESENTACIÓN DE CARDMONT, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Jacinto A. Cárdenas M., actuando en su propio nombre y en nombre y representación de CARDMONT, S. A., ha promovido y sustentado recurso de apelación contra el Auto No. 349 de 3 de agosto de 1993, dictado por el Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros, mediante el cual se "señala para el día dos de septiembre de mil

novecientos noventa y tres (1993) para que se lleve a cabo el remate de la Finca No. 7721 inscrita en el Folio 172, tomo 249, Sección de la Propiedad Provincia de Panamá"; se fija como base para el remate de la mencionada finca No. 7721 la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE BALBOAS CON SETENTA Y UN CENTÉSIMOS (B/.195,815.71)"; y se establece que "serán posturas admisibles las que cubran las 2/3 partes de la base del remate y se ordena, asimismo, hacer las publicaciones del Aviso de Remate dentro del término y en la forma que señala la Ley".

Este auto fue dictado dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario por Cobro Coactivo que la Caja de Ahorros le sigue a CARDMONT, S. A. y a JACINTO CÁRDENAS MONTENEGRO.

A juicio de la Sala no procede el recurso de apelación contra la resolución que señala la fecha, y la fija la base del remate, ya que la misma no está incluida entre las resoluciones apelables que enumera el artículo 1116 del Código Judicial.

Por otro lado, en el proceso en examen se presentó como título ejecutivo un contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética contenido en la Escritura Pública No. 6777 de 15 de junio de 1984 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, en cuya cláusula decimoquinta los ejecutados renunciaron a los trámites del juicio ejecutivo.

El artículo 1768 del Código Judicial establece que cuando en el contrato de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez, con vista en la demanda y de los documentos que habla el artículo 1758 ibidem, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción.

En este sentido, la Sala considera que debe declararse no viable la alzada interpuesta, con fundamento en el artículo 1121 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el recurso de apelación promovido por JACINTO A. CÁRDENAS y CARDMONT, S. A., contra el Auto No. 349 de 3 de agosto de 1993 dictado por el Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros dentro del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo que le sigue esa institución bancaria a los recurrentes.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE FALTA DE IDONEIDAD DEL TITULO EJECUTIVO, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, EXCEPCIÓN DE SER CONDICIONAL LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA Y NO ESTAR CUMPLIDA LA CONDICIÓN, INTERPUESTAS POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE HOTEL MONTESERÍN, S. A. Y COMPAÑÍA FAMILIA SEVERINO, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO CONTRA HOTEL MONTESERÍN, S. A., Y/O COMPAÑÍA FAMILIA SEVERINO, S. A. Y/O JUAN LEONELO SEVERINO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Solís, Endara, Delgado y Guevara, en representación de **HOTEL MONTESERÍN, S. A. y COMPAÑÍA FAMILIA SEVERINO, S. A.**, ha promovido excepciones de falta de idoneidad del título ejecutivo, de inexistencia de la obligación, de excepción de ser condicional la obligación que se demanda y de no estar cumplida la condición, dentro del proceso por cobro coactivo que le sigue el Instituto Panameño de Turismo contra **HOTEL MONTESERÍN, S. A. y/o COMPAÑÍA FAMILIA SEVERINO, S. A. y/o JUAN LEONELO SEVERINO.**

El excepcionante en el libelo de la demanda visible de fojas 2 a 7 del presente expediente expone los hechos en que fundamenta las excepciones interpuestas.

Admitidas las excepciones se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Instituto Panameño de Turismo y al Procurador de la Administración, por el término de Ley.

El Instituto Panameño de Turismo debidamente representado por la Juez Ejecutora de dicha Institución, María Inmaculada Correa Vega, contestó el traslado oponiéndose a las pretensiones del excepcionante (fs.11-14).

Mediante Vista Fiscal No.307 de 23 de junio de 1993 el señor Procurador de la Administración se opuso a las excepciones interpuestas alegando en lo medular que le asiste la razón al IPAT, pues de acuerdo con los artículos 1638 y 1639 del Código Judicial, "el certificado de alcance definitivo deducido contra los responsables por la oficina encargada de dichos estados de cuenta, es un Título Ejecutivo por medio del cual puede demandarse por la vía ejecutiva el cumplimiento de las obligaciones exigibles que consten en ese documento" (fs.15-16).

Además afirma el representante del Ministerio Público, "que existe una contradicción manifiesta al interponer las excepciones la parte demandante, habida cuenta de que si no existe la obligación como él mismo manifiesta no existen motivos para alegar excepciones de ser condicional la obligación que se demanda y no estar cumplida la condición, es decir, existe una contradicción entre ambas" (fs.16).

Mediante auto No.20 de 17 de marzo de 1993 el Juzgado Ejecutor del IPAT libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra el Hotel Monteserín, S. A. y/o Compañía Familia Severino, S. A. y/o Juan Leonelo Severino hasta la concurrencia de la suma de B/.54,586.39 en concepto de tasa por servicio de hospedaje dejada de pagar al I.P.A.T., más intereses, y gastos judiciales de cobranza que se fijaron en el 10% de la suma adeudada, todo lo que suma B/.60,045.03.

Sirvió como recaudo ejecutivo el certificado de alcance definitivo contra el Hotel Monteserín y/o Compañía Familia Severino, S. A. y/o Juan Leonelo Severino que obra en autos extendido por el Jefe de Recaudación y refrendado por la Auditoría de la Contraloría en el IPAT.

Evacuados los trámites de Ley, la Sala procede a resolver el presente negocio, previas las siguientes consideraciones.

Al examinar los antecedentes que acompañan las presentes excepciones, la Sala observa que el Instituto Panameño de Turismo no tiene atribuido el ejercicio de la jurisdicción coactiva, porque la Ley 19 de 3 de agosto de 1992 derogó el Decreto Ley No.22 de 1989 que, en el artículo 10, otorgaba el ejercicio de la jurisdicción coactiva al I.P.A.T.

Como el I.P.A.T. no puede ejercer la jurisdicción coactiva, para hacer efectivos sus créditos debe acudir a la jurisdicción ordinaria.

El artículo 722 ordinal 1 del Código Judicial preceptúa que la falta de jurisdicción es causal de nulidad absoluta en todos los procesos, la cual debe ser declarada de oficio por el Juzgador en el momento en que la advierta. Por tanto, procede en el negocio en estudio declarar la nulidad de lo actuado en cumplimiento al precepto citado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULO todo lo actuado en el proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Instituto Panameño de Turismo a HOTEL MONTESERÍN, S. A. y/o COMPAÑÍA FAMILIA SEVERINO, S. A. y/o JUAN LEONELO SEVERINO.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE DAVID FRANCO, CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DAVID FRANCO-VS-EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado **Jorge Enrique Sánchez**, en representación de **DAVID FRANCO**, ha interpuesto Recurso de Casación Laboral contra la sentencia de 30 de septiembre de 1993, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso Laboral **David Franco -vs- Embutidos y Conservas de Pollo, S. A.**

Del referido recurso, se le corrió traslado a la parte contraria, de acuerdo al artículo 927 del Código de Trabajo, quien se opuso a la pretensión del casacionista.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados de la Sala Tercera desean señalar lo siguiente:

Observamos que el recurso incoado por el trabajador **David Franco**, por medio de su procurador judicial, no puede ser admitido, en virtud de que no cumple con lo establecido en el artículo 925 del Código de Trabajo.

Efectivamente el presente proceso laboral trata de una demanda de nulidad contra una carta de renuncia presentada por el trabajador **Franco** a la empresa **Embutidos y Conservas de Pollo, S. A.** lo cual constituye un juicio declarativo, el cual no da cabida a condena pecuniaria, aparte de que el trabajador no está amparado por fuero sindical. Siendo esto así esta clase de proceso no está incluido dentro de los supuestos enunciados en la norma antes aludida, que dice:

> "Artículo 925. El recurso de casación puede interponerse contra las sentencias y los autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación, dictados por los Tribunales Superiores de Trabajo en cualquiera de los siguientes casos:
>
> 1. Cuando hubieren sido pronunciados en conflictos individuales o colectivos con una cuantía mayor de mil balboas;
>
> 2. Cuando se relacionen con la violación del fuero sindical, gravidez, riesgo profesional o declaratoria de imputabilidad de la huelga, con independencia de la cuantía;
>
> 3. Cuando se decrete la disolución de una organización social."

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera, Laboral, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Recurso de Casación Laboral propuesto por el licenciado Jorge Enrique Sánchez, en representación de DAVID FRANCO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. PLINIO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE HERMENEGILDO VALENCIA, CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1993, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: FAUNA DEL MAR, S. A. -VS- HERMENEGILDO VALENCIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado **PLINIO CASTILLO**, en representación de **HERMENEGILDO VALENCIA**, ha interpuesto Recurso de Casación Laboral, incoado contra la Sentencia de 29 de septiembre de 1993, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo.

La Sala advierte de inmediato que el recurso carece de los requisitos mínimos para que sea admitido. En efecto, el recurrente no ha cumplido con lo ordenado por el artículo 927, primer párrafo del Código de Trabajo, que dice:

> "El recurso de casación debe interponerse directamente ante la Corte de Casación Laboral dentro de los cinco días siguientes al en que fue notificada la resolución del Tribunal Superior de Trabajo ...".

Evidentemente el casacionista interpuso el presente recurso fuera de tiempo estipulado en la norma anteriormente transcrita, dado que el Tribunal Superior desfijó el Edicto N°40.353, el primero (1) de octubre de 1993, el cual notificaba la decisión de dicha Corporación Judicial, lo que se traduce a que el recurrente tenía hasta el día ocho (8) de octubre del mismo año para interponer el medio de impugnación.

A foja nueve (9) del expediente puede observarse que el interesado interpuso el recurso de casación ante este Tribunal Colegiado, el día once de octubre de 1993, que a todas luces es extemporáneo.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Recurso de Casación interpuesto por el licenciado PLINIO CASTILLO, en representación de HERMENEGILDO VALENCIA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE DESACATO, INTERPUESTO POR EL LCDO. NARCISO HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE HERMENEGILDO VALENCIA, DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INCOADO CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: FAUNA DEL MAR, S. A. -VS- HERMENEGILDO VALENCIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado **NARCISO HERRERA**, en representación de **HERMENEGILDO VALENCIA**, ha interpuesto Incidente de Desacato dentro del Recurso de Casación Laboral, propuesto ante este Tribunal, contra la Sentencia de 29 de septiembre de 1993, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral: **FAUNA DEL MAR, S. A. -vs- HERMENEGILDO VALENCIA.**

Advierte inmediatamente la Sala, que el incidente propuesto es inconducente por las razones que a continuación exponemos: en primer lugar, y la más importante, es que este Tribunal no es el competente para decidir dicho desacato, dado que la sentencia a que hace alusión el interesado, que es el Auto N°128 de dieciocho de mayo de 1993, la cual ordena el reintegro del señor **VALENCIA** a su puesto de trabajo en la empresa **FAUNA DEL MAR, S. A.**, no ha sido proferida por la Sala Tercera de la Corte; en segundo término y no menos importante, en el evento de que fuéramos competente, el fallo no estaba ejecutoriado, es decir no estaba en firme. Prueba de esto, es que la Resolución a que se hace alusión, fue impugnada por la empresa demandada y mediante Sentencia N°28 de 5 de agosto de 1993 la Juez Segundo de Trabajo de la Primera Sección, revocó el auto anterior, dictado por su propia persona. No conforme con esta última decisión, el trabajador mediante su apoderado judicial apela, y el Tribunal Superior confirma la sentencia aludida.

Todo lo expuesto en líneas anteriores, nos conduce a reafirmar que el Auto N°128 de 18 de mayo de 1993, no era vinculante para que fuera cumplido por la empresa **FAUNA DEL MAR, S. A.**, por las razones antes anotadas.

Aunado lo anterior, está el hecho de que esta Corporación Judicial no admitió el Recurso de Casación propuesto por el trabajador, mediante apoderado judicial, dado que el mismo fue presentado de manera extemporánea, por lo que la decisión del Tribunal Superior de Trabajo queda en firme, negándole eficacia al Auto N°128 de 18 de mayo de 1993.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA POR IMPROCEDENTE, el Incidente de Desacato propuesto por el licenciado NARCISO HERRERA, en representación de HERMENEGILDO VALENCIA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

NOVIEMBRE 1993

CARTA ROGATORIA

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL DE GÉNOVA (ITALIA) EN EL ACTA JUDICIAL DE NOTIFICACIÓN A LA COMPAÑÍA JESAPRIMAR, S. A. EN PERSONA DE SU REPRESENTANTE LEGAL CON SEDE EN EL BUFETE TAPIA, LINARES & ALFARO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a esta Corporación mediante nota DGPE/1622/93 de 28 de junio de 1993, el exhorto librado por el Tribunal de Apelación de Génova, Italia, para la notificación a la sociedad JESAPRIMIR, S. A., a través de su Representante Legal, TAPIA, LINARES Y ALFARO.

Le corresponde a esta Sala Cuarta el conocimiento de las comisiones rogatorias, para determinar su cumplimiento y diligenciamiento a la luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

En vista de que no existe convención en materia de exhortos entre Panamá e Italia, se aplicará el principio de reciprocidad existente en el Derecho Internacional.

Uno de los aspectos que toma en cuenta la Sala para determinar la viabilidad de una comisión rogatoria, es que la misma se encuentre debidamente autenticada. Así, en el caso que nos ocupa, se observa que los documentos remitidos no han sido debidamente autenticados por el funcionario consular panameño establecido en el lugar de su procedencia y tampoco se aprecia en ellos, el sello de la apostilla que legaliza igualmente los documentos surtidos en el país requirente.

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal concluye que no le es posible acceder a lo pedido en la presente oportunidad.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la presente comisión rogatoria.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL MUNICIPAL BOBLINGEN DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA CON RESPECTO AL ASUNTO FAMILIAR CARATULADO DAVID BURKHARDT CONTRA JOHN E. CORTEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Floreal Garrido V., ha ingresado a esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, mediante Nota DGPE/DCL/2469/93 12 de octubre de 1993, la comisión rogatoria librada por el Tribunal Municipal de Boblingen de la República Federal de Alemania, con respecto al asunto familiar caratulado DAVID BURHHARDT contra JOHN E. CORTEZ.

El objeto de la presente comisión, rogatoria consiste en emplazar en breve plazo, al señor John E, Cortez, en Fort Kobbe 455-90-1061 o 536 en BN APO MI 34006 Panamá, Zona del Canal.

La Sala, al realizar el estudio del exhorto en cuestión, observa, que no existe convención en materia de exhortos entre Panamá y la República Federal de Alemania. Sin embargo, le corresponde a esta Sala Cuarta el conocimiento de estos asuntos para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país, a la luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

Uno de los aspectos que debe tomar muy en cuenta la Sala para determinar la viabilidad del cumplimiento de exhorto o comisión rogatoria es si se encuentra debidamente traducido al idioma español, y si no es violatorio del orden público panameño, ya que, de lo contrario aún exista alguna convención entre el Estado requirente y el Estado requerido, debe negarse la práctica de dicha diligencia, puesto que prevalecen estos requisitos.

En el caso que nos ocupa los documentos que acompañan el exhorto no han sido debidamente autenticados por el funcionario panameño en el lugar de su procedencia y además tampoco se ha acreditado a través de una nación amiga, la ausencia de dicho funcionario, y no se aprecia en ellos el sello de la apostilla que legaliza los documentos surtidos en el Estado requirente, siendo éste un requisito indispensable

para declarar viable un exhorto o comisión rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que expidió dichos documentos.

Los señalamientos que preceden a este Tribunal a considerar que no es posible acceder a lo solicitado en esta oportunidad.

En consecuencia, la Sala Cuarta (Negocios Generales) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento en la República de Panamá de la comisión rogatoria librada por el Tribunal Municipal de Boblingen de la República Federal de Alemania, con respecto al asunto familiar caratulado DAVID BURHHARDT contra JOHN E. CORTEZ.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO LOCAL, SECCIÓN CIVIL, ADMINISTRACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA CIUDAD DE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN/REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, PARA LA NOTIFICACIÓN EN EL LITIGIO CIVIL EN LA CAUSA DE DENISE SCHNEBEL CONTRA AVERY D. LEWIS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Floreal Garrido V., ha ingresado a esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, mediante Nota DGPE/DCL/2263/93 de 16 de septiembre de 1993, la comisión rogatoria librada por el Juzgado Local, Sección Civil, Administración de la Circunscripción de la ciudad de Ludwigshafen am Rhein/República Federal de Alemania, para la notificación en el litigio civil de la causa de DENISE SCHNEBEL contra AVERY D. LEWIS.

El objeto de la presente comisión rogatoria consiste en emplazar en breve plazo, al señor Avery Lewis, en PSC Box 2564 APO Miami, FL 34004 Panamá.

La Sala, al realizar el estudio del exhorto en cuestión, observa en primer lugar, que no existe convención en materia de exhortos entre Panamá y la República Federal Alemana. Sin embargo, le corresponde a esta Sala Cuarta el conocimiento de estos asuntos para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país, a la luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

Uno de los aspectos que debe tomar muy en cuenta la Sala para determinar la viabilidad del cumplimiento de un exhorto o comisión rogatoria es si se encuentra debidamente traducido al idioma español, y si no es violatorio del orden público panameño, ya que, de lo contrario aun y cuando exista alguna convención entre el Estado requiriente y el Estado requerido, debe negarse la práctica de dicha diligencia, puesto que prevalecen estos requisitos.

En el caso que nos ocupa los documentos que acompañan el exhorto no han sido debidamente autenticados por el funcionario panameño en el lugar de su procedencia y además tampoco se ha acreditado a través de una nación amiga, la ausencia de dicho funcionario, y no se aprecia en ellos el sello de la apostilla que legaliza los documentos surtidos en el Estado requiriente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o comisión rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que expidió dichos documentos.

Además se observa que la diligencia de emplazamiento requerida no se puede realizar, pues se hace imposible la notificación en el domicilio proporcionado en la solicitud.

Los señalamientos que preceden conducen a este Tribunal a considerar que no es posible acceder a lo solicitado en esta oportunidad.

En consecuencia, la Sala Cuarta (Negocios Generales) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento en la República de Panamá de la comisión rogatoria librada por el Juzgado Local, Sección Civil, Administración de la Circunscripción de la ciudad de Ludwigshafen am Rhein/República Federal de Alemania, para la notificación en el litigio civil de la causa de DENISE SCHNEBEL contra AVERY D. LEWIS.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA NO.1548, LIBRADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN LA CAUSA SEGUIDA MIGUEL ÁNGEL SOLÍS POR EL DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director del Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales la comisión rogatoria No.1548, librada por el Juzgado Segundo de Instrucción de San José, Costa Rica, en la causa seguida contra Miguel Ángel Solís, por el delito de tráfico internacional de drogas en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

El presente exhorto tiene como finalidad obtener en nuestro país certificación de todo el proceso que se le sigue a Belarmino Chávez, en virtud de que según las autoridades costarricenses, este guarda relación con la causa a la cual se refiere la presente comisión rogatoria.

Para resolver conviene señalar que las Repúblicas de Panamá y Costa Rica son suscriptoras de la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias, aprobada en nuestro país por la ley 12 de 23 de octubre de 1975, por lo que dicha Convención es aplicable al exhorto planteado, conforme lo establece el artículo 2 de la misma.

Para determinar si es posible el cumplimiento de la carta rogatoria extranjera es importante verificar si ella no es violatoria del orden público panameño, en el caso de darse dicha violación, debe negarse la práctica de la diligencia solicitada.

Al analizar la carta rogatoria, podemos percatarnos que la misma no contraviene nuestro ordenamiento jurídico y cumple con todos los requisitos necesarios.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el exhorto librado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San José, costa Rica, en la causa seguida contra Miguel Ángel Solís por el delito de tráfico internacional de drogas, y solicita a la Fiscalía primera Superior del Tercer Distrito Judicial, con sede en David, Provincia de Chiriquí, la realización del trámite de las certificaciones solicitadas.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA No.714-93, LIBRADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA CARLOS BARTOLO CASTILLO PÉREZ POR EL DELITO DE USO DE DOCUMENTOS FALSOS EN PERJUICIO DE LA FE PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ,VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director del Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a conocimiento de la Sala Cuarta de Negocios Generales la comisión rogatoria No.714-93, librada por el Juzgado Segundo de San José. Costa Rica, en la causa seguida contra Carlos Bartolo Castillo Pérez, por el delito de uso de documentos falsos en perjuicio de la Fe Pública.

El presente exhorto tiene como fin obtener de la Dirección Nacional de Migración la certificación correspondiente "en el sentido de que si emitió o no el pasaporte No.8-92-974 a nombre de José Vicente Gallardo Carranza".

Es oportuno señalar que Panamá y Costa Rica han ratificado la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias, aprobada por nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley 12 de 23 de octubre de 1975. De dicha consideración resulta aplicable al exhorto el aludido instrumento jurídico de derecho Internacional.

Conforme el análisis del expediente que contiene la presente carta rogatoria, esta Sala puede percatarse que la misma no vulnera o desconoce el orden público panameño, además de que cumple con todos los requisitos que para este caso exige la Convención (art. II, acápite b; IV y VI).

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la comisión rogatoria No.714-93 librada por el Juzgado Segundo de San José, Costa Rica,

en la causa seguida contra Carlos Bartolo Castillo Pérez, por el delito de uso de documentos falsos en perjuicios de la Fe Pública y ORDENA que, por economía procesal, el trámite correspondiente sea diligenciado por Secretaría utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro ordenamiento procesal vigente.

Notifíquese,

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) ARTURO HOYOS.

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General, Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE DERECHO DEL 25° OFICIO DE SAO PAULO, BRASIL, DENTRO DEL PROCESO DE NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA KIETA HOLDING INC. EN LA PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE 53-A, URBANIZACIÓN OBARRIO, TORRE DEL BANCO SUR, PISO 16. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo a la Comisión Rogatoria librada por el Juzgado Sexto del 25° Oficio de Sao Paulo, Brasil, para la notificación de la empresa Kieta Holding Inc, en la persona del Representante Legal, cuyas oficinas se entran ubicadas en la Calle 53-A, Urbanización Obarrio, Torre del Banco Sur, Piso 16, de esta ciudad.

La documentación procedente del Juzgado Sexto del 25° Oficio de Sao Paulo, Brasil, aparece en su versión del idioma portugués y a continuación la traducción correspondiente al idioma español. Sin embargo, al llevar a cabo el estudio de la carta rogatoria se puede apreciar, que por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá lo siguiente:

a) Que entre la República de Brasil y panamá no existe convención que regule la materia de exhorto o cartas rogatorias.

b) Que a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

c) Que en los casos en donde no existe una convención entre los Estados, en acatamiento de las normas de Derecho internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor cooperación procesal internacional.

d) Que cuando en el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentren debidamente autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requirente, que no sean violatorios del orden público interno, y que estén debidamente traducidos al idioma español, por lo que en relación a la autenticidad de los documentos, esto se puede cumplir de tres maneras a saber:

1) Por la incorporación del sello de la apostilla, cuya finalidad es la supresión del trámite y proceso de legalización, y cuyo propósito real se sitúa en la celeridad del tráfico y de los actos o documentos públicos extendidos por Estados extranjeros para producir efectos en el territorio de otro Estado, y solo en el caso de los países que han ratificado la convención americana en materia de exhortos, basta con tramitación de la comisión rogatoria por la vía diplomática.

En el caso que nos ocupa, a pesar de que se hace la traducción de manera oficial y se autentica la firma del traductor no aparece en ninguna parte el sello la diligencia realizada por el funcionario panameño en el lugar de procedencia y esta omisión no permite darle curso al exhorto librado por el Juzgado Sexto del 25° Oficio de Sao Paulo, Brasil, a fin de notificar a la empresa Kieta Holding Inc.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento en la República de Panamá de la comisión rogatoria librada por el Juzgado Sexto del 25° Oficio de Sao Paulo, Brasil, para la notificación de la empresa Kieta Holding Inc, en la persona del representante legal cuyas oficinas se encuentran ubicadas en la Calle 53-A, Urbanización Obarrio, Torre del Banco Sur, Piso 16, de esta ciudad, y ORDENA que se le hagan las comunicaciones de rigor y por la vía diplomática a las autoridades del Gobierno de Brasil para que en conocimiento de lo anterior se subsanen las omisiones anotadas, al tenor de la legislación vigente en la República de Panamá sobre esta materia.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ

Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

ROBERTO A. DE GRACIA, SOLICITA RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DE DEKALB DEL CONDADO DE DEKALB, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS, DE 12 DE MAYO DE 1992. MAGISTRADA PONENTE: AURA GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

VISTOS:

Por segunda vez ingresa a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia la solicitud de reconocimiento de la sentencia extranjera promovida por el licenciado Alejandro E. Watson C., en representación de ROBERTO A. DE GRACIA para que se reconozca la sentencia extranjera dictada por el Condado de Dekalb, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, calendada 12 de mayo de 1992 en virtud de la cual se declare disuelto el vínculo matrimonial que existía entre EVANGELINA MATA DE DE GRACIA y ROBERTO A. DE GRACIA C. .

En cumplimiento de la exigencia del artículo 1409 del Código Judicial, el solicitante presentó copia autenticada de la sentencia N°92C2065 expedida por la Corte Superior de Dekalb, Georgia, que anula y disuelve el vínculo matrimonial entre las partes y le restituye a la cónyuge su apellido de soltera. Dicha sentencia se acompaña de la traducción al idioma oficial de los tribunales de la República, hecha por un traductor público autorizado. Se trata de una pretensión personal de la demandante, de carácter lícito, según el ordenamiento jurídico vigente y consta que la resolución cuyo reconocimiento se solicita, no fue proferida en rebeldía y que es la parte demandada la que presenta el exequátur.

Según consta en este expediente la solicitud de reconocimiento de esta sentencia de divorcio se declaró no viable el 1° de abril del presente año porque los nombres de la demandante adolecían de un error ya que en la sentencia aparecía a nombre de EVANGELINA M. DE GRACIA y en la solicitud aparecía a nombre de EVELINA M. DE GRACIA, este error ha sido subsanado y por tanto nada se opone a su reconocimiento y ejecución, a lo cual se procede previo el registro del matrimonio habido entre las partes en el registro Central del Estado Civil de Panamá.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECONOCE la ejecución de la sentencia de 12 de mayo de 1992, expedida por la Corte Superior de Dekalb, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica que disolvió el vínculo matrimonial existente entre EVANGELINA MATA DE DE GRACIA y ROBERTO A. DE GRACIA C. y DISPONE que se hagan las anotaciones correspondientes en el Registro Civil.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MILCIADES DATILO ANDRIÓN SOLÍS, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE CIRCUITO DE ONCEAVO CIRCUITO JUDICIAL, EN Y POR EL CONDADO DE DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DONDE SE DECLARA DISUELTO EL MATRIMONIO DE LA SEÑORA KREMA AHMAD CASTILLO Y EL SEÑOR MILCIADES DATILO ANDRIÓN SOLÍS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ L. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

El Lcdo. Eric Valoy Caicedo, actuando en representación de MILCIADES DATILO ANDRIÓN SOLÍS, ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por la Corte de Circuito Judicial, en y por el Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, el día 11 de junio de 1990 en virtud de la cual se declara la disolución del matrimonio de dicho señor con la señora KREMA AHMAD CASTILLO.

El peticionario fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

PRIMERO: Que el señor MILCIADES DATILO ANDRIÓN SOLÍS y la señora KREMA AHMAD CASTILLO contrajo vínculo matrimonial en la República de Panamá el día Dos de mayo de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985).

SEGUNDO: Que dicho matrimonio esta inscrito al Tomo 201 de Matrimonio de la Provincia de Los Santos, Partida No.111.

TERCERO: Que la señora KREMA AHMAD CASTILLO presentó ante la Corte de Circuito del Onceavo Circuito Judicial. En y Por el Condado de Dade,

Florida División Familiar, Estados Unidos de América, solicitud de disolución del vínculo matrimonial habido con el señor MILCIADES DATILO ANDRIÓN SOLÍS.

CUARTO: Consta en la Sentencia que el demandado, señor MILCIADES DATILO ANDRIÓN SOLÍS, dio respuesta a los cargos durante el proceso.

QUINTO: Que agotado el procedimiento correspondiente, la Corte de Circuito del Onceavo Circuito Judicial, En y Por el Condado de Dade, Florida, División Familiar, Estados Unidos de América, ordenó mediante Sentencia, del día 11 de junio de 1990, la disolución del vínculo matrimonial habido entre la señora KREMA AHMAD CASTILLO y MILCIADES DATILO ANDRIÓN SOLÍS.

SEXTO: Que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada y se trata de una copia autenticada debidamente traducida al español.

SÉPTIMO: Esta sentencia, cuya ejecución se solicita,reúne los requisitos exigidos por la Legislación Panameña (Artículo 1409 C.J.)".

El apoderado judicial del señor Milciades Datilo Andrión Solís adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General del Registro Civil de PANAMÁ, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República entre el señor MILCIADES DATILO ANDRIÓN SOLÍS y la señora KREMA AHMAD CASTILLO.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista No. 40 de 18 de octubre de 1993 señala lo siguiente:

"La sentencia cuyo reconocimiento se demanda, fue el producto de ejercicio de una acción personal de efectos lícitos en el territorio nacional. aparece en el expediente, copia autenticada al idioma español de esa resolución (fs. 4), y en lo que respecta al establecimiento de la rebeldía del demandado carece de relevancia determinar ese aspecto, puesto que la petición de ejecutoriabilidad examinada, ha sido promovida por el propio demandado, excepción contemplada en el ordinal 2o. del artículo 1409 del Código Judicial, que contiene las exigencias legales a cumplir en la legislación panameña, para que la República de Panamá, reconozca sentencias dictadas en otros Estados.

En conclusión, este Despacho es del criterio que es de lugar proceder a lo peticionario, toda vez que se encuentran reunidos los elementos básicos descritos en el precitado artículo 1409 del Código Judicial."

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte de Circuito Judicial, en y por el Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, el día 11 de junio de 1990 en virtud de la cual se declara la disolución del matrimonio de dicho señor con la señora KREMA AHMAD CASTILLO.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que se realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VIELKA E. MARRE ARCE, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE CIRCUITO UNDÉCIMO, CIRCUITO JUDICIAL DE DADE, FLORIDA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

La firma de abogados ENDARA & MARRE, actuando en representación de **VIELKA ESTHER MARRE ARCE**, han presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por la Corte de Circuito Undécimo del Circuito Judicial, y por el Condado de Dade, florida, Estados Unidos de Norteamérica, el día 1 de septiembre de 1978 en virtud de la cual se declara la disolución del matrimonio de dicha señora con el señor AMADO ALBERTO SARDIÑAS.

La peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

PRIMERO: Que la señora VIELKA E. MARRE ARCE y el señor AMADO ALBERTO SARDIÑAS contrajeron vínculo matrimonial en la República de Panamá el día 31 de diciembre de 1977.

SEGUNDO: Que dicho matrimonio esta inscrito al Tomo 203 de Matrimonio de la Provincia de Panamá, Partida No.371.

TERCERO: Que los señores mencionados presentaron un Acuerdo ante la Corte de Circuito Undécimo, en y por el Condado de Dade, solicitud de disolución del vínculo matrimonial contraído por ambos.

CUARTO: Consta en la Sentencia que la demandada, señora VIELKA E. MARRE ARCE, dio respuesta a los cargos durante el proceso.

QUINTO: Que agotado el procedimiento correspondiente, la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial, en y por el Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de América, ordenó mediante Sentencia, del día 1 de septiembre de 1978, la disolución del vínculo matrimonial habido entre la señora Vielka E. Marre Arce y Amado Alberto Sardiñas.

SEXTO: Que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada y se trata de una copia auténtica debidamente traducida al español.

SÉPTIMO: Esta sentencia, cuya ejecución se solicita, reúne los requisitos exigidos por la legislación Panameña (artículo 1409 C.J.)".

Los apoderados judiciales de la señora VIELKA E. MARRE ARCE adjuntaron a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentaron el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República entre la señora **VIELKA E. MARRE ARCE** y el señor **AMADO ALBERTO SARDIÑAS.**

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista No.42 de 5 de noviembre de 1993 señala lo siguiente:

"Analizada la documentación aportada con la solicitud de declaratoria de ejecutabilidad de sentencia extranjera, observo que la misma ha sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal de efectos lícitos en nuestro país, de acuerdo con lo señalado en el artículo 114 del Código Civil. De igual forma, se aportó copia de la sentencia debidamente autenticada por las autoridades consulares respectivas, y traducidas al idioma español por intérprete público autorizado, en la forma exigida por el artículo 864, párrafo final, del Código Judicial. Es evidente que en el presente caso no estamos en presencia de la rebeldía de que trata el ordinal segundo, artículo 1409 del Código Judicial, ya que ha sido la parte demandada la que solicita el reconocimiento o ejecución de la sentencia matrimonial existente entre aquella y su esposo, el señor Sardiñas.

En consideración a lo anterior, esta Procuraduría considera que es de lugar acceder a lo solicitado".

Observa la Sala, en cuanto a la solicitud de la sentencia que nos ocupa, que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte de Circuito Undécimo, en y por el Conducto de Dade, Florida Estados Unidos de Norteamérica, el día 1o de septiembre de 1978 en virtud de la cual se declara la disolución del matrimonio contraído por los señores **VIELKA E. MARRE ARCE** y **AMADO ALBERTO SARDIÑAS.**

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VALENTINA DE AGUILAR SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR LA CORTE DE CIRCUITO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH, FLORIDA, DIVISIÓN DE DERECHO DE LA FAMILIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1990. MAGISTRADO PONENTE. JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES

VISTOS:

El Lcdo. Joel Aguilar Ortiz, actuando en representación de **VALENTINA DE AGUILAR**, ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por la Corte Decimotercer Circuito Judicial del Condado de Hillsborough, Florida, División de Derecho de la Familia, el día 15 de noviembre de 1990 en virtud de la cual se declara la disolución del matrimonio de dicha señora con el señor JUAN ENRIQUE AGUILAR.

El peticionario fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> **PRIMERO:** Que mi representada, VALENTINA DE AGUILAR, contrajo matrimonio civil con el con el señor JUAN ENRIQUE AGUILAR, en la República de Panamá, el día 24 de mayo de 1974 y dicho matrimonio se encuentra inscrito en el Registro Civil en el Tomo 99 de la provincia de Panamá, partida N°631.
> **SEGUNDO:**Mediante sentencia fechada el 15 de noviembre de 1990, proferida por la Corte de Circuito del Decimotercer Circuito Judicial del Condado de Hillsborough, Florida, División de Derecho de la Familia, se decretó la disolución del vínculo matrimonial, estableciéndose como causal el mutuo consentimiento de los cónyuges, causal plenamente aplicable por nuestro derecho civil vigente.
> **TERCERO:** Que la anterior sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal.
> **CUARTO:** Que dicho fallo no fue dictado en rebeldía, y que dicho proceso de divorcio se efectúo de acuerdo a la legislación procesal de los Estados Unidos de Norteamérica la cual es también totalmente lícita en nuestro país.
> **QUINTO:** Aportamos para pedir la ejecución de esta sentencia extranjera: sentencia debidamente autenticada, proferida por la Corte de Circuito del Decimotercer Circuito Judicial del Condado de Hillsborough, Florida, División de Derecho de Familia, del 15 de noviembre de 1990.

El apoderado judicial de la señora Valentina de Aguilar adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República entre el señor JUAN ENRIQUE AGUILAR HIDALGO y la señora VALENTINA REYES PAÑALBA DE AGUILAR.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista N°43 de 9 de noviembre de 1993 señala lo siguiente:

> "Analizada la documentación aportada por la recurrente observamos que la sentencia ha sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, de efectos lícitos en nuestro país, a tenor de lo señalado por el Artículo 114 y siguientes del Código Civil.
> En cuanto a la rebeldía tratada en el numeral 2 del Artículo 1409, del Código Judicial, la misma no se da en el presente negocio ya que ambas partes se presentaron ante el tribunal que decidiera la causa expresando con ello su consentimiento. No obstante lo anterior, cabe señalar que es la parte demandada la que solicita la ejecución de la sentencia extranjera en Panamá, razón ésta que elimina la figura de la rebeldía.
> Observamos finalmente, que la sentencia está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes.
> Por las consideraciones anteriores, esta Procuraduría es de la opinión que la solicitud que se examina cumple con los requisitos exigidos por la ley, por lo que se debe acceder a lo impetrado en este caso."

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa, que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte de Circuito del Decimotercer Circuito Judicial del Condado de Hillsborough, Florida, División de Derecho de la Familia, el día 15 de noviembre de 1990.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ATENAS, INTERPUESTO POR GEORG. H. SKOURTIS, EN CONTRA DE PREMIER SERVICES S. A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EDIFICIO COMOSA, PRIMER PISO, AVENIDA SAMUEL LEWIS, APARTADO POSTAL 5108, PANAMÁ 5, REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: AURA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

A la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, procedente de la Dirección del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ingresó el cuaderno contentivo del exhorto librado por el Tribunal de Primera Instancia de Atenas, Grecia para el emplazamiento de la Sociedad **"PREMIER SERVICES S. A."**, con sede en la ciudad de Panamá, Edificio Comosa, Primer Piso, Avenida Samuel Lewis, Apartado Postal 5108, Panamá 5, República de Panamá.

La documentación procedente del Tribunal Colegial de Primera Instancia de Atenas aparece inicialmente en su versión del idioma griego y a continuación la traducción correspondiente al idioma español. Sin embargo, al llevar a cabo el estudio del exhorto se pueden apreciar, por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá lo siguiente:

a. Entre las Repúblicas de Grecia y Panamá no existe convención que regule la materia de exhortos;

b. A la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país;

c. En los casos en que no exista una convención entre los estados, en acogimiento de las normas de derecho internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor colaboración procesal internacional;

d. Cuando el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad es necesario que los documentos remitidos se encuentren debidamente traducidos al idioma español, que no sean violatorios del orden público interno y que la documentación en sí reúna los requisitos de autenticidad, lo que se puede cumplir de tres maneras, a saber: por la incorporación del sello de apostilla que legaliza los documentos surtidos en el Estado requirente, por la vía de la autenticación por el funcionario del servicio exterior panameño acreditado en ese país (consulado o encargado de asuntos consulares) y, sólo en le caso de los países que han ratificado la Convención Americana en materia de Exhortos, basta con la tramitación de la comisión o carta rogatoria por la vía diplomática.

En el caso que nos ocupa, a pesar que se hace la traducción de manera oficial y se autentica la firma del traductor, no aparece en ninguna parte el sello de la apostilla o la diligencia realizada por el funcionario panameño en el lugar de su procedencia y esta omisión no permite darle curso al exhorto librado por el Tribunal de Primera Instancia de Grecia a fin de emplazar a la sociedad anónima PREMIER SERVICES S. A.

Por lo tanto, la Sala Cuarta (Negocios Generales) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento en la República de Panamá del exhorto librado por el Tribunal de Primera Instancia de Grecia, para el emplazamiento de la Sociedad "PREMIER SERVICES S. A.", con sede en la ciudad de Panamá, Edificio Comosa, Primer Piso, Avenida Samuel Lewis, Apartado 5108, Panamá 5, República de Panamá y ORDENA que se le hagan las comunicaciones de rigor, por la vía diplomática, a las autoridades correspondientes del gobierno de Grecia para que en conocimiento de lo anterior se subsanen las

omisiones anotadas, al tenor de la legislación vigente en la República de Panamá sobre esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PIREO, GRECIA, INTERPUESTO POR MANIDOIL JETOIL S. A., EN CONTRA DE WESTBAY SHIPPING CORPORATIONM, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, EDIFICIO EASTERN PISO 12, AVENIDA FEDERICO BOYD. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

A la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, procedente de la Dirección del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ingresó el cuaderno contentivo del exhorto librado por el Tribunal de Primera Instancia de Pireo, Grecia para el emplazamiento de la Sociedad **"WESTBAY SHIPPING CORPORATION"**, con sede en la ciudad de Panamá, Edificio Eastern, Piso N°12, Avenida Federico Boyd, en esta ciudad.

La documentación procedente del Tribunal Colegial de Primera Instancia de Atenas aparece inicialmente en su versión del idioma griego y a continuación la traducción correspondiente al idioma español. Sin embargo, al llevar a cabo el estudio del exhorto se pueden apreciar, por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá lo siguiente:

a. Entre las Repúblicas de Grecia y Panamá no existe convención que regule la materia de exhortos;

b. A la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país;

c. En los casos en que no exista una convención entre los estados, en acogimiento de las normas de derecho internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor colaboración procesal internacional;

d. Cuando el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad es necesario que los documentos remitidos se encuentren debidamente traducidos al idioma español, que no sean violatorios del orden público interno y que la documentación en sí reúna los requisitos de autenticidad, lo que se puede cumplir de tres maneras, a saber: por la incorporación del sello de apostilla que legaliza los documentos surtidos en el Estado requirente, por la vía de la autenticación por el funcionario del servicio exterior panameño acreditado en ese país (consulado o encargado de asuntos consulares) y, sólo en le caso de los países que han ratificado la Convención Americana en materia de Exhortos, basta con la tramitación de la comisión o carta rogatoria por la vía diplomática.

En el caso que nos ocupa, a pesar que se hace la traducción de manera oficial y se autentica la firma del traductor, no aparece en ninguna parte el sello de la apostilla o la diligencia realizada por el funcionario panameño en el lugar de su procedencia y esta omisión no permite darle curso al exhorto librado por el Tribunal de Primera Instancia del Pireo, Grecia a fin de emplazar a la sociedad anónima WESTBAY SHIPPING CORPORATION.

Por lo tanto, la Sala Cuarta (Negocios Generales) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento en la República de Panamá del exhorto librado por el Tribunal de Primera Instancia del Pireo, Grecia, para el emplazamiento de la Sociedad "WESTBAY SHIPPING CORPORATION", con sede en la ciudad de Panamá, Edificio Eastern, Piso N°12, Avenida Federico Boyd, en esta ciudad y ORDENA que se le hagan las comunicaciones de rigor, por la vía diplomática, a las autoridades correspondientes del gobierno de Grecia para que en conocimiento de lo anterior se subsanen las omisiones anotadas, al tenor de la legislación vigente en la República de Panamá sobre esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ

(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO UNIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ATENAS, PARA ESTATUIR PLEITO PENDIENTE ENTRE PETRÓLEOS DEL NORTE, S. A., CON SEDE EN LA CIUDAD DE BILBAO, ESPAÑA, CONTRA VARNIMA CHARTERING COMPAÑÍA NAVIERA, S. A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Floreal Garrido, V., ha ingresado a esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, mediante Nota DGPE/DCL/No.2286/93 de 21 de septiembre de 1993, el exhorto librado por el Juzgado Unipersonal de Primera Instancia de Atenas, para estatuir pleito pendiente entre PETRÓLEOS DEL NORTE, S. A., contra VARNIMA CHARTERING COMPAÑÍA NAVIERA, S. A.

El objeto del exhorto en estudio consiste en notificar a Don RODOLFO SILVA BATISTA en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y representante legal de la sociedad bajo la denominación de VARNIMA CHARTERING COMPAÑÍA NAVIERA, S. A., con sede social en Panamá, "-Eastern Building- P.O. Box 8.807- Panamá 5, Avenida Federico (sic) Boyd- Piso XII (Penthouse) de la ciudad de Panamá (República de Panamá)".

La Sala, al realizar el estudio del exhorto en cuestión, observa que no existe convención en materia de exhortos entre Panamá y Grecia. Sin embargo, le corresponde a esta Sala Cuarta el conocimiento de estos asuntos para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país, a la luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

Uno de los aspectos que debe tomar muy en cuenta la Sala para determinar la viabilidad del cumplimiento de un exhorto o comisión rogatoria es si se encuentra debidamente traducido al idioma español y si no es violatorio del orden público panameño, ya que de lo contrario aun y cuando exista alguna convención entre el Estado requiriente y el Estado requerido, debe negarse la práctica de dicha diligencia, puesto que prevalecen estos requisitos.

En el caso que nos ocupa los documentos que acompañan el exhorto no han sido debidamente autenticados por el funcionario panameño en el lugar de su procedencia y además tampoco se ha acreditado a través de una nación amiga, la ausencia de dicho funcionario, y no se aprecia en ellos el sello de la apostilla que legaliza los documentos surtidos en el Estado requiriente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o comisión rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que expidió dichos documentos.

Los señalamientos que preceden conducen a este Tribunal a considerar que no es posible acceder a lo solicitado en esta oportunidad.

En consecuencia, la Sala Cuarta (Negocios Generales) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento en la República de Panamá del exhorto librado por Juzgado Unipersonal de Primera Instancia de Atenas, para la citación de la sociedad anónima VARNIMA CHARTERING COMPAÑÍA NAVIERA, S. A., y en consecuencia ORDENA que el mismo sea devuelto a fin que el mismo sea debidamente autenticado, para así proceder a su diligenciamiento.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR LA ALTA CORTE DE JUSTICIA, QUEEN'S BENCH TRIBUNAL COMERCIAL, PARA QUE SE NOTIFIQUE A LA CEMENTONAVIOS COMPAÑÍA NAVIERA, S. A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE:CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

El Director Encargado del Departamento Consular y de Legalizaciones, por medio de nota DGPE/DCL/2366/93 del 28 de septiembre de 1993, remitió el exhorto librado por la Alta Corte de Justicia, Queen's Bench, Tribunal Comercial para que se notifique a la empresa CEMENTONAVIOS COMPANY NAVIERA, S. A., con domicilio en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

En la referida comisión rogatoria se requiere el reconocimiento de la notificación a CEMENTONAVIOS COMPAÑÍA NAVIERA S. A., con oficinas en Calle Aquilino de la Guardia Número 8, apartado 850, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

La Sala al realizar el estudio de la carta rogatoria en cuestión, observa que no existe convención en materia de exhortes y cartas rogatorias entre Inglaterra y Panamá. Sin embargo, le corresponde a esta Sala Cuarta el conocimiento de estos asuntos para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país, a luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

Uno de los aspectos que debe tomar muy en cuenta la Sala para determinar la viabilidad del cumplimiento de una carta rogatoria es si se encuentra debidamente traducida al idioma español, y si no es violatoria del orden público panameño, ya que, de lo contrario, aún y cuando existe alguna convención entre el Estado requirente y el Estado requerido, debe negarse la práctica de dicha diligencia, puesto que prevalecen estos requisitos. En el caso que nos ocupa la carta rogatoria se encuentra debidamente traducida y la violación al orden público no se presenta.

En el caso que nos ocupa los documentos que acompañan el exhorto han sido debidamente autenticados, pues en ellos se aprecia el sello de la apostilla que legaliza los documentos surtidos en el Estado requirente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o comisión rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que los otorgó, según lo establece la Ley No.6 de 25 de junio de 1990, publicada en Gaceta oficial 21,571 de 3 de julio de 1990 y por la cual se aprueba el Convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros que fue aprobado tanto por el Estado requirente como por el Estado requerido.

Cabe destacar que como en la presente diligencia se solicita la notificación de una de las partes del litigio que se promueve en el extranjero, la Sala ha sostenido con anterioridad que, cuando dicho diligenciamiento implique una notificación, motivos de economía procesal y reciprocidad internacional hacen razonable que la Secretaría de la Sala se lleve a cabo la notificación.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA VIABLE el cumplimiento en nuestro territorio del exhorto librado por la alta Corte de Justicia de Queen's Bench, Tribunal Comercial para que se notifique a la empresa CEMENTONAVIOS COMPAÑÍA NAVIERA, S. A., con domicilio en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. Por lo tanto, y por motivos de economía procesal, ORDENA que la misma sea diligenciada por Secretaría utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente referente a la notificación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR GARDENIA MARITINE INC., EN CONTRA DE TRADAX OCEAN TRANSPORTATION S. A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EDIFICIO IGRA 8 CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Floreal Garrido V., ha ingresado a esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, mediante Nota DGPE/DCL/No.2286 de 21 de septiembre de 1993, el exhorto librado por el Tribunal de Primera Instancia del Pireo, Grecia, para emplazar a la sociedad anónima TRADAX OCEAN TRANSPORTATION S. A.

El objeto del exhorto en estudio consiste en notificar a la sociedad anónima TRADAX OCEAN TRANSPORTATION S. A., con sede social según sus Estatutos en la ciudad de Panamá (Edificio Igra 8, Calle Aquilino de la Guardia.).

La Sala, al realizar el estudio del exhorto en cuestión, observa que no existe convención en materia de exhortos entre Panamá y Grecia. Sin embargo, le corresponde a esta Sala el conocimiento de estos asuntos para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país, a la luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

Uno de los aspectos que debe tomar muy en cuenta la Sala para determinar la viabilidad del cumplimiento de un exhorto o comisión rogatoria es si se encuentra debidamente traducido al idioma español, y si no es violatorio del orden público panameño, ya que, de lo contrario aún y cuando exista alguna convención entre el Estado requirente y el Estado requerido, debe negarse la práctica de dicha diligencia, puesto que prevalecen estos requisitos.

En el caso que nos ocupa los documentos que acompañan el exhorto no han sido debidamente autenticados por el funcionario panameño en el lugar de su procedencia y además tampoco se ha acreditado a través de una nación amiga, la ausencia de dicho funcionario, y no se aprecia en ellos el sello de la apostilla que legaliza los documentos surtidos en el Estado requirente, siendo éste un requisito indispensable

para declarar viable un exhorto o comisión rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que expidió dichos documentos.

Los señalamientos que preceden conducen a este Tribunal a considerar que no es posible acceder a lo solicitado en esta oportunidad.

En consecuencia, la Sala Cuarta (Negocios Generales) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento en la República de Panamá del exhorto librado por el Tribunal de Primera Instancia del Pireo, Grecia para la notificación de la sociedad anónima TRADAX OCEAN TRANSPORTATION S. A., y en consecuencia ORDENA que el mismo sea devuelto a fin que el mismo sea debidamente autenticado, para así proceder a su diligenciamiento.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PIREO, GRECIA, INTERPUESTO POR SEADCO SOUTHEAST ATLANTIC CARGO OPERATORS CONTRACT STEVEDORES, EN CONTRA DE SPITHA MARITME S. A., CON SEDE EN LA CIUDAD DE PANAMÁ MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Floreal Garrido V., han ingresado a esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, mediante Nota DGPE/DCL/No.2286/93 de 21 de septiembre de 1993, los exhortos librados por el Tribunal de Primera Instancia del Pireo, Grecia, para la notificación y citación de la Sociedad Anónima SPITHA MARITIME Co. S. A., dentro de los procesos seguidos por SEADCO SOUTHEAST ATLANTIC CAREGO OPERATORS CONTRACT STEVEDORES.

La Sala, al realizar el estudio de los exhortos, observa que no existe convención en materia de exhortos entre Panamá y Grecia. Sin embargo, le corresponde a esta Sala Cuarta el conocimiento de estos asuntos para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país, a la luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

Uno de los aspectos que debe tomar en cuenta la Sala para determinar la viabilidad del cumplimiento de un exhorto o comisión rogatoria es si se encuentra debidamente traducido al idioma español, y si no es violatorio del orden público panameño, ya que, de lo contrario aún y cuando exista alguna convención entre el Estado requirente y el Estado requerido, debe negarse la práctica de dicha diligencia, puesto que prevalecen estos requisitos.

En los casos que nos ocupan los documentos que acompañan los exhortos no han sido debidamente autenticados por el funcionario panameño en el lugar de su procedencia y además tampoco se ha acreditado a través de una nación amiga, la ausencia de dicho funcionario, y no se aprecia en ellos el sello de la apostilla que legaliza los documentos surtidos en el Estado requirente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o comisión rogatoria, pues un cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que expidió dichos documentos.

Los señalamientos que preceden conducen a este Tribunal a considerar que no es posible acceder a lo solicitado en esta oportunidad.

En consecuencia, la Sala Cuarta (Negocios Generales) de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento en la República de Panamá de los exhortos librados por el Tribunal de Primera Instancia del Pireo, Grecia, para la notificación y citación de la sociedad anónima SPITHA MARITIME Co. S. A., domiciliada en El Dorado, Edificio KLM, Calle 53, Avenida Samuel Lewis de esta ciudad y en consecuencia ORDENA que el mismo sea devuelto a fin que el mismo sea debidamente autenticado, para así proceder a su diligenciamiento.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCIÓN DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA MARO ALBERTO VEGA SOLÍS, POR EL DE FALSIFICACIÓN DE SEÑAS Y

MARCAS Y OTROS EN DAÑO DE GLORIA ARGÜELLO ZUÑIGA Y CLARA ZOMMER REZLER. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

El Director del Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este Despacho el exhorto librado por el Juzgado sexto de Instrucción de San José, Costa Rica, en la causa seguida contra **MARO ALBERTO VEGA SOLÍS**, por el delito de falsificación de señas y marcas y otros en daño de **GLORIA ARGÜELLO ZUÑIGA y CLARA ZOMMER REZLER**;al igual que el exhorto librado por la Fiscalía Segunda de San José, sobre la misma causa penal.

De acuerdo al numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales recibir los exhortos y cartas rogatorias libradas por Tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o Tribunal que debe cumplirlo, por lo que es de lugar resolver lo pedido.

En este caso se aplicará el principio de reciprocidad del Derecho Internacional, toda vez que no existe Tratado o Convenio de cooperación en materia penal entre la República de Panamá y Costa Rica.

LO QUE SE SOLICITA

El Juez Sexto de Instrucción y el fiscal Segundo de San José, Costa Rica, solicitan en sus cartas rogatorias, a la "Fiscalía de Balboa", República de Panamá, certificaciones de la denuncia No.1A-033-91, interpuesta por el señor Roberto Holder, sobre el robo de su vehículo Nissan Sunny, color dorado, y a la vez si existe otra denuncia por robo de un vehículo Toyota Corolla, color blanco de gasolina, modelo 1986, chasis No.AE-860265828 y, motor No.4A-08337883.

Tratándose de exhortos para su tramitación, es necesario que los documentos enviados estén debidamente autenticados, que la autoridad que los quiere señale claramente lo que solicita y para qué se solicita, si se trata de una notificación personal se debe dar la dirección exacta de la persona a quien se va a notificar, así como su identificación.

En el presente caso, tenemos que la autoridad requirente si bien es cierto que remite la documentación debidamente autenticada por la autoridad consular panameña, esta no es dirigida correctamente a la autoridad competente para su conocimiento, puesto que en nuestra nomenclatura jurídica y concretamente en lo que respecta a la denominación de las diferentes instituciones encargadas de administrar justicia y que son competentes para conocer esta materia, no contamos con ninguna agencia del Ministerio Público, así como tampoco del Órgano Judicial denominada **"Fiscalía de Balboa"**.

Por lo que esta Sala considera que se debe devolver el presente exhorto librado por las autoridades costarricenses, a fin de que se aclare cual es la autoridad jurisdiccional panameña a la que se le debe diligenciar la solicitud tratada.

En consecuencia, la Corte Suprema, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE DEVOLVER el presente expediente a las autoridades de la República de Costa Rica, y CONCEDE el término de 45 días hábiles, a fin de que subsanen las omisiones anotadas, y una vez corregidas dichas omisiones, procedan elevar a esta superioridad la solicitud de que se trate.

Notifíquese,

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=